

AMÉRICA LATINA



HUELLAS Y RETOS DEL CICLO PROGRESISTA

Opinan:

Dilma Rousseff,
Atilio Boron, Frei Betto
Claudia Korol, Maristella
Svampa, Isabel Rauber,
Sebastián Quiroga
y otros

Gerardo Szalkowicz
Pablo Solana
(compiladores)

editorial
Sudestada

Fundación Editorial


el perroy larana

AMÉRICA LATINA

HUELLAS Y RETOS DEL CICLO PROGRESISTA

**Gerardo Szalkowicz
Pablo Solana**

América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista

Gerardo Szalkowicz y Pablo Solana (compiladores)

1a ed. - Bogotá, 2017

© Fundación Editorial El perro y la rana, 2018 (digital)

Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, El Silencio,
Caracas - Venezuela 1010.

Teléfonos: (0212) 768.8300 / 768.8399

Correos electrónicos

atencionalescritorfepr@gmail.com

comunicacionesperroyrana@gmail.com

Páginas web

www.elperroylarana.gob.ve

www.mincultura.gob.ve

Redes sociales

Twitter: @perroyranalibro

Facebook: Editorial perro rana

Diseño de portada

Repo Bandini

Corrección

Carolina Uribe

Hecho el Depósito de Ley

Depósito legal: DC 2018000337

ISBN: 978-980-14-4126-7

En Venezuela

Fundación Editorial



elperroylarana

www.elperroylarana.gob.ve

En Argentina



www.revistasudestada.com.ar

En Colombia



La Fogata Editorial

www.lafogataeditorial.com

info@lafogataeditorial.com



Lanzas y Letras

www.lanzasyletras.org

lanzasyletras@gmail.com

**Escuela Nacional
Orlando Fals Borda**

Escuela Nacional Orlando Fals Borda

www.escuelafalsborda.org

contacto@escuelafalsborda.org

Este libro integra artículos, entrevistas e ilustraciones de destacadas y destacados analistas, líderes políticos, militantes y artistas populares de distintos rincones de Nuestra América. En cada caso, se trata de personas que dedicaron su tiempo con toda generosidad para nutrir esta compilación. Con las únicas excepciones del texto de Álvaro García Linera y el dibujo de Latuff, todo el contenido fue elaborado exclusivamente para este libro. A cada uno y cada una, entonces, nuestro profundo reconocimiento por el aporte y la paciencia que nos han tenido. En algunos casos, pudimos contactarlos a partir de la colaboración de colegas, compañeros y compañeras que tendieron puentes, se involucraron en el plan de trabajo y ayudaron de mil maneras. A todas y todos, nuestro más fraterno agradecimiento.

Presentación a la edición Venezolana

La presente edición tiene lugar en momentos decisivos para la historia de la región, y en particular de Venezuela.

Tras poco más de una década de la llegada al poder de proyectos populares en gran parte de Nuestra América, las derechas regionales han logrado retomar la jefatura política en algunos países de la región, mientras intentan fortalecer sus posiciones en aquellos de los que nunca han sido desalojados, y se empeñan en defenestrar a los líderes de izquierda que siguen conduciendo gobiernos progresistas.

El factor común en esta avanzada de la derecha continental está en el uso de todas las formas de violencia como medio para alcanzar sus fines, aunque es necesario reconocer que en algunos casos han logrado reconquistar el poder, o mantenerlo, usando las vías legales y aprovechando errores y debilidades de los movimientos de izquierda. Este libro parte del necesario reconocimiento del avance de las fuerzas procapitalistas y oligárquicas en la región, pero no lo hace para decretar el “fin del ciclo progresista”, sino para convocar a un reimpulso que obligatoriamente debe pasar por la autocrítica.

Por eso es bienvenida la voluntad de “entrarle a fondo y sin anestesia al análisis sobre las debilidades evidenciadas, los errores cometidos, las contradicciones atravesadas y los límites alcanzados por las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en esta década larga latinoamericana”. De la rigurosidad y profundidad de la empresa dependerá no solo el éxito del contraataque de las fuerzas populares sino, además, la posibilidad de trastocar definitivamente el orden global capitalista.

Y es que este libro no solo parte de, a la vez que contribuye a, la definición del difícil escenario en que se halla la izquierda regional, sino que implica el reconocimiento de que la suerte de los pueblos de la región aún no está echada: allí donde la derecha retorna (Brasil, Argentina, Paraguay) encuentra una férrea y cada vez más organizada resistencia; allí donde las oligarquías han logrado mantenerse en el poder (Colombia, Chile, México) los movimientos populares se articulan y levantan prestos al combate democrático; y allí donde las fuerzas populares mantienen su influencia en el gobierno (Ecuador, Bolivia, Venezuela) se han conseguido triunfos (como el de Lenin Moreno) y abren vías para la profundización de los procesos de cambio y la defensa de los logros alcanzados.

En el caso venezolano nuestro pueblo soporta un prolongado asedio económico y la arremetida de la derecha nacional e internacional en su afán por reconquistar el poder, violenta las instituciones de nuestra de-

mocracia. No solo están en juego las conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas tras 18 años de Revolución, también peligran las mismas bases que sostienen la unidad de la República.

La iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como medio para un diálogo nacional y el logro de la paz, reafirma la voluntad democrática del gobierno chavista. Es de destacar que las acciones violentas de lo que no es más que una minoría –aunque muy bien financiada y apoyada por los poderes fácticos internos y externos– han determinado tal situación que cualquier gobierno del globo no dudaría en combatirlos por la fuerza. Sin embargo, esta no ha sido la opción llevada adelante por el gobierno revolucionario y las fuerzas progresistas, sino que se ha preferido abrir la puerta del diálogo constructivo.

No obstante, el éxito de la iniciativa constituyente y la suerte de la patria, dependerán en gran medida, tal como afirman los compiladores de esta obra en un párrafo que parece escrito para Venezuela, “de la capacidad de asimilar lecciones y aprendizajes para desandar tácticas naufragadas y recuperar la iniciativa estratégica; de la eficacia con que podamos activar aquellas 3R chavistas (revisión, rectificación y reimpulso); de descifrar con madurez las huellas del pasado reciente para afrontar con mayor fortaleza los retos del futuro próximo”.

En tal sentido esta casa editorial se siente orgullosa de ser la contraparte venezolana en la edición de este libro, el cual cuenta con sendas ediciones en Colombia y Argentina. Entendemos que se trata de una contribución nustramericana a las luchas de los pueblos y a la superación de la situación que atravesamos, y acompañamos la intención de sus compiladores en cuanto a que se hace imprescindible la profundización de las transformaciones sociales, económicas y políticas, de tal modo que logremos articular una opción efectiva al capitalismo.

Mayo de 2017
Fundación Editorial El perro y la rana

Presentación a la edición en Colombia

Escuela Nacional Orlando Fals Borda

Mientras el “ciclo progresista” florecía en América Latina, Colombia padecía el *neoliberalismo de guerra* –como lo caracterizó, entre otros, el historiador Renán Vega Cantor– con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que dejó como saldo el saqueo de bienes comunes, el empobrecimiento de la población, miles de víctimas y la militarización de la vida cotidiana a través de la Política de Seguridad Democrática.

Durante ese “ciclo ultraderechista” en nuestro país, las cifras oficiales nos hablaron de éxitos contabilizados en bajas a la guerrilla y otros presuntos logros de las fuerzas militares, para justificar la ampliación de los operativos de guerra. En su momento, el Plan Patriota –continuación del Plan Colombia– movilizó 20.000 efectivos de tropa solo hacia la zona sur del país, para enfrentar al movimiento campesino e indígena. La lógica de la acción estatal durante este periodo consistió en una pretendida “pacificación” de los territorios, denominación cínica que encubrió con un manto de impunidad las miles de muertes y masacres a cargo del Ejército y los grupos paramilitares que actuaron mancomunadamente contra un enemigo común: el movimiento social y la insurgencia. Esa estrategia provocó un costo humanitario nefasto para la sociedad colombiana, particularmente para campesinos y sectores desplazados que engrosaron los cinturones de miseria de las periferias urbanas, sufriendo en mayor magnitud las atrocidades de la guerra las mujeres, los niños y la población LGTBI, quienes han sido víctimas del conflicto y de la consecuente impunidad.

Durante el uribismo, contemporáneo de gobiernos de carácter antiimperialista como los de Hugo Chávez o Evo Morales, Colombia llegó a tener la mayor concentración de bases militares norteamericanas en un país sudamericano y el ejército más numeroso del continente subordinado a la estrategia de los EEUU para la región. Tras ocho años en el poder, Uribe fue sucedido por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (2010-2018). Desde entonces el horizonte es similar, la implementación del modelo neoliberal; aunque las tácticas son otras, el discurso ahora es de la paz.

Los gobiernos colombianos de estas primeras décadas del siglo no se correspondieron con el “ciclo progresista” que analiza este libro, aunque sí hubo experiencias locales, como en cierto modo fue el go-

bierno de Gustavo Petro en Bogotá. Sin embargo, puestos a encontrar similitudes continentales, resulta más pertinente poner el foco en los movimientos populares que se articularon en construcciones sociales con horizontes políticos, esos sí en sintonía regional; tal es el caso del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, que integran y articulan expresiones del movimiento campesino, indígena, afrocolombiano, de mujeres, estudiantil y urbano. Durante ese período, en Colombia se destacaron grandes luchas como las del movimiento estudiantil en el año 2011 y los paros agrarios de 2013, 2014 y 2016 que lograron consolidar el proceso de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como plataforma unitaria del movimiento social.

En la actualidad, escenarios esperanzadores de negociaciones de paz con las insurgencias conviven con hechos graves de persecución a líderes comunitarios y dirigentes sociales; la ansiada solución política del conflicto armado y el necesario protagonismo de la sociedad en la construcción de la paz son desafíos aún pendientes. En esa apuesta juegan un papel fundamental la izquierda y el movimiento popular, no solo de Colombia: la paz del país es determinante para pensar la paz de la región.

* * *

La publicación de este libro en Colombia tiene su correlato en sendas ediciones en Argentina y Venezuela. La perspectiva regional se completa, así, con las lecturas de quienes ahora tienen esta obra en sus manos.

El libro incorpora miradas diversas —e incluso contrapuestas— lo que, a los fines analíticos, brinda insumos de valor para que las y los lectores puedan elaborar una visión propia del tema que se aborda. Esos insumos buscan alimentar un balance regional; los compiladores, por su parte, arriesgan conclusiones y suman interrogantes polémicos: ¿Deben los pueblos latinoamericanos “conformarse” con cuestionar, matizar o suavizar las políticas neoliberales o neodesarrollistas? ¿Es posible intentar cambios de fondo, que reviertan la propia esencia estructural del capitalismo dependiente que históricamente condenó a nuestros pueblos a penurias e injusticias? Esas preguntas sobrevuelan los debates allí donde se dieron experiencias de gobiernos progresistas, pero también en el movimiento popular en nuestro país, necesitado de una mayor sintonía con los procesos políticos a nivel regional: esos son los debates estratégicos que es necesario profundizar.

Confiamos en que estas líneas sirvan de insumo para la batalla de ideas en este complejo siglo XXI, y logren aportar algunas pistas a quienes buscamos *sentipensarnos* en clave *nuestroamericana*.

Prólogo

Pedro Brieger¹

Después de una década marcada por la hegemonía de las políticas neoliberales y el ya famoso “Consenso de Washington”, América Latina y el Caribe conoció a comienzos del siglo **XXI** un despertar político contestatario como pocas veces en su historia.

Durante varios años los organismos financieros habían presentado a la Argentina, Perú y México como modelos con números macroeconómicos “exitosos”, a pesar de que la pobreza crecía en vez de disminuir. Sin embargo, México ya había conocido el levantamiento zapatista el 1º de enero de 1994 contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; en Perú, Alberto Fujimori había renunciado desde Japón después de haber ganado las elecciones de 2000 en un marco de corrupción; y en la Argentina se produjo la revuelta popular de diciembre de 2001 que provocó la caída del presidente Fernando de la Rúa y que fue percibida en la región como un grito contra las políticas neoliberales que se venían aplicando.

A comienzos de 1999 asumió Hugo Chávez en Venezuela, y en un corto período accedieron al gobierno dirigentes políticos dispuestos a desafiar los postulados neoliberales. Se fue armando un bloque con Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Honduras y Ecuador que cambió el mapa político regional e incluso forzó a los otros países a incluir a Cuba en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin Estados Unidos ni Canadá.

Como pocas veces en la historia latinoamericana, un número importante de líderes comenzó a tejer una relación que tenía como eje la integración regional. Este conjunto de dirigentes, de extracción ideológica, social, política y cultural muy diversa, encontró un lenguaje común que les permitió comprender cuánto se necesitaban –a pesar de sus diferencias– para enfrentar las recetas que emanaban desde Washington y los principales organismos financieros internacionales.

¹ **Pedro Brieger** (Buenos Aires, 1955) es periodista y sociólogo. Director del portal NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe, www.nodal.am). Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y autor de varios libros sobre política internacional.

El rechazo al ALCA en la Cumbre de las Américas de 2005 fue el primer paso para el desarrollo de esta corriente heterogénea que suele ser definida como progresista, popular o populista y que –justamente– por su diversidad no permite encontrar una definición acabada.

El libro de Gerardo Szalkowicz y Pablo Solana es un intento por encontrar respuestas a los problemas que enfrentaron y todavía enfrentan estos gobiernos, cuando algunos ya han sentenciado que América Latina está volviendo a la “normalidad”, lo que –traducido– significaría que los herederos y continuadores de aquellos que han gobernado desde las independencias de las potencias coloniales vuelven a gobernar; si es que alguna vez han dejado de manejar los resortes jurídicos, económicos y políticos que diseñaron para ellos mismos.

Está claro que dentro de esta corriente heterogénea hubo diferencias notables también en la relación de los nuevos poderes con la vieja institucionalidad. Es así que Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa decidieron refundar Venezuela, Bolivia y Ecuador convocando a respectivas Asambleas Constituyentes para construir una nueva legalidad en base a nuevos marcos jurídicos y políticos y a la participación popular. Por otro lado, hubo quienes, como Lula da Silva en Brasil, decidieron pactar y negociar tejiendo alianzas con partidos políticos en las antípodas de su pensamiento para preservar la “institucionalidad” heredada. Esto le sirvió para gobernar durante algunos años y llevar adelante importantes transformaciones, hasta que sus aliados decidieron retirarle el apoyo y empujar la caída del PT.

Desafiar a los más poderosos, aunque sea tímidamente, tiene sus costos. Por eso hubo intentos desestabilizadores y destituyentes, golpes de Estado fracasados y exitosos, como los sufridos por Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff que triunfaron en las urnas pero fueron derrocados por golpes institucionales o movimientos de dudosa legitimidad.

Si el rechazo al ALCA marcó el comienzo de una pugna entre una corriente progresista (en el más amplio sentido de la palabra) y las derechas conservadoras, a pesar de algunos reveses electorales o derrocamientos, no se puede afirmar que se ha cerrado el ciclo progresista como a la ligera intentan instalar los medios de comunicación afines al pensamiento liberal que ya sentenciaron el “fin de un ciclo”.

Es posible tomar dos países como referencia de esta disputa que continúa. Cuando asumió Mauricio Macri en la Argentina, el 10 de diciembre de 2015, los partidarios de la presidenta saliente Cristina Fernández convocaron a miles de seguidores en un hecho inédito de

la historia latinoamericana, para demostrar que políticamente no tiene el mismo significado una derrota electoral que ser derrotados. De la misma manera se puede pensar en Brasil. A pesar de haber sido derrocada Dilma Rousseff, Lula sigue siendo el líder más popular del país aun con una persecución a cuestas.

Varios de los textos de este libro abordan la problemática del poder y su significado, así como la relación entre los gobernantes y los movimientos populares que los sostienen de manera pasiva o activa. Es así que en el libro uno puede encontrar opiniones muy diversas e incluso contrapuestas como parte de un intento por realizar un balance de un proceso que se cerró en algunos países pero que todavía está en curso a nivel regional.

En pleno ascenso de la corriente progresista, la siempre crítica Celia Hart se preguntaba desde Cuba si el progresismo latinoamericano debía “conformarse” con cuestionar las políticas neoliberales o si existía la posibilidad de profundizar los procesos de cambio. Es justamente lo que este libro ofrece, no ya como pregunta retórica sino como elemento de análisis, contraponiendo las opiniones de varios autores en lo que constituye su principal aporte.



Deisa Tremarias Grima (Baruta, 1987) es ilustradora editorial y artista urbana. Ha ilustrado para diversos libros infantiles y otras publicaciones de Venezuela y otros países.

Explorar los rastros de la época, edificar un nuevo paradigma continental

Gerardo Szalkowicz

La Habana, 15 de noviembre de 1999, IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. El presidente venezolano sorprende con un provocador discurso en su debut en la arena internacional. En medio de aplausos obligados y caras incómodas, Fidel Castro le hace llegar un rústico papelito doblado: “Chávez: siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres”.

El paisaje regional empezaba a mutar. Antes y después de aquella anécdota, un derrotero de potentes levantamientos populares lograba ponerle freno, en algunos países, a la voracidad neoliberal. A la par, quedaba al desnudo la aguda crisis de representatividad de la partidocracia tradicional. Era la hora del arribo de gobiernos y líderes de nuevo tipo. No se puede comprender la etapa transcurrida en este siglo sin dimensionar los procesos de lucha que la antecedieron, o más bien: fueron los pueblos resistiendo en las calles los que determinaron la irrupción del ciclo progresista¹ en el continente.

Si centramos el foco en las esferas estatales, la partida de nacimiento de este proceso de cambios podría fecharse el 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez apabulla con el 56,2 por ciento de los votos a Acción Democrática y Copei, los partidos que se repartían el poder en Venezuela desde el Pacto de Punto Fijo en 1958. Luego iría tomando dimensión regional con la conquista del gobierno por parte de diversos proyectos alternativos en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La consolidación de este variopinto de gobiernos fue dibujando un cambio de época en América Latina y el Caribe, una nueva

1. Una argumentación sobre la validez de la denominación genérica “ciclo progresista” para caracterizar el período que analizamos puede leerse en el artículo “Apuntes para el reimpulso”, pág. 201.

hegemonía continental que implicó importantes transformaciones en los entramados sociales (en algunos países tibias y parciales, en otros más profundas), con el denominador común del rescate del rol del Estado como regulador de la gestión económica. Al calor de estos procesos, germinó una inédita arquitectura de integración regional que permitió recuperar ciertas dosis de soberanía y reformular el vínculo de sumisión con la Casa Blanca. Estados Unidos perdió capacidad de maniobra en su “patio trasero”, debilitamiento de poder que tuvo como clímax el “entierro” al ALCA en 2005 en Mar del Plata.

Después de una década de múltiples conquistas y permanentes victorias electorales, apalancada por una robusta bonanza económica (principalmente por los precios de las materias primas de exportación), en 2013-2014 empiezan a sentirse los primeros síntomas de agotamiento de este impulso. Aunque no de manera uniforme ni lineal, el ciclo progresista entra en una fase de turbulencias, anticipada por los golpes en Honduras (2009) y Paraguay (2012). Y los organismos paridos (ALBA, Unasur, Celac) empiezan a sufrir una suerte de parálisis. La muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, deja a la integración regional sin su principal motor y huérfana de liderazgo. La debacle se va acentuando con los primeros reveses en las urnas: en febrero de 2014, la oposición ecuatoriana conquista las alcaldías de Quito y Cuenca y retiene la de Guayaquil, las tres principales ciudades; luego se dan, en el último tramo de 2015, las derrotas del kirchnerismo en Argentina y del gobierno venezolano en las legislativas; y en febrero de 2016, Evo Morales pierde el referendo para reformar la Constitución y poder repostularse a un cuarto mandato. La conspiración político-judicial-mediática de la élite brasileña, que culmina con el golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff en agosto de 2016, de notorio impacto regional, se erige en el gran garrotazo que ratifica el cambio en la correlación de fuerzas y la reconfiguración del escenario geopolítico en América Latina.

Sin embargo, el ajustado triunfo del oficialismo en Ecuador en la segunda vuelta realizada el 2 de abril de 2017, que lleva a la presidencia a Lenín Moreno y le da continuidad a la Revolución Ciudadana luego de una década liderada por Rafael Correa, logra reoxigenar al espacio progresista regional. A la vez, le quita argumentos a quienes ya decretaron el certificado de defunción del ciclo y auguran como inexorable un dominio completo de las derechas en todo el territorio latinoamericano.

Un nuevo espíritu de época

Más allá del debate sobre si asistimos o no al “fin del ciclo” progresista (a lo largo de este libro algunos autores y autoras aportan su visión al respecto), en rigor resulta innegable que ha venido des-puntando un nuevo tiempo en la región, un punto de inflexión que nos obliga a afinar los análisis, reformular estrategias, plantearnos otras preguntas, pensar nuevos desafíos.

En cuanto a las fuerzas conservadoras, siempre han utilizado “la combinación de todas las formas de lucha”, incluidas las anti-democráticas. Es innegable que siguen dominando los macizos y blindados aparatos de poderes fácticos (económicos, institucionales, mediáticos, militares, eclesiásticos). Históricamente han hecho todo lo posible por neutralizar cualquier proceso emancipatorio –e incluso reformista– para mantener impoluto el sistema reinante: es su misión de clase, la energía que mueve su existencia. ¿Qué otra cosa esperar? Por eso creemos que el norte de nuestros debates no debe centrarse meramente en desmenuzar sus aciertos o despotricar contra sus artimañas.

La razón de ser de este trabajo apunta, entonces, a entrarle a fondo y sin anestesia al análisis sobre las debilidades evidenciadas, los errores cometidos, las contradicciones atravesadas y los límites alcanzados por las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en esta década larga latinoamericana. Más allá de la dimensión del agotamiento o el reflujo del periodo transcurrido en lo que va de este siglo, creemos prioritario impulsar balances colectivos de largo aliento, que vayan más allá de coyunturas o discusiones puntuales, y que permitan abonar el terreno para un necesario reimpulso.

Algunos interrogantes disparadores que guían las siguientes páginas: ¿cuáles son las principales razones que explican el debilitamiento del ciclo progresista y la contraofensiva conservadora? ¿Cómo juegan las diferencias de proyectos y las particularidades locales de estos heterogéneos gobiernos en cuanto a su continuidad o capitulación? ¿De qué manera opera en la esencia de los procesos la matriz productiva común, dependiente del mercado globalizado, en el marco del tránsito hacia un mundo multipolar? ¿Cuánto hubo y hay de *lavada de cara* y cambios cosméticos que sólo favorecen la armónica reproducción del capitalismo, cuánto de “revolución pasiva” (en términos gramscianos) y cuánto de búsqueda de transformaciones profundas, de ruptura sistémica hacia la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio? Al margen de los análisis superestructurales, de las disputas en los escenarios

político-institucionales, ¿qué camino recorrieron los movimientos populares y las izquierdas del continente? ¿Cuánto acumularon y cuánto protagonismo cedieron en función de la gestión estatal? ¿Qué balance dejan los complejos vínculos que establecieron las organizaciones con los gobiernos posneoliberales?

Un torbellino de dilemas que entendemos deben ser abordados desde diferentes ópticas. Por eso asumimos como ADN de este trabajo la diversidad de miradas. En este libro se entrecruzan lecturas disímiles, en algunos casos de conclusiones contrapuestas, voces que expresan una visión intensamente crítica con todos los procesos analizados; voces que conjugan apoyos y cuestionamientos; y voces de líderes, referentes o militantes que tienen o han tenido responsabilidades políticas en el período en cuestión. Incluimos análisis que buscan una síntesis regional de la época pero también textos que intentan desmenuzarla desde ejes y aristas puntuales, o desde los procesos nacionales, siempre apuntando a una visión integral y en clave latinoamericana.

Nuestra mirada, como compiladores de este libro pero además como militantes, se vuelca en la tercera parte, en el artículo “Apuntes para el reimpulso”.

* * *

Vivimos en un continente en permanente disputa. El porvenir de los pueblos que habitamos al sur del Río Bravo se jugará esencialmente en las calles. También en la disputa de sentido cultural y simbólica. Y seguirá encontrando en el Estado un terreno de confrontación, ensayo y error. Las formas que adopte lo que se viene dependerá de la capacidad de asimilar lecciones y aprendizajes para desandar tácticas naufragadas y recuperar la iniciativa estratégica; de la eficacia con que podamos activar aquellas 3R chavistas (revisión, rectificación y reimpulso); de descifrar con madurez las huellas del pasado reciente para afrontar con mayor fortaleza los retos del futuro próximo.

Confiamos en que estas líneas sirvan de insumo para la batalla de ideas de este complejo siglo XXI, y logren aportar algunas pistas a quienes buscan sentipensarse latinoamericanamente y tienen por sueño máspreciado el horizonte de la unidad y la emancipación de Nuestra América.

Parte I

Miradas regionales



Carlos Henrique Latuff de Sousa (Río de Janeiro, 1968), *Latuff*, es caricaturista político, “cronista visual de la barbarie”. Colaborador del periódico *Brasil de Fato* y medios populares de América Latina y el mundo.

Una reflexión sobre el progresismo latinoamericano

Atilio A. Boron¹

Para examinar la heteróclita experiencia del ciclo progresista latinoamericano es necesario comenzar estableciendo una distinción entre los gobiernos “bolivarianos” y los que se constituyeron en el Cono Sur; entre proyectos políticos empeñados en, o encaminados hacia, la construcción de un “socialismo del siglo xxi” –casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador– y aquellos que, por el contrario, se propusieron fundar un “capitalismo serio y racional”, como lo intentaron los sucesivos gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay.

En los primeros hubo la intención de poner en marcha algunas políticas que no sólo dejaran atrás los múltiples legados del neoliberalismo sino que también permitiesen avanzar –enfrentando enormes resistencias– por un sendero claramente poscapitalista. El grado en que esto fue alcanzado es aún motivo de intensos debates, pero no cabe duda de que la intención estuvo y que algunos avances concretos que se produjeron permiten concluir que esos ambiciosos planes tuvieron un cierto grado de concreción, no sólo en el terreno económico sino también en el político y social.

La nacionalización y estatización de los recursos básicos no pueden ser necesariamente consideradas como políticas antagónicas al capitalismo, por importantes y loables que sean. Pero no hay duda de que se trata de pasos en la dirección de una progresiva socialización de la economía y cuya trascendencia mal podría ser menospreciada. Por otra parte, medidas orientadas a garantizar un control obrero o popular de las nuevas empresas, en cambio, sí lo son. En todo caso, digamos que si bien los gobiernos bolivarianos tenían un horizonte de transformaciones estructurales fijadas en la construcción de un nuevo tipo de socialismo (“del siglo xxi”, del “vivir bien” boliviano o del *Sumak Kawsay* ecuatoriano), lo cierto es que los avances en esa dirección no fueron muchos –ien realidad no

1. **Atilio Boron** (Buenos Aires, 1943) es politólogo y sociólogo. Investigador superior del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Argentina (Conicet). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Director del PLED (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia) del Centro Cultural de la Cooperación.

podieron ser muchos!– y tropezaron con enormes obstáculos. La resiliencia del capitalismo es formidable, pero aun así esas transformaciones dejaron una profunda huella no sólo en la economía sino también en la política y en la conciencia de los sujetos sociales.

Por otra parte, el avance de los Consejos Comunales y Comunas en Venezuela estableció una relación de poder antagónica a la lógica del capital, y este no es un dato menor. Si bien estos no tuvieron un desarrollo tan impetuoso como lo anhelaba el presidente Chávez, lo cierto es que su presencia es un dato importante de la escena contemporánea venezolana. En tanto que la institucionalización de formas de propiedad e intervención económica basada en las tradiciones de los pueblos originarios, tal como ocurriera en Bolivia y Ecuador, es también contradictoria con las premisas del modo de producción capitalista. Fueron, y son, intentos parciales, incompletos, es cierto, pero aun así de singular importancia.

En el Cono Sur, en cambio, este impulso progresista fue mucho más moderado. Pese al vigor del impulso re-estatizador del gobierno de Cristina Fernández en Argentina, ausente en el caso de Brasil, ninguno de los gobiernos progresistas de esa parte de América Latina se propuso otra cosa que refundar, sobre bases “serias y racionales”, el capitalismo, admitiendo la necesidad de una vigorosa política de inclusión social pero sin cuestionar, en ningún momento, la hegemonía del capital en el proceso de acumulación. Aquí no hubo atisbo alguno de avanzar hacia otra cosa que no fuese la profundización del capitalismo, cosa que efectivamente se hizo, pero tratando de que a lo largo de ese proceso adquiriese un “rostro humano”.

En Argentina, el proyecto de abandonar al capitalismo nunca estuvo en los planes del peronismo, en cualquiera de sus variantes, sea en el “peronismo clásico” de la década de 1940 y primera mitad de 1950, en el retorno de Perón en 1973, durante la larga década menemista de 1989-1999, ni tampoco en los años del kirchnerismo. Otra historia, igualmente deprimente, es la del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, que tenía en sus orígenes –como en buena manera también el Frente Amplio uruguayo– una propuesta anticapitalista que en ambos casos fue abandonada en aras del “posibilismo” o de un falso “realismo político”. Que esta fue una opción suicida lo demostró el curso posterior de los acontecimientos y la ilegal e ilegítima defenestración de la presidenta Dilma Rousseff. Si en el caso del Uruguay esta actitud cautelosa es más comprensible debido a la debilidad relativa de su economía en el concierto mundial, esta justificación carece en absoluto de validez para el caso del Brasil,

cuyo gobierno podría haber intentado avanzar en un programa más radical en lugar de entregarse, atado de pies y manos, a las clases dominantes y sus aliados. El fraudulento juicio político que destituyera a Dilma Rousseff fue menos mérito de sus corruptos conspiradores que de la debilidad del PT, que ni bien encumbró a Lula a la presidencia archivó el radicalismo originario, desmovilizó a su militancia asumiendo que la gestión gubernamental era “un tema técnico” que no podía ser perturbado por exabruptos políticos, y se dedicó a cultivar sus alianzas con distintas fracciones de la burguesía y sus voceros mediáticos, que tiempo después le propinarían un golpe de Estado a su sucesora en el Palacio del Planalto.

En resumen, los gobiernos bolivarianos hicieron una tentativa de abrir un camino poscapitalista, y en un cierto y limitado sentido algo lograron.² En cambio, más al sur, no encontramos políticas contrarias al capitalismo sino tentativas, infructuosas, de “humanizarlo”, con las desastrosas consecuencias que hoy saltan a la vista y que dejan el amargo sabor de una magnífica oportunidad desperdiciada.

Matriz productiva: posibilidades y límites

Claro está que, pese a lo anterior, una cierta izquierda desastrada, que transita sin rumbo y sin brújula por América Latina, no cesa de acusar a los gobiernos bolivarianos de no haber sido capaces de consumar la tan ansiada como necesaria revolución social ni de “cambiar la matriz productiva” de sus países, a pesar de haber declarado en numerosas ocasiones que ese era su objetivo económico fundamental. No obstante, hay que decir que los críticos comparten un erróneo supuesto con los gobiernos a los cuales fustigan. Tanto en Caracas como en Quito y La Paz, los gobiernos progresistas suponían que el cambio de una “matriz productiva” podía ser un proceso relativamente sencillo y realizable en el corto plazo, con elecciones cada dos años.

En los procesos bolivarianos, la recuperación de los recursos naturales básicos fue un paso importantísimo. Sin embargo, uno de los obstáculos más serios fue la debilidad de las dos menores economías, Ecuador y Bolivia, que restó márgenes de maniobra a las autoridades económicas. Ecuador es un país muy vulnerable por la estructura de su economía y también porque carece de moneda. Debe recordarse que, a causa de la gran crisis de 1999, la burguesía financiera y el capital bancario aprovecharon para dolarizar su economía. Es decir, el presidente Correa no pudo aplicar instrumentos de política monetaria

2. Para una visión de conjunto de estos experimentos remito al libro de Katu Arkonada y Paula Klachko, *Desde Abajo, Desde Arriba. De la resistencia a los gobiernos populares: escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2017).

porque estos son de resorte exclusivo de la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno de ese país. Estos dos factores, la debilidad estructural de la economía ecuatoriana y la carencia de una moneda nacional, explican la falta de un impulso más decidido para avanzar por la senda de las transformaciones estructurales. Bolivia es un caso parecido, aunque sin el talón de Aquiles que significa la carencia de moneda propia. Pero las políticas de promoción de sectores de propiedad social y cooperativa a cargo de los movimientos sociales terminaron en gran medida en un fracaso, reconocido por el propio gobierno. Es que no basta la transferencia de las empresas al control popular para que aquellas funcionen eficientemente, y por eso la mayoría de ellas tuvieron que ser re-estatizadas para salvarlas de la quiebra.

Venezuela constituye un caso especial, porque allí la guerra económica desatada por el imperio adquirió una virulencia jamás vista. Por supuesto, no fue la única vez que Washington apeló a este recurso. Lo hizo en Chile y en Nicaragua, pero en ninguno de estos dos casos el ensañamiento de la Casa Blanca llegó a la criminal desmesura alcanzada en Venezuela. Sobre este telón de fondo se inscriben, acentuando los efectos devastadores de la guerra económica, errores de concepción y de implementación de la política económica, a los cuales hay que agregar los efectos destructores de la corrupción. Dejemos de lado la inanidad de los esfuerzos destinados a atenuar el rentismo petrolero –tema que como vimos más arriba implica nada menos que un cambio en la “matriz productiva”–, pero obsérvense los yerros en otras políticas de impacto más inmediato en la vida cotidiana como las políticas antiinflacionaria, monetaria y comercial, que en su conjunto desataron una grave crisis de abastecimiento que afecta a grandes sectores de la población y que convirtió el año 2016 en el momento más terrible de toda la gesta iniciada a finales del siglo pasado. La derrota en las elecciones legislativas en diciembre de 2015, en las que la oposición conquistó los dos tercios de las bancas, es una expresión diáfana de ese descontento. Que, nos apresuramos a aclarar, no significa que el electorado venezolano vaya necesariamente a apoyar una opción antichavista en la próxima elección presidencial. La insatisfacción con el momento actual, más que evidente, no significa que exista un consenso para arrojar por la borda los grandes avances que en materia social, cultural e institucional se produjeron desde que Hugo Chávez asumió la presidencia.

Construir una nueva hegemonía político-cultural

En este breve ensayo no podemos dejar de mencionar un déficit de suma importancia que afectó a las diversas variantes del progresis-

mo: la ausencia de una suerte de “revolución cultural”, un término que tiene resonancias sombrías como producto de la experiencia de la China de Mao a mediados de 1960 del siglo pasado pero que, pese a ello, denota una problemática que por su enorme trascendencia no puede ser soslayada.³ En los gobiernos progresistas de la región primó un cierto economicismo que, en lo esencial, puede resumirse de esta manera: el *boom* del consumo que indudablemente tuvo lugar en esos países generaría de modo automático un tránsito del consumidor al ciudadano consciente, a un nuevo actor político, portador de una nueva conciencia si no revolucionaria por lo menos reformista. La apuesta por el consumismo fue muy fuerte en los países del Cono Sur y Venezuela, y en menor medida en Bolivia y Ecuador. Pero en todos los casos faltó el instrumento que se hiciera cargo de la educación política de los nuevos contingentes populares, otrora excluidos y “desciudadanizados” y que fueron incorporados a la vida política y social en los últimos años.

No exageramos si dijéramos que fue ese el principal fracaso de los partidos gobernantes, desoyendo las sabias recomendaciones de Antonio Gramsci en relación a la necesaria construcción de una nueva hegemonía como fundamento de la construcción de un orden social superador del capitalismo. No hubo ni escuela de cuadros, ni procesos de educación masiva, ni una eficiente comunicación política para el conjunto de las clases emergentes. Se apostó a que el consumo, el acceso a bienes y servicios antes negados a los sectores populares, crearía hegemonía política y reforzaría la lealtad de estos nuevos sujetos para con los gobiernos que los favorecieron. Nada de esto ocurrió, más bien todo lo contrario. El acceso a renovados niveles de consumo en condiciones de carencia de educación política lo que hizo fue, como era previsible, “aburguesar” a los sectores populares e inclinarlos a que adoptaran como modelos de comportamiento aquel propio de las capas medias. Sectores populares promovidos social y económicamente por el progresismo terminaron votando por las fuerzas de derecha. Ante esta realidad, nada podría haber sido más beneficioso que el lanzamiento de una revolución cultural y el diseño de una adecuada política comunicacional que combatiera la “artillería de pensamiento” enemiga, como decía Chávez. Lamentablemente, nada de esto ocurrió.

3. Hemos examinado este tema en detalle en nuestro artículo “Sobre el ‘post-progresismo’ en América Latina: aportes para un debate”, escrito en colaboración con Paula Klachko y publicado en *Rebelión*, 24 de septiembre de 2016, así como en numerosos medios digitales.

A modo de síntesis y conclusión, nos atrevemos a subrayar la vigencia de lo que Lenin planteaba en sus escritos, sobre todo en el *¿Qué hacer?*, acerca de la decisiva importancia de la organización. Los sectores populares no tienen bancos ni recursos económicos; no controlan los grandes medios de comunicación ni tienen injerencia eficaz en las distintas ramas del aparato estatal. Con suerte pueden acceder a alguna representación sindical y político-partidaria, siempre acosada y acorralada por la legalidad vigente. Pero no es un dato menor que la cultura dominante los estigmatiza. En esas condiciones, la única arma con la que cuenta el campo popular es su organización, no tiene otra, no tenemos otra. Pero ahí también operan los enemigos, algunos con falaces ropajes de izquierda y otros directamente desde la derecha, para sembrar la confusión, el desánimo y la desunión entre sus filas. El auge de las concepciones sobre “el fin del ciclo progresista” refleja precisamente esta intención desmoralizante que remata en el desarme ideológico. Derrotados en el terreno crucial de las ideas, en la “batalla de ideas” como decía Fidel, el descalabro político se produce por *default*. Diríamos, por ello, que esta es la misión primera y fundamental de nuestro tiempo: organizarnos para enfrentar los nuevos desafíos de la contraofensiva imperial, cuya victoria está lejos de ser inexorable y que dependerá en buena medida de lo que nosotros hagamos.

Y junto a la organización, librar la “batalla de ideas”. Tarea difícil, porque tenemos las ideas pero no contamos con los medios eficaces y efectivos para garantizar su circulación por el cuerpo social. Pese a ello, debemos extremar los esfuerzos para insertarnos en esa batalla –más que batalla, una verdadera guerra– que se nos ha declarado, y debemos recoger el guante y responder con todas nuestras fuerzas. La sola organización sin nuestras ideas no garantizará gran cosa; y las ideas sin un adecuado sustento organizativo carecerán de eficacia transformadora. Debemos convocar a los artistas, intelectuales, periodistas, todo el mundo de la cultura, para que se plieguen a esta batalla. Sin ello, nuestros esfuerzos estarán condenados al fracaso. Tenemos mejores ideas y valores superiores, pero debemos darlos a conocer, sembrarlos en la sociedad y trabajar para que germinen y den sus mejores frutos. Esta es la otra gran tarea que debemos encarar sin más demora. Esta es la exigencia fundamental de la hora actual, para consolidar lo que hemos conquistado y para, desde allí, dar un gran salto hacia adelante en un mundo cada vez más amenazante y erizado de acechanzas.

Latinoamérica: ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político?

Isabel Rauber¹

La salida (relativa) del Reino Unido de la Unión Europea y el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos detonaron las alarmas de los analistas geopolíticos del planeta. Para algunos, estos hechos eran poco menos que “detalles sin importancia” histórica; para otros, acontecimientos que anuncian la cercanía del cataclismo final de la globalización. Por derecha y por izquierda la confusión se generaliza, aunque sin adentrarse en analizar el sustrato de ambos sucesos. ¿Bajo qué argumentos la población apoyó el Brexit?, ¿buscando qué? ¿Bajo qué argumentos votaron por Donald Trump?, ¿buscando qué? ¿Por qué ocurren tales fenómenos?

El fracaso guerrerista-injerencista de la OTAN en Medio Oriente y, con ello, de los planes de la tríada imperial para consolidar su dominio unipolar en el mundo, fue marcado fundamentalmente por el avance de la coalición ruso-china en alianza con Irán y otros estados de la región. En virtud de ello, los motores del poder global del capital se disponen a reacomodar su estrategia de dominación global, conjugando el retorno a ciertas modalidades de proteccionismo nacionalista (en sus territorios cabeceras), enlazado con el libremercado (para sus expansiones internacionales), según lo requiera el actual proceso de acumulación a escala global del capital.

Identificar los programas proteccionistas de Gran Bretaña y Estados Unidos como indicadores del fin de la globalización es ignorar la historia de los ciclos del capital y sus mercados: son predominantemente proteccionistas o ultraliberales de modo alterno según uno u

1. **Isabel Rauber** (Posadas, 1953) es doctora en Filosofía. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Educadora popular, estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos e investigadora de la UNESCO en estudios de género y medio ambiente urbano. Además, es directora de *Pasado y Presente 21*, y ha publicado más de una veintena de libros.

otro camino garantice en cada momento el mayor aumento de sus ganancias. Es un circuito repetitivo y sin salida, que indica el agotamiento de la civilización nacida y desarrollada con el capital. El triunfo del Brexit y el de Trump sintetizan el giro actual del poder global, que con nuevos formatos, contenidos y alcances, marcan un punto de inflexión para un nuevo comienzo.

Tener esto en claro es decisivo para los pueblos, para no equivocarse el rumbo, ni las tareas, ni los horizontes de sus resistencias, luchas, creaciones y construcciones de lo nuevo.

Gobiernos populares y movimientos sociales:

¿esperanza e ilusión?

En sus construcciones cotidianas los pueblos van sembrando embriones de lo nuevo, abriendo cauces cada vez más nítidos acerca de la necesidad de ir articulando las nuevas experiencias sociopolíticas de las comunidades indígenas, de las comunas campesinas o urbanas y las de movimientos sociales diversos, en aras de identificar los elementos constitutivos de un horizonte común orientado hacia la construcción de un mundo diferente anclado en nuevos paradigmas histórico-culturales de pensamiento, organización y funcionamiento metabólico socio-natural, superadores del predominio del capital.

Los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios que se constituyeron en Latinoamérica en los últimos veinte años han sido y son una resultante de tales procesos, a la vez que constituyen un paso más en la búsqueda y exploración de nuevos caminos posibles en tal dirección. Teniendo en cuenta el desenlace actual de algunos de estos procesos, la definición “camino posibles” abre puertas, precisamente, a la formulación de interrogantes claves acerca del alcance sociotransformador de tales gobiernos y su articulación con el quehacer político en el presente y el futuro de los pueblos del continente y también de la izquierda.

El agotamiento del tiempo posneoliberal

El recuento crítico de los acontecimientos políticos del último período en el continente revela que los ejes de las propuestas que definieron el quehacer inicial de los gobiernos populares estuvieron marcados por la urgencia de responder a los desafíos impuestos por la catástrofe neoliberal y sus democracias “de mercado”. Esto imprimió a tales gobiernos el sello “posneoliberal” como característica predominante, a la vez que definió tareas y sujetos.

Pero ese tiempo posneoliberal no sería eterno. Sintetizando, puede afirmarse que se agotó al finalizar la primera década; con ella, el ciclo “progresista” de los gobiernos populares abrió las puertas a un tiempo de realización de transformaciones raizales.

Nuevos desafíos se perfilaban e imponían nuevas tensiones a los procesos iniciados por las sendas posneoliberales, planteando claramente a sus referentes políticos y gubernamentales la disyuntiva de arriesgarse a reajustar el rumbo hacia un horizonte poscapitalista o quedar entrampados en la lógica del capital.

Está claro que los gobiernos populares han tenido la decisión de enfrentar la avanzada ideológica, económica y cultural de los poderosos y lograr la continuidad de los procesos populares iniciados. Pero las opciones de cómo hacerlo y con quiénes estuvieron en dependencia de su posicionamiento ante la disyuntiva mencionada.

Gran parte identificó que la continuidad de los procesos resultaría de conservar los gobiernos y, por tanto, apostó a la reelección de los gobernantes o de figuras indicadas por estos. En aras de ello fructificaron incluso pactos de gobernabilidad con actores del poder del capital (que buscó y busca derrocarlos). Y entonces, los gobernantes populares “tropezaron” con la lucha de clases, supuestamente “superada” por la democracia. Y es así que, tal como señaló Slavoj Žižek, “...por lo general, después de un par de años, se topan con el dilema fundamental: ¿se atreven a tocar los mecanismos capitalistas o se deciden a ‘seguir el juego’? Si uno perturba los mecanismos, es muy rápidamente ‘castigado’ por las perturbaciones del mercado, el caos económico y el resto”. [Žižek, 2015].

Quienes apostaron por la conservación de los gobiernos populares, priorizaron:

- Fortalecer los acuerdos de cúpulas aliándose con sectores del poder económico y político considerados “moderados” (cogobernar con los adversarios).

- Aferrarse a la institucionalidad caduca y sus bases jurídicas, apostando a hacer “buena letra” para demostrar la “buena voluntad” democrático-institucional.

- Ajustarse a la democracia propia del sistema democrático-burgués existente y su sistema jurídico, mostrándose “inofensivos” ante los poderosos, esperando tal vez no caer en su mira criminalizadora.

- Correlativamente, se pusieron frenos al protagonismo popular y al proceso de cambios que florecía desde abajo, abriendo paso a

sectores retardatarios y oportunistas que, de algún modo, se articularon con revanchistas, desestabilizadores y golpistas (de intención o de hecho).

Esto favoreció la germinación de contradicciones insospechadas entre el poder popular naciente (construido desde abajo por los pueblos) y el viejo poder constituido, paradójicamente –en estos casos– personificado por representantes del gobierno popular. Y ello no sólo fue aprovechado por los sectores revanchistas sino también fogoneado intencionalmente para debilitar la base social de los gobiernos populares y, si fuera posible, sumarla a su proyecto opositor.

Estas contradicciones contribuyeron al desgaste político de los gobiernos, al tiempo que los sectores del poder desplazado del ejercicio del Ejecutivo reacomodaban sus mecanismos y herramientas de producción de hegemonía y consensos sociales a las nuevas realidades. Con el despliegue de la guerra mediática, estos sectores legitimaron o diluyeron sus acciones de guerra económica, ideológica y psicológica y relanzaron su estrategia injerencista. El golpe ocurrido en Honduras, en junio de 2009, anunció claramente el fin del período de reacomodo y supuesta aceptación de las reglas democráticas por parte del poder hegemónico, y la apertura de una nueva era de acciones desestabilizadoras, destituyentes y golpistas en el continente.

Pero tales acontecimientos fueron, hoy se ve, subestimados, tal vez por otorgar excepcionalidad al “caso hondureño”, como antes también al proceso separatista que buscaba derrocar a Evo Morales (2007), o el ataque a Correa (2010), o la destitución de Lugo (2012), hasta que llegó el turno a los “grandes” como Brasil, Argentina, Venezuela... Está claro hoy que la “convivencia” democrática de proyectos diferentes es pura fantasía; que países soberanos con un modo de vida diferente al que requiere el colonialismo imperialista no serán tolerados por el imperio y sus lugartenientes locales en su “patio trasero”. Hoy, en “la era Trump”, los tentáculos del secular poder imperialista se revuelven, *aggiornados*, contra los pueblos del continente con renovada furia y ensañamiento. La disputa es prácticamente cuerpo a cuerpo, pero centrada en las mentes, factor clave ayer y hoy para la dominación.

Hay otros caminos...

Los gobernantes que tomaron la decisión de profundizar los procesos populares de cambios iniciados, radicalizándolos cada quien

a su manera, asumieron y asumen, por cierto, un camino lleno de incertidumbres y contradicciones. En tanto lo nuevo es inédito, es y será obra de la creación y empeño colectivos de los pueblos. La prueba y el error atraviesan estas experiencias; en ellas se configuran elementos del nuevo poder popular y van madurando los nuevos saberes acerca de él.

Optar por este camino de búsquedas habla de una definición política a favor de la vida, enlazada con la determinación de apostar a la conciencia y a la voluntad colectiva de los pueblos para conformar una nueva izquierda indoafrolatinoamericana, capaz de organizarse y constituirse en sujeto (político-social) popular articulado, para ir transitando, en medio de diversas contradicciones y conflictos, el camino de la creación y construcción del poder popular desde abajo, orientado hacia lo que un día podrá llegar a ser una nueva civilización.

Esta perspectiva estratégica revolucionaria –aunque algunos pretendan invisibilizarla tras el desesperanzador discurso del “fin de ciclo” o el “fin de la globalización”– late hoy en el continente, en los procesos populares de Bolivia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Ecuador... y aguijonea la pulseada constante con los poderosos y sus apéndices locales. Contradicciones y amenazas florecen por doquier y convocan a los pueblos, a las organizaciones sociales y políticas y a los gobiernos populares, revolucionarios o progresistas, a hacer un alto en el camino, analizar las políticas actuales y la correlación de fuerzas, reflexionar críticamente acerca de lo realizado y definir –colectivamente– un camino a seguir: ceder para conservar (retroceder) o profundizar para avanzar (continuar los procesos de cambio iniciados, afianzando su orientación poscapitalista).

La adopción de uno u otro camino arrojará conclusiones muy diferentes para el quehacer político actual. Ellas configuran, por tanto, un punto neurálgico de bifurcación política de los procesos populares, progresistas o revolucionarios del continente: mantener (y defender) el *statu quo* alcanzado, abonando un camino de reformas restauradoras del capitalismo, o profundizar los avances revolucionarios² iniciados, apostando a la creación y construcción raizal de otra geometría del poder (popular) anclada en la participación protagónica de los pueblos, abriendo cauces a la refundación de la política desde abajo.

2. Aquellos procesos que, sin proponerse un horizonte socialista, abren las perspectivas para sobrepasar al capitalismo. [Samir Amin, 2009]

Aprendizajes claves para los pueblos

Las experiencias de los gobiernos populares significaron para los pueblos transitar por un conjunto de aprendizajes. Entre ellos, destaco aquí:

- Quedó al descubierto –en los hechos– que gobierno y poder no son sinónimos, que las revoluciones democráticas no son sinónimos de la otrora “vía pacífica”; suponen la profundización del conflicto político como vehículo de la lucha de clases, anudada fuertemente con una profunda batalla político-cultural de ideas.

- Un proceso revolucionario no se define como tal por el hecho de que militantes de izquierda ocupen cargos en el Estado y el gobierno, sino por abrirse hacia la democracia popular (participativa) para avanzar en la construcción colectiva de las nuevas vertientes del nuevo poder, el poder popular, desde las comunidades, las comunas, los movimientos indígenas, barriales, de campesinos, de mujeres, ecologistas, LGTB, etc.

- La democracia no se circunscribe a lo electoral; es parte de una red constructora de los consensos sociales que garantizan la repetición de los ciclos electorales, acorde con los intereses de las clases a las que responde.

- El crecimiento económico es importante, pero insuficiente.

- La búsqueda, creación y construcción de una nueva civilización, superadora de la que está regida por los intereses del capital, implica crear, construir y sostener otro modo de producción y reproducción de la vida social, otro modo de vivir y convivir (el buen vivir).

- La educación política, la batalla ideológica, es central. Y está anudada a la participación política, al empoderamiento. Este germina con la participación consciente y protagónica de los sujetos en los procesos sociotransformadores.

- Caducó la concepción de la política desde arriba y a “dedo” propia del siglo xx, la subestimación de la política, y las viejas modalidades de la representación política que suplantaron el protagonismo popular y fragmentan lo político de lo social.

- Agotamiento de la fragmentación entre lo social y lo político, sus organizaciones y sus modalidades de acción y existencia. Articulación y construcción de convergencias marcan las bases para lograr un nuevo tipo de unidad (con diversidad).

- Fin del maximalismo teórico y el minimalismo práctico propio de sectores (ultra)izquierdistas.

- Fin del pensamiento liberal de izquierda y de las prácticas que, en virtud de ello, aíslan a la militancia de los procesos concre-

tos de los pueblos, posicionándolas fuera de los escenarios concretos de las contiendas políticas.

Desafíos

Lo expuesto, en muy apretada síntesis de la compleja realidad actual, define campos de acción política para los pueblos. Entre ellos destaco:

- Apostar a la democracia popular anclada en la participación, creación, definición y acción de los pueblos.

- Articular los procesos de acción sociotransformadora con procesos de formación política encaminados a fortalecer la (auto) conciencia de los sujetos revolucionarios y su voluntad y capacidad de acción coyuntural con proyección estratégica.

- Desplegar la batalla ideológico-cultural por la nueva civilización.

- Se requiere con urgencia un profundo cambio de mentalidad y de actitud ante la vida. El predominio de la vieja cultura y los esquemas de los siglos **xix** y **xx** dejan a gran parte de la izquierda fuera del movimiento real de la vida social y, en consecuencia, también ajena a los sujetos de la nueva pobreza, y al nuevo proletariado emergente. La superación crítica de los paradigmas que guiaron los procesos sociotransformadores del siglo **xx** (aún vigentes) resulta ineludible.

- Refundar la política: anudada al quehacer sociopolítico de los pueblos, con capacidad para construir hegemonía popular; con capacidad de construir las convergencias sociopolíticas entre problemáticas diversas y sus actores; con capacidad para impulsar la construcción de la fuerza social y política de liberación, motor impulsor de los procesos revolucionarios en cada país; con capacidad para promover las articulaciones y convergencias necesarias en cada momento para construir la conducción política colectiva del proceso sociotransformador en cada país, la región, el continente y el mundo (sujeto político popular global).

- Apoyar procesos de renovación o renacimiento de la izquierda: de pueblo, participativa, creativa, propositiva, no competitiva ni sectaria sino articuladora. Capaz de abrir cauces a procesos raizales de empoderamiento popular desde abajo y de construir las convergencias colectivas hacia un horizonte común. Con capacidad, vitalidad, ética y moral para evidenciar aunque en balbuceos y pequeños logros, que otro mundo es posible porque existe ya en las prácticas y experiencias colectivas del presente.

La importancia de actuar

Es tiempo de crear, construir y transitar nuevos caminos. Y es bueno, en tal afán, además de quitarse las anteojeras de los viejos prejuicios y paradigmas, reconocer con humildad que “el pueblo” no es aquel sector afín al grupo partidario al que se pertenece, sino el conjunto diverso –no pocas veces disperso, fragmentado y contrapuesto– de sectores populares explotados por el capital, sean parte del viejo criterio de proletariado, sean nuevos pobres, nuevos proletarios, movimientos indígenas, movimientos ecologistas, de mujeres, de campesinos, por la identidad sexual, contra el hambre, por la paz, etc.

En este sentido, resulta central tener presente que el proceso de superación del capitalismo es parte de un proceso histórico-cultural de creación y aprendizaje de los pueblos del mundo de un nuevo horizonte histórico, anclado en los principios del buen vivir y convivir entre nosotros y con la naturaleza.

En el laboratorio vivo de la experiencia cotidiana, mujeres y hombres del pueblo desafían al poder y sus personificaciones y, con ello, van desactivando las minas culturales, políticas y económicas del mundo del capital y asumiendo los riesgos que ello implica: equivocarse, chocar con limitaciones, dejar temas irresueltos, dimensiones diferidas o no contempladas en sus quehaceres; avanzar en todo lo que sea concretamente posible y tensar los procesos hacia lo que parece coyunturalmente imposible. De ahí que el aprendizaje y la devolución-retroalimentación crítica de estos procesos resulten claves.

Contribuir a ello motivó el presente trabajo. No pretendo poseer toda la verdad, sino compartir reflexiones con la aspiración de abonar el intercambio de ideas de un necesario debate estratégico colectivo, indispensable para la reconstrucción del movimiento de emancipación de los pueblos, que a la vez, sea la construcción de una nueva izquierda en indoafrolatinoamérica.

Bibliografía citada

- Amín, Samir (2009): “El imperialismo colectivo: Desafíos para el Tercer Mundo”, *Pasado y Presente 21*, La Habana. En <https://fisyp.org.ar/article/entrevista-a-samir-amin-el-imperialismo-colectivo-/>.
- Raubert, Isabel (2012): *Revoluciones desde abajo*. Ed. Continente-Peña Lillo, Buenos Aires.
- Raubert, Isabel (2017): *Refundar la política*. Ed. Continente-Peña Lillo, Bs. As. (en imprenta).
- Zizek, Slavoj (2015): “El coraje de la desesperanza”; *Página/ 12*. En: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-277849-2015-07-25.html>.

“Una mayor integración regional hubiera preservado más los procesos progresistas”

Entrevista a Dilma Rousseff¹

¿Cómo definiría la etapa protagonizada por los denominados gobiernos progresistas en América Latina? ¿Cuáles fueron los principales logros y avances?

En las décadas *perdidas*, durante 1980 y 1990, en las Américas se intentó afirmar la hegemonía del pensamiento neoliberal, basado en las ideas emanadas del Consenso de Washington que abogaba, entre otras tesis, por la desregulación de la economía, especialmente de la actividad financiera, la disminución drástica del papel del Estado y la expansión del libre comercio. Para los defensores del pensamiento neoliberal, los graves problemas que afectaban a la región en aquella coyuntura, marcada por la pobreza, la exclusión y la extrema desigualdad, serían resueltos por políticas macroeconómicas ortodoxas y por los mecanismos de mercado. Lo que se vio en aquel período fue exactamente lo contrario.

Luego, con manifestaciones distintas en cada país, los gobiernos democráticos y populares que fueron siendo elegidos en la mayoría de los países de América del Sur desarrollaron un modelo económico que privilegió el combate a la pobreza y a la desigualdad, fortaleció la presencia del Estado en la economía, defendió la soberanía nacional y, al mismo tiempo, promovió el fortalecimiento de la integración regional. Otro rasgo común de esas experiencias gubernamentales fue el fortalecimiento de la democracia política. Habiendo llegado al Gobierno por medio de elecciones libres y transparentes, se estimuló la participación de

1. **Dilma Rousseff** (Belo Horizonte, 1947) es economista. Fue la primera mujer presidenta de Brasil, cargo que ocupó desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016, cuando fue destituida por un golpe parlamentario. Fue militante guerrillera y pasó tres años en prisión durante la dictadura. [Entrevista realizada el 19 de febrero de 2017. Traducción: María Julia Giménez].

la sociedad en la vida política. Se amplió considerablemente el espacio público.

Fue un periodo sin igual en la historia de nuestro continente. Conseguimos avances simultáneos en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el crecimiento económico y en la distribución más ecuánime de los frutos del desarrollo entre nuestros pueblos. Como novedad histórica, América Latina se tornó protagonista global en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

¿Qué errores cometieron los gobiernos progresistas y qué aciertos tuvieron las derechas para dar lugar a esta reconfiguración del escenario regional?

Hay elementos específicos para explicar cada caso nacional, pero es innegable que la derecha orquestó regionalmente una fuerte oposición, desde el inicio, a los gobiernos populares. Utilizó tanto los amplios poderes que poseía y posee –los medios de comunicación monopolizados, entidades empresariales y segmentos del aparato del Estado, incluyendo el Poder Judicial– para promover el cerco a los gobiernos progresistas y tratar de derrocarlos. Esta tarea fue facilitada en aquellos países donde la transición de las dictaduras a las democracias se hizo sin grandes rupturas, preservando elementos del antiguo régimen. Fue más dificultosa, e incluso frustrada, en países donde ocurrió una inmediata “reconstitucionalización”, aprovechando el impulso del movimiento popular.

El análisis autocrítico de los procesos está en curso. Este apunta a los errores de conducción económica, pérdida de la relación con segmentos de los movimientos sociales, distanciamiento de parcelas de las clases medias, subestimación de la capacidad de movilización de la derecha, del peso conservador de las instituciones y de las presiones internacionales. Una mayor integración regional, a pesar de muchos avances logrados, hubiera preservado más los procesos progresistas en curso.

Cabe recordar, igualmente, que a partir de 2008 el escenario de la crisis internacional hizo tambalear el ambiente económico. No puede ser dejado de lado el hecho de que Estados Unidos perdió mucha de su posición geopolítica en la región. Aunque no haya recurrido a instrumentos “clásicos” de intervención, como en el pasado, es evidente que no se quedó quieto.

¿Qué reflexiones hace sobre las condiciones que permitieron su destitución? ¿Cuál fue el objetivo central del golpe en Brasil?

El golpe que interrumpió mi mandato tuvo un objetivo claro: reto-

mar las recetas y las prácticas neoliberales que, por cuatro elecciones consecutivas, fueron rechazadas por la población. Como las ciudadanas y los ciudadanos rechazaron en las urnas el programa neoliberal, las fuerzas conservadoras y antidemocráticas crearon pretextos para suspender la democracia y retomar el proceso de desmonte del Estado que había sido iniciado en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso e interrumpido en los gobiernos del PT. Ese objetivo está cada vez más explícito, ya sea en la autoritaria e injusta decisión de congelar los gastos públicos por 20 años, como en las propuestas de reforma del sistema previsional o de la legislación laboral. Todas medidas que comparten el propósito de desarmar el sistema de protección social previsto en nuestra Constitución y fortalecido, como en ningún periodo anterior, en los gobiernos del PT.

Este objetivo del golpe también se expresa en el esfuerzo acelerado de privatizar las empresas del Estado y de desregular la economía, con efectos negativos sobre el futuro de nuestra estructura productiva y las perspectivas de progreso de nuestra población.

Es importante recordar que, además de ese objetivo mayor, hubo otro también fundamental para el beneficio de quienes estuvieron involucrados en el golpe, que es la interrupción del proceso de investigación contra prácticas de corrupción en el ámbito de la llamada Operación Lava Jato (que investiga la trama de corrupción en la estatal Petrobras). Denuncié, aun antes de ser apartada, que muchos de los que querían retomar el control del Estado tenían el propósito de impedir el avance de las investigaciones. Hubo una filtración de una conversación en la que ese objetivo quedó explícito; en ella, un político le decía a un investigado del caso: “Hay que frenar la sangría”.

La Constitución fue violentada y mi mandato fue ilegalmente interrumpido para evitar la condena a corruptos y para imponer al pueblo un modelo de Estado que había rechazado, en cuatro oportunidades, en las urnas.

Durante ese ataque, ¿considera que tuvo el apoyo suficiente desde América Latina?

Hubo corajudas e importantes manifestaciones y posicionamientos de líderes y dirigentes latinoamericanos contra el golpe y a favor del respeto a la normalidad democrática en Brasil. Recibí mucha solidaridad en América Latina y en el mundo. Tanto de los gobiernos progresistas que persisten y resisten, como de innumerables movimientos sociales, partidos y personalidades que acompañaron y acompañan con interés y cariño lo que ocurre hoy en Brasil.

Por el peso político y económico que Brasil posee, lo que está ocurriendo y ocurrirá aquí tiene y tendrá una enorme repercusión fuera de nuestras fronteras. La ruptura democrática en Brasil también coloca en riesgo el proyecto de integración regional que venimos construyendo. Un proyecto que, además de la integración económica y de las instituciones del Estado, busca también y principalmente la integración de nuestros pueblos, los principales beneficiarios del proceso de desarrollo del continente.

Brasil hoy tiene un gobierno usurpador, de conservadores, mediocres y corruptos, que está poniendo en práctica una profunda contrarreforma que comprometerá el futuro del país por décadas, afectando la situación económica y social de millones de brasileñas y brasileños, comprometiendo la soberanía nacional y deteriorando las instituciones democráticas. Hoy vivimos una inestabilidad política sin precedentes, que nos coloca al límite de un Estado de excepción.

¿Qué estrategias están debatiendo el PT y la izquierda de Brasil para intentar retornar al gobierno?

En este momento, el PT realiza los debates para su VI Congreso, que debe analizar en profundidad la derrota que sufrimos y apuntar nuevos caminos. Pero es fundamental recordar que el debate sobre el momento actual y sobre la democracia no se restringe al espacio de un partido, sino que debe ser compartido con otras fuerzas de izquierda y, sobre todo, con los movimientos sociales que también fueron derrotados por el golpe. Como dije en varias ocasiones: la derrota no fue solamente de una persona, de un Gobierno o de un partido. El golpe no fue solamente contra mi mandato. Fue un golpe contra la democracia, contra el pueblo brasileño y contra un proyecto de Nación que veníamos implementando con el apoyo y la participación de millones de hombres y mujeres, también derrotados en sus sueños de un futuro más justo.

El debate estratégico deberá ser realizado a la luz de tres desafíos a ser superados. En primer lugar, cabe hacer una severa auto-crítica de nuestra experiencia, para aprender de nuestros errores. En segundo lugar, debemos reconocer que las izquierdas están, en parte, huérfanas de los paradigmas que en otras circunstancias históricas las orientaban. Y, finalmente, debemos tener presente que el debate estratégico no es un seminario teórico. Es más que eso: al mismo tiempo que nos lanzamos al futuro, tenemos que enfrentar los enormes desafíos del presente. Debemos enfrentar y vencer la contrarreforma conservadora y hacer que el pueblo vuelva a te-

ner el protagonismo que tuvo en las últimas décadas. Las fuerzas progresistas precisan construir una plataforma común en torno a la reconstrucción de un proyecto de Nación inclusiva y democrática, capaz de restaurar, entre los brasileños y brasileñas, la confianza y la esperanza en el futuro del país.

Debemos tener en claro que la cuestión central que articula todas las demás es la defensa de la democracia, porque ella asegura la lucha por nuestra soberanía y por nuestros derechos sociales y económicos. Garantiza nuestras conquistas y nuevos avances. El hecho es que la derecha aprovechó la crisis económica que a partir de finales de 2014 afectó a los países emergentes y, en el caso de Brasil, desencadenó en la crisis política del *impeachment*, para viabilizar mediante el golpe lo que no consiguieron ganar por las urnas. Como dice Naomi Klein, utilizaron el choque de la sobreposición de la crisis económica y política para asegurar que lo políticamente imposible por medios democráticos se torne políticamente inevitable por el avance de medidas de excepción. El golpe no paró en el *impeachment*. En Brasil, la democracia tiene un encuentro pautado en las elecciones presidenciales de 2018 con la candidatura de Lula. Tenemos en claro que sólo un nuevo pacto democrático puede hacer que Brasil avance otra vez. Para eso, precisamos elecciones libres y sin ninguna restricción.

América Latina bajo amenaza de retroceso

Frei Betto¹

En ningún otro continente hubo, en las últimas tres décadas, cambios tan significativos como en América Latina y el Caribe. Tras el fracaso del NAFTA (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) y el rechazo a la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) por la mayoría de los países del continente, la región inició su recorrido por un camino propio y alcanzó, por fin, “su mayoría de edad”. Muchos factores contribuyeron a este desarrollo. En primer lugar, la resistencia de la revolución cubana, que no sucumbió frente a la agresión de Estados Unidos ni siquiera después de la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética.

Llegaron, entonces, el rechazo electoral a los candidatos que encarnaban la propuesta neoliberal y la victoria de los identificados con las demandas populares, especialmente de los pobres: Hugo Chávez, Daniel Ortega, Lula, Néstor Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, etcéteras. Varios organismos e iniciativas fueron creados para fortalecer la integración continental: ALBA, Celac, Unasur, Telesur, etc.

Muchas de las dificultades, sin embargo, se configuran en el horizonte. En esta economía globalizada y dominada por el capitalismo neoliberal, la crisis de las monedas fuertes como el dólar y el euro afectó negativamente a los países del continente. Aunque hay avances en la lucha contra la pobreza extrema, en la actualidad la región alberga a millones de pobres, los salarios de los trabajadores son bajos frente a los costos inflados de las necesidades básicas, y la

1. **Frei Betto** (Belo Horizonte, 1944) es escritor y asesor de movimientos sociales. Estudió Periodismo, Antropología, Filosofía y Teología. Es uno de los principales exponentes de la Teología de la Liberación. Es autor de *Fidel y la religión*, *La mosca azul* y otros sesenta libros. Fue asesor especial de Lula y coordinador del Programa Hambre Cero entre 2003 y 2004.

desigualdad social crece vertiginosamente (de los quince países más desiguales del mundo, diez se encuentran en América Latina).

En Europa, donde la crisis económica desemplea a más de 30 millones de personas, en su mayoría jóvenes, no hay una izquierda capaz de proponer alternativas. El Muro de Berlín cayó en la cabeza de los partidos y militantes de izquierda, casi todos cooptados por el neoliberalismo. Y ahora, los ataques terroristas refuerzan la xenofobia, la política de puertas cerradas a los refugiados, y a los partidos de derecha que defienden una “Europa para los europeos” y un Estado policial.

En los países latinoamericanos, la dependencia histórica de sus economías de los mercados extranjeros muestra signos de una crisis que tiende a empeorar. Las tasas de crecimiento del PBI caen, la inflación reaparece y se agravan la desindustrialización y el éxodo rural, con la consiguiente expansión del latifundio.

No basta con tener discursos y políticas progresistas si no encuentran correspondencia y adecuación en los programas económicos. Y nuestras economías continúan bajo presión de los países metropolitanos, de organismos enteramente controlados por los dueños del sistema (FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.); un sistema de tarifas –especialmente del precio de los alimentos– intrínsecamente injusto, y según el cual los lucros privados del mercado son más importantes que la vida de las personas.

El Banco Mundial advirtió, a finales de 2015, que 241 millones de latinoamericanos podrían caer en la pobreza. Es lo que Zygmunt Bauman llama *precarización*, y yo, “pobretariado”. Esos 241 millones no son pobres pero tampoco pueden ser considerados clase media. Y constituyen el 38 por ciento de la población del continente. Hoy en día, el 37 por ciento de la población adulta de América Latina vive del trabajo informal. Y se espera que se alcance el 50 por ciento debido a la crisis económica que afecta a los países más poblados como Brasil, México, Argentina y Venezuela.

Desde que españoles y portugueses llegaron a nuestras tierras, la economía continental depende de la exportación de productos primarios, hoy conocidos como *commodities*. Pero grandes importadores como China y Europa Occidental dan signos de deterioro. Hoy en día se consideran pobres en América Latina 167 millones de personas, y 71 millones viven en la miseria (sobreviven con, máximo, un dólar por día).

Balance de los gobiernos progresistas

Los gobiernos progresistas fueron elegidos por los movimientos sociales y los segmentos más pobres que constituyen la mayoría

de la población. Sin embargo, ¿se ha hecho un trabajo efectivo por organizar a los pueblos? ¿Los sectores populares son protagonistas de las políticas de gobiernos o meros beneficiarios de programas de carácter asistencialista y no de carácter emancipatorio de combate a la pobreza? ¿Cómo tratan los gobiernos democráticos populares de América Latina a los sectores de la población que se beneficiaron de las políticas sociales? ¿Existe un compromiso de intensa alfabetización política de la población o se difunde una mentalidad consumista?

Es innegable que el nivel de exclusión y miseria causado por el neoliberalismo exige medidas urgentes que no se queden en el mero asistencialismo. Sin embargo, ese asistencialismo se restringe al acceso a beneficios personales (bonos financieros, escuela, atención médica, facilidad de crédito, exención de impuestos a productos básicos, etc.), sin que haya complementación con los procesos pedagógicos de formación y organización política.

Se crearon, de esa forma, reductos electorales sin la adhesión a un proyecto político alternativo al capitalismo. Se dan beneficios sin generar esperanza. Se promueve el acceso al consumo sin favorecer el surgimiento de nuevos protagonistas sociales y políticos. Y lo más grave: no se percibe que, en medio del actual sistema consumista, cuyas mercaderías reciclables están impregnadas del fetiche que valoriza al consumidor y no al ciudadano, el capitalismo posneoliberal introduce “valores” como la competitividad y la mercantilización de todos los aspectos de la vida y la naturaleza, reforzando el individualismo y el conservadurismo.

Nuestros gobiernos progresistas, en sus múltiples contradicciones, critican el capitalismo financiero y, al mismo tiempo, promueven la bancarización de los segmentos más pobres, a través de tarjetas de acceso al beneficio monetario, a pensiones y salarios, y dan facilidades de crédito a pesar de la dificultad de enfrentarse a los intereses y de saldar las deudas.

El peligro es fortalecer en el imaginario social la idea de que el capitalismo es eterno (“el fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama), y que sin él no puede haber proceso verdaderamente democrático y civilizatorio. Eso significa demonizar y excluir, incluso por la fuerza, a todos los que no acepten esa “obviedad”, que son considerados terroristas, enemigos de la democracia, subversivos o fundamentalistas. Esa lógica es reforzada cuando, en campañas electorales, los candidatos de izquierda hacen guiños, con énfasis, a la confianza de los mercados, a la atracción de inversiones extranje-

ras, a la garantía de que empresarios y banqueros tendrán mayores ganancias, etc.

Por un siglo, la lógica de la izquierda latinoamericana jamás se emparentó con la idea de superar el capitalismo por etapas. Este es un dato nuevo, que exige mucho análisis para implementar políticas que eviten que los actuales procesos democráticos populares sean revertidos por el gran capital y por sus representantes políticos de derecha.

Pero este desafío no puede depender solamente de los gobiernos. Se extiende a los movimientos sociales y a los partidos progresistas que, cuanto antes, precisan actuar como “intelectuales orgánicos”, socializando el debate sobre los avances y las contradicciones, dificultades y propuestas, para profundizar el imaginario centrado en la liberación del pueblo y en la conquista de un modelo de sociedad poscapitalista, verdaderamente emancipatorio.

La cabeza piensa donde los pies pisan. Nuestros gobiernos progresistas corren serio riesgo de sucumbir por la contradicción entre política de izquierda y economía de derecha, en caso de que no movilicen al pueblo para implementar reformas estructurales.

Son grandes los desafíos que enfrentan los 33 países de América Latina, con sus 600 millones de habitantes. Como decía Onelio Cardozo, las personas tienen “hambre de pan y de belleza”. La primera es saciable; la segunda, infinita. Eso significa que el deseo humano, que es infinito, sólo dejará de ser rehén del consumismo y del hedonismo –tentáculos del neoliberalismo– si ve saciada su hambre de belleza, o sea, de sentido de la existencia.

Eso no se alcanza solamente con más frijoles en el plato y más dinero en la cartera. Pero sí con una formación capaz de imprimir en cada ciudadano y ciudadana la convicción de que vale la pena vivir y morir para que todos tengan vida, y vida en abundancia, como dice Jesús (*Juan, 10:10*).

“Debemos dejar de ser meros países productores de materias primas”

Entrevista a Guillaume Long¹

En alguna oportunidad usted fue categórico al rechazar la idea de “fin de ciclo progresista” en América Latina. ¿Cómo denominaría entonces a esta etapa signada por los cambios de algunos gobiernos y la recomposición de proyectos abiertamente neoliberales?

Creo que no hay que menospreciar o dejar de lado el hecho de que vivimos una coyuntura diferente, un cambio de signo político importante en la región. Ha habido una serie de derrotas y no solamente electorales, políticas, incluso no siempre democráticas, que han afectado a los proyectos progresistas. Ahora, mi discrepancia es con la noción de “fin de ciclo”: desde ciertos sectores se trata de sembrar la idea de que es una vuelta al neoliberalismo de 1990, y creo que claramente no es el caso.

Yo vengo de una izquierda que llegaba al 2 por ciento, al 3 por ciento, cuando nos iba bien, al 4 por ciento. El candidato de izquierda llegaba en sexto, séptimo u octavo lugar, en Ecuador y en otros países de América Latina. Ahora, incluso en los países en que los gobiernos progresistas han sido derrotados, son la primera fuerza de oposición. Vienen de una experiencia legislativa importante, no es lo mismo no haber estado desde décadas en el poder que salir del gobierno con cuadros probados, muchos de ellos jóvenes, que han manejado la economía muy bien. Hay cuadros probados y hay políticas públicas probadas. El estereotipo de la izquierda era que teníamos buena intención pero no éramos capaces de gobernar, claramente se comprobó que gobernamos, y gobernamos largo... Somos parte del aje-

1. **Guillaume Long** (París, 1977) es académico y político ecuatoriano de origen francés. Canciller de Ecuador (desde marzo de 2016). Ministro de Cultura (marzo 2015-marzo 2016). Ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano (mayo 2013-marzo 2015). Historiador con doctorado en Relaciones Internacionales. [Entrevista realizada el 20 de enero de 2017].

dreza política, somos una realidad, somos el partido gobernante o la primera fuerza de oposición.

Estamos en una pugna, quizás no con la misma hegemonía de la primera década y media del siglo, pero estamos luchando por el proyecto hegemónico en contra de las fuerzas neoliberales. Es claramente un escenario de fuerzas neoliberales contra fuerzas progresistas disputándose el espacio político, disputándose la hegemonía ideológica. No era para nada ese el escenario en 1980 y 1990 cuando había un dominio abrumador, una hegemonía absoluta y casi incuestionable por parte de las fuerzas neoliberales.

Puede haber un retroceso, pero América Latina ha cambiado y no se ha vuelto a lo que hemos denominado “la larga y triste noche neoliberal”. Evidentemente, cuando la apuesta es la democracia corremos el riesgo de perder alguna vez en las urnas, sobre todo porque el poder desgasta muchísimo. Era inevitable que en algún momento algunos proyectos progresistas fueran derrotados en las urnas. Ahora, ¿hasta qué punto es reversible? Siempre podríamos argumentar que en los proyectos revolucionarios se avanza muchísimo y luego puede haber un proceso de retroceso, pero el retroceso no es al punto de partida. Se regresa un poco y se sigue caminando.

Además, nuestros proyectos políticos, en Ecuador, en algunos países del ALBA, nacen de proyectos constituyentes. Esos proyectos significan nueva Constitución, nuevas reglas de juego, nuevos marcos normativos, nueva legislación, etc. Para revertir eso una oposición necesitaría de una mayoría abrumadora. Entonces, esa expresión “fin de ciclo”, si la intención es insinuar que hay una vuelta al neoliberalismo clásico de 1980 y 1990, no me convence y creo que no es un criterio histórico acertado.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destaca la importancia de hacer “un análisis riguroso, sin ocultar nada”, para poder corregir eventuales errores. ¿Por dónde cree que han pasado las principales fallas de los gobiernos progresistas?

Sin dudas todos cometimos errores, muchos errores. Creo que fueron más los aciertos, y que la historia recordará este inicio del siglo XXI, incluso la historia universal de la humanidad recordará este inicio de siglo, como el momento de América Latina. Creo que los grandes nombres de las personalidades históricas y los pueblos que se mencionarán de aquí a cien, doscientos años, serán realmente los pueblos latinoamericanos.

En general hay una tensión muy fuerte en nuestros proyectos progresistas, entre las prerrogativas más inmediatistas, de más corto

plazo, y las de largo plazo, que son atendibles, porque es el ejercicio de gobierno, y cuando uno está en el gobierno, sobre todo cuando hay una derecha desleal o en algunos casos golpista como hemos visto en algunos países, hay que sobrevivir políticamente, porque de nada sirve el martirio. Pero creo que todos los gobiernos del momento progresista de América Latina quisieron tener utopías, ideales, sin dejar de lado un fuerte pragmatismo, un fuerte realismo de supervivencia en el poder, es decir, de realmente concretar, hacer tangible y real estos afanes de mayor justicia social, de mayor redistribución, de mayor garantía de los derechos de las personas, de los pueblos.

Entonces, obviamente hay objetivos de corto y mediano plazo que son totalmente entendibles. Pero eso no significa perder de vista los objetivos de largo plazo, y esta creo que es la tensión con la que todo gobierno tiene que lidiar.

Creo que hay dos tipos de redistribución. La primera es una redistribución de carácter nacional o doméstico, una redistribución que se hace hacia adentro. Si uno ve el PBI per cápita de América Latina, somos la clase media mundial, si todos tuviéramos ese PBI per cápita, si no hubiese grandes distorsiones entre ricos y pobres, no existiría pobreza en América Latina. Entonces ahí hay una prerrogativa de redistribución nacional, doméstica, a través de políticas de garantía de los derechos, también un modelo económico de crecimiento endógeno.

Hay un segundo elemento que tiene que ver con la redistribución global. Hemos sido países periféricos no sólo en términos económicos sino de distribución del poder. Hemos sido marginalizados de los grandes procesos de tomas de decisiones de la humanidad. Ninguno de nosotros está en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni tiene el derecho de veto, ni tiene un ejército que impone su voluntad sobre los demás, ni armamento nuclear, somos países que en mayoría dependemos del multilateralismo. Pero la única forma de cambiar esta realidad periférica y de distribuir riqueza y poder es a través de un cambio de nuestro patrón productivo.

Respecto a los errores, creo que pudimos hacer y debemos hacer siempre más para lograr una transición productiva en nuestras sociedades. No solamente enfocarnos en la redistribución, que por supuesto es importantísima, porque en eso se basa nuestra credibilidad, y hay necesidades apremiantes, nuestros pueblos quieren respuestas hoy, no mañana. Pero sin duda hay que guardar algún capital, pensar estratégicamente en cómo invertir en esta transición productiva para dejar de ser meros países productores de materias primas e importadores de todo lo demás, para realmente insertarnos en la economía global de forma más sofisticada, con valor agregado,

atrevernos a acercarnos a la economía del conocimiento, atrevernos a acercarnos al rol fundamental que va a jugar la ciencia, la tecnología y la innovación en el siglo XXI.

Las grandes peleas de este siglo ni siquiera van a ser los temas comerciales. Los TLC ni siquiera son acuerdos de comercio. Son acuerdos desde muchos ámbitos, uno de ellos el laboral, pero el más importante es el de propiedad intelectual, porque estamos entrando a un siglo en donde el valor agregado está en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, en los fármacos, en el *hi-tech*.

Los movimientos sociales protagonizaron fuertes luchas contra las políticas neoliberales en la década de 1990, sobre las cuales se erigieron los gobiernos progresistas en la región. Sin embargo, la relación entre unos y otros no siempre se muestra armónica, a veces incluso se presentan confrontaciones como entre el gobierno de Ecuador y parte del movimiento indígena. ¿A qué se debe esa conflictividad?

Es una excelente pregunta. Hay varios factores y varias responsabilidades compartidas. Creo que no hay que menospreciar la noción de que hay una izquierda de la oposición, de la resistencia, de la lucha, y que no siempre ha sido una izquierda en las ideas, en las propuestas y en la construcción de procesos. Eso se ha sentido a lo largo de la historia, desde la época de Salvador Allende, que también tuvo a gran parte de la izquierda en su contra y habría que valorar si es que no colaboró de alguna manera (no digo de forma activa pero sí de forma ingenua) al fracaso político que sucedió en Chile. Porque al final lo que sucedió fue un golpe de Estado, y de alguna manera más pragmática, más realista, de pronto la historia hubiera sido otra.

No hay que subestimar el hecho de que hay, lastimosamente, una serie de compañeros que son muy buenos para la resistencia pero no siempre muy buenos para la construcción. Eso es un elemento importante. Hay algunas personas a las que les apesta el poder, y a veces creen que son de izquierda pero en realidad caen en todas las trampas del liberalismo, con una suerte de discurso libertario, peligroso, que es un discurso antipoder y que no deja de ser un discurso de la antipolítica. El discurso de que todos los políticos son malos, y que todo es malo... Bueno, pero entonces si caemos en esto siempre vamos a dejar que otros gobiernen, y vamos a dejar que nuestras oligarquías y nuestras élites nos dominen.

Por otro lado, ha habido penetración de muchas ONGs, una izquierda muy vinculada al oenegéismo, no siempre defendiendo no-

ciones que tienen que ver con la defensa e intereses de clase, o con el materialismo en general, las luchas para salir de la pobreza, contra la desigualdad, sino muchas veces enfocando todos sus dardos en lo que los anglosajones llaman la *identity politics*, la política de las identidades. La izquierda hoy sin las identidades sería una izquierda muy materialista, muy poco contemporánea, perdida un poco en el socialismo clásico.

En buena hora que hoy no se hable sólo de las clases sociales. Ahí hizo un gran trabajo en el siglo xx el movimiento feminista, que ha sido muy importante para revolucionar la izquierda, y también nosotros con un alto componente indígena. Ahora vemos todo el tema de los LGBT, eso es fundamental, eso enriquece a la izquierda. Pero no puede ser eso solamente: si le quitamos el elemento estructural, de clase, si le quitamos la lucha en contra de las grandes inequidades del capitalismo, entonces ya no somos realmente de izquierda.

La Revolución Ciudadana fue anticorporativista. Fue un movimiento político que buscó descorporativizar a la sociedad, de hecho por eso se llama Revolución Ciudadana. Hay una relación directa con el elector, con la ciudadanía, y eso es positivo, porque teníamos corporaciones para todo: los banqueros eran quienes regulaban la banca, los rectores universitarios quienes regulaban la universidad; los exportadores quienes tomaban las decisiones del comercio exterior. Eso evidentemente significaba un corporativismo, una suerte de grupos fácticos de intereses privados que impedían de alguna manera que surgiera lo público, que el Estado pudiera jugar su rol de lo que yo llamaría la autonomía relativa del Estado frente a los intereses fácticos. Ahora, quizás en ese tema de descorporativizar no discriminamos lo suficiente entre descorporativizar con la oligarquía y descorporativizar con los movimientos sociales. En eso creo que se pudo haber hecho más para asegurarnos un acompañamiento de los partidos, de los movimientos sociales. En ese sentido, por ejemplo, Bolivia es una realidad muy diferente. Cada país, cada proyecto progresista ha sido muy diferente. Eso en cuanto a autocrítica.

Usted menciona la necesidad de alterar el patrón de acumulación. Respecto a eso hay algo que es muy criticado por diversos sectores, en Ecuador y también en América Latina en general, que es el extractivismo. Por ejemplo, el señalamiento de que su gobierno ha priorizado acuerdos con multinacionales extractivistas aun a costa de entrar en contradicción con territorios de los pueblos indígenas. ¿Cree que hay algo de legitimidad en esos reclamos o los enmarca en lo que denominó la lucha contra los corporativismos?

Claramente no se pueden dejar las materias primas en una década, eso es imposible. Lo que se puede y debe hacer es aprovechar los recursos del extractivismo, en nuestro caso el petróleo, para invertir en sectores que nos van a permitir salir del extractivismo. Pero claro, si uno tiene un proyecto medianamente modernista en cuanto a los derechos humanos, no se puede declarar de la noche a la mañana, como algunos tuvieron la irresponsabilidad de pedir, una moratoria sobre la extracción petrolera.

El extractivismo no es el problema principal, y no se lo puede dejar de la noche a la mañana. Tiene que haber claramente un plan de transición para alejarse de él pero de forma inteligente, utilizando los recursos del extractivismo, sobre todo generando condiciones que permitan justamente lo que la gente ambiental pide. Hay un fundamentalismo peligroso, sobre todo impulsado por el oenegéismo (que además recibe financiamiento de fuentes complejas, dudosas) que empuja esa agenda de forma peligrosa. Pero nuestro compromiso siempre fue alejarnos del extractivismo.

Los progresismos latinoamericanos y la Hidra capitalista

Raúl Zibechi¹

La imagen que propone el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del capitalismo como una Hidra me parece interesante para comprender cómo funciona el sistema, cómo nuestra lucha se enfrenta a muchas cabezas y cómo esas cabezas se reproducen a pesar de nuestra lucha. Por un lado, nos permite comprender la complejidad para terminar con un sistema tan complejo; por otro, abre las puertas para reflexionar sobre la actividad revolucionaria, ya que esta puede ser integrada por el capitalismo en muy diversas formas. En particular, nos permite reflexionar sobre algunos aspectos centrales del capitalismo:

- No se lo derrota con un solo golpe, por más certero que sea, porque se reproduce precisamente en los lugares donde se realizan cortes.
- No se lo derrota en un tiempo breve, por su misma capacidad de regenerarse. Su destrucción requiere tiempo y constancia. No se lo derrota golpeando en un solo lugar, decapitando una sola cabeza, porque además de regenerarse, tiene muchas.
- Y, quizá, un rasgo fundamental: la Hidra es un espejo en el que podemos mirarnos nosotros. Quiero decir que combatir la Hidra es combatir también una parte de nosotros mismos. No podemos vencer a la Hidra sin cambiar, sin movernos del lugar, sin transformarnos en la pelea.

Intentaré identificar algunas de las cabezas de la Hidra que se regeneran y, sobre todo, cómo se regeneran, cómo ha hecho el sistema para regenerarse cuando las luchas de los pueblos consiguen colocarlo a la defensiva e incluso propinarle derrotas importantes. Los últimos años nos ofrecen algunas enseñanzas que debemos aprovechar. Creo que América Latina, y en particular Sudamérica,

1. **Raúl Zibechi** (Montevideo, 1952) es periodista, escritor y activista uruguayo. Columnista del diario *La Jornada* de México. Docente e investigador sobre movimientos sociales. Colabora en tareas de formación y difusión con movimientos urbanos, campesinos e indígenas en Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia, entre otros países.

es un buen escenario para comprender cómo la Hidra capitalista se recompone, cómo podemos cortarle una cabeza, un tentáculo o varios, y sigue ahí, renace, vuelve a crecer... se fortalece incluso, porque las cabezas que le nacen tienen más fuerza, son más robustas, más capitalistas...

Tres momentos de las últimas dos décadas

Primer acto: En Sudamérica hemos vivido ciclos de luchas importantes desde comienzos de la década de 1990 que han derribado gobiernos (por lo menos doce gobiernos han caído por la acción directa popular) en Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. O sea, luchas tan potentes que han hecho caer gobiernos, y en algunos países derribaron varios gobiernos en pocos años.

Fue una lucha contra el neoliberalismo en su fase de privatizaciones. En esa lucha confluyeron dos abajos: los trabajadores con empleo fijo y derechos reconocidos (las llamadas clases medias) y los excluidos. Por un tiempo breve, confluyeron en la lucha contra el modelo.

Segundo acto: Tras la caída de los gobiernos neoliberales privatizadores, sea por la acción directa en las calles o por una combinación de movilizaciones y elecciones, ascendieron nuevos gobernantes. Algunos provenían de organizaciones populares, pocos habían estado en las calles pero las conocían, los modos como las gentes protestan, se organizan y luchan. Los nuevos equipos dirigentes, en general, no venían de la vieja clase política, anquilosada, sino de los movimientos que resistieron al neoliberalismo o estuvieron en la periferia de los movimientos. Este es un punto clave que nos permite comprender lo que vino después, o sea cómo la Hidra capitalista reconstruyó la cabeza que los pueblos le habían cortado en las calles.

Tercer acto: Los nuevos gobiernos se colocaron una máscara (antineoliberal, por los derechos humanos, contra la pobreza, por un mundo multipolar, etc.), pero continuaron el mismo modelo bajo nuevas formas: monocultivos, minería, especulación inmobiliaria, o sea extractivismo. Se cerró la etapa privatizadora pero se abrió la etapa de los *commodities*. Sigue siendo neoliberal porque gira en torno a la especulación financiera, pero adopta otro discurso, el nuestro, un discurso tomado de las calles.

Decir que con los gobiernos progresistas no cambió nada parece exagerado, parece algo así como no querer ver los cambios, los “aspectos positivos” de estos gobiernos. Lo que en realidad cambió fue que con ellos se profundizó el capitalismo. Hay más capitalismo.

Para tener un panorama completo es necesario comprender cómo el progresismo ha destruido movimientos sociales y comunidades, incluyendo la represión, que no es una anomalía sino parte esencial del modelo. En ese sentido, abordaré el análisis de los gobiernos progresistas desde tres aspectos: apropiación del discurso de los movimientos, la búsqueda de enfrentar unos movimientos con otros y el aumento de la represión formal e informal.

1. Apropiación del discurso=confusión: la Hydra se viste con ropajes de izquierda, canta nuestros himnos, levanta el puño, enarbola nuestras banderas, Evo Morales dice “mandar obedeciendo”. Lo dijo en enero de 2006 cuando asumió la presidencia y lo repitió el 31 de diciembre de 2010 cuando el pueblo se había sublevado contra el “gasolinazo”. Lo dice cuando organiza consultas falsas para hacer carreteras violando la decisión de comunidades. ¿Por qué se apropian el progresismo y la izquierda electoral del discurso y de las banderas de los pueblos en lucha? En parte, por una cuestión de legitimidad. Son gobiernos y presidentes que necesitan la aprobación de los abajos porque llegaron arriba gracias a esos abajos. Y saben que si en algún momento los abajos los dejan solos, ellos se caen.

Pero, además, usan nuestros discursos y nuestros símbolos porque necesitan confundir para permanecer en el gobierno. Cuando los de abajo organizados se han hecho fuertes, la represión es el peor camino. Entonces confunden. Y la confusión va unida a la represión, que nunca se abandona. La doble dinámica, confusión más represión, es una de las principales características del modelo progresista. Por una razón central: no hay otro modo para sostener el modelo extractivo que hacerlo con represión.

2. La segunda forma de actuar fue apoyar a grupos de militantes para enfrentarlos con otros grupos de militantes, pero no son grupos iguales porque uno cuenta con amplio apoyo y financiación del Estado. En este aspecto, las cosas son mucho más sutiles. Vemos una apropiación del discurso y vemos confusión, pero llevada a los territorios de los movimientos de la mano de las políticas sociales. Por eso decimos que las políticas sociales son contrainsurgencia,² porque han nacido para desorganizar y cooptar a los movimientos de base, neutralizar a los militantes y, llegado el caso, criminalizarlos.

Se trata de dos dispositivos: trabajar con “movimientos” oficialistas, institucionalizados, cooptados, y a la vez entregar abundantes

2. Ver mi libro *Política y miseria*, Lavaca, Buenos Aires, 2011.

subsidios entre las poblaciones, que se combinan con cargos a los dirigentes de esos “movimientos”. Podemos decir que hay una política macro en los territorios, los subsidios, y una micro, más minuciosa, dedicada a cooptar dirigentes populares.

Lo que consiguen es desgarrar el tejido comunitario y militante, destruir la comunidad, la capacidad de organización y de lucha. Para muchas personas que estuvieron en los movimientos, ahora el Estado/gobierno les resuelve la vida, o por lo menos sus mayores urgencias. Para los cuadros y dirigentes, la política institucional es un camino de ascenso social individual.

3. Aumento de la represión. Tengo claro que esto suena extraño, porque algunos (me incluyo) creímos que pese a todos los problemas el progresismo implicaba menos represión. Pero luego pude ver que era una mirada superficial y racista.

En Argentina hubo cuatro veces más muertos por gatillo fácil en la década de Kirchner que en la de Menem: 60 muertos cada año, en promedio, por la policía en 1990 (de julio de 1989 a diciembre de 1999) frente a 240 desde mayo de 2003 a noviembre de 2013.³ Allí, los muertos por *gatillo fácil* fueron 4.011 entre 1983 y noviembre de 2013: el 47 por ciento tenían entre 15 y 25 años, el 27 por ciento de 26 a 35 años.

En Brasil, la organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en San Pablo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/negros/pobres. Una por año. En democracia.

¿Cómo podemos entender estos datos cuando estamos bajo gobiernos progresistas y de izquierda, de gobiernos que se han preocupado por los pobres? Lo que hubo, en realidad, es integración a través del consumo, o sea a través del mercado. Esto es más capitalismo. Lo pobres no tienen derechos sino asistencia del gobierno, siguen siendo ciudadanos de segunda en temas como educación, salud y transporte; acceden a comprar mercancías pero siguen ocupando el mismo lugar estructural, porque no hubo cambios de fondo. En esto consiste la regeneración de la cabeza de la Hidra que había sido cortada en las calles. Con el progresismo tenemos más capitalismo, más consumo, pero no más derechos, y la misma desigualdad de siempre.

3 Correpi, Ver “Informe Anual” en Boletín Informativo N° 705.

Consecuencias del renacer de la Hidra

El progresismo consiguió instalar una cultura política que dice que se puede cambiar el mundo sin conflictos, participando en las elecciones, eligiendo cargos municipales y nacionales, y que desde dentro de las instituciones se pueden hacer los cambios sistémicos. Más aún: los conflictos son peligrosos porque le hacen el juego a la derecha y pueden incluso ser calificados como desestabilizadores y en algunos casos hasta de terroristas.

Por otro lado, eso que llaman democracia electoral-representativa ya no existe. Es cierto que hay una liturgia cada varios años que consiste en acudir a las mesas de votación, depositar en una urna un papel con una lista de personas que luego se cuentan y de ahí surgen unos nombres que ocuparán unos cargos. Pero esa liturgia no tiene nada que ver con la democracia real, en la que se toman decisiones importantes para la vida de las personas.

Son elecciones en las que no está en juego nada importante. Por supuesto no se puede votar por el fin del régimen que nos oprime, que es una forma de totalitarismo, porque vivimos un estado de excepción permanente para los de abajo. Ni siquiera se puede votar para que la policía se vaya de las barriadas.

Ese estado de excepción lo maquillan con la liturgia de las elecciones. Por eso confiar en las instituciones es peligroso, porque con la excusa de la seguridad y el narcotráfico nos imponen el estado de excepción, o sea de guerra. Esto no depende de quienes estén en el gobierno. La democracia electoral es hoy la cobertura legal del estado de excepción, encubre y justifica el genocidio contra los de abajo.

En tercer lugar, diría que la vía institucional contribuye a regenerar cabezas de la Hidra. Esta es una de las conclusiones que podemos sacar de estos diez o quince años de gobiernos progresistas, en los cuales uno de los ejes fue trasladar el conflicto social al ámbito institucional. Porque la institucionalización de los conflictos siempre va de la mano de la dispersión de nuestros espacios de autonomía. En esta etapa genocida del capitalismo, debemos ser autónomos, lo más completamente posible. Derrotar a la Hidra supone pelear en dos sentidos: defendernos, hacerle daño, cortarle cabezas y tentáculos; y construir autonomías integrales. Es una sola lucha con dos dinámicas complementarias. Pero una sin la otra no sirve.

Es muy interesante constatar, en el caso de Brasil, que mientras hubo “paz social” los gobiernos del PT marcharon bastante bien. Pero las manifestaciones de junio de 2013 que quebraron esa paz hicieron entrar en crisis toda la gobernabilidad petista/progresista.

Eso nos sugiere que el progresismo fue el modo de disciplinamiento del conflicto social, por eso los de arriba no cuestionaban esos gobiernos. Pero cuando los de abajo se liberan de la tutela progresista, entonces los de arriba ya no los quieren más, porque estaban allí para eso, para apaciguar el conflicto. Eran los “guardias amables” del campo de concentración.

Por último, para enfrentar a la Hidra tenemos que cambiar el lugar que tenemos, movernos de este lugar material y simbólico. Tenemos que crecer hacia afuera y hacia adentro, tenemos que aprender, dejar de ser lo que somos para estar en condiciones de enfrentar a la Hidra y crear un mundo nuevo, diferente.

Tenemos que seguir aprendiendo de los pueblos, de la gente común, de las bases. Nos quedan por delante tareas inmensas, para las que necesitamos modelarnos a nosotros mismos: no para ser más grandes, no para ser más importantes, sino para ser menos, para ser uno más entre los tantos y tantas que combaten la Hidra capitalista.

Límites y contradicciones de una década virtuosa continental¹

Álvaro García Linera²

No estamos en un buen momento en el continente. Es un momento de inflexión histórica, algunos hablan de un retroceso, de avance de los restauradores. Lo cierto es que, después de diez años de irradiación territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios, este avance se ha detenido. En algunos casos ha retrocedido y en otros casos está en duda su continuidad.

El ataque va dirigido hacia lo que podemos considerar como la década dorada, la década virtuosa de América Latina. Son más de diez años que el continente, de manera plural y diversa, unos más radicales que otros, unos más urbanos, otros más rurales, con distintos lenguajes muy diversos, pero de una manera muy convergente, ha vivido los años de mayor autonomía y de mayor construcción de soberanía que uno pueda recordar desde la fundación de los estados en el siglo XIX.

De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que hacer un análisis de plaza, de terminología militar, analizar las fuerzas y escenarios reales que hay, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales prácticas del avance futuro.

Cinco debilidades de los gobiernos progresistas

1. Una primera debilidad que hemos tenido son las contradicciones al interior de la economía. Es como si le hubiésemos dado poca im-

1. El presente texto es parte de su conferencia “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, organizada por la Fundación Germán Abdala (27/5/2016, Buenos Aires, Argentina).

2. **Álvaro García Linera** (Cochabamba, 1962) es vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (desde 2006 a la actualidad). Fue cofundador del Ejército Guerrillero Tupaj Katari, por lo que debió purgar una condena de cinco años en la cárcel de Chonchocoro. Tras su liberación en 1997 fue periodista, fundó el grupo Comuna y posteriormente impulsó la conformación del Movimiento Al Socialismo (MAS).

portancia al tema económico. Cuando uno es gestión de gobierno, cuando uno se vuelve Estado, la economía es decisiva, y no siempre los gobiernos progresistas y los líderes revolucionarios han asumido su importancia decisiva. En la economía nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios. Si no están esas condiciones necesarias, cualquier discurso, por muy seductor, por muy esperanzador que sea, se diluye ante la base económica.

Algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque revolucionario, potenciando al bloque conservador. Ciertamente que un gobierno debe gobernar para todos, es la clave del Estado. ¿Cómo moverse en la dualidad: gobernar para todos, pero en primer lugar, por siempre, como dice la Iglesia Católica de base, tomando una opción preferencial, prioritaria por los trabajadores, por los pobladores, por los campesinos? No puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado a lo popular. Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, o a neutralizarla, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y movilizad. En cuanto noten que lo popular es débil, los sectores empresariales no van a dudar un solo instante para levantar la mano y clavar un puñal a los gobiernos progresistas y revolucionarios.

Hay quienes dicen desde el lado de una supuesta izquierda que el problema fue que los gobiernos progresistas no tomaron medidas más duras de socialización y de levantar el comunismo y de acabar con el mercado y disolverlo, como si el problema fuera un tema de voluntad o de decreto. Se puede sacar un decreto que diga que no hay mercado, sin embargo, el mercado va a seguir. Creación de capacidad económica, creación de capacidad asociativa productiva de los sectores subalternos, esa es la clave que va a decidir a futuro la posibilidad de pasar de un posneoliberalismo a un poscapitalismo.

2. El segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de riqueza sin politización social. ¿Qué significa esto? La mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. En el caso de Bolivia, el veinte por ciento de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de diez años. Hay una ampliación del sector medio, de la capacidad de consumo de los trabajadores, hay una ampliación de derechos necesarios, si no, no seríamos un gobierno progresista y revolucionario. Pero si esta ampliación de capacidad de consumo, si esta

ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador.

No se trata de un tema de discurso, se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos, en cómo nos ubicamos en el mundo. En este sentido, lo cultural, lo ideológico, lo espiritual, se vuelve decisivo. No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural. ¿Cómo llevar la democratización de la asamblea, como espacio, como experiencia colectiva, a una democratización del alma, al espíritu de cada persona, en su universidad, en su barrio, en su sindicato, gremio, barrio? Ese es el gran reto. Es decir, no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural. Y ahí estamos atrasados. Ahí la derecha ha tomado la iniciativa. A través de medios de comunicación, de control de universidades, de fundaciones, de editoriales, de redes sociales, de publicaciones, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas.

¿Cómo retomar la iniciativa? Esta angustia la comentábamos con el presidente Evo cuando leíamos que muchos de nuestros hermanos que son dirigentes sindicales, o que son líderes estudiantiles, ven como una especie de ascenso social cuando llegan al Parlamento, o se convierten en dirigentes; es la culminación de una carrera social. Tienen derecho, después de haber sido por siglos marginados de poder político; imaginarse que pueden ser dirigentes es un hecho de justicia. Pero muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción de sentido común. Y cuando vemos camadas enteras, cuando vemos a nuestros hermanos saliendo del barrio, de la comunidad, del sindicato, para buscar con derecho legítimo ser autoridad, luego queda un vacío y ese vacío lo llena la derecha. Y luego tendremos entonces un buen ministro o un buen parlamentario pero tendremos un mal sindicalista, un mal dirigente universitario, en general predispuestos a someterse a la derecha. Vuelvo a decir, cuando uno está en gestión de gobierno es tan importante un buen ministro o parlamentario como un buen dirigente revolucionario sindical, barrial, estudiantil, porque ahí también se da la batalla por el sentido común.

3. Una tercera debilidad es la débil reforma moral. La corrupción es un cáncer que corroee la sociedad, no ahora sino hace quince, veinte, cien años. Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada, cuando amarraron la cosa pública y la convirtieron en privada. Cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más indecente, más obsceno, de corrupción generalizada. Y eso hemos combatido. Pero no basta. No ha sido suficiente. Es importante que, así como damos ejemplo de restituir los recursos públicos, los bienes públicos, como bienes de todos, en lo personal, en lo individual, cada compañero, presidente, vicepresidente, ministros, directores, parlamentarios, en nuestro comportamiento diario, en nuestra forma de ser, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia. Hay una campaña de moralismo insuflado últimamente en los medios. En el caso de Bolivia decimos: ¿qué ministro, qué viceministro, qué diputado del pueblo, tiene una compañía en *Panamá Papers*? Ninguno. Pero en cambio podemos enumerar diputados, senadores, candidatos de la derecha que en fila inscribieron sus empresas en Panamá para evadir impuestos. Ellos son los corruptos, ellos son los sinvergüenzas y nos acusan a nosotros. No tienen ninguna moral. Pero hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos.

4. Un cuarto elemento, que no lo vivieron ni Rusia, ni Cuba, ni China, es el tema de la continuidad del liderazgo en regímenes democráticos. Cuando triunfa una revolución armada, la cosa es fácil porque logra finiquitar casi físicamente a los sectores conservadores. Pero en las revoluciones democráticas tienes que convivir con el adversario. Lo has derrotado, lo has vencido discursivamente, electoralmente, políticamente, moralmente, pero ahí sigue tu adversario. Es parte de la democracia. Y las Constituciones tienen límites, cinco, diez, quince años, para la elección de una autoridad. ¿Cómo se da continuidad al proceso revolucionario cuando tiene esos límites? Es un tema del que no se ocuparon otros revolucionarios porque el problema lo resolvieron al principio. Nosotros no. Forma parte de nuestra experiencia revolucionaria. ¿Cómo se resuelve el tema de la continuidad del liderazgo? Van a decir: lo que pasa es que los populistas, los socialistas, son caudillistas. Pero ¿qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época? Si todo dependiera de instituciones, eso no

es revolución. Ninguna revolución late en las instituciones. No hay revolución verdadera sin líderes ni caudillos. Es la subjetividad de las personas que se pone en juego. Cuando ya son las instituciones que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles. Cuando es la subjetividad de las personas la que define los destinos de un país, estamos ante procesos verdaderos de revolución.

Pero el tema es cómo damos continuidad al proceso teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder. Ese es un gran debate, no fácil de resolver. No tengo la respuesta. Tal vez la importancia ahí de trabajar liderazgos colectivos, que permitan que la continuidad de los procesos tenga mayores posibilidades en el ámbito democrático. Pero incluso a veces ni eso es suficiente. Esta es una de las preocupaciones que corresponde resolver en el debate político: ¿cómo damos continuidad subjetiva a los liderazgos revolucionarios para que los procesos no se trunquen, no se limiten, y puedan tener una continuidad en perspectiva histórica?

5. Por último, una quinta debilidad que quiero mencionar, de manera autocrítica pero propositiva, es la débil integración económica continental. Hemos avanzado muy bien en integración política. Y los bolivianos somos los primeros en agradecer la solidaridad de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, cuando hemos tenido que enfrentar problemas políticos. Y gracias a ellos estamos donde estamos. El presidente Evo está donde está gracias a la solidaridad política de presidentes y de los pueblos latinoamericanos. Pero ¿y la integración económica? Eso es mucho más difícil. Porque cada gobierno está viendo su espacio geográfico, su economía, su mercado, y cuando tenemos que leer los otros mercados, ahí surgen limitaciones. No es una cosa fácil la integración económica. Uno habla, pero cuando tienes que ver la balanza de pagos, inversiones, tecnología, las cosas se ralentizan. Este es el gran tema. Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino si logra constituirse en una especie de Estado Continental Plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los estados pero que, a la vez, con ese respeto de las estructurales locales y nacionales tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político y en lo comercial. Somos 450 millones de personas, tenemos las mayores reservas mundiales de minerales, de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presas de la

angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, vamos a poder pisar fuerte en el siglo **XXI** y marcar nuestro destino.

Hacia la próxima oleada progresista y revolucionaria

La derecha quiere retomar la iniciativa y en algunos lugares lo han logrado, aprovechando estas debilidades. ¿Qué va a pasar?, ¿en qué momento estamos?, ¿qué viene a futuro? No debemos asustarnos ni ser pesimistas ante estas batallas que se vienen. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas. Nunca imaginó un proceso ascendente, continuo, de revolución.

Estamos ante el fin de la primera oleada, y está viniendo un repliegue. Serán meses, serán años, pero está claro que como se trata de un proceso, habrá una segunda oleada, y lo que tenemos que hacer es prepararnos, debatir qué cosas hicimos mal en la primera oleada, en qué fallamos, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá, mucho más arriba, que lo que lo hicieron en la primera.

Y esta segunda oleada podrá ir más arriba porque tendrá unos soportes, un punto de partida que no lo vamos a ceder. Tendrá a una Bolivia, a una Cuba, a una Venezuela, tendrá a un Ecuador, firmes.

Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos de abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados, de los tiempos neoliberales? La década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha desde abajo, desde los sindicatos, desde la universidad, de los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de luchas de los años 1980 y 1990. Y si hoy, de manera provisoria, temporal, tenemos que volver a esas luchas, bienvenidas. Para eso es un revolucionario.

Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino.

Por lo tanto, es un buen tiempo. Siempre es un buen tiempo, en gestión de gobierno o en oposición, el continente está en movimiento y, más pronto que tarde, ya no serán simplemente ocho o diez países, seremos quince, seremos veinte, treinta países que celebraremos esta gran Internacional de pueblos revolucionarios y progresistas.

Crítica a los progresismos realmente existentes

Maristella Svampa¹

Mucho se ha escrito sobre el agotamiento o el fin del ciclo progresista y el actual giro conservador, uno de cuyos casos pioneros es ilustrado por la Argentina, donde en diciembre de 2015 triunfó la derecha neoempresarial, a lo que siguió luego la escandalosa destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff (2016). A esto hay que añadir la pérdida de la mayoría parlamentaria del chavismo en Venezuela, lo cual agudizó la crisis que atraviesa ese país.

Lejos estamos de aquellas caracterizaciones que al inicio del cambio de época (2000-2003) aludían de modo entusiasta a un “giro a la izquierda”. En 2017, la reflexión sobre los progresismos realmente existentes en América Latina nos inserta en otro escenario político, notoriamente más pesimista, que nos advierte sobre las derivas, límites y mutaciones de los proyectos progresistas. En lo que sigue, me propongo resumir algunas de estas limitaciones, las cuales pueden ser sintetizadas en la crítica al extractivismo, la crítica socioeconómica y la crítica política.

La crítica al extractivismo

Gracias al *boom* de los precios internacionales de las materias primas, los diferentes gobiernos se encontraron ante una coyuntura económica sumamente favorable, un nuevo ciclo basado en la exportación masiva de *commodities*, el cual supo combinar alta rentabilidad y ventajas económicas comparativas. Un nuevo desarrollismo, más pragmático y en clave extractivista, fue asomando como rasgo domi-

1. **Maristella Svampa** (Allen, 1961) es investigadora principal del Conicet, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Directora del programa “Modelos de desarrollo, actores, disputas y escenarios en la Argentina contemporánea”. Este artículo es una versión ajustada para este libro de un texto más extenso, publicado en M. Svampa, *Del cambio de época al fin de ciclo. Extractivismo, Gobiernos progresistas y Movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Edhasa, 2017, en prensa.

nante. Este período de auge económico, de reformulación del rol del Estado, estuvo inicialmente marcado por el no reconocimiento del extractivismo y de la conflictividad inherente al mismo. Gobiernos como el de Ecuador y Bolivia –considerados los más radicales en sus propuestas de cambio de modelos de desarrollo– fueron admitiendo una matriz explícitamente extractivista, sobre todo a causa de la virulencia que adquirieron ciertos conflictos territoriales y socioambientales. Más aún, a partir de 2010, todos los gobiernos progresistas sin excepción redoblaron la apuesta, a través de Planes Nacionales de Desarrollo que proponían abiertamente la multiplicación de proyectos extractivos y afianzaban la tendencia al monocultivo.

La sustentabilidad débil, en el límite de la visión ecoeficientista que apuesta al crecimiento económico indefinido y multiplica las formas de mercantilización de la naturaleza, es un rasgo que los gobiernos progresistas comparten con aquellos más conservadores y liberales. Otro es la estigmatización de la protesta ambiental y la deriva hacia una lectura conspirativa. Así, los distintos progresismos optaron por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la problemática socioambiental, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al “ecologismo infantil” (Ecuador), al accionar de ONG extranjeras (Brasil) o al “ambientalismo colonial” (Bolivia). Lo que resulta claro es que la expansión de la frontera de derechos (colectivos, territoriales, ambientales) encontró un límite en la expansión creciente de las fronteras de explotación del capital, en busca de bienes, tierras y territorios, y echó por tierra aquellas narrativas emancipatorias que habían levantado fuertes expectativas, especialmente en países como Bolivia y Ecuador.

Por otro lado, hacia 2013, el fin del superciclo de los *commodities* nos confronta a una nueva profundización del extractivismo en todos los países. La consolidación de la ecuación “más extractivismo/ menos democracia” es ilustrada por los contextos de criminalización de las luchas socioambientales, la obturación o, en su defecto, la manipulación de los dispositivos institucionales disponibles (consulta previa de poblaciones originarias, consulta pública) y la flexibilización de los ya escasos controles ambientales existentes.

La crítica socioeconómica

La construcción de la hegemonía progresista estuvo asociada al crecimiento de las economías y la reducción de la pobreza. Hacia 2012, un informe de la CEPAL daba cuenta de la caída global de la pobreza (de 44 a 31,4 por ciento) entre 2001 y 2011, así como del

descenso de la pobreza extrema (de 19,4 a 12,3 por ciento). Esto estuvo ligado no sólo al aumento de salarios, sino también a la expansión de una política de bonos o planes sociales (programas de transferencia condicionada).

En línea con la reducción de la pobreza, los primeros trabajos basados en el coeficiente de Gini daban cuenta de una reducción de la desigualdad, entre 2002 y 2010, que incluía diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos años, varios autores matizan tales afirmaciones. Así, el economista Pierre Salama sostiene que los datos disponibles sólo miden períodos cortos y no permiten tener una mirada de largo plazo². Por otro lado, la baja en la desigualdad de ingresos estuvo atada a un aumento de los salarios, pero no a una reforma del sistema tributario, el cual se ha vuelto muy complejo, opaco y, sobre todo, regresivo³.

Otros argumentos introducen la distinción entre desigualdad estructural y coyuntural. Mientras que en 1990 aumentaron la pobreza y la desigualdad en la región, en la primera década de 2000 ambas se redujeron en todo el continente, lo cual permite concluir que estamos frente a un comportamiento independiente de los signos ideológicos de los gobiernos, y hace suponer que se trata de una tendencia causada por factores económicos estructurales, ligados a la inserción de la región en el sistema mundial⁴.

Finalmente, estudios más recientes sostienen que la reducción de la pobreza registrada en América Latina no se tradujo en una disminución de las desigualdades. Así, investigaciones inspiradas en los estudios de Thomas Piketty, concentradas en los sectores muy ricos –que toman las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población–, mostrarían que el 1 por ciento en países como Argentina, Chile y Colombia se apropia entre el 25 y 30 por ciento de la riqueza (Citado en Kessler, 2016:26). Asimismo, investigaciones realizadas en Brasil, uno de los países más desiguales de la región, cuestionan que en ese país haya disminuido la desigualdad entre 2006 y 2012. Antes bien, los trabajos de IPEA muestran un aumento de la desigualdad, ya que en 2012 el 1 por ciento más rico acaparaba el 24,4 por ciento de la renta del país, siendo que en

2. Véase P. Salama (2012), *Les économies émergentes latino-américaines. Entre cigales et fourmis*, París, Armand Colin, p. 26. En algunos casos, como el de Argentina, desde 2007 no podían obtenerse más datos confiables, a raíz de la intervención del INDEC.

3. Salama (2015), “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, Nueva sociedad, Buenos Aires, julio-agosto de 2015; disponible en: <http://nuso.org>.

4. Pablo Ospina, citado en Machado Decio y Raúl Zibechi (2016), *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, p. 97.

2006 ese porcentaje era del 22,8 por ciento. Entre el 10 por ciento más rico, la renta apropiada pasó del 51,1 al 53,8 por ciento en el mismo período⁵. Así, aunque la pobreza extrema en Brasil se redujo y el consumo se expandió, las desigualdades persisten y aumentan ligeramente.

Last but not least, la relación entre extractivismo, acaparamiento de las tierras y desigualdad roza hoy niveles escandalosos. Según consta en un informe reciente de Oxfam⁶, América Latina no es sólo la región más desigual del mundo en cuanto a la distribución de ingresos, sino también respecto de la distribución de la tierra: cierto es que los países han expandido la superficie de cultivos, pero ello en favor de la gran propiedad y de los cultivos transgénicos.

La crítica política: populismos y transformismos

Más allá de las diferencias evidentes, son varios los gobiernos progresistas que ilustran configuraciones políticas más típicas, vinculadas con los populismos clásicos del siglo xx (1940-1950). Así, las inflexiones políticas que adoptarían los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, países con una notoria y persistente tradición populista, habilitaron el retorno del populismo.

Entiendo el populismo como un fenómeno político complejo y contradictorio que presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y elementos no democráticos⁷. Más allá del lenguaje de guerra, lo propio del populismo es la consolidación de un pacto de gobernanza, en el cual conviven –aun de manera contradictoria– la tendencia a la inclusión social con el pacto con el gran capital. Esta combinación controversial puede observarse en me-

5. Zibechi (2015), <http://www.urng-maiz.org.gt/2015/11/el-mito-del-progresismo-y-la-desigualdad-en-america-latina/> (tomado el 12/12/2016).

6. Oxfam (2016), “Desterrados, tierra, poder y desigualdad en América Latina”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/desterrados-full-es-29nov-web_0.pdf, consultado el 17/01/2017.

7. Dicha definición se aparta del tradicional uso peyorativo y descalificador del concepto, que predomina en el ámbito político-mediático, donde tiende a reducirse el populismo a una política macroeconómica (despilfarro y/o gasto social) y al autoritarismo político (déficit republicano), dejando de lado, interesadamente, otros componentes del mismo. Por otro lado, a diferencia de los populismos de derecha que se expanden en la actualidad en Europa y Estados Unidos, los populismos latinoamericanos del siglo xxi tendieron a la inclusión social, de la mano de un lenguaje nacionalista y de solidaridad regional, y no de la xenofobia o el racismo. Véase M. Svampa, *Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia, Populismo*, Buenos Aires, Edhasa, 2016

nor o mayor medida en todos los casos. Por ejemplo, más allá del proceso de nacionalizaciones, hay que resaltar las alianzas económicas de los progresismos con las grandes corporaciones transnacionales (agronegocios, industria, sectores extractivos), lo que aumentó el peso de estas en la economía nacional. Este es el caso de Ecuador, donde las empresas más importantes incrementaron sus ganancias respecto del período anterior (Machado y Zibechi, *op.cit*, p. 105), y de Argentina, que durante el kirchnerismo mostró una mayor concentración y extranjerización de la cúpula empresarial⁸.

Por otro lado, la forma histórica que asume el populismo en la región latinoamericana es la subordinación de los actores colectivos al líder. En esa línea, los populismos progresistas promovieron el modelo de la participación social controlada, a través de la dirección del líder y bajo el tutelaje estatal. Un ejemplo es suministrado por el gobierno de Evo Morales, cuyas políticas han tenido efectos democratizadores, visibles en la reducción de la pobreza, el aumento del consumo y el reparto de tierras. A esto hay que agregar cuestiones de más larga duración, como la lucha contra la discriminación étnica y el racismo. Sin embargo, hace tiempo que el populismo plebeyo boliviano perdió el “aura”, pues esa tensión insoslayable entre la faz democrática y la autoritaria fue mostrando su costado más amenazante, por la vía de la concentración del poder, la intolerancia a la disidencia y los hechos de corrupción. Esta lógica hegemónica es visible en el ataque recurrente a organizaciones indígenas no oficialistas y al cuestionamiento de organizaciones no gubernamentales y periodistas críticos del proceso de cambio.

En cuanto al transformismo, este presenta afinidades electivas con el populismo, pues promueve tanto la crítica al neoliberalismo como la negociación con los grandes sectores de poder. Sin embargo, sus orígenes son diferentes, pues conlleva un proceso de mutación y conversión del campo de las clases subalternas, o de un partido de clase, al campo del poder. En la actualidad, no son pocos los analistas que caracterizan en estos términos diferentes experiencias políticas asociadas al progresismo: la evolución del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, la Concertación chilena⁹ o el Frente Amplio en Uruguay.

8. Wainer, A., & Schorr, M. (2014), “Concentración y extranjerización del capital en la Argentina reciente: ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia?”, *Latin American Research Review*, 49(3), 103-125.

9. Gaudichaud, Franck (2014). “‘Progresismo transformista’, neoliberalismo maduro y resistencias sociales emergentes”, *Revista Osa!*, Clacso, publicado en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184776>.

La experiencia de mayor resonancia en el campo del transformismo ha sido la del PT, un partido con orígenes obreros y una gran proyección en las clases medias urbanas, que de la mano de la CUT y con el apoyo de numerosos movimientos sociales supo ser el modelo inspirador para otras izquierdas de la región. Un partido clasista nacido de las huelgas obreras en tiempos de dictadura militar, pero que progresivamente iría sufriendo una “mutación genética”¹⁰ para ir adaptándose al capitalismo de 1990. Para autores como André Singer, el concepto de revolución pasiva es clave en la explicación del lulismo, pues este se instituiría en una variante conservadora de la modernización, proponiendo un modelo de cambio social en el cual el Estado tiene un rol prominente en la incorporación de los más pobres, sin que esto suponga una ruptura con los sectores más reaccionarios del mundo rural como tampoco con el orden dominante de los intereses financieros¹¹.

El agotamiento del pacto lulista habría comenzado a experimentarse hacia 2013 con la crisis, lo cual marcaría el inicio de un nuevo ciclo de protestas. El fin de ciclo es conocido: la destitución de Dilma Rousseff, realizada por un Parlamento donde gran parte de los legisladores que votaron a favor de su desplazamiento están involucrados en graves casos de corrupción, ilustra el nivel de debilidad del PT, e incluso de movimientos sociales que lo acompañaron (MST, entre ellos), ante la apuesta de “radicalización conservadora”¹² realizada por el *establishment* brasileño con Michel Temer.

Final de ciclo

Los diferentes gobiernos progresistas aumentaron el gasto público social, lograron disminuir la pobreza a través de políticas sociales y mejoraron la situación de los sectores con menos ingresos, a partir de una política de aumento salarial y del consumo. Sin embargo, no tocaron los intereses de los sectores más poderosos: las desigualdades persistieron, al compás de la concentración económica y del acaparamiento de tierras. En esta línea, los progresis-

10. Modonesi, M. (2015). *Fin de la hegemonía progresista y giro regresivo en América Latina. Una contribución gramsciana al debate sobre el fin de ciclo*.

11. Citado en Fábio Cardoso, *André Singer, os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. São Paulo, Cia. das Letras, 2012. 276 pp., <http://www.scielo.br/pdf/ts/v24n2/v24n2a14.pdf>.

12. Schalvelzon (2016), “La llegada de Temer. Radicalización conservadora y fin de ciclo”, <https://www.aldhea.org/la-llegada-de-temer-radicalizacion-conservadora-y-fin-de-ciclo>, consultado el 28/12/2016.

mos realizaron pactos de gobernabilidad con el gran capital, más allá de las confrontaciones sectoriales que marcaron la agenda. Asimismo, sólo realizaron tímidas reformas del sistema tributario, cuando no inexistentes, aprovechando el contexto de captación de renta extraordinaria.

Por otro lado, el extractivismo actual no condujo a un salto de la matriz productiva sino a una mayor reprimarización de las economías, lo cual se vio agravado por el ingreso de China, potencia que de modo acelerado se fue imponiendo como socio desigual en la región latinoamericana. Esto echa por tierra la tesis de las ventajas comparativas que alentó el crecimiento económico de la región entre 2003 y 2013, al tiempo que inserta a América Latina en un nuevo ciclo de crisis económica, que ilustra la consolidación de un patrón primario-exportador dependiente. La creciente baja del precio de las materias primas genera un déficit de la balanza comercial que impulsa a los gobiernos a contraer mayor endeudamiento y a multiplicar los proyectos extractivos, por lo cual se suele entrar en una espiral perversa que conlleva también mayor criminalización de la protesta social.

Por último, en términos regionales, las promesas de creación de un “regionalismo autónomo desafiante” (la expresión es de J. Preciado Coronado) quedaron trucas. Pese a la abundante retórica latinoamericanista pergeñada en la época, los vínculos con China estuvieron lejos de concretarse desde un bloque común que apuntara a negociar mejores condiciones a nivel regional. Al contrario, se impulsó la competencia entre los países a través de acuerdos bilaterales con el gigante asiático. En consecuencia, las negociaciones bilaterales acentuaron los intercambios asimétricos y fueron instalando a los diferentes países en el marco de una nueva dependencia, cuyos contornos apenas están emergiendo.

Asimismo, el pasaje a una Unasur de baja intensidad, la crisis del Mercosur, el descalabro económico y social en Venezuela y el surgimiento de nuevos alineamientos regionales, como la Alianza del Pacífico (2011), dejan entrever una política más aperturista, en concordancia con el TTP (Tratado TransPacífico), una suerte de nueva versión del TLC (Tratado de Libre Comercio) que la región rechazara en bloque en 2005 al inicio del ciclo progresista. Además, los cambios de orden geopolítico, luego del triunfo de Trump, indican el ingreso a un escenario internacional de mayor incertidumbre, máxime si consideramos la salida de Estados Unidos del TTP y la acentuación de la puja interhegemónica con China.

Finalmente, el agotamiento y fin del ciclo progresista no es algo que pueda festejarse; antes bien nos conmina a pensar sobre la disociación evidente entre progresismos e izquierdas, pese a las expectativas políticas iniciales, y su identificación última con modelos de dominación más tradicional: populismos, transformismos, revoluciones pasivas. El nuevo período nos confronta con un nuevo escenario, cada vez más desprovisto de un lenguaje común. Por un lado, la emergencia de una “nueva derecha” es todavía la excepción, no la regla. Ahí donde hubo alternancia en el poder, se perciben continuidades y rupturas; las primeras, ligadas a la profundización de los extractivismos vigentes; las segundas, a la abierta conculcación de derechos sociales conquistados. Estas continuidades y rupturas se dan en un marco que coloca cada vez más en un tembladeral el respeto de libertades y derechos básicos de las poblaciones más vulnerables. Se abre así un nuevo escenario a nivel global y regional, más atomizado e imprevisible, que marca el final de ciclo del progresismo como “lingua franca”, aunque atravesado por múltiples protestas sociales, todo lo cual seguramente será el punto de partida para pensar el postprogresismo que se viene.

Balance y desafíos de la política económica en los gobiernos progresistas

Gustavo Codas¹

En un momento en que se combinan la crisis internacional de la globalización neoliberal y los impases de los gobiernos progresistas latinoamericanos, proponemos hacer un balance de las políticas económicas implementadas en nuestros países por esos gobiernos. En este artículo no pretendemos más que una primera aproximación crítica, apuntando a la urgencia de un debate amplio en la izquierda latinoamericana.

El escenario

En 2015-2016 se nos presentó lo que se anunciaba como una gran contraofensiva neoliberal en toda la región, con derrotas políticas del progresismo por la vía de los votos en Argentina (en la elección presidencial), Venezuela (en la parlamentaria) y Bolivia (en el referéndum sobre la reelección) y a través de un golpe de Estado en Brasil. La derecha anunciaba el fin del ciclo progresista.

Pero fue también en 2016 que las victorias del Brexit en Gran Bretaña y de Donald Trump en Estados Unidos pusieron de manifiesto que a la crisis económica del capitalismo desarrollado, iniciada en 2008 y aún sin solución, se le sumaba una crisis política de la globalización neoliberal. El fortalecimiento de las fuerzas de extrema derecha en países del capitalismo desarrollado anuncia un cambio fundamental: un cuestionamiento a los organismos y tratados multilaterales que desde 1980-1990 buscaban organizar la hegemonía de las grandes empresas multinacionales, con el pretexto de un cierto proteccionismo de sus mercados nacionales, al mismo tiempo que relanzan más liberalización financiera y reducciones de impuestos al capital y a los capita-

1. **Gustavo Codas** (Asunción, 1959) es economista. Fue asesor internacional de la presidencia de Paraguay (2009) y director general paraguayo de Itaipu Binacional (2010-11) durante el gobierno de Fernando Lugo. Es consultor de la Fundación Perseu Abramo del PT de Brasil.

listas. Es así que el discurso de su campaña y las primeras medidas ejecutivas de Trump señalan a las oligarquías latinoamericanas que ser el patio trasero de los Estados Unidos será cada vez más penoso económicamente e indigno políticamente. Pero los neoliberales latinoamericanos no tenían –ni tienen– otro proyecto sino el de las *relaciones carnales* con el imperialismo estadounidense. Así que les irá como al presidente mexicano Enrique Peña Nieto: mal en lo económico y arrastrándose vergonzosamente en lo político.

O sea, hay impases en el campo progresista, pero no hay un proyecto neoconservador con capacidad hegemónica en nuestra región como lo hubo entre finales de los años ochenta e inicios de la década siguiente. Estamos en una situación internacional y regional de profundas turbulencias y disputas. Lo que vamos a defender aquí es que necesitamos responder problemas pendientes en materia de programa y estrategia para poder avanzar en una nueva fase del ciclo progresista.

Las conquistas y los impases

Está razonablemente consolidado el balance de que el ciclo progresista latinoamericano ha redundado en beneficios sociales bastante importantes para amplias mayorías, en materia de reducción del hambre y la pobreza, de mejoras de la distribución del ingreso, de aumento del salario mínimo y de los salarios reales, de ampliar la igualdad de oportunidades en áreas clave como educación, salud y vivienda, aunque en grados variables según cada país. ¿De dónde, entonces, surgirían los impases y las razones de las derrotas políticas? Aquí vamos a tratar apenas algunos aspectos económicos, pero señalemos que hay problemas políticos, ideológicos y organizativos que también debemos vencer.

Desde la derecha, con resonancia en algunos sectores progresistas moderados, se afirma que el problema sería algo como un “populismo económico”. El mismo diagnóstico en respuesta al cual fue elaborado el Consenso de Washington a finales de la década de 1980. No hay novedades en sus recetas. Desde posiciones de izquierda, hay dos cuestionamientos principales. Una vertiente vinculada al ambientalismo afirma que el problema fue el “neo-extractivismo”, un “consenso de las *commodities*”, por el cual el progresismo se habría acostumbrado a financiar políticas sociales con la ampliación de actividades predatorias primarias de exportación. Su crisis fue la de la caída de los precios internacionales de los productos primarios. Y la respuesta de los gobiernos progresistas sólo habría empeorado las cosas ya que, a menor precio, se ha buscado aumentar esas activida-

des para obtener iguales niveles de ingresos para el país. Una segunda vertiente crítica viene del keynesianismo de izquierda. El problema habría sido que frente a las dificultades se respondió con políticas fiscales y monetarias restrictivas en vez de expansivas.

No es posible en el espacio que tenemos refutar tales argumentos. Tan sólo vamos a proponer un análisis desde una perspectiva diferente.

El problema crucial

El nudo central que todo proyecto progresista debe desatar en materia económica, en la periferia del capitalismo, lo definió Michal Kalecki en 1966 en los siguientes términos: “El problema crucial de los países subdesarrollados es el aumento considerable de la inversión, no para generar demanda efectiva –como es el caso en una economía desarrollada pero con desempleo– sino para acelerar la expansión de la capacidad productiva indispensable para el rápido crecimiento del ingreso nacional”. Por eso, el “gran debate” sobre los rumbos de la Rusia soviética en los años veinte giró en torno al problema de la “acumulación originaria socialista” para industrializar el país. Salvando las distancias, los progresismos, en cualquiera de sus variantes, tienen un desafío similar: ¿de dónde extraer excedentes para invertir en aumento de la producción y productividad?; al que hay que agregarle en nuestro caso otro más: ¿hay condiciones políticas en el juego democrático para realizarlo?

Con la desaparición de la URSS en 1991, al grueso de los países en desarrollo no les han quedado muchas alternativas. Hoy en día, todas ellas tienen que pasar por alguna relación con el mercado capitalista global, vía el comercio exterior, obteniendo financiamiento internacional, atrayendo inversiones extranjeras directas o para la adquisición de tecnologías.

Es así que una de las estrategias del progresismo apuntó a capturar excedentes que provenían del comercio exterior. Eso hicieron los países que reformaron los modelos de explotación de sus sectores extractivistas y primario exportadores para que el Estado nacional se quedara con una parte mayor de la renta. No siempre fue fácil. El gobierno argentino de Cristina Fernández enfrentó una tenaz oposición de la derecha política, la oligarquía agraria y a los que se unieron hasta algunos sectores populares cuando aumentó las retenciones sobre exportaciones agrícolas (por si faltaran signos de que son proyectos contrapuestos, en su primer día de gobierno Mauricio Macri revirtió esa medida).

Técnicamente hablando, habría también condiciones de extraer excedentes de la renta y el patrimonio de los sectores burgueses y oligár-

quicos. Pero cuando el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa anunció proyectos para aumentar impuestos a la herencia y la plusvalía, hubo fuertes movilizaciones que juntaron oligarquías, clases medias e incluso sectores populares y de izquierda contra esas medidas. Y aún hay que considerar que en caso de que el gobierno consiga aprobarlos, la oligarquía respondería con evasiones impositivas y de divisas, mientras las empresas “calificadoras de riesgo” cuestionan la gestión del gobierno y encarecen los préstamos para el país.

En algunas coyunturas específicas y en algunos países hubo condiciones de obtener excedentes importantes del sector externo, como cuando los precios de los productos extractivos y primarios estuvieron unos años realmente altos. Pero, contradictoriamente, puede que entonces ocurra el fenómeno que se ha denominado “subdesarrollo con abundancia de divisas”. Celso Furtado hizo ese diagnóstico, en 1974, en el contexto de la “Venezuela saudita” del *boom* de los precios del petróleo iniciado en 1973. Lo que muestran aquellos años, así como la primera década de este siglo, es que para aprovecharlos correctamente hay que tener una estrategia contra el mercado, porque las señales que emite son equívocas, conducen a Venezuela a producir apenas petróleo y comprar todo lo demás del resto del mundo. En el caso venezolano, el síntoma fue la sobrevaluación del bolívar frente al dólar. En casos como el Brasil, que no depende de un solo rubro primario exportador sino que cuenta con varios, se repitió algo similar, porque vino sumado a otro fenómeno. Los excesos de capitales en los mercados internacionales que buscaban rentabilización con inversiones de corto plazo en nuestros países, y que fueron aprovechados por los gobiernos para fortalecer la posición internacional del país aumentando reservas monetarias, también hicieron lo suyo para sobrevaluar la moneda nacional frente al dólar. El saldo final de todo eso fue un aumento del consumo de productos importados y presiones desindustrializadoras.

Otro aspecto que debe ser analizado es que si el neoliberalismo entró en crisis en varios países de América Latina a finales de 1990 e inicios de 2000, sin embargo dejó como herencia un apego al consumo globalizado orientado por el “modo de vida americano” en amplios estratos de la población. Eso hizo que las mejoras de los niveles de ingresos de la mayoría de la población repercutieran rápidamente en presiones sobre la balanza comercial, apenas ya no como antes por el oneroso consumo de lujo de las oligarquías sino también por el consumo de bienes importados para sectores medios y populares.

Un último tema que se debe plantear es que en la periferia del capitalismo globalizado neoliberal, los gobiernos progresistas buscan implantar una suerte de “Estado de bienestar” fuera de época (porque este está en retirada incluso en el capitalismo desarrollado debido a la “corrida al fondo” provocada por la globalización de los mercados, con la deslocalización de las empresas, el aprovechamiento de los bajos salarios y estándares laborales en regiones de Asia, África y América Latina). Es lo que se llamaría en la economía ortodoxa un problema por el lado “de la oferta”, que justifica que los empresarios dejen de invertir y provoquen la estagnación económica. La derecha tiene un plan para resolverlo: una agresiva agenda antilaboral, de desempleo y ataque a los salarios y beneficios sociales. ¡Es lo que Macri y Temer están haciendo!

¡Es la política!

“¡Es la economía, estúpido!”, habría sido la explicación para la victoria demócrata en la elección presidencial de 1992 en los Estados Unidos. Nuestra hipótesis es que los impases que los países con gobiernos progresistas enfrentan en materia económica se deben a... ¡la política!

1. Porque no es posible desarrollar un programa económico progresista manteniendo la actual inserción dependiente y periférica en el mercado capitalista mundial: hay que construir una integración regional que sea plataforma y retaguardia para otra inserción global. No es posible el “progresismo en un solo país” de la periferia del capitalismo. Y hacer de América del Sur –como fue propuesto en Unasur– la “cuarta fábrica mundial”, en disputa con Estados Unidos, Europa y Asia, depende, en primer lugar, de una voluntad política en la sociedad y los sectores gobernantes.

2. Porque no es posible aumentar el consumo de los sectores populares mayoritarios –necesario para retirar a la gente de la pobreza, la exclusión etc.– sin disminuir el consumo de las oligarquías y los sectores medios altos dentro de cada país. Sea por motivos económicos –reducir la presión sobre el saldo de la balanza comercial– o por motivos ambientales, ya que el consumo de lujo de los ricos tiene una huella ecológica exponencial en relación al tipo de consumo de los pobres. Eso significaría apuntar a un ecologismo alineado con la lucha política de clases en la sociedad (y no apenas a la contradicción entre extracción versus conservación).

3. Es más, esa debería ser una disputa también internacional, contra los países con niveles de alto consumo y en favor de los de bajo con-

sumo (medidos por sus respectivas huellas ecológicas por habitante). Los anuncios negacionistas del calentamiento global por parte de Trump aclaran los términos de esa disputa para el próximo período.

4. Podríamos reducir la presión del extractivismo y las actividades primarias de exportación si el Estado pudiera cobrar impuestos sustantivos sobre la riqueza y los ingresos de las oligarquías y los capitalistas nacionales y extranjeros que operan en nuestras economías. Con mejor distribución de la riqueza y del ingreso será necesario incluso menor crecimiento de la economía. Pero las tímidas experiencias vividas en varios gobiernos progresistas muestran la dificultad política de aprobar medidas con ese sentido.

Los gobiernos progresistas han demostrado que las amplias mayorías de nuestras sociedades pueden acceder a mejores niveles de vida. Para continuar avanzando por esa senda necesitamos ir más allá en cuestiones programáticas clave. La lucha de clases apenas ha comenzado.

Bibliografía citada

—Furtado, C. (2008). *Ensaio sobre a Venezuela: subdesenvolvimento com abundância de divisas*. Río de Janeiro: Contraponto.

—Kalecki, M. (1966). “A diferença entre os problemas económicos cruciais das economias capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas”. En: Kalecki, M. (1980). *Kalecki: Economia*. São Paulo: Atica.

—Leiras, M. (2016). “Economía y política en los gobiernos de izquierda”. En: VV.AA. (2016) *¿Por qué retrocede la izquierda?*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

—Prado, E. (2014). “O mau humor do ‘mercado’”. En: <https://eleuterioprado.files.wordpress.com/2014/04/o-mau-humor-do-mercado.pdf>.

—Preobrazhensky, E. (1926). “La utilidad del estudio teórico de la economía soviética”. En: VV. AA. (1974) *El debate soviético sobre la ley del valor*. Madrid: Alberto Corazón Ed. (Comunicación 25).

—Serrano, F. y R. Summa (2015). “Demanda agregada e a desaceleração do crescimento econômico brasileiro de 2011 a 2014”. En: <http://cepr.net/documents/publications/Brazil-2015-08-PORTUGUESE.pdf>

—Svampa, M. (2016). *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*. Buenos Aires: Edhasa.

“Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía”

Entrevista a João Pedro Stedile¹

¿Cuáles cree que fueron las limitaciones o errores decisivos de los gobiernos que, siendo parte del ciclo progresista de los últimos quince años en la región, fueron derrotados o están en situaciones críticas que pueden dificultar su continuidad?

No debemos aplicar a todos los gobiernos progresistas el mismo análisis. En cada país, las condiciones de la formación socioeconómica, la correlación de fuerzas, el comportamiento de la burguesía y los intereses del imperialismo estadounidense son distintos.

Aunque es verdad que hemos vivido en Latinoamérica un periodo común de ascenso por la vía electoral de gobiernos progresistas, en nuestra evaluación, desde los movimientos populares del ALBA, trabajamos con el análisis de que hubo una intensa lucha de clases entre tres propuestas que se enfrentaban al interior de nuestros países y a nivel continental.

De un lado, estuvieron las burguesías locales aliadas y subordinadas al capital estadounidense y a veces europeo, proponiendo la continuidad de modelos neoliberales, que fueron hegemónicos en México, Colombia, Honduras y Chile, por citar algunos.

Un segundo proyecto fue resultante de una composición de clases heterogéneas y resultó en la propuesta neodesarrollista, que proponía el crecimiento económico basado en la industria, pero en alianza con el agronegocio exportador, y repartía renta (no riquezas) con la clase trabajadora.

Y un tercer proyecto, que nosotros llamamos Proyecto ALBA, en homenaje al presidente Hugo Chávez, su inspirador, que se proponía ser un modelo antiimperialista, de reformas estructura-

1. **João Pedro Stedile** (Lagoa Vermelha, 1953) es un economista brasileño. Coordinador Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y uno de sus fundadores. Referente de la Articulación Continental ALBA Movimientos. [Entrevista realizada el 9 febrero de 2017].

les de la economía y de integración popular continental. Eso está presente en los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, más recientemente El Salvador, pero en cada país asumió una característica distinta.

No me atrevo a hacer un balance de los errores que hubo en cada uno de esos gobiernos de corte progresista o de los que se proponían construir el proyecto ALBA. En cada país hay distintas circunstancias de correlación de fuerzas y subjetivas de las fuerzas populares, por lo que es imposible encontrar un solo análisis que explique el error de todos. Pero como militantes del movimiento popular y de la izquierda brasileña, sí tenemos un balance de los errores cometidos por nuestros gobiernos que nos llevaron a la derrota político-electoral, primero con el golpe de abril y después con la derrota en las elecciones municipales de octubre de 2016.

En primer lugar, hay un contexto histórico en que se ganaron las elecciones presidenciales en 2002, en un escenario de todavía reflujo del movimiento de masas. Sólo ganamos porque había una crisis profunda del neoliberalismo, y porque parte de la burguesía se alió a nosotros.

En lo económico, hicimos una apuesta correcta por retomar el crecimiento de la industria, que permitió en ocho años financiar proyectos sociales y distribuir renta. Pero no nos atrevimos a hacer reformas estructurales en la economía, como sería cortar los pagos de interés por el gobierno para una deuda interna impagable e inexplicable, que financia a un capitalismo nacional rentista que hoy recibe casi el 40 por ciento de todos los recursos del presupuesto federal. No se hizo la reforma tributaria, para cobrar de los más ricos e insertar a los más pobres, que son hoy los que más pagan impuestos. No hicimos la reforma agraria, que es una medida económica para impulsar el mercado interno y liberar las fuerzas productivas del campesinado pobre.

En la política, no hicimos una reforma política, que tendría que ser por la vía constituyente, para impulsar un nuevo modelo democrático más participativo bajo control de las mayorías. Y no se propuso hacer cambios en el Poder Judicial. Tampoco tuvimos coraje de impulsar una reforma que pudiera democratizar la difusión y utilización de los medios de comunicación de masas.

En lo ideológico, aunque no es tarea de los gobiernos pero ellos podrían haber ayudado, deberíamos haber impulsado programas de formación política masiva para elevar el nivel de educación política y cultural de las masas. Así, durante los catorce años de gobiernos progresistas en Brasil, la burguesía siguió siendo hegemónica en la

economía, en el Congreso, en el Poder Judicial y en el control de los medios masivos. O sea, ellos mantuvieron el control del poder político, y una correlación de fuerzas bajo su control.

Todo eso no se hizo porque estuvimos presos de una visión estratégica de conciliación de clases, y no de lucha de clases. Y quien duerme con el enemigo, como decimos, iamanece embarazado de la derrota!

La relación de los movimientos populares con el Estado fue sometida a fuertes debates en las últimas décadas. ¿Qué balance arrojan las experiencias que se dieron con los gobiernos protagonistas de este ciclo progresista?

De nuevo no me atrevo a hacer un balance general del continente. Nosotros procuramos, como MST, actuar siempre bajo el principio de autonomía del movimiento en relación a los partidos de izquierda y mucho más en relación a los gobiernos y al Estado, que sigue siendo burgués. Pero, lastimosamente, esa no fue la práctica de todos los movimientos. Hemos percibido que, sobre todo el movimiento sindical, por su naturaleza corporativa y negociadora, muchas veces se ilusionó con las promesas de gobiernos amigos. El mismo Lula siempre ha dicho que el rol del movimiento popular es hacer presión de masas; si no, el gobierno no funciona. También metafóricamente Frei Betto, quien estuvo en el gobierno, aconsejaba: “El gobierno es como una olla de cocinar frijol, sólo funciona bajo presión (idel pueblo!)”

Vivimos un período en el que las masas, satisfechas con algunas mejoras, no se propusieron movilizar, y entonces nos faltó la presión de masas. En el campo lo intentamos, con millares de familias que hicieron tomas de tierras, pero aun eso fue insuficiente para romper la alianza del gobierno con el agronegocio y acelerar la reforma agraria.

También podemos hacer un balance crítico del hecho de que muchos dirigentes populares, ilusionados por el espacio institucional, se fueron de los movimientos y ocuparon cargos en el Parlamento y en el Gobierno. Eso quitó experiencia acumulada a los movimientos, que no tenían cuadros suficientes para conducir la lucha de clases.

Por último, también de parte de la mayoría de los movimientos populares se abandonó la formación política, clásica, de conocer los pensadores clásicos, que son los que nos ayudan a conocer la correlación de fuerzas, la historia de la lucha de clases, y a alimentar nuestra ideología clasista de la necesidad de un proyecto autónomo de la clase trabajadora.

En esa relación gobierno-Estado-movimientos populares, el error principal fue de los movimientos. El Estado siguió siendo burgués,

y los gobiernos atados a sus programas sociales y de redistribución de renta. Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía, nuestra independencia de clase, entender que sólo la lucha de masas altera la correlación de fuerzas en la sociedad y en la gestión del Estado, sea quien fuera que lo ocupe, y que sólo la lucha eleva el nivel de consciencia de las masas. Al interior de los movimientos, debemos dedicarnos a la formación de cuadros y de militantes, que son la columna vertebral de cualquier proceso organizativo de la clase.

Venezuela, y aún más Bolivia, se muestran más resistentes que lo que resultaron los gobiernos en Argentina o Brasil. Usted diferencia proyectos del ALBA de proyectos neodesarrollistas. ¿Esa diferencia explica que haya gran apoyo popular en los primeros casos y menos apoyo en los segundos?

Bueno, lo que ocurrió con los gobiernos de corte neodesarrollista como Argentina y Brasil fue muy distinto a lo que sucedió con Bolivia y Venezuela. En estos últimos países hay sólo una burguesía compradora, mercantil, al contrario de Argentina y Brasil que cuentan con burguesías industriales y latifundistas, más fuertes, más consolidadas como burguesías locales y en sus alianzas con la burguesía internacional de Estados Unidos y Europa. Así, en los casos de Bolivia y Venezuela la administración de un gobierno popular, aunque el Estado sea burgués, se facilita para controlar a ese tipo de burguesías que acumulan sólo en la esfera del comercio, de las importaciones y exportaciones.

Además, hay una tradición de luchas populares mayores. No es casual que en Venezuela y Bolivia los gobiernos ganaran las elecciones en un contexto de desmoralización de los partidos de la derecha, pero también en un ambiente de reasenso del movimiento de masas. Esos dos gobiernos tienen una identidad e interlocución permanente con las organizaciones de masas. El pueblo participa activamente de esos procesos, y a veces también los critica, como fue el caso del aumento del precio de la gasolina en Bolivia, entonces el pueblo fue a la calle y obligó al gobierno a cambiar la política. O como sucedió con procesos electorales, lo que se ha llamado voto castigo a los gobiernos. Las masas tienen consciencia del proyecto del que participa el gobierno, pero no aceptan comportamientos o errores como la corrupción, o cuando miembros de esos gobiernos se comportan sin priorizar las soluciones a los problemas del pueblo. En esos casos, el estímulo a la participación popular por parte de los gobiernos es lo que los salvó.

Si quisiéramos establecer una comparación: en Brasil, el gobierno de Dilma trató de defenderse solamente en los espacios institucionales. Nunca se preocupó por apoyar o incentivar la lucha de clases con la movilización en las calles. Los movimientos populares la defendimos solitos... y el resultado está a la vista. Sus pretendidos aliados institucionales la traicionaron y la derrotaron.

También cuenta para la correlación de fuerzas la existencia, en Venezuela y Bolivia, de fuerzas armadas –o sectores mayoritarios de ellas– que son nacionalistas, bolivarianos, antiimperialistas, y sus miembros originarios de extracción popular. En el caso de Brasil, tenemos a la Marina y la Aeronáutica conformadas únicamente por personas de las élites, que ideológicamente se comportan en función de sus intereses de clase. Pero tanto Venezuela como Bolivia enfrentan problemas estructurales de su economía, que dificultan avanzar en proyectos más avanzados, sean de liberación nacional, antiimperialistas o, aún más, si se pretenden poscapitalistas. No tienen un parque industrial desarrollado que permita producir a nivel nacional los bienes necesarios para atender las necesidades objetivas de la población, sea de alimentos, vestuario, muebles o utensilios en general.

Desarrollar un proceso de industrialización de una economía lleva décadas. Chávez tenía claro cómo utilizar la renta petrolera para hacer esa inflexión en la economía. Estaba intentando, pero ver los resultados lleva tiempo. Tuvo que empezar por la solución de los problemas sociales, luego avanzó en la construcción de una infraestructura básica social, y ahora en Venezuela están en la etapa de formar una nueva industria.

Lo mismo pasa en Bolivia, que es muy dependiente de las economías argentina y brasileña, de sus hidrocarburos.

De allí la importancia de la visión histórica de Chávez, quien planteó que, en Nuestra América, modos de producción más avanzados dependerían de una integración económica y popular entre todos los países de América del Sur y luego de toda Latinoamérica. De esa necesidad surge la idea de construir espacios comunes continentales en la economía, con liberación del territorio para el intercambio de materias primas, de petróleo, minería, energía eléctrica. Y la creación de una moneda común, que él propuso que fuera el Sucre. En el plano político, esa integración se realizaría a través del ALBA y la CELAC. La idea de Chávez era avanzar del Mercosur hacia un gran mercado común de la Unasur, para defenderse de los imperios estadounidense y europeo y de sus empresas transnacionales que disputan nuestros mercados.

Usted ha calificado a Francisco como un “Papa revolucionario”. ¿Cree que puede ocupar un lugar de liderazgo ético y político para quienes impulsan las luchas anticapitalistas en el mundo?

El Papa Francisco es un personaje revolucionario, por la postura revolucionaria que viene tomando a partir de los cambios que propone en la Iglesia Católica y su relación con la sociedad en general. Desde que asumió buscó a los movimientos populares, a partir de su confianza y vivencia con movimientos populares argentinos. Entonces montamos encuentros anuales de movimientos populares de todo el mundo con él.

En el último encuentro en Roma, en noviembre pasado, el Papa nos sorprendió a todos y todas cuando expresó conceptos radicales; dijo que los verdaderos terroristas en estos tiempos modernos son los estados, porque ellos promueven la venta de armas, promueven la discordia entre los pueblos, en disputa de los bienes de la naturaleza y de los mercados.

Pero no se debe comparar a Francisco con Chávez, Fidel, Maduro o Lula; él actúa en un espacio distinto, es un líder religioso. Pero es revolucionario porque desde un espacio religioso, eclesial, asumió radicalmente la causa del pueblo. Así que, en la correlación de fuerzas internacional, él es nuestro aliado y nos va ayudar a concientizar a la gente, sobre quiénes son los culpables por la desgracia de la humanidad, que son las empresas transnacionales, el capital financiero y sus gobiernos.

¿La crisis actual también es una oportunidad? ¿Hay motivos para ser optimista?

En los próximos años, fruto de la crisis profunda del sistema capitalista –en términos económicos, políticos, y de la propia naturaleza del Estado burgués–, es de esperarse que se genere en nuestro continente un proceso de reasenso del movimiento de masas. Y con él, surgirán nuevas formas de lucha, nuevos liderazgos, nuevos gobiernos, y una nueva etapa histórica para el pueblo latinoamericano.

Estoy muy optimista y confiado, porque más allá de nuestras debilidades, de la correlación de fuerzas adversa, tenemos un sistema económico moribundo, que no se va morir por sí solo, pero que ya no representa esperanza o posibilidad de progreso social como fue en el siglo pasado.

Aportes para el balance y perspectivas del movimiento popular en el período actual

Hernán Vargas¹

Durante la década de 1990 y comienzos de 2000, cuantiosos movimientos de masas tomaron las calles del continente americano en luchas campales contra los programas de ajuste neoliberal y contra todas las políticas de control político, social y militar asociadas.

La correlación de fuerzas cambió, abriendo un periodo de surgimiento de gobiernos progresistas, desmovilización de las fuerzas populares y reconfiguración de la estrategia imperialista del capital. A veinte años, es fundamental sintetizar balances y perspectivas desde y para las fuerzas populares que abrieron este ciclo de disputas entre proyectos de sociedad, que incluso posicionaron la posibilidad del socialismo nuestroamericano como horizonte civilizatorio.

La construcción de síntesis requiere salir de posicionamientos particulares, trascender lugares comunes y rescatar el estudio riguroso de tensiones. Se trata de abrir espacios y métodos para debatir sobre las contradicciones superando dos derivas nefastas: por un lado la negación de las contradicciones y la criminalización de la crítica que conlleva a la agudización de las mismas y al repudio de las mayorías frente a la evidencia creciente. La otra deriva es identificarlas como errores o impurezas sin desentrañar sus complejidades y así pensar en formas de abordaje sistémicas, para darles un justo trato a dichas contradicciones.

Sobre los límites de los gobiernos progresistas

Los progresismos de nuestra región, en general, llegaron a ser gobierno con base en, al menos, tres factores: mayoritario respaldo

1. **Hernán Vargas** (Caracas, 1979) es responsable por Venezuela del frente Articulación y Solidaridad de la Secretaría Operativa de la Plataforma Continental ALBA Movimientos, y militante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de su país, donde ha trabajado en los últimos años en procesos de formación, articulación y planificación con consejos comunales y comunas.

popular; alianza con sectores políticos y económicos nacionales tradicionales; representación de la esperanza de cambiar escenarios de corrupción, injusticia social y entrega de intereses nacionales al mercado transnacional.

Estos procesos procuraron dirimir la contradicción entre intereses antagónicos de clases con matrices de desarrollo que apuntan a la ampliación del consumo, socializando rentas entre mayores sectores de la población. Estas matrices suelen depender de los altos precios de los *commodities*², lo que supone fuertes contradicciones en tres planos: con la naturaleza, ya que implica una ampliación del extractivismo; con la soberanía nacional, porque fortalecen la dependencia de los países centrales; y con la liberación de las clases oprimidas, porque amplían su dependencia de las burguesías nacionales –comerciales, financieras e inmobiliarias– por vía del consumo. Hoy vemos en nuestra región una ofensiva múltiple y variable, pero con una estrategia común: disparar sobre los límites y contradicciones –negadas– de los procesos políticos puntales en la disputa.

Sobre la crisis de las formas de manejo de lo común³

Al inicio del ciclo estaban en marcha medidas de achicamiento de los estados nacionales, como parte de la agenda de ajustes neoliberales: privatización de servicios que administraban los estados; disminución de marcos regulatorios de las operaciones financieras y comerciales; congelación y reducción del gasto social; congelación de salarios, flexibilización laboral y disminución de pensiones; entrega de concesiones para explotación de minerales, hidrocarburos, bosques y acuíferos, por sólo mencionar algunos.

En varios países, ese proyecto neoliberal avanzó más, mientras que en otros la apuesta intenta ser contraria, conservando el manejo de lo común en el Estado, fortaleciéndolo y, tal vez, transformándolo. Toca estudiar los alcances de estas apuestas, pero si hacemos un juicio rápido, con base en niveles de desigualdad, injusticia, pérdida de soberanía y pobreza, claramente el manejo de lo común en manos del Estado ha servido mejor a los intereses de la población, ya que el mercado opera despojando comunes y extrayendo capital en función de los intereses de los países centrales y de las élites

2. Término para la mercantilización de materias primas energéticas, alimentarias y minerales. En lo subsiguiente hablaremos de comunes como noción alternativa.

3. Utilizaremos la noción de lo común para describir aquello que nos pertenece y es responsabilidad del pueblo como comunidad, trascendiendo la mirada de lo público como patrimonio administrado por el Estado.

dominantes. Sin embargo, el manejo de lo común por parte del Estado evidenció también fuertes límites: la imposibilidad de sostener una administración soberana en dependencia de matrices rentistas y extractivas; la incapacidad de satisfacer necesidades y derechos sin evidenciar la lucha de clases, ya que lo común siempre se administra en función de la acumulación de capital y no de garantizar la vida; y, por último, la seria dificultad para administrar el Estado sin reproducir la corrupción, el burocratismo y el clientelismo como elementos constitutivos del Estado burgués.

Nuestras formas existentes de manejo de lo común están en crisis. Creemos que corresponde estudiar y potenciar las formas de autogobierno, autogestión y control popular que se han generado en estos años y que pueden dar luces sobre la verdadera forma de manejo de lo común entre comunes, la vía comunal.

Sobre la crisis de la reproducción de la modernidad

La promesa de vivir mejor sigue siendo la guía para la política. Después de varios ensayos en el ejercicio de gobierno tenemos expresiones de: inclusión de mayorías, aumento de porcentajes de la población que salió de la pobreza, socialización del acceso a mayores niveles de renta que permiten nuevas condiciones de vida. Estos cambios podemos mirarlos como pago de la deuda social, incluso como justicia social; sin embargo, corresponde mencionar que en algunos casos la desigualdad ha crecido o que los niveles de desclasamiento son enormes, que la improductividad de los países aumenta, y que la garantía de subsidios alimentarios, a la educación, a la salud y a servicios públicos depende cada vez más de los altos precios de las materias primas; y que los patrones de consumo son insostenibles e insustentables.

Esto se debe a que nuestras nociones de bienestar, pobreza, deuda social, vivir mejor, están completamente permeadas por un pensamiento colonial, que no responde a los reales intereses de las clases oprimidas; por el contrario, responde al patrón de reproducción del orden civilizatorio ampliando y reforzando aspiraciones simbólicas de progreso, modos de vida cotidianos y modos de reproducción social en las mayorías.

Dos dilemas: si desde las alternativas de izquierda asumimos que el modelo civilizatorio que propone el capitalismo está en crisis y sin embargo desarrollamos proyectos nacionales que se sostienen sobre la reproducción metabólica del orden del capital, estamos siendo unos ingenuos que cargarán con la crisis del capital –como

de hecho ocurre el día de hoy–, mientras que, por otro lado, si decidimos romper con este orden hegemónico debemos tener presente que no se trata sólo de garantizar la satisfacción de necesidades de las mayorías, sino de desarrollar nuevas formas de producir y reproducir las condiciones materiales bajo formas de gestión que descansan en tales mayorías. Se trata de un metabolismo alternativo que se reproduzca cotidianamente en la vida de nuestros pueblos.

Sobre todas nuestras luchas como una sola

Las luchas estudiantiles, obreras, de desempleados, de comunidades campesinas e indígenas, marcaron el ciclo de movilización, siendo punto de partida de un sujeto territorial que expresa la diversidad de un pueblo, que en esta etapa del modo de acumulación del capital ya no es ni el sujeto de la fábrica ni el campesino prioritariamente, sino que son un poblador y una pobladora que viven en territorios populares. Así han venido emergiendo nuevos movimientos como el de mujeres, sexo-diversidad o movimientos urbanos, que frente al reflujo y el avance del proyecto del capital se han replegado y sostenido sus luchas desde varios discursos: la corporativización, que implica el desarrollo de agendas sectoriales con reivindicaciones en términos de marcos jurídicos, políticas públicas y acceso a recursos financieros –o no– para el desarrollo de sus proyectos o políticas; el localismo, que supone el repliegue al trabajo territorial con disputas similares a las sectoriales pero sobre la localidad; la institucionalización burocrática, que supone la disputa política –institucional– con herramientas en clave de partido o movimiento político para lograr disputar posiciones del Estado por vía electoral.

Hay un consenso discursivo sobre mirar todas las luchas del pueblo como una sola, pero en los últimos años no hemos avanzado en coordenadas comunes más allá de movilizaciones reivindicativas o escenarios coyunturales. Asistimos a los límites de las declaraciones que se dirimen entre antiimperialismo, anticapitalismo, antipatriarcado, antirracismo, anticolonialismo, etc.

En la práctica, hemos estado esquivando un debate de tres posiciones contrapuestas y que han estado compitiendo. La primera es la idea de que una posición marxista orienta la lucha de clases a la cual se subordinan todas las demás relaciones de opresión; la segunda, prioriza la confrontación con uno de los sistemas de dominación existentes –imperialismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo, racismo, depredación de la naturaleza, etc.– y condiciona

la posibilidad de superación del sistema hegemónico al éxito en esa confrontación; y la tercera, plantea la disputa en los territorios locales donde se expresa la dominación en la cotidianidad y en donde se pueden generar resistencias y alternativas.

Las tres ideas son correctas, pero incompletas. Afortunadamente, algunos movimientos populares vienen debatiendo al respecto. La compañera hondureña Berta Cáceres hablaba de la triple opresión⁴, apuntando a un sistema de dominación múltiple que se engrana en un modelo civilizatorio del capital. Tenemos el desafío de desarrollar un marco de referencia para nuestras luchas conjuntas, o estaremos condenados a la fragmentación, a la despolitización y a la dispersión.

Sobre las nuevas formas políticas y de instrumentación del poder

En esta etapa se posicionó la tesis de la revolución por vía electoral, y varias alianzas de izquierda –algunas incluso con sectores de centro o de derecha– llegaron al gobierno en varios países de la región. Esto significó una nueva correlación de fuerzas y un marco de alianzas regionales que se fueron ampliando con el paso del tiempo. Hubo un despliegue de formas políticas que van desde la configuración de un nuevo polo regional hasta gobiernos con proyectos nacional-populares de participación, así como fórmulas de tipo neodesarrollistas. Un dato relevante es que, además, se dieron en este período nuevas e incipientes formas políticas, de asambleas, de despliegue territorial, de gestión pública, de debates públicos, de rendición de cuentas, de planificación participativa y de autogobiernos locales, entre muchas otras.

Estos triunfos electorales tuvieron lugar en medio de un continente que no confiaba en los partidos políticos. Hoy nuevamente estamos frente a una crisis de los partidos que se expresa en tres niveles: el hastío de las mayorías sobre la política partidista y los personajes de la política formal; el agotamiento de las formas clientelares de la política; y la quiebra simbólica de las gestiones de izquierda.

En este contexto, una agenda de izquierda popular necesita mirar el tema del poder más allá de las formas tradicionales de instrumentarlo, y esto pasa por mirar que llegar al gobierno no es tomar el poder, y que la política va más allá de los espacios del Estado. La política tiene distintos ámbitos de actuación y, según las lecciones de este periodo, el territorio y los nuevos sectores de lucha son los

4. Berta Cáceres hablaba de la lucha contra el capitalismo, el machismo y el racismo.

principales. Se trata de comunalizar el poder⁵, construir formas de ejercicio del poder popular y mandar obedeciendo.

Sobre la política como base de una nueva hegemonía democrática

Miles de personas movilizadas en las calles posicionaron subjetividades críticas al modelo neoliberal de injusticias, saqueo, corrupción y entrega de lo público. El devenir político de este período estuvo marcado desde el Caracazo de 1989 hasta las guerras del Agua y del Gas en Bolivia, pero su principal signo no fue el de grupos organizados movilizadas en la calle sino el de las mentes y corazones de miles no organizados pero sí politizados, involucrados en las definiciones sobre el destino de su país y la región; movidos por una esperanza, se construyó un mito de una posibilidad alternativa en nuestros pueblos.

Hoy esas subjetividades no se expresan de manera activa, estamos frente a un descenso de la movilización de masas y a una despolitización de las mayorías. Al respecto nos interesa problematizar, ya que son muchas las posibles lecturas y nos gustaría plantear dos interrogantes: ¿han desaparecido las razones de movilización? ¿Cambiaron de opinión las mayorías que cuestionaban el libre mercado, la corrupción y la injusticia? Nuestra respuesta debe ser práctica, tenemos el reto de reconectarnos con el sentir de las mayorías, con los problemas cotidianos de la gente y cómo se expresa la opresión en nuestros modos de vida, lo cual pasa además por un ejercicio de visitar nuestras categorías de análisis, nuestras formas de lucha y nuestras maneras de hacer política. Tenemos la herencia de una izquierda que durante muchos años era un reducto cerrado que no le hablaba a nadie; el legado de este periodo es la política de las mayorías como base para la construcción de una nueva hegemonía, una verdadera democracia sobre la base de esas subjetividades que aún están allí y que requieren rearmar la esperanza, el mito de un proyecto de liberación de las mayorías.

Sobre la crisis y la construcción de la alternativa

Este período también ha estado marcado por la proliferación de experiencias territoriales que apuntan a la reproducción de la vida desde nuevas formas de gestión y propiedad: para la planificación y

5. La noción de comunalizar el poder es común en el recorrido de la Revolución Bolivariana en distintos contextos; vale la pena referir al trabajo que viene haciendo el colectivo Códigos Libres: <http://www.comunalizarelpoder.com.ve>

la producción, para la organización del trabajo, para la toma de decisiones, para el relacionamiento entre familias y la articulación entre organizaciones. Haciendo un breve inventario de formas colectivas que suplantaron el “tejido muerto” que la agenda neoliberal dejó en localidades de todo nuestro continente, tenemos: comedores populares; cooperativas de desocupados asumiendo empresas en quiebra; producción autogestionaria de viviendas, recolección y reciclaje; ferias y mercados populares sin intermediarios, con producción artesanal, orgánica; acampamientos rurales y ocupaciones urbanas de tierras, predios improductivos recuperados; comunidades y guardias indígenas; gobiernos territoriales locales, caracoles, juntas de gobierno, comunas. Sólo mencionamos algunas expresiones –que no estaban en 1980–, gérmenes de nuevas relaciones no reproductivas del orden hegemónico del capital que, sin ser puras, aportan claves para la construcción de alternativas al modelo civilizatorio en crisis.

A pesar de su importancia, estas alternativas han sido secundarias en las agendas políticas de izquierda; relegadas al terreno de lo reivindicativo, al margen de las políticas estratégicas, a veces son perseguidas y criminalizadas, cuando no son cooptadas y etiquetadas como “buenas prácticas” que no amenazan el modo de acumulación de capital o son parte de las agendas de cooperación internacional y de organismos multilaterales. Consideramos entonces una tarea estratégica construir articulaciones que apunten a nuclear estas experiencias en la perspectiva de construir agendas comunes de lucha, pero además para desarrollar las bases de un proyecto alternativo de los pueblos, el del ALBA, el del socialismo.



DABUARAB -17

Diego Abu Arab (Buenos Aires, 1980) es artista plástico e ilustrador, colaborador de publicaciones populares y sindicales, delegado de base en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Lo que no cabe en las urnas: algunas reflexiones en torno a la iniciativa del EZLN y el CNI

Lucia Linsalata¹

*“Porque sabemos que el camino que elijan para todos nosotros,
pueblos, tribus, naciones y barrios originarios,
nacerá de la rabia y del dolor.
Nacerá de su corazón colectivo.
No de un individuo, no de una persona.
Del colectivo nacerá, como de por sí nacemos
quienes somos lo que somos.”*

(Subcomandante Insurgente Moisés,
11 de noviembre de 2016)

El 1º de enero de 2017, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hicieron público el resultado del proceso de consulta que se llevó a cabo durante tres meses en centenas de asambleas comunales, ejidales, barriales, municipales, intermunicipales, regionales y de colectivos que confluyen en el CNI². Desde el Caracol de Oventik, territorio rebelde zapatista, la voz firme y digna de dos mujeres indígenas delegadas del CNI anunció a México y al mundo: “ACORDAMOS nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar al país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI (...) que será candidata independiente en las elecciones del año 2018”.

1. **Lucia Linsalata** (Tricarico, Italia, 1979). Reside en México desde 2007, donde participa en diversos proyectos autogestivos y trabaja como profesora e investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Es autora del libro *Cuando manda la asamblea* (SOCEE/Autodeterminación, Bolivia, 2015).

2. El 24 de octubre de 2016, el v Congreso Nacional Indígena determinó iniciar una consulta en cada uno de los pueblos que confluyen en la organización para poner a discusión la propuesta avanzada inicialmente por el EZLN de “nombrar un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país” (CNI y EZLN, 14 de octubre de 2016).

“ACORDAMOS”, dijeron... y lo escribieron con letra mayúscula en su comunicado. El nosotros, el nosotras que se fue tejiendo en torno a este acuerdo, a lo largo de tres meses, a través de la palabra compartida en una multiplicidad de asambleas, es expresión de la articulación de 43 pueblos indígenas mexicanos y de múltiples procesos locales y regionales de construcción de autonomía por afuera o muy al margen del Estado. Es expresión de un proceso de organización que involucra a cientos de luchas que a lo largo y ancho del país están defendiendo sus territorios de los megaproyectos de muerte del gran capital; a decenas de municipios que están organizando formas autónomas de defensa comunitaria para poner un límite a la violencia estatal, paraestatal y criminal; a decenas de pueblos que luchan por no desaparecer; a cientos de comunidades que no han renunciado a sus formas de autogobierno y a cultivar sus milpas³, sus idiomas y sus saberes locales; a una multiplicidad de luchas que siguen reclamando la libertad de sus presos políticos; a cientos de familias que claman por la aparición con vida de sus desaparecidos y desaparecidas; y a miles de personas en todo el país que no han dejado de gritar en voz alta el nombre de sus muertos y de sus muertas.

Por más que a muchos les cueste reconocerlo, estamos frente a uno de los procesos políticos organizativos explícitamente anticapitalistas, de articulación nacional, producido desde abajo –sin ninguna mediación partidaria u oenegera–, que se ha dado en México por lo menos desde el inicio de la guerra. Sí, desde el inicio de la guerra, porque por más que a muchos les cueste reconocerlo, en México estamos en guerra: una guerra que mata un promedio de siete mujeres al día y que, desde el inicio de 2007, ha producido alrededor de 200.000 muertos y 28.000 desaparecidos.

¿Qué está en juego en esta iniciativa política?

A estas alturas, nos queda claro que no está en juego la toma del poder estatal, y tampoco de la presidencia de República. No está en juego la posibilidad de una frágil reforma del aparato institucional o de un falso reconocimiento de las prácticas de gobierno de los pueblos indígenas de México. Tampoco está en juego la creación de un nuevo partido político anticapitalista, o revolucionario, o como se diga. “No se confundan” han dicho reiteradamente en los últimos comunicados tanto los delegados del CNI como los voceros del EZLN. “No es nuestra intención competir en nada con los partidos políticos y con toda la

3. Sistema agrícola tradicional mesoamericano conformado por un policultivo (habitualmente maíz, frijol, calabaza, chiles y tomates).

clase política que aún nos debe mucho: cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despojo, cada represión y cada desprecio. No nos confundan, no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía” (CNI y EZLN, 1º de enero 2017).

Entonces ¿qué es lo que sí está en juego? ¿Qué está en juego en esta sorpresiva iniciativa del CNI y el EZLN? Me atrevo a lanzar algunas pistas de reflexión, fruto de varios diálogos colectivos tejidos a partir de la lectura de los comunicados que el CNI y el EZLN han emitido desde octubre de 2016. De ninguna manera se quiere con este gesto suplantar la voz de ambas organizaciones. Hace ya mucho tiempo que los pueblos de México hablan fuerte y claro con su propia voz a través de los medios que ellos han elegido para hacerse escuchar; y que su voz resuena en y sacude a muchas otras geografías de México y del mundo. En nuestra geografía, los últimos comunicados resonaron fuerte, detonando, entre otros procesos e ideas, las siguientes reflexiones.

Percibimos que una de las apuestas más importantes y vitales de esta iniciativa política es la de construir una fuerza social nacional amplia, enraizada en múltiples procesos locales de deliberación y organización, que sea capaz de poner un límite al desborde de la violencia en todo el país y detener la guerra de aniquilación que estamos viviendo. La violencia desbordada se ha transformado, en todo México, en un rasgo cotidiano y esencial de la expansión de las relaciones capitalistas sobre los territorios y los cuerpos. Violencia criminal, violencia de Estado, desapariciones, femicidios, tortura contra los cuerpos, fosas comunes, impunidad, represión y detenciones arbitrarias son algunos de los rostros más visibles y, a la vez, intolerables que ha asumido la hidra capitalista en el México contemporáneo. Son prueba evidente de ello: el poder desmedido que han adquirido los cárteles (hoy verdaderas empresas transnacionales) y la fragmentación del territorio mexicano en señoríos controlados por caciques locales y bandas armadas ligadas al narcotráfico; el surgimiento de cuerpos de seguridad al servicio de empresas privadas que actúan al margen y por encima de la ley; la militarización del territorio nacional y la transformación del Ejército y la Marina en una suerte de policía nacional encargada de imponer un supuesto orden público; la vergonzosa complicidad con el crimen organizado de todos los niveles institucionales y de

las fuerzas públicas; y la funesta maquinaria de impunidades a través de la cual el Estado niega una y otra vez cualquier posibilidad de acceso a una justicia real (Linsalata, 2016).

Quienes pagan el precio de semejante desprecio a cuesta de sus cuerpos, sus almas, sus territorios y sus seres más queridos son en gran medida los pueblos indígenas que luchan contra el despojo; son las y los abajos de pieles morenas, muchos de ellos mestizos, pero igualmente vulnerables y profundamente despreciados por el poder racista que desde arriba se ejerce. Son quienes, de múltiples maneras y en distintas geografías, luchan para “hacer frente cada día a la guerra que no ha parado y que no ha podido acabar con nosotros” (CNI y EZLN, 1º de enero 2017). Pero también son los que aún no saben cómo luchar; los que gritan en silencio; los que, sin saber, resisten.

A todos ellos, a todas ellas, y también a todos aquellos y aquellas que desde su panza empatizan con la rabia y el dolor de ese México despreciado, se dirige el llamado del CNI y el EZLN. Creo que lo expresan claramente cuando dicen: “Llamamos a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituírnos ya no sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construínos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo” (CNI y EZLN, 1º de enero 2017).

Ahora bien, si asumimos que la guerra es el contexto desde el cual, en el cual y contra el cual se despliega esta iniciativa política y que esta misma iniciativa se dirige a todos aquellos que padecen la guerra, ¿por qué presentar una candidata indígena independiente a las elecciones presidenciales de 2018, si la presidencia de la República no es el objetivo central de esta lucha?

A partir de lo que hemos leído en los comunicados, entendemos que ni la silla presidencial, ni la campaña electoral, ni las urnas son en sí el objetivo. La campaña es una gran pantalla y las boletas una potencial fisura desde la cual podría llegar a desbordar todo el dolor y la rabia que nunca llegarían a caber en las urnas (Subcomandante Insurgente Galeano, 17 de noviembre de 2016); todo el memorial de

agravios que nunca podrían llegar a ser resarcidos con una victoria electoral o una silla presidencial. Las elecciones son finalmente una oportunidad para nombrar, compartir y politizar el dolor; para sembrar nuevas prácticas de organización y, a la vez, articular múltiples experiencias de lucha en torno a un objetivo común: parar la guerra, vencer el miedo, relanzar la dignidad, fortalecer la autonomía y el autogobierno.

A diferencia de otras iniciativas populares emergidas en América Latina en los últimos quince años, que han intentado plantear una transformación de la sociedad y del Estado por la vía electoral, a través de un ingreso estratégico de las fuerzas populares en distintos niveles de las instituciones estatales, el CNI y el EZLN no están apostando a ningún tipo de transformación de la sociedad desde el Estado; no se están proponiendo competir por ninguna alcaldía, ninguna silla parlamentaria o puesto de gobernador. Esta iniciativa tiene un propósito mucho más atrevido y ambicioso: el de desconocer y derribar al poder de arriba y a su supuesta democracia, para reconocer, reafirmar y expandir el poder y la democracia que los pueblos construyen cada día a través de sus múltiples formas de autogobierno local y autonomía de facto.

La decisión de conformar un Concejo de Gobierno Indígena de base comunitaria que sostenga una candidata indígena a la presidencia de México no expresa una repentina fe del mundo zapatista en el sistema electoral y en el Estado, sino todo lo contrario: nace y se alimenta de la fuerte determinación de los pueblos que confluyen en el CNI a relanzar sus propias prácticas de gobierno y a reafirmar los principios del autogobierno y la autonomía como únicos caminos posibles para detener la guerra y refundar pacíficamente al país de las ruinas del capitalismo.

Bibliografía citada

- CNI y EZLN, “Que retiemble en sus centros la tierra”, 14 de octubre de 2016.
- CNI y EZLN, “¡Y retembló! Informe desde el epicentro”, 1° de enero de 2017.
- Linsalata, Lucía: “Leer las luchas en clave comunitario-popular. Reflexiones desde el México que no claudica” en *Lo comunitario-popular en México. Desafíos, tensiones y posibilidades*. ICSyH-BUAP, México 2016.
- Subcomandante Insurgente Galeano, “Una historia para tratar de entender”, 17 de noviembre de 2017.
- Subcomandante Insurgente Moisés, “No es decisión de una persona”, 11 de noviembre de 2016.

Los “progresismos” en América Latina: parte de un ciclo largo de luchas que excede a los gobiernos (y a los países)

Sebastián Quiroga¹

Mucho se ha hablado sobre el supuesto “fin de ciclo progresista”, en relación a las dificultades que atraviesan distintos gobiernos que se propusieron políticas posneoliberales en la última década y media en América Latina. Sin embargo, más allá de los gobiernos, es posible identificar un ciclo largo de luchas que abarca los últimos treinta años, que constituyó un nuevo ensayo por construir caminos de emancipación y justicia, y del cual estos gobiernos fueron sólo una de sus formas de expresión. Considerando ese análisis, los movimientos populares nos encontramos con desafíos similares en toda Nuestra América, más allá de haber contado con gobiernos afines o de haber enfrentado políticas neoliberales.

El ciclo largo de luchas antineoliberales

La emergencia de los gobiernos alternativos en América Latina no es un fenómeno aislado o azaroso. Aunque vienen cumpliendo un rol central en la generación de dinámicas políticas transformadoras, es necesario analizar sus posibilidades y limitaciones en los contextos históricos que los vieron surgir.

Este largo ciclo de luchas se origina a mediados de 1990 a partir de las resistencias al modelo neoliberal (ya había sucedido el Caracazo en 1989, pero es a mediados / fines de 1990 cuando coinciden la irrupción pública de los zapatistas en México, las luchas masivas de los Sin Tierra de Brasil y el surgimiento de los piqueteros en Argentina, entre otras formas notorias de resistencia). Algunos de esos procesos, en su desarrollo, van adquiriendo las características

1. **Sebastián Quiroga** (Bogotá, 1990) es politólogo, vocero nacional del Congreso de los Pueblos, integrante de la mesa de interlocución de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular con el Gobierno Nacional.

de un difuso proyecto continental, que con los años (centralmente a partir del impulso de Hugo Chávez) se expresará en espacios de articulación como el ALBA, UNASUR o la CELAC, y de coordinación de organizaciones populares como la Articulación Continental ALBA Movimientos.

Estos gobiernos alternativos, en su diversidad, constituyeron la expresión de mayor contundencia de ese largo ciclo, el instrumento que mejor logró perfilar proyectos de nueva nación e incidir en la realidad de manera más profunda. Sin embargo, la potente resistencia de los movimientos sociales al neoliberalismo (previa y en experiencias aún por fuera de los países donde sí se dieron estos gobiernos) fue lo que transformó las condiciones políticas, permitiendo nuevas configuraciones de fuerza sobre las cuales se apoyaron estas nuevas expresiones gubernamentales.

Esto no quiere decir que en todos los casos haya una relación directa de causa-efecto entre las luchas y la llegada de los gobiernos alternativos, ni tampoco que quienes hayan sido protagonistas de las luchas hayan asumido el gobierno. Aun por fuera de las resistencias que sí derivaron en gobiernos posneoliberales, otros ejercicios y actores importantes en la movilización continental no tuvieron ese correlato, como las movilizaciones estudiantiles, campesinas o de pueblos indígenas principalmente en México, Colombia o Chile.

Los movimientos populares y la perspectiva “progresista” en los países sin gobiernos progresistas

En Colombia, la ciudad capital tuvo su gobierno progresista con las gestiones del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de Gustavo Petro, exguerrillero del M19, al frente de la alcaldía de Bogotá (al igual que sucede ahora con la intendencia de Valparaíso en Chile, donde a nivel local se da una experiencia alternativa de gestión mientras el gobierno central se mantiene en manos de fuerzas conservadoras).

Esas gestiones nos han permitido ver que la relación entre movimientos sociales y gobiernos progresistas arrojan lecciones que es necesario racionalizar. A pesar de las múltiples dificultades en los ejercicios de gobierno y los problemas que se presentaron, estas experiencias continentales o locales ratifican la importancia y la necesidad –pero a la vez la insuficiencia– de ser gobierno para los sectores populares.

Ser gobierno es fundamental para transformar, pero no es suficiente. Es fundamental porque el gobierno y la administración del Estado permiten acceder a factores de poder que pueden poten-

ciar la capacidad de transformación de las relaciones económicas y sociales; son la posibilidad de destinar recursos para políticas y programas, la posibilidad de generar la agenda política, entre otras potencialidades.

Sin embargo, es insuficiente porque el Estado está inmerso y desbordado por las relaciones económicas, sociales y políticas dispuestas por el sistema capitalista que lo define. Construir un gobierno alternativo implica luchar, por un lado, contra las leyes y disposiciones institucionales que reglamentan y norman su funcionamiento, en la búsqueda de ir construyendo nuevas institucionalidades. Los grandes poderes económicos y sus empresas de comunicación constituyen otra de las adversidades a las cuales se deben enfrentar estos gobiernos alternativos, como pudo verse en Venezuela, Argentina o Ecuador, pero también durante las gestiones progresistas de Bogotá, donde la avalancha de descrédito y desprestigio propalada por los medios de comunicación hegemónicos logró hacer un notorio daño e incidir en resultados electorales adversos que impidieron su continuidad.

Esa disputa contra la vieja institucionalidad y por la construcción de una nueva, así como la lucha contra los grandes poderes económicos, necesita de un papel activo, dinámico y propositivo de los movimientos populares y la sociedad organizada. La construcción de contrahegemonía no puede reducirse al ejercicio de la institucionalidad, sino que necesita complementarse con la organización, la movilización y la construcción de propuestas de la sociedad en su conjunto. La continuidad de los gobiernos alternativos allí donde hay un movimiento social y popular respaldándolo ratifica la necesidad de un diálogo crítico y autónomo, pero constructivo, entre movimientos y partidos/ gobiernos.

Las gestiones progresistas de Bogotá nos demostraron que la corrupción se constituye como un fenómeno extendido en la institucionalidad política estatal, que ha permeado también a los gobiernos alternativos, y frente a los cuales los movimientos sociales deben jugar un papel de veeduría que permita fortalecer la búsqueda de una nueva institucionalidad, y purgarla de los costos éticos, políticos y económicos que significa la corrupción.

Las contradicciones posibles entre algunas políticas de gobiernos alternativos y los intereses expresados por los movimientos sociales se convierten en otro nudo a desenredar. El caso del extractivismo, en países con tanta riqueza en sus bienes comunes como es el caso de América Latina, tal vez haya sido el ejemplo más evidente

de esta tensión. La profundización de un modelo económico basado en la explotación de la tierra, y las movilizaciones de sectores populares en contra de estos modelos y sus políticas, indica un punto central donde se evidencian las discusiones del modelo económico en relación a un proyecto alternativo de nación.

A la vez, la dinámica de los movimientos sociales tiene sus particularidades en cada país. La dispersión y la fragmentación, sin embargo, se constituyen en la principal dificultad, tanto en las experiencias nacionales donde se dieron gobiernos progresistas como en países donde debimos continuar en resistencia a una sostenida ofensiva neoliberal. Tal vez aún nos esté faltando una lectura más profunda de los gobiernos posneoliberales y sus enseñanzas, que nos permita estar mejor prevenidos sobre la gran limitación que implica un intento de gobierno (nacional o local) a contravía de los intereses hegemónicos, pero a la vez atravesado por divisiones en el campo popular y sin un fuerte proceso de movilización que lo sostenga ante los embates de las élites conservadoras de siempre.

Colombia: solución política al conflicto armado, la influencia del ciclo progresista

Desde hace algunos años, la búsqueda de una salida negociada al conflicto social y armado en Colombia ocupa un lugar central en las agendas populares, y también en ese plano la prioridad de la participación social cobra una importancia vital, ante una reacción conservadora que boicotea cualquier paso de avance a favor del pueblo. Por caso, el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana (octubre de 2016) sufrió un revés alarmante: no logró involucrar a las mayorías populares. La exclusión de las organizaciones y comunidades, y la falta de trabajo de base más sólido y extendido de parte de la izquierda, sólo producen una ciudadanía escéptica que se aleja en millones de las convocatorias y llamados desde la política, aun los que proponen consolidar un proceso de paz.

Aun así, para la izquierda y el movimiento popular, una motivación importante para la insistencia en la solución política tras décadas de conflicto armado es el ejemplo que propusieron los gobiernos alternativos de América Latina. La posibilidad certera de llevar a cabo un gobierno transformador aún en los límites de la institucionalidad dominante fue leída por la insurgencia colombiana como un aliento para explorar, una vez más y a pesar de genocidios políticos padecidos décadas atrás, la vía legal para el ejercicio político. Sin embargo, los gobiernos progresistas hoy parecen estar dando un paso atrás,

especialmente donde la participación popular se aquietó; por eso es imposible pensar que el proceso de solución política al conflicto pueda arrojar una posibilidad de transición en Colombia si no cuenta con la participación activa y cada vez más protagónica de la sociedad.

Ampliando las miradas más allá de los gobiernos, contemplando realidades como las que anteceden, las clasificaciones que impone la lectura regional en función del tipo de gobiernos se diluye: las lecciones que deben tomar nota los movimientos populares, en gran medida, son similares para los que tuvieron la oportunidad de contar con gobiernos aliados o favorables y los que tuvimos que reforzar la resistencia ante la sostenida ofensiva neoliberal. En Colombia, el contexto actual nos permite reafirmar una conclusión que también se impone en el balance de los movimientos que contaron con gobiernos progresistas: un proceso protagónico y decisorio de participación popular, especialmente de los sectores excluidos y empobrecidos del país, es la base para cualquier proceso de cambio. Cuando se trata de resistir y también cuando se trate de gobernar.



Alejandra Andreone (Buenos Aires, 1980) es profesora nacional de Artes Visuales (IUNA), docente del Bachillerato Popular Roca Negra y en escuela pública. Milita en el Frente Popular Darío Santillán. Trabaja en la Editorial El Colectivo.

Cuerpos y territorios en el Abya Yala

Claudia Korol¹

Pensar este momento histórico desde la perspectiva de las mujeres, de los sectores LGTTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), de los pueblos originarios, de quienes sufrimos las consecuencias del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo –agravadas cuando arrecian los fundamentalismos conservadores religiosos, culturales y políticos– nos exige ser críticos con algunas de las ideas que prevalecen en las izquierdas, marcadas en la década anterior por el exitismo “progresista”, ahora devenido en depresión.

El continente del “realismo mágico” no puede ser interpretado con las “leyes” del pragmatismo positivista, dictadas por el fetichismo del mercado capitalista transnacional. Es necesario cuestionar las nociones de “desarrollo”, “progreso”, y la ilimitada confianza en procesos gradualistas de acumulación de fuerzas, basados en el acceso a espacios institucionales y a modos liberales de representación política, legitimados como “democracias” por estas izquierdas. Es necesario discutir los juicios y prejuicios que abigarran nuestras subjetividades colonizadas, y repensar las resistencias populares y los proyectos alternativos en movimiento, en su historicidad, en su integralidad, aunque lo hagamos desde el lugar en el mundo en el que nos encontramos situadas y situados.

Esto significa problematizar los modos de análisis considerados “universales”, que se pretenden “complementar” con miradas “sectoriales”, como si la mitad de la población (las mujeres) fuéramos un sector, o si los pueblos originarios devastados en más de cinco siglos de colonialismo fueran una fracción del pueblo en vías de extinción. Como si el “mirar y pensar universal”, el pensamiento “estratégico”, quedaran asociados a la perspectiva hegemónica masculina y blanca.

Desafiar las miradas superestructurales

El desafío es dialogar desde nuestros movimientos, desde nuestras experiencias como mujeres, como disidentes del heteropatriarcado,

1. **Claudia Korol** (Buenos Aires, 1958) es educadora popular feminista, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebelión y de la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala. Autora de los libros *Rebelión. Reportaje a la juventud chilena*; *Feminismo y marxismo*; *Diálogo con Gladys Marín* y *Caleidoscopio de rebelión*, entre otros.

como izquierdas plebeyas, y recuperar el pensamiento crítico, agobiado por las exigencias de “buen comportamiento” dedicadas a acallar las voces que denuncian inconsistencias de los proyectos populares e incluso las reprimen. Quisiera polemizar, entonces, con quienes analizan el “fin de ciclo progresista” desde una mirada muy condicionada por los procesos superestructurales. La polémica tiene dos puntos centrales:

1. Los procesos populares no comienzan ni terminan con la suerte inmediata de determinados gobiernos, en sus lógicas de alianzas, en sus proyectos de gobernabilidad. Los procesos populares tienen una densidad que abarca los momentos de disputa institucional y superestructural, pero su trama es profunda, en un anidar de subjetividades y revueltas culturales que sólo pueden percibir quienes navegan en sus aguas revueltas, en sus humores, en sus duelos y esperanzas. Es importante que nuestros análisis puedan realizarse desde ese corazón que late en clave de pueblo, y no sólo en los términos de su representación inmediata. (Un ejemplo claro de esto es que lo que se consideró el fin del peronismo, a partir del golpe de Estado realizado en 1955, no era sino la interrupción de un momento de lucha del pueblo, que continuó bajo diversas formas y cuyas huellas todavía estamos viviendo.)

2. Dentro del grupo de países que se engloban como “progresistas” se consideran procesos muy diversos, algunos de los cuales se proponen –o al menos así lo proclaman– revoluciones populares, antiimperialistas, socialistas, descolonizadoras, y otros que asumen políticas articuladas profundamente con la reconfiguración del capitalismo mundial. En unos y otros perviven ideologías de variadas izquierdas, que consideran la necesidad de atravesar por un proceso etapista, en el que la justicia social que provee la redistribución en la esfera del consumo antecede a la desarticulación del poder patriarcal y colonial.

Visto desde la perspectiva de las mujeres, en estos gobiernos, de diferentes modos, hemos accedido en una mayor medida a bienes de consumo, pero no necesariamente al protagonismo en la creación de poder popular. Y si hablamos de los pueblos originarios es dudoso el lugar que se les asigna en la mayoría de los gobiernos progresistas, poniéndose en tela de juicio su papel de sujetos de los mismos: es así como pueden “incluirse” en el modelo de consumo que derrama el “desarrollo”, pero no cuestionar dicho modelo, y menos crear sus propios modos de “buen vivir”.

Escribe Verónica Gago: “En América Latina, en la última década, hemos visto resurgir el debate sobre el desarrollo, bajo la fórmula de

neodesarrollismo, reivindicada por los gobiernos que llegaron al poder tras fuertes crisis y levantamientos de movimientos sociales. Mientras a nivel retórico y de imaginario político se presenta como lo opuesto al predominio de lo financiero, el neodesarrollismo, tal y como se da en este ciclo a nivel regional, deviene inseparable de una generalización de la producción de renta y de la mediación financiera de lo social. Tal desfasaje otorga un papel especial al Estado en la medida que logra combinar y sintetizar ambas líneas. En esta perspectiva, trazar una frontera consistente entre ‘neoliberalismo’ y ‘neodesarrollismo’ no se hace tan fácil. Más bien lo contrario es cierto: la estrategia ‘neodesarrollista’ expresa una coyuntura particular y un esfuerzo político notable dentro de la estructura de la razón neoliberal”.

Y especifica más adelante: “El reciente balance de Álvaro García Linera de la derrota del MAS en el referéndum de febrero pasado por la reelección, toca un tema clave en la coyuntura latinoamericana: el cambio en la composición social de las clases populares tras los años de los gobiernos llamados ‘progresistas’. AGL lo puntualiza en mutaciones concretas: hábitos e intensidad de consumo, de acceso a la información (medios digitales que quitan el monopolio a la asamblea y el sindicato), la urbanización de los territorios y la identidad indígena devenida capital político-simbólico (incluso para obtener puestos en el Estado). Estas mutaciones de las clases populares, en su argumento, explican un desfasaje paradójico: el MAS produjo a los sujetos que lo llevan a la derrota (...) Un campo particularmente notable para pensar esta mixtura es la expansión del consumo, y especialmente del consumo popular, inextricablemente ligado al subsidio estatal y las políticas sociales, a los dispositivos de endeudamiento y a nuevas violencias”.

En esta perspectiva, se encuentran algunas respuestas diferentes a las que predominaron en el análisis de ciertas izquierdas que han pactado con las políticas extractivistas como “condición de desarrollo para la etapa”, y que ahora culpabilizan a los sectores sociales que se vieron favorecidos por la distribución a través del consumo. Sin haber sido protagonistas sino “beneficiarios” de ese proyecto se los acusa de “deslealtad” hacia quienes les han provisto de esos mejores niveles de consumo.

Pensar en la nueva trama de pueblo, creada a partir de la “inclusión vía consumo”, es una clave que nos permitirá complejizar muchos análisis, tanto para comprender el momento que vivimos los movimientos populares como las posibilidades reales que se nos presentan en los procesos en los que quisiéramos profundizar las revoluciones anunciadas en el siglo XXI. También nos ayuda a cuestionar las nociones creadas

por algunos modelos de “economía feminista”, que quedaron atrapados en las redes de “lo posible”, avalando las lógicas extractivistas del capital transnacional que provocan el saqueo y la destrucción de los bienes comunes, de los territorios cuerpo y tierra.

Gobiernos “progresistas”: ataques a las demandas de las mujeres y de los feminismos

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo del período, podemos señalar la paradoja de que en gobiernos que se presentan como progresistas hay un desproporcionado ataque a las demandas de las mujeres y de los feminismos, e incluso se ha retrocedido en algunos casos de manera dramática –en Nicaragua, por ejemplo–, debido al pacto de los gobiernos con los fundamentalismos religiosos, y especialmente con la jerarquía de la Iglesia Católica. La persecución y descalificación de las propuestas feministas por parte del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, o de Daniel Ortega en Nicaragua, habla de procesos que mantienen como rehenes los cuerpos y deseos de las mujeres, y buscan subordinarlos a la lógica patriarcal del control de Estado. Que haya mujeres presas por abortar en El Salvador, con el gobierno del FMLN, es expresión de las tremendas deudas que estos gobiernos tienen con la vida y la libertad de las mujeres.

En Venezuela, a pesar de que el propio Hugo Chávez se asumió como feminista, hasta el día de hoy sigue siendo penalizado el aborto. Y si bien en la Revolución Bolivariana tienen un protagonismo decisivo las mujeres, y se ha avanzado mucho en leyes laborales y en el control de la violencia, el contraataque de la derecha se vale de lo que la revolución no hizo en términos de derechos de las mujeres y de los colectivos de la disidencia sexual, intentando regresar a las mujeres a los roles tradicionales de cuidado, valiéndose de la escasez actual por el acaparamiento de métodos anticonceptivos y de la prohibición del aborto.

En Brasil y en Argentina se han logrado avances importantes en la década anterior en leyes contra la violencia hacia las mujeres, por la educación sexual integral, la identidad de género, entre otros. Sin embargo, existe una deuda con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En su explicación puede encontrarse el sistema de pactos con las iglesias. Ahora, cuando la derecha política avanza, estos logros se revierten con rapidez. Los acuerdos ideológicos con los fundamentalismos religiosos modelan una subjetividad conservadora, de reproducción de una familia inexistente, con varones que no pueden ser proveedores y se vuelven violentos, maltratadores, o

se rajan, y en la cual las mujeres están empujadas a hacerse cargo de las tareas de subsistencia, de producción y reproducción de la vida, dependiendo de políticas asistenciales y clientelares, perdiendo autonomía personal y colectiva en ese proceso, y teniendo que asumir la lucha contra la destrucción que significan en los barrios, en las poblaciones, las economías “informales” que se extienden sobre todo entre los y las más jóvenes, con las redes de narco, de corrupción, la formación de bandas o de “maras”, y de los modos más diversos en que se estructura en las entrañas de la sociedad el crimen organizado.

Alimentar a la familia, buscar a las hijas desaparecidas, cuidar a los hijos víctimas del gatillo fácil, enfrentar la precarización de los servicios de salud, de educación, el acceso a la vivienda, se vuelven tareas de mujeres agobiadas, que para participar de movimientos políticos organizados y de procesos de formación política deben hacer cuatro o cinco jornadas cada día.

En las comunidades originarias, donde las mujeres se han puesto al frente de la lucha por la vida, la respuesta del poder capitalista, colonial, patriarcal, es brutal: los “femicidios territoriales”, como caracterizamos los asesinatos de Bety Cariño en México (2010), de Berta Cáceres en Honduras (2016), de Laura Leonor Vásquez Pineda en Guatemala (2017), y de muchas otras mujeres indígenas dedicadas al cuidado del territorio, han mostrado que hoy defender la vida nos puede costar la vida.

Silvia Rivera Cusicanqui, polemizando con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, puntualiza lo que significa “lo indio” como episteme: “Una es reconocer que los sujetos no humanos, montañas, ríos, animales, son entidades con las que dialogas. Todo lo hermoso que es entender la relación del trabajo agrícola con la relación metabólica, cósmica con la tierra. Un segundo elemento es el diálogo con los muertos. Viven, hablan y orientan a los vivos, y permiten identificar los límites éticos que no puedes rebasar. El tercero: crear, vivir, tramar comunidad es la reproducción de la vida, implica una ética del cuidado por parte de hombres y mujeres. Otro tipo de relación hombre-mujer que también permita superar las brechas y jerarquías entre el trabajo humano y el intelectual, porque lo que haces con las manos es parte del metabolismo con el cosmos, porque participas en el ciclo de reproducción de la vida”. Estas lógicas, dice Silvia, son parte de lo que necesitamos recuperar desde los proyectos populares para “cuidar la brasa” que nos permita, de tiempo en tiempo, reavivar los fuegos.

Aprendimos que, además de mover al mundo, podemos pararlo

En el actual contexto de pérdida de derechos, si hay un movimiento que mantiene encendidos y desparrama los fuegos, es precisamente el movimiento de mujeres, con el feminismo como su energía principal. Las marchas masivas en todo el Abya Yala contra los femicidios, contra la violencia hacia las mujeres, por cada uno de los derechos arrebatados, han conmovido al continente desde el sur hasta el norte. Las mujeres, que movemos al mundo, hemos aprendido que también podemos pararlo. El primer paro que se le hizo a Mauricio Macri, en el sur del mundo, lo hicimos las mujeres. La primera marcha masiva en el norte contra Donald Trump, la hicimos las mujeres. Hay una potencialidad del movimiento de mujeres y del feminismo que puede ser un sostén para relanzar las políticas de creación de poder popular, desde abajo y a la izquierda. Interpelando a los gobiernos que, más o menos “progresistas”, pretenden sostenerse a partir de profundizar la estrategia en clave popular, apoyados en legados como el que dejara Hugo Chávez en su despedida: “Comuna o nada”, o en la síntesis realizada por Rosa Luxemburgo que tiene más vigencia que nunca: “Socialismo o barbarie”.

Cuando el avance conservador de las derechas sopla en el mundo, entramado en una “pedagogía de la crueldad”, como define Rita Segato la política cultural del capitalismo patriarcal de estos años, necesitamos resituar el debate de las izquierdas, pensando los límites que han tenido las políticas etapistas que, defendiendo el extractivismo, destrozan el mundo en que vivimos, los territorios que nos cobijan, los ríos, los bosques, que nos dan agua, oxígeno; privatizando y mercantilizando todas las dimensiones de la vida, en favor de unos pocos, y creando al mismo tiempo una subjetividad consumista, subordinada a las lógicas del capitalismo colonial y patriarcal.

“Socialismo o barbarie” puede ser entonces un primer punto de nuestro programa, pero si hablamos de un socialismo descolonizado, un socialismo feminista, libertario, del buen vivir, que sea sobre todo un proyecto de poder popular, de conciencia antipatriarcal, donde nos encontremos en nuestras raíces, en nuestras identidades múltiples, y en nuestra posibilidad de conjugar al mismo tiempo la soberanía alimentaria, energética, la soberanía sobre los territorios y los cuerpos, la soberanía popular y la soberanía política, a partir de revigorizar a las comunidades y a los pueblos en nuestras luchas continentales y mundiales.

Sujetos, tensiones y contradicciones de la nueva cultura política en América Latina

Giordana García Sojo¹

Una de las estrategias más afinadas y asertivas del capitalismo actual ha sido su capacidad de incidir de manera permanente en las decisiones de las mayorías a través de la llamada industria cultural. El aparato simbólico desplegado por los poderes dominantes ha logrado aceitarse de tal manera que la construcción de subjetividades instalada en distintas poblaciones suele encajar en sus mandatos e intereses.

Más allá del tono alarmante, pretendemos enfocar la atención en la importancia sustantiva de lo cultural en todos los terrenos de la geopolítica contemporánea. Ahora bien, “lo cultural” es un campo harto diseccionado y generalmente sintetizado a sus expresiones más utilitarias y ornamentales, o, en el mejor de los casos, a un sentido antropológico, holístico y totalizador que también suele neutralizarlo. Pensemos lo cultural no como un sector o un campo, sino como un proceso transversal donde se disputa lo político, esto es, la manera de ser y hacer de una civilización en un momento dado de la historia.

Un fenómeno sintomático de la habilidad de la industria cultural capitalista –siempre hermanada con la militar–, ha sido la forma casi imperceptible pero altamente efectiva de cooptar intereses diversos e incluso transgresores y transformarlos en parte estructurante de su hegemonía. Las luchas de las llamadas minorías: mujeres, población sexo-género diversa, afrodescendientes, inmigrantes, indígenas, entre otras, no sólo se han convertido rápidamente

1. **Giordana García Sojo** (Caracas, 1979) es editora, investigadora y docente. Licenciada en Letras por la Universidad de Los Andes y tesista de la Maestría en Antropología social de la Universidad de Buenos Aires. Fue viceministra de Cultura de Venezuela entre 2014 y 2016. Actualmente es presidenta de la Fundación Editorial El perro y la rana. Ha colaborado con diversas revistas y portales venezolanos y latinoamericanos.

en un *stock* más dentro de las tiendas por departamento, es decir, en público objetivo de precisas estrategias de mercadeo, sino, sobre todo, se han reposicionado en el tablero mundial como peones defensores del *statu quo* neoliberal, siempre y cuando éste se frise con una leve capa de concesiones “políticamente correctas”. Así, vemos a algunos de estos sectores defender políticas altamente neoliberales, expoliadoras e intervencionistas como las ejecutadas por el clan Clinton².

He aquí los retos en clave cultural que se les imponen a los pueblos y gobiernos anticapitalistas: sortear el entramado de estrategias de cooptación y seducción simbólica proponiendo permanentemente nuevas formas de entendernos y hacernos ver en nuestra diversidad. No es una cuestión solamente de cuántos museos abrimos o cuántos programas de enseñanza de música diseñamos, sino de que todas esas iniciativas se conciban de manera articulada a una política transformadora del sistema social que ponga en ascenso subjetividades basadas en la riqueza de la diversidad cultural de los pueblos de Nuestra América; una política configurada para incidir en el tablero democrático con audacia mediante un proyecto claro que pueda contravenir a los propósitos capitalistas.

Los gobiernos de la “década ganada” en América Latina han diseñado políticas culturales sin duda disruptivas con respecto al panorama que en la materia dejaron los gobiernos anteriores. No obstante, a la luz de hoy son muchos los retos y las enseñanzas para rediseñar una más sustantiva política cultural que verdaderamente tenga la fuerza para combatir la plataforma desplegada por los diferentes dispositivos usados por el altamente especializado aparato cultural del capitalismo.

El derecho a la cultura

El hecho cultural signa el rol legitimador de patrones de gusto y comportamiento, así como de paradigmas de convivencia y diplomacia. Pero ¿quién ejerce tal legitimación? ¿Quiénes se arrojan tal derecho?

Durante el siglo xx en América Latina se consolidó el plan de expoliación económica y cultural diseñado desde los tiempos de la Colonia. A partir de la década de 1980, el neoliberalismo se erigió

2. Nancy Fraser, en su artículo “El final del neoliberalismo progresista”, hace un análisis brillante sobre la alianza entre las “luchas por la emancipación” y la financiarización, refiriéndose a los regímenes neoliberales que disfrazan sus propósitos de expoliación tras el carisma de movimientos sociales. Ver en: <http://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista>.

como sistema todopoderoso a través de herramientas macroeconómicas como los Tratados de Libre Comercio y la imposición de trabas para la producción nacional y el intercambio regional, a la par de la promoción de la xenofobia y el rechazo a todo tipo de inmigración interna que alimentó la división y la dificultad de consolidar un proyecto grannacional. Las políticas culturales se redujeron a un escueto apoyo a las bellas artes y el “folklore” tipificado en algunas manifestaciones “exóticas”, y el desprecio concomitante de nuestras lenguas indígenas y nuestra forma de mezclarnos. El mercado y su alianza con los medios masivos de comunicación lograron convertirse en la báscula legitimadora del campo cultural.

Salvo el caso de la Revolución Cubana y su impresionante desarrollo en las artes y la educación, que logró exportar cine, literatura y música de gran calidad a la par que incluía a la población en planes de acceso a bienes culturales y de formación en todas las áreas del saber, la región fue presa de un sistemático intento de neutralización identitaria por parte del Estado, cada vez más reducido a su rol de ciego protector del libre mercado y de los cánones impuestos por la ley de la oferta y la demanda y su publicidad. Disfrazadas de multiculturalismo y permeadas de globalización, las gestiones en materia de políticas culturales de la mayoría de los países de la región no escaparon del “sueño americano” o el “*affair francés*”, calcando modelos foráneos y despreciando con holgura la fuerza de la diversidad de las lenguas y las historias de nuestros pueblos.

Ya en los estertores del siglo xx, luego de eventos que produjeron una ruptura definitiva con el modelo neoliberal, como el Caracazo en 1989 o la irrupción en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se siente en América Latina un fuerte giro en la dirección que se consolidaría más adelante como un verdadero “cambio de época”.

En 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela se instala una forma diferente de gobierno que comienza su accionar con el llamado a la Constituyente popular y al diseño participativo de una nueva Constitución, un nuevo libro del pueblo, o Popol Vuh como le gustaba comparar a Chávez. Desde el preámbulo de la nueva Carta Magna se instituye la cultura como un derecho inalienable de los pueblos y en el capítulo vi se esgrimen los artículos referentes a los derechos culturales y educativos, específicamente en los artículos 98, 99, 100 y 101.

En diciembre de 2005, con el triunfo de Evo Morales en Bolivia se logra un quiebre crucial del paradigma de la élite gobernante, al ser elegido un indígena aymara para ejercer la presidencia, legitimado también por una nueva Constitución refrendada por el pueblo boliviano en febrero de 2009, que incluye como estatutos rectores conceptos pertenecientes a la cosmovisión indígena. El artículo 8 dice: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural (...) el *suma qamaña* (vivir bien), *ñandereko* (vida armoniosa), *teko kavi* (vida buena)...”. El reconocimiento de las lenguas indígenas y de la noción de Vivir Bien o *suma qamaña* como objetivo guía de la gestión de gobierno entraña una propuesta de proyecto de nación anclada en fundamentos autóctonos, anticoloniales y anticapitalistas.

En Ecuador, la Revolución Ciudadana también comenzó su marcha con el llamado a una Asamblea Constituyente que luego de una ardua lucha con el Poder Legislativo de entonces, conformada en su mayoría por opositores al presidente Rafael Correa, logró en 2008 refrendar una nueva Constitución, cuyo principio fundador también pertenece a los pueblos indígenas, específicamente a la cosmovisión quechua, siendo el Buen vivir o *Sumak kawsay* el objetivo del proyecto constitucional. En el capítulo segundo se encuentran los Derechos del buen vivir, dentro de los cuales se especifican los derechos culturales en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25.

Tanto en Venezuela como en Bolivia y Ecuador se han desarrollado políticas culturales que garantizan el acceso a bienes y espacios culturales antes constreñidos al uso elitista de las clases dominantes y los medios académicos. También se han resignificado procesos históricos fundacionales, resaltando figuras emblemáticas de las luchas independentistas en la región, en la continua actualización de la historia como dispositivo común y cotidiano del presente de cada nación. En este sentido, se ha logrado afianzar el sentir común grannacional que defiende un proceso de conformación indentitaria nacionalista y anticolonial, a pesar de la difícil pulseada geopolítica que les toca enfrentar a organismos creados en esta lid como el ALBA, Unasur y Celac.

En los casos de Argentina y Brasil, los gobiernos que mantuvieron el poder político hasta los años 2015 y 2016, respectivamente, si bien dieron un giro importante al deslindarse del neoliberalismo y afianzar políticas sociales democratizadoras, no se plantaron un cambio radical anticapitalista. Desarrollaron una visión parcial del cambio social sostenido en una política más bien asistencialista y de regulación moderada. Sin embargo, tanto los gobiernos de Néstor Kirch-

ner y Cristina Fernández como los de Lula da Silva y Dilma Rousseff lograron consolidar plataformas de visibilización cultural hacia fuera de sus fronteras, además de posicionarse como zonas económicas de gran importancia en el tablero regional y mundial.

Las políticas culturales de Lula, en particular, forjaron nuevas formas de participación ciudadana, inaugurando uno de los más interesantes diseños de política pública coparticipativa entre Estado y población civil como ha sido el programa “Cultura Viva” y los Puntos de Cultura³. No fue casual que luego del golpe parlamentario de 2016, la primera acción de reforma estructural del aparato de gobierno acometida por el presidente “interino” Michel Temer fuera el cierre intempestivo del Ministerio de Cultura, hecho que quedó sin efecto ante la masiva toma de los espacios culturales a nivel nacional por la ciudadanía y el sector de trabajadores de las artes y la cultura.

Por su parte, en Argentina, luego del fin de la dictadura en 1983, hubo una ebullición de manifestaciones culturales de todo tipo, contenidas por años de represión política. Pero fue durante el gobierno de los Kirchner que se configuró una interesante interacción entre las organizaciones sociales y las políticas públicas de reconocimiento de múltiples iniciativas por recuperar la memoria histórica que intentó borrar la dictadura. Hoy en día, en Argentina se consolidaron prácticas tanto estatales como populares de reparación y justicia respecto a los ingentes daños que ocasionara el Plan Cóndor en la región y especialmente de apropiación de la memoria como un valor nacional y popular de gran fuerza identitaria. Uno de los símbolos ya internacionalizados de esta lucha son sin duda las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La irrupción de un Estado fuerte que protege y promueve los derechos antes ignorados y expoliados por gobiernos nacionales, en alianzas con gobiernos extranjeros y transnacionales de la industria y las finanzas, constituye un cambio radical en el sistema de gobernanza imperante hasta entonces, no sólo por el rol de nuevo fuerte y soberano del Estado, sino principalmente por el diálogo que este se plantea instituir con la ciudadanía al convocarla a la participación permanente en el diseño y ejecución de políticas, más allá de las urnas electorales y la democracia representativa.

El siglo ^{xxi} arrancó en América Latina con la instalación de una nueva cultura política, basada en la participación ciudadana y popular, donde se comienzan a esgrimir y consolidar nuevos sentidos

3. Para saber más sobre el programa “Cultura viva” ver: Célio Turino, *Puntos de Cultura. Cultura viva en movimiento*, Caseros, RGC Libros, 2013.

relativos al poder, la acción transformadora y el derecho a la diversidad y la autonomía cultural, ligados siempre a la gestión del poder estatal. Esto último, que constituye un logro en medio de la debacle neoliberal, se erige también como su gran talón de Aquiles.

Producción cultural vs. consumo cultural

Aunque el Estado recobró en América Latina el deber y la potestad de proteger la diversidad cultural y el acceso a los bienes culturales por derecho, su misma naturaleza burocrática implicó la cooptación y ralentización de iniciativas populares que terminaron siendo vaciadas de sentido o instrumentalizadas exclusivamente en torno a procesos electorales.

El acceso a los bienes culturales, si bien ha generado una mayor participación de la población en la vida pública, no ha sido suficiente en tanto política que garantice el accionar cultural de las mayorías como potencia transformadora. Se trata de facilitar el avance de narrativas que por su autenticidad y diversidad logren realmente transgredir el entramado simbólico hegemónico, muchas veces fortalecido por políticas culturales de la misma izquierda y/o desde el Estado con gobiernos progresistas.

En el Informe a la Nación 2016, el presidente Correa se lamenta de no haber logrado el “cambio cultural” deseado y afirma: “No hemos sabido generar la revolución cultural que modifique el espíritu de los ecuatorianos en términos estéticos y acorde con la nueva ética pregonada por la Revolución”⁴. Quizá nos encontramos ante una falla de principio, tomando en cuenta que la “revolución cultural” no consiste en “modificar” el espíritu de un pueblo sino en algo más cercano a generar y fortalecer espacios para potenciar su diversidad cultural de manera más activa y vinculante.

Sin ánimos de recaer en posiciones autonomistas inmovilizadoras o en lánguidas críticas desde la “sociedad civil”, el aparato estatal y su inevitable verticalismo debe dar paso a formas oblicuas de hacer política pública. Un aspecto crucial es asumir la heterogeneidad de los sujetos que conforman las nociones de “espíritu de los ecuatorianos” o más bien: “pueblo”, “sociedad civil”, “poder popular”, “masa” o “ciudadanos”, donde no sólo se dialoga con organizaciones sociales o actores posicionados en una identidad precisa, o con meros consumidores y receptores de políticas, sino con una fuerza latente de subjetividades

4. Informe a la Nación 2016: La década ganada. En línea en: <http://www.elciudadano.gob.ec/informe-a-la-nacion-2016/>

diversas, que continuamente activa procesos de construcción y producción de narrativas.

Asimismo, el radio de acción que permiten herramientas como internet y las redes sociales, más que un medio de acceso a públicos más o menos objetivos, construye una trama de relaciones de alto voltaje semiótico, pues permite la emergencia de voces no vinculadas a formas de organización tradicional como sindicatos, partidos, movimientos sociales u ONGs, además de interactuar con cantidades muy altas de personas en distintos puntos geográficos en muy corto tiempo.

Entre los retos y posibles horizontes, tanto para los gobiernos de izquierda como para la población que aspira a un verdadero cambio cultural, nos encontramos con la necesidad de desarrollar políticas policéntricas, que atomicen el radio de acción de los discursos del entramado simbólico del mercado/ gobierno transnacional y logren poner en la escena cotidiana las diversas formas de ser nosotras y nosotros mismos. Comencemos por asumir a la población como hacedora de sentidos potentes y transformadores y no como mera consumidora, sujeto de encuestas y estudios de *rating*.

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. En línea en: <http://www.mp.gob.ve/LEYES/constitucion/constitucion1.html>.
- Constitución de la República del Ecuador de 2008. En línea en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009. En línea en: <http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf>.
- Correa, Rafael. Informe a la Nación 2016: La década ganada. En línea en: <http://www.elciudadano.gob.ec/informe-a-la-nacion-2016/>.
- Fraser, Nancy. “El final del neoliberalismo progresista”, 12/01/2017. En línea en: <http://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista>.
- Turino, Célio. Puntos de Cultura. Cultura viva en movimiento, Caseros: RGC Libros, 2013.

La batalla comunicacional: entre las oportunidades perdidas y la construcción de nuevas condiciones

Natalia Vinelli¹

Un balance necesario

Como los medios de comunicación y la clase política muchas veces hablan de “sensación” (de inseguridad, de hartazgo, de que tal o cual es culpable), nos vamos a permitir comenzar este artículo apelando a una sensación: la que nos sugiere que perdimos una oportunidad histórica. Nos embarga el sentimiento de que en América Latina estuvimos cerca de alumbrar un sistema de medios nuevo, democrático y desconcentrador, surgido del cuestionamiento al paradigma que asocia la comunicación con las ganancias. Las condiciones parecían dadas; pero la realidad, aunque con avances, fue más modesta que las promesas que agitaron los cambios regulatorios en buena parte de la región.

Un balance crítico y autocrítico de esta última década y media requiere que revisemos lo actuado tanto por los estados como por las grandes empresas periodísticas, y por los sectores populares en la construcción de sus propias herramientas de expresión. ¿Cuánto hubo de ruptura y cuánto de continuidad con el sistema de medios consolidado en las décadas anteriores? ¿Hasta dónde nos permitió llegar la batalla comunicacional? ¿Cuántas posiciones hemos recuperado para las voces de la clase trabajadora, para la difusión de las ideas antiimperialistas, para la defensa de Nuestra América emancipada?

El impulso de nuevas legislaciones que buscaron poner límites a la concentración y extranjerización de la propiedad de los medios tiene

1. **Natalia Vinelli** (Lomas de Zamora, 1972) es periodista, investigadora y docente universitaria. Licenciada en Comunicación Social y magíster en Periodismo por la Universidad de Buenos Aires. Es autora de los libros *Ancla. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh* y *La televisión desde abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación*, entre otros. Es referente del canal digital autogestionado Barricada TV (www.barricadatv.org).

como telón de fondo las crisis orgánicas que –más acá o más allá del cambio de milenio– sacudieron a muchos países del subcontinente. Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador atravesaron períodos de altísima conflictividad. El cuestionamiento al neoliberalismo en todos los órdenes; la denuncia de las consecuencias de la privatización, el endeudamiento y la dependencia a los organismos financieros internacionales actuó como marco del debate acerca del rol que cumplen los medios sobre la subjetividad social y, más ampliamente, sobre los modos de intervención estatal.

Un terreno que hasta el momento sólo era habitado por especialistas, que muchas veces habían callado las consecuencias de la concentración mediática, ahora ganaba protagonismo y pasaba a ser transitado por toda la sociedad. La rebelión de diciembre de 2001 en la Argentina, y sobre todo las manifestaciones contra el golpe de Estado en Venezuela en 2002, pueden ubicarse como intersección entre dos maneras de entender y valorar el lugar ocupado por las grandes empresas mediáticas y su relación con las audiencias. Este es nuestro punto de partida para reflexionar sobre lo mucho o poco que pudimos avanzar en estos años.

El neopopulismo de mercado

Los años neoliberales vieron multiplicarse perspectivas cómodas para la concentración: en lugar de preguntarse por quiénes son los dueños de los medios y cuáles son sus intereses, se estableció una suerte de relación igualitaria entre emisores y audiencias, haciendo énfasis en la libertad de los consumidores culturales para resignificar los textos mediáticos. La pregunta sobre la propiedad perdía relevancia en la misma medida en que el mercado festejaba la soberanía del receptor. Cualquier intento regulatorio era dejado de lado en nombre de esta “libertad”, habilitando o profundizando la concentración en multimedios mientras el control remoto objetivaba un supuesto poder de elección al cambiar de canal.

El neopopulismo de mercado sigue siendo hoy el principal articulador de la línea de argumentos de las clases dominantes para este y otros asuntos, y tiene como base la idea de que el mercado es capaz de autorregularse. Para que goce de buena salud, sostienen, sólo es necesario garantizar la competencia. En la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri lo dejó bien claro cuando al asumir justificó la derogación parcial de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual con la tesis de que debía terminarse “la guerra contra el periodismo”.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió la serie de decretos promercado con que inauguró el cambio de gestión: “Está planeado que en enero del 2018 se aplique la convergencia, que se levanten las barreras para la libre competencia. La ley de medios nuestra no va a ser para ningún medio en particular como la anterior, va a auspiciar la libertad de expresión con las menores restricciones posibles. La mejor ley de medios es la que no existe, y esa es la idea. La guerra con los medios se terminó, la paz está sellada”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), usina ideológica de las derechas, ubica desde su fundación cualquier legislación en materia de comunicación, por más tibia que sea, como atentado a la democracia. Para la SIP, la libertad de prensa es la libertad de empresa. Las resoluciones de sus asambleas reiteran persistentemente los mismos temas: “Violencia que no cesa contra medios y periodistas; multiplicación de leyes, proyectos y presiones gubernamentales que intentan controlar el libre flujo informativo en los medios tradicionales y también en las nuevas plataformas; restricciones al acceso a la información pública; asignación discriminatoria de publicidad oficial y mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos”². Desde el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) para acá, el discurso parece calcado.

Las conclusiones de la 71ª Asamblea General de la SIP realizada en Carolina del Sur en 2015 sostienen que “ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tradicionalmente garantistas de la prensa libre, y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al ‘discurso del odio’”³.

Para la SIP, en Venezuela “se consolida un totalitarismo comunicacional de Estado”, en Cuba “persiste la censura” y en Ecuador “continúa el clima de represión de los organismos de control y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación”⁴; mientras que la destitución de Dilma Rousseff en Brasil es bien considerada (“La prensa está funcionando libremente y publica cualquier cosa que considere importante para revelar al público”), y la política de decretos presidenciales en Argentina se saluda como una sana vuelta al cauce.

2. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Conclusiones. Charleston, Carolina del Sur, 2 al 6 de octubre de 2015. Disponible en: <http://www.sipiapa.org>

3. Idem.

4. 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Informes. México, 13 al 17 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.sipiapa.org>

La intervención estatal: entre la actividad y el binarismo

Decíamos que los años 2000 trajeron consigo contratendencias respecto de cómo se venía abordando la relación entre medios, Estado y sociedad en la década anterior. El escenario incuestionable del “cuarto poder”, amparado en la autonomía de las audiencias para elegir con qué estrella televisiva quedarse, fue sacudido por la movilización popular que ganó las calles en algunos países de la región. Las lecturas acerca de la Guerra de Cuarta Generación (G4G) y cómo contrarrestarla, y la atención sobre las acciones impulsadas desde los medios a favor del imperialismo norteamericano sirvieron de base para el replanteo de los marcos teóricos desde los cuales pensar el fenómeno mediático, aunque los resultados anclados en esta perspectiva en general fueron pobres y mecanicistas.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Ecuador pusieron en debate y sancionaron leyes que buscaron poner límites a la concentración mediática, y que se basaban en demandas históricas del movimiento popular por la democratización de la comunicación. En otros casos como Brasil, la disputa entre los principales grupos de medios privados y el gobierno del PT actuó como telón de fondo de la revitalización de los medios públicos. También Bolivia avanzó hacia el refuerzo o creación de medios públicos. De este modo los estados fueron recuperando el protagonismo, apareciendo como actores importantes en la definición de políticas públicas vinculadas a la producción y distribución de información y entretenimiento. Telesur es la apuesta más ambiciosa.

Desde el punto de vista del análisis teórico, conceptos como “manipulación”, “dominación” o “ideología”, que habían sido desechados en la teoría comunicacional, retornaron al debate social y más tímidamente a los claustros académicos. En muchas ocasiones, la contienda entre los gobiernos y los conglomerados mediáticos obtuvo la posibilidad de reflexiones más complejas que dieran cuenta de cómo se instalan las agendas, cómo se modelan gustos y consumos a través de la apropiación que hace de ellos la industria cultural; convirtiendo el binarismo en un método abreviado para delimitar el campo de pelea.

La apelación a la G4G por momentos funcionó como corsé para no profundizar en las zonas más problemáticas. En lugar de fortalecer las posiciones progresistas o revolucionarias, el binarismo las encerró en la jaula de la obsecuencia. Los últimos tiempos vienen marcados por la falta de densidad del debate, cambiando una lógica democrática con capacidad de autocrítica y crítica constructiva, por una lógica propagandística cerrada que se repite como un mantra y

se utiliza como excusa frente a cualquier reclamo. Esto repercute en la calidad de los medios, tanto de los públicos como de los privados, en la medida que ambos construyen un espectador sin capacidad de análisis, a quien se le entrega comida predigerida.

No obstante, el período destaca la importancia de estados activos en la definición de políticas públicas para el sector, tanto desde la sanción de normativas que regulan el funcionamiento del sistema de medios como por la redimensión, aunque con limitaciones, de los medios públicos. Son importantes las medidas en favor de la realización de contenidos digitales para cine y televisión, la democratización en el acceso a financiamiento para nuevos prestadores y la apuesta que significa construir desde el Estado las plataformas de la TV digital. Todo esto en un contexto de convergencia tecnológica que cambia las maneras de producir, difundir y consumir información y entretenimiento, un sector de la economía muy dinámico y que se encuentra en permanente movimiento.

La intervención desde las organizaciones populares

En este marco hay que situar al actor que consideramos estratégico: los medios alternativos, populares, autogestionados o comunitarios. Estos vienen construyendo desde muy atrás, en el marco de una tradición que en Nuestra América lleva el tiempo de las luchas emancipatorias. En Argentina, confundidos en la categoría “sin fines de lucro”, los medios alternativos tienen reservado un 33 por ciento del espectro radioeléctrico, aunque su aplicación fue incompleta y en la actualidad sufren el ahogo financiero producto del ajuste macrista. La situación es tanto de fortaleza como de debilidad: fortaleza porque el sector ha logrado capitalizarse y profesionalizarse, debilidad porque muy pocos han logrado la legalidad necesaria para desplegarse en el nuevo escenario.

En Venezuela, los medios populares han logrado desarrollarse debido a un apoyo activo por parte del gobierno bolivariano, que creó una dirección especial que atiende al sector en su especificidad. Por eso constituyen un faro para los colectivos de comunicación popular en América Latina. Sin embargo, cabe preguntarse por las tareas que estos medios asumen en tiempos de desestabilización. Frente a la hegemonía histórica de la TV comercial para modelar gustos y consumos culturales, el interrogante no es menor: Thierry Deronne, en un informe sobre el balance y futuro de la televisión comunitaria venezolana, explica que “prácticamente no se ven, sin contar que muchas de ellas están fuera del aire”. El mismo trabajo señala que el

78 por ciento de los y las televidentes siguen prefiriendo Venevisión y Televen, las principales cadenas privadas.

En Ecuador se realizó la primera convocatoria pública de frecuencias de radio y televisión en señal abierta, en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación que establece la distribución equitativa del espectro radioeléctrico en tercios, reconociendo a los privados, los públicos y los comunitarios. Como en Argentina, las exigencias de los concursos fueron difíciles de superar para los comunitarios.

En otras palabras: los medios en manos de las organizaciones populares seguimos ubicándonos desigualmente en el mapa de medios latinoamericano, y pocas veces logramos conectar masivamente con las audiencias. Por eso se trata de una desigualdad de poder y a la vez de interpelación hacia la sociedad, hacia el pueblo en su conjunto. La artesanidad y la pequeña dimensión en que la mayoría de estos medios se mueve conspira contra el objetivo general, que se vincula con la disputa de sentido y la revolución social. La construcción de redes por momentos permite superar el aislamiento, aunque no logra trascender los propios círculos en los que se levantan.

Esta debilidad, producto de años de persecuciones en toda la región, es histórica y situada, y por lo tanto es superable en la medida en que la comunicación se entienda como una herramienta en el marco de la construcción de poder popular. Esto significa que la comunicación deber ser un instrumento. La batalla no se resuelve en el discurso: por el contrario, requiere organización desde abajo que la confronte, en todos los frentes de lucha, y en esto los medios populares con vocación de poder cumplen una función de apoyatura y articulación fundamental.

A manera de cierre

Las tareas de la emancipación requieren, entre otras acciones, encontrar las formas más adecuadas para responder al discurso del poder, dando lugar a la expresión de la clase trabajadora para romper el cerco mediático. Superar la artesanidad es un imperativo, que nos interpela en los intentos de restauración conservadora y en las continuidades que persisten en la región, como la matriz extractivista.

Trazar un balance sobre lo actuado en materia de comunicación en América Latina durante los años posneoliberales implica hacerse cargo del peso de cada uno de los actores; de las continuidades estructurales que ubican los mayores intentos del lado de la comu-

nicación comercial “aliada”; de la tendencia a las respuestas fáciles que evitan ir hacia las contradicciones del modo de acumulación en el capitalismo actual y de las fragilidades de la organización popular –políticas y también comunicacionales– de cara a vencerlas.

Las clases populares parten de condiciones iniciales de debilidad en la lucha por la hegemonía, y con ella por el acceso al gobierno y al poder, que es donde se materializa la capacidad de hacer efectivas y estables sus nuevas formas de organización. Si desde el Estado no se apoya sistemática, económica e institucionalmente a las expresiones construidas desde abajo; si ese Estado no es expresión orgánica de un pueblo movilizadado construyendo una nueva sociedad, los medios alternativos seguirán recluidos en el entorno más cercano.

Por eso la “sensación” de oportunidad perdida con la que empezamos este artículo: las clases dominantes no se suicidan. Hubo condiciones favorables, aunque los avances estuvieron lejos de las expectativas generadas. Con todo, hemos logrado levantar un nuevo piso, mayor capacidad de producción de contenidos de calidad y una referenciación positiva entre los sectores movilizadados de la sociedad. Las comunidades (en sentido territorial y sociológico) se han apropiado de estas herramientas. La cuestión es cómo hacer de estas posiciones conquistadas unos espacios que confluyan en el camino de la emancipación, y que contribuyan a su avance.

Siguiendo al Che, la tarea entonces será aportar para la construcción de nuevas condiciones, que generen nuevas oportunidades para una comunicación de superficie, masiva y en disputa. Así como lo más avanzado de esta oleada abrevó en las luchas anteriores, lo interesante es que otra vez no empezaremos de cero.

La integración regional en el centro de la confrontación: sueños, realidades y pesadillas de Nuestra América

José Seoane¹

La imagen muestra a un policía antimotines agrediendo a la canciller venezolana Delcy Rodríguez cuando intenta ingresar a la reunión del Mercosur acompañada por su colega boliviano David Choquehuanca. Tiene lugar en diciembre de 2016 en Buenos Aires y evidencia, con la locuacidad de los hechos, la decisión de los nuevos gobiernos de derecha de Argentina y Brasil de expulsar ilegalmente y por la fuerza a Venezuela del bloque suramericano.

El suceso señala también en qué medida la ofensiva neoliberal que se despliega en la región no sólo promueve su agenda de transformaciones regresivas a nivel nacional, sino que centra a su vez sus objetivos en el rediseño colonial de las relaciones geopolíticas y económicas de Nuestra América con la reconfiguración de los procesos de integración regional en curso.

No se trata, sin embargo, de un “fin del ciclo” de esa Nuestra América como a veces se lo ha caracterizado, sino de un proceso aún abierto signado, ciertamente, por la ofensiva de los sectores más concentrados del capital local y global, y por los límites y crisis de los procesos de cambio, particularmente de los proyectos neo-desarrollistas. Pero también, por una renovada conflictividad de los sujetos subalternos en el contexto del fracaso económico del extractivismo dependiente y de la progresión y profundización de una crisis civilizatoria que caracteriza a la fase neoliberal del capitalismo. Y al igual que en el pasado, la llamada integración se encuentra en el centro de estas tensiones y confrontaciones.

1. **José Seoane** (Buenos Aires, 1963) es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (FCS, UBA). Integra el Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL).

No podría ser de otro modo dado que unas de las principales fuerzas que animan la ofensiva neoliberal actual son las corporaciones, los organismos internacionales y los estados imperiales que persiguen también “otra integración” que instituye y profundiza la subordinación a los mercados globales, la profundización del despojo, las rutas del saqueo, la dependencia y la recolonización.

El debate sobre la integración se trata así de una cuestión profundamente política que no puede reducirse al tratamiento técnico legal o a las arquitecturas institucionales. Si los Estados nación y sus representaciones gubernamentales son formalmente sus actores principales, desde la perspectiva emancipatoria lo son las clases y grupos sociales y, en particular, los propios sectores subalternos a través de sus luchas, movimientos sociopolíticos y articulaciones regionales. Estos múltiples actores –movimientos y gobiernos– se entrelazaron, no sin tensiones, en la construcción de esa Nuestra América que se desplegó tan intensamente al calor de los conflictos y transformaciones que atravesaron la región desde fines de 1990 y que, en la evocación y renovación de los sueños de Bolívar, Martí y el Che, tuvo en la Revolución Bolivariana unas de sus principales fuerzas. La presente contribución propone una reflexión sobre los alcances, límites y desafíos que enfrenta hoy esta forja indoamericana.

La construcción de Nuestra América: logros y límites

En febrero de 2004, en La Habana, Fidel Castro y Hugo Chávez suscribieron los primeros acuerdos de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). El acto coincidió con las sesiones del Tercer Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, que reunió a más de 1.200 representantes de diversos movimientos sociales del continente para preparar el último tramo de la campaña regional bajo la bandera de “¡Ya basta de libre comercio, es hora de detener el ALCA!”. Esta coincidencia nada casual evidenciaba las profundas imbricaciones entre la prolongada movilización y las articulaciones sociales constituidas contra el proyecto estadounidense de integración subordinada promovido con el ALCA y la emergencia de una integración alternativa a nivel interestatal.

La construcción del ALBA (actualmente Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos) sumó luego a Bolivia (2006), a Nicaragua (2007), a Honduras y Dominica (2008), a Ecuador, Antigua y Barbuda, y San Vicente y Las Granadinas (2009), a Santa Lucía (2013) y a Granada

y San Cristóbal y Nieves (2014). Por sus principios y características se constituyó en una experiencia de avanzada en la construcción de Nuestra América, planteando la herejía de una integración basada en la reciprocidad, la complementariedad y la cooperación que no se restringía al intercambio comercial ni a las relaciones interestatales, y que aspiraba a la configuración de un proyecto regional común de articulación con el Sur global y confrontación con los viejos centros imperiales.

Sin embargo, los límites internos y externos a la expansión y profundización de los procesos de cambio social más radicales –por ejemplo, con la intervención imperial con el golpe en Honduras en el norte y la afirmación del proyecto neodesarrollista en el sur– culminó restringiendo al ALBA a economías poco complementarias, de baja o escasa industrialización y que representaban tan sólo cerca del 10 por ciento del PBI regional. Los eslabones más débiles de la cadena neoliberal, donde la intensidad de la condensación de las contradicciones sociales había abierto las puertas de los procesos de transformación más profundos, mostraban por contrapartida sus límites a la hora de su proyección regional.

La iniciativa de integración promovida por el gobierno bolivariano en esos años buscó traspasar esas fronteras. Por una parte, en 2005 se lanzó Petrocaribe y el proyecto del Gasoducto del Sur así como más tarde, desde la Unasur, se promovieron proyectos de desarrollo regional en base a la explotación común de los bienes naturales. Sin embargo, esta integración tendía a reforzar el modelo extractivista –aunque bajo una perspectiva mercado-internista– y la matriz estatalista. Por otra parte, se impulsaron los ambiciosos proyectos de Telesur (2005) y del Banco del Sur (2007) aunque, particularmente, las resistencias opuestas por el gobierno brasileño los restringieron o demoraron, y el segundo sufrió sucesivos cambios que matizaron sus aspectos más transformadores.

En el plano político, la cooperación entre los procesos más transformadores y los gobiernos neodesarrollistas pareció dar mejores frutos. En 2008, luego de una serie de cumbres anteriores, vio la luz la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) agrupando a los 12 países de Sudamérica. La Unasur cumplió un significativo papel a nivel defensivo frente a los intentos de desestabilización y “golpes blandos” –por ejemplo en Bolivia (2008), Ecuador (2010) e incluso en los últimos tiempos en Venezuela– y la instalación de bases militares e injerencias estadounidenses en la región, contribuyendo de esta forma al bloqueo de las restricciones a la vida democrática

y la paz que acompañan la continuidad y profundización del neoliberalismo particularmente con la promoción de la militarización, la fascistización social y la capacidad punitiva del Estado en lo que ha sido bautizado como “neoliberalismo de guerra”.

La Unasur avanzó también sobre otras cuestiones, por ejemplo en relación con la seguridad y defensa regional. Sin embargo, luego de un primer período de importante actividad, a partir del 2011 su labor tendió a lentificarse en el contexto de las dificultades económicas regionales y una renovada ofensiva imperial, entre otros hechos, con la conformación de la Alianza del Pacífico que fortaleció la acción común en la región de México, Colombia, Perú y Chile bajo la programática neoliberal.

Por otra parte, en ese mismo año, en Caracas, se constituyó definitivamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), agrupando a los 33 países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Cuba, que había sido apartada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962. Por primera vez en la historia de nuestros pueblos, por lo menos desde las guerras de la independencia, surgía una articulación política regional de los países latinoamericanos con la exclusión explícita de los Estados Unidos y Canadá, y en cuestionamiento tanto al sistema interamericano organizado alrededor de la OEA, que había cristalizado en el terreno interestatal la hegemonía estadounidense sobre la región en la posguerra, como a su reformulación bajo las Cumbres de las Américas promovidas desde 1990.

Pero el nuevo contexto regional y los diferentes alineamientos internacionales de los distintos gobiernos dificultaron la potenciación de la labor que podría haber desarrollado la CELAC. Ya con la reciente ofensiva neoliberal en marcha y los cambios gubernamentales en Brasil y Argentina, su v Cumbre realizada en diciembre de 2016 convocó sólo a 12 de los 33 presidentes latinoamericanos –especialmente los del ALBA–, evidenciando el peso de una política de desvalorización y vaciamiento de su papel a nivel regional y, complementariamente, de refortalecimiento del de la OEA.

Entre la nueva ola de libre comercio y el “efecto Trump”: bloqueo de la globalización, continuidad del imperialismo

La derrota parcial del ALCA en 2005 –parcial porque 11 países de la región suscribieron tratados bi o plurilaterales con Estados Unidos– marcó en el continente los límites y cambios que signaron la globalización neoliberal desplegada desde 1990. Los acuerdos

de liberalización económica, bajo el gobierno de George W. Bush, se tiñeron de operaciones militares, guerras imperiales y nuevos autoritarismos, poniendo inevitable fin a las ensoñaciones de una mundialización capitalista feliz y pacífica. Huntington y su guerra de civilizaciones fue el epílogo neoliberal previsible del anunciado fin de la historia de Fukuyama.

En Sudamérica, las rebeliones populares y los cambios políticos, que cuestionaban el presunto destino de “patio trasero” y configuraban la matriz de una Nuestra América resurgente, recibían también más garrote que zanahoria. Bajo la nueva doctrina de seguridad nacional, el golpe de Estado en Honduras, en 2009, menos de un año después de su ingreso al ALBA, era también un golpe a la integración alternativa y la influencia de la revolución bolivariana, y el de Paraguay, en 2012, una espina clavada en el centro del Mercosur. Así lo comprendieron los propios gobiernos del sur que, tras ese golpe, tramitaron aceleradamente el ingreso de Venezuela a ese organismo regional que el gobierno bolivariano venía demandando desde 2006.

A partir de 2011, tras los cambios en el procesamiento de la crisis económica capitalista abierta en 2008 que desplazaba sus efectos hacia el sur del mundo, comenzó a gestarse un nuevo ciclo de la globalización promovido por las elites y fracciones del capital transnacional de los viejos centros imperiales. De esta manera, nuevos y viejos tratados de liberalización económica entre regiones o a nivel global tomaron fuerza. En la OMC se avanzó con el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA); en el plano intercontinental se promovió la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) entre Estados Unidos y países latinoamericanos y asiáticos frente a China. Asimismo, en el plano regional, avanzaron los acuerdos bi o plurilaterales con la Unión Europea –incluso tomó nuevo brío la negociación del TLC con el Mercosur a partir de 2010– y se conformó la Alianza del Pacífico (2011) como la cuña estadounidense en el continente.

La ofensiva neoliberal en la región de los últimos años llegó así con el aliento de esa nueva ola de la globalización imperial, del libre comercio y las promesas de inversiones. Sin embargo, la propia crisis que desencadena la neoliberalización capitalista, incluso en los centros imperiales, abrió paso a la victoria electoral de Donald Trump encabezando una coalición social de fracciones del bloque

dominante (petroleras, constructoras) que con sus morisquetas antiestablishment contenidas por un discurso fascistizante supo cautivar la decepción y el malestar social, particularmente de parte de la población “blanca”. El “efecto Trump”, como se lo ha llamado, suspende esos nuevos proyectos de acuerdos de libre comercio a nivel global y amenaza, incluso, con rever los existentes. Junto a los anuncios de un mayor proteccionismo económico, viene a frustrar las expectativas de las élites latinoamericanas de participar de un nuevo festín de la globalización y sus propuestas de integración, augurando inestabilidades y nuevos problemas para la economía regional.

Pero ello está lejos de significar una política exterior estadounidense de carácter aislacionista sino una reformulación de la geopolítica imperial que, para Latinoamérica, vuelve a colocar en la agenda la amenaza de políticas más agresivas, incluso la posibilidad de intervenciones militares, frente a los procesos de transformación aún abiertos en la región. No es ocioso recordar que los proyectos de recolonización de la periferia también animaron a aquellos fascismos de la primera mitad del siglo xx.

¿Un renacer de Nuestra América?

En esos tiempos, Antonio Gramsci afirmaba que “el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Nuevos monstruos pueblan las oscuridades contemporáneas. El (des)orden mundial, configurado por la neoliberalización capitalista, es terreno de un intento de reconfiguración geopolítica de nuevos proteccionismos y rivalidades comerciales y militares que amenazan al Sur global con nuevas intervenciones imperiales.

La construcción de un proyecto nuestroamericano de integración regional resulta hoy más urgente y, en simultáneo, más difícil que antes. Múltiples interrogantes plantean estos escenarios a los proyectos emancipatorios. En particular interpelan sobre sí, ante estos desafíos, seguramente de una forma diferente de la que tuvo en el pasado, tendrá lugar una revitalización del movimiento altermundialista, si les tocará a los movimientos sociales, las convergencias regionales y los pueblos un nuevo protagonismo en retomar la senda de esa Otra América de Calibán, profunda y transformadoramente indígena, feminista, latina, joven, caribeña, trabajadora, afrodescendiente, rebelde. Y nuestroamericana.

“La integración es una cuestión de vida o muerte dentro del esquema global”

Entrevista a Ernesto Samper¹

¿Cuál es su lectura, a rasgos generales, de la etapa que ha vivido América Latina en este siglo?

Creo que la etapa que se ha vivido durante este siglo ha sido de luces y de sombras. De luces porque desde 2004 hasta 2014 la región vivió una etapa muy positiva de desarrollo, de crecimiento, de distribución. En lo que se ha llamado “la década ganada”, la región creció a tasas superiores al 6 por ciento, gracias en parte a una buena temporada de precios de los productos básicos. Este crecimiento favorable permitió, entre otros logros sociales, sacar a más de 100 millones de personas de la pobreza absoluta, creando una especie de clase media baja, de personas recién “desempobrecidas”. Además, la región tuvo la oportunidad de confirmar a través de distintas elecciones su profunda vocación democrática.

A partir de 2014 comienza una destorcida, como consecuencia de la caída de los precios de los productos básicos, empezando por el petróleo, de la disminución de la demanda china, de la recesión europea, de la semirecesión en los Estados Unidos; se registran unas bajas fundamentales en los niveles de crecimiento hasta llegar a una situación en la cual podríamos estar, inclusive, creciendo negativamente.

Con la destorcida ha quedado nuevamente sobre el tapete la cuestión de si el modelo latinoamericano de desarrollo, que es esencialmente extractivista, es el mejor modelo que necesitamos para desarrollarnos, o si debemos hacer un nuevo esfuerzo para pasar de un

1. **Ernesto Samper Pizano** (Bogotá, 1950) es abogado y economista. Fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) desde julio de 2014 hasta febrero de 2017. Presidente de Colombia (7 de agosto de 1994-7 de agosto de 1998), embajador en España (1992-1993) y senador por Bogotá (1986-1990). [Entrevista realizada el 21 de diciembre de 2016.]

modelo basado en los recursos naturales y en la venta de los productos básicos primarios a un modelo en el cual le agreguemos valor a lo que tenemos a través de nuevas cadenas sociales y políticas de reindustrialización. En cualquier caso, en políticas en las cuales no podemos prescindir de un papel protagónico por parte del Estado.

Aparece como desafío entonces la necesidad de que los ajustes económicos no se hagan por cuenta de la restricción, del sacrificio de la inversión social, sino en otros sectores. Y, por supuesto, el mayor compromiso de los gobernantes es que esos 100 millones de suramericanos –y, en general, 120 millones de latinoamericanos– que dejaron de ser pobres, no vuelvan a su condición de pobreza.

¿Qué rol han jugado los organismos regionales de integración en general, y Unasur en particular, en estos dos momentos de la etapa que menciona?

Los organismos como la Celac, Unasur, Mercosur, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y el ALBA jugaron un papel importante para acompañar el crecimiento que mencionaba, impulsando unos proyectos sociales que a lo largo y ancho de toda la región hicieron sentir que el tema de la desigualdad seguía siendo uno de los mayores desafíos hemisféricos.

Luego, en esta época de destorcida, el papel de los organismos ha sido distinto, porque mientras la mayor parte de los procesos regionales de integración tienen como objetivo alcanzar niveles más altos de crecimiento económico, quizá el único mecanismo de integración que fue diseñado precisamente para conjurar este tipo de crisis estructurales fue Unasur. Unasur, de hecho, tuvo un nacimiento político: nació de alguna manera para corregir los profundos desequilibrios que produjo la aplicación de recetas neoliberales en 1980 y 1990. Unasur nació también para llenar los profundos vacíos que había dejado en el siglo pasado un sistema interamericano de desarrollo que privilegiaba a los países más grandes, sin tener en cuenta las asimetrías de la región, y unos vacíos que venían de la época de las dictaduras, que eran vacíos de democracia, que fueron llenados a través de elecciones democráticas durante todos estos años.

En ese panorama, la tarea de Unasur ha sido preservar el escenario de una región de armonía para Suramérica, una región que consolidó su vocación con los acuerdos de paz en Colombia, consiguiendo que se mantuviera la continuidad democrática en la región a pesar de la existencia de unos poderes fácticos como son los grandes conglomerados comunicacionales, grupos económicos, jueces y fiscales ju-

gando a ser estrellas mediáticas, calificadoras de riesgo... Todos estos poderes fácticos, que están haciendo política, de alguna manera han comprometido la propia gobernabilidad democrática.

Y, finalmente, el empeño para asegurar la vigencia de los derechos humanos en la región, que es en este momento el propósito que tienen los consejos sectoriales. Unasur tiene 12, cada uno de los cuales tiene un campo a su cuidado, el Consejo de Salud, de Energía, de Defensa... fue gracias a la tarea que cumplieron estos consejos sectoriales que se han podido implementar políticas públicas para asegurar la vigencia de los derechos humanos.

Diversos analistas coinciden en que el impulso de esta arquitectura de integración tuvo que ver con una etapa marcada por liderazgos y gobiernos progresistas. Un proceso que luego entra en un momento de reflujo o al menos de cierto estancamiento. ¿Cuánto influyó en este retroceso la reconfiguración del escenario regional con el cambio de signo político en algunos gobiernos como los de Argentina y Brasil?

Creo que no podemos caer en la trampa de confundir ideología con política. El hecho de que hayan existido en la región, a través de procedimientos democráticos, cambios de signo ideológico en los gobiernos no quiere decir que eso tenga que sacrificar la integración política. Valores como la paz, la democracia, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la soberanía, que son las grandes fortalezas de la región, no dependen de que los gobiernos tengan una u otra ideología sino de que en efecto quieran comprometerse políticamente en una integración.

La máxima sobre la cual nos estamos moviendo en Unasur es la de un regionalismo abierto en lo económico con una integración política en lo regional. Es decir, todas las alianzas que realicen los países para mejorar sus intereses económicos, para perfeccionar sus estrategias de relacionamiento comercial externo, son absolutamente válidas, las relaciones que pueda tener la Alianza del Pacífico con el pacífico asiático, Brasil con los Brics, los países petroleros con la OPEP, o toda la región con China, no tienen por qué alterar sus compromisos políticos alrededor de la integración.

Lo que estamos haciendo aquí es defender la preservación de la democracia, la preservación de la paz como una situación deseable para el progreso y la vigencia de los derechos humanos. Y en este sentido considero que, así como al comenzar este ciclo había gobiernos progresistas y gobiernos menos progresistas que estaban interactuando en Unasur y que cumplieron las tareas

fundamentales para evitar rupturas en la continuidad democrática, en este momento debemos tener la fortaleza de replantear nuestra relación no en función de preferencias ideológicas sino en compromisos políticos.

Y agrego algo que va a ser muy importante: creo que nosotros vamos a tener una política común muy pronto frente a los Estados Unidos. Los planteamientos del señor Trump, por lo menos en lo que se refiere a expulsar migrantes latinos, cerrar los canales de comercio abiertos a través de acuerdos de libre comercio, castigar las posibles inversiones de Estados Unidos que vengan a América Latina, deben obligarnos a los latinoamericanos a pensar muy seriamente en que el tema de la integración no es para nosotros una cuestión de preferencias políticas, ideológicas o comerciales, sino una verdadera cuestión de vida o muerte, de supervivencia o no dentro de un esquema global.

¿Qué propuso usted desde la Secretaría General de Unasur para reimpulsar este proceso de integración?

Unasur ha venido promoviendo un programa de convergencia entre los distintos mecanismos subregionales de integración. Más concretamente, entre la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Mercosur, el ALBA, el Sistema de la Integración Centroamericana, el proceso del Caribe y todos estos recogidos bajo el gran paraguas de la Celac. La idea es identificar a través de una matriz de convergencia que hemos diseñado desde Unasur en qué sectores tenemos duplicidades que podemos eliminar, en qué sectores hay esfuerzos que se pueden sumar, en qué sectores hay una especialidad por parte de los procesos que puede mantenerse y fortalecerse a nombre de toda la región. La palabra convergencia es la que de mejor manera define en este momento los grandes retos que tenemos los procesos de integración.

El tema de la convergencia está apoyado por lo menos en tres principios fundamentales: solidaridad entre nosotros, soberanía en lo político y complementariedad en lo económico. Creo que a partir de la aplicación de estos principios vamos a ser capaces de sacar adelante un proyecto de integración que nos una a todos. Repito, el gran peligro que tiene en este momento la integración latinoamericana es el intento de algunos gobiernos de instalar su guerra ideológica dentro de los procesos mismos, lo cual sería realmente un acto de irresponsabilidad histórica, porque precisamente es a través de la preservación de estos escenarios como unos escenarios neutrales es que podemos aspirar a sacar adelante a América Latina.

Pero, ¿es viable que puedan converger proyectos con improntas y objetivos tan disímiles, y hasta antagónicos, como por ejemplo el ALBA y la Alianza del Pacífico?

Creo que la misma vocación de integración distinta de cada uno de los procesos ayuda a entender por qué en este momento no solamente es posible hablar de que hay unas bases para una mayor integración, sino que es deseable que la haya. Esta crisis no la podemos superar con menos integración, sino con más. Y hay que tener en cuenta que procesos como el del Mercosur o el del Caribe son procesos de integración física, o sea, de integración de mercancía, de apertura de mercado, de consolidación de ofertas exportables, inversión extranjera, y son esencialmente mecanismos de integración económica. Creo que el papel que pueden cumplir mecanismos como Unasur, Celac y el ALBA es el de fortalecer estas posibilidades de integración que tenemos que seguir trabajando para que haya más comercio, más inversión, más movilidad de personas entre nosotros, fortalecerlas con unos contenidos políticos, y estos contenidos en el caso de Unasur son muy claros: defender esta región como una región de paz, pero también hay experimentos de solidaridad como los que ha hecho Petrocaribe, concretamente en temas de subsidios a los países del Caribe; de la misma forma Celac aparece en el horizonte como una especie de interlocutor de estos procesos regionales y subregionales para entenderse con organismos multilaterales como Naciones Unidas.

Así que creo que estamos en un momento propicio, importante, interesante, para reorientar la integración apelando a sus orígenes, que es la buena relación entre los países en materia política.

A diferencia del resto de los organismos regionales, Unasur ha mantenido cierto dinamismo y capacidad de iniciativa. ¿Cuáles son las razones? Y, ¿cuáles cree que han sido los principales aportes que ha hecho Unasur a esta idea de integración regional?

Lo más significativo de Unasur ha sido que ha logrado preservar la continuidad democrática en momentos de crisis en la región, como las amenazas de golpe en Venezuela, cuando se conjuró el golpe contra Evo Morales en Bolivia, más cercanamente cuando se apoyó de una manera decidida la continuación del proceso de paz en Colombia... creo que han sido hechos significativos de la presencia de Unasur. Por lo demás, en el campo estrictamente sectorial, Unasur ha trabajado proyectos muy importantes en materia de relacionamiento de las fuerzas de defensa para tener una política común frente a la inseguridad hemisférica, y diría que personalmente el legado

más importante que le dejo a Unasur es el concepto de ciudadanía suramericana. La integración no es sólo un problema de movilizar capitales, cosas, o flujos de tecnología; la integración es también un problema de movilidad de personas, y creo que el futuro de la región está en su capacidad para utilizar sus consejos sectoriales de tal manera que podamos estructurar una política que permita la libre circulación de las personas.

Somos 420 millones de personas en un espacio de 17 millones y medio de metros cuadrados, tenemos el doble de superficie por habitante que cualquier otra región del mundo, grandes reservas de recursos naturales, el 20 por ciento de las reservas de petróleo, el 25 por ciento de las reservas hidroeléctricas, minerales, productos básicos como alimentos, granos, carne... creo que debemos, a partir de esa fortaleza, trabajar un concepto mucho más próximo a las personas. Por eso hemos impulsado un proyecto de ciudadanía suramericana, trabajamos en proyectos relacionados con la salud, con un banco de precios de medicamentos... En fin, una amplia gama de propuestas en materia de facilitar la movilidad de personas que nos va permitir crear un concepto mucho más profundo de lo que es la integración.

Primavera en el patio trasero: intentos soberanos e injerencia estadounidense durante el ciclo progresista

Francisco Longa¹ y Pablo Solana

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí
Augusto Monterroso

En la madrugada del 28 de junio de 2009 el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado a la fuerza de su casa, en pijama, por un comando militar. Lo subieron a un avión con destino a Costa Rica que hizo escala técnica en la base militar estadounidense de Palmerola, a 80 kilómetros de Tegucigalpa, donde se encuentra la Joint Task Force-Bravo del Comando Sur norteamericano. Allí mismo, hace algo más de 30 años, los Estados Unidos habían adiestrado a los contras, mercenarios con la misión de derrocar a la revolución sandinista en Nicaragua. Ahora, con el secuestro y expulsión del país de Zelaya, se consumaba el golpe de Estado que, según palabras del presidente derrocado, tuvo como objetivo debilitar a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el más audaz intento de integración regional.

Por aquellos días, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros líderes latinoamericanos mostraron su genuina desazón, con la misma intensidad con que apenas tres meses antes, en marzo de ese año, se habían manifestado entusiastas por el triunfo electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, previendo una expansión de las fuerzas de izquierda o progresistas que podían ganar gobiernos en la región. Pero el año 2009 resultó un punto de inflexión.

Hasta entonces, el ALBA venía en ascenso. Ya había sumado nueve miembros: Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua y Hon-

1. **Francisco Longa** (Buenos Aires, 1982) es becario del Conicet, doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Militante del Frente Popular Darío Santillán (Argentina).

duras. A partir del golpe contra el gobierno de Zelaya, el proyecto ALBA comenzó a decaer.

Imperialismo(s)

Las injerencias políticas, económicas o de extracción de bienes comunes en América Latina no son prácticas exclusivas de Estados Unidos. Durante los últimos años, por ejemplo, China montó proyectos de infraestructura a gran escala aprovechando la retracción de la economía estadounidense que tuvo lugar a partir de la crisis de 2008. La construcción de un canal que une el océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Nicaragua, parece repetir las estrategias de penetración que Estados Unidos implementó hace más de cien años. Al mismo tiempo, sostiene Maristella Svampa, “los vínculos con China estuvieron lejos de concretarse desde un bloque común que apuntara a negociar mejores condiciones a nivel regional. Al contrario, se impulsó la competencia entre los países a través de acuerdos bilaterales (que) acentuaron los intercambios asimétricos en el marco de una nueva dependencia”².

Sin desmedro de la gravedad y actualidad de estas lógicas renovadas de dependencia “multipolar”, la densidad histórica del accionar de EEUU y su política de desestabilización en la región –como la que ilustra el relato que abre este artículo– nos convoca a poner el foco, en estas líneas, en la injerencia norteamericana y sus consecuencias.

Bases militares y bienes comunes: “dominación de espectro completo”

En 2013, el secretario de Estado del gobierno de Barack Obama, John Kerry, dijo textualmente: “América Latina es nuestro patio trasero”. Si bien sus palabras causaron rechazo, en verdad Kerry no hizo más que repetir la política que Estados Unidos aplica desde 1823, cuando la Doctrina Monroe impulsó la conocida fórmula “América para los americanos” con el objetivo de demarcar el territorio ante las potencias europeas. En la misma línea, en 1904, el presidente Theodore Roosevelt declaró que “si algún país de América del Sur se comporta mal, debe ser castigado”; así surgió la política del “Big Stick” (Gran garrote), que definió la versión más agresiva del injerencismo en la región.

Un breve repaso de lo que siguió hasta nuestros días incluye la Alianza para el Progreso (1961-1970) impulsada por el gobierno de John F. Kennedy; la puesta en marcha del Comando Sur en 1963;

2. Svampa, M. “Crítica a los progresismos realmente existentes”. En este libro, pág. 61.

la Escuela de las Américas donde, desde 1946 y por cuarenta años, se formaron innumerables militares latinoamericanos que luego protagonizarían golpes de Estado (como Omar Torrijos en Panamá, Manuel Contreras en Chile o Leopoldo Galtieri en Argentina); la promoción de la Operación Cóndor, articulación de las acciones criminales de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1970 y 1980 más allá de las fronteras; el intento más reciente de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), y el apoyo a instituciones supuestamente benéficas y demostrablemente intervencionistas, como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID.

En cuanto a la presencia específicamente militar, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Investigación y Cartografía estableció que a la fecha existen en América Latina 85 bases norteamericanas: 39 fijas y otras 46 itinerantes³. Además, desde 2008 el Comando Sur reactivó la IV Flota (inactiva desde la década de 1950), con el fin de patrullar los mares del sur de América y del Caribe. Días después del golpe contra Zelaya, el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe confirmó que Estados Unidos instalaría siete nuevas bases militares en el país. Con la excusa de la “guerra contra el narcotráfico”, Colombia se convirtió en la principal zona de presencia militar norteamericana en América Latina: estas nuevas bases cuentan con sistemas aéreos y satelitales con capacidad para vigilar y, eventualmente, agredir a cualquier país de la región.

Entre 1998 y 2000, el Estado Mayor Conjunto del gobierno de Estados Unidos propuso una “dominación de espectro completo” para América Latina. El documento Santa Fe IV del año 2000, titulado *Latinoamérica Hoy*, sostiene que Estados Unidos necesita “que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales”. De tal forma, se apunta a que América Latina ocupe el lugar de provisión de recursos materiales y energéticos. El historiador colombiano Renán Vega Cantor explica que “América Latina suministra el 25 por ciento de todos los recursos naturales y energéticos que necesitan los Estados Unidos; aquí se encuentra el 25 por ciento de los bosques, el 40 por ciento de la biodiversidad del globo, el 27 por ciento del carbón, el 24 por cien-

3. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Mapa dominación espectro completo: http://www.geopolitica.ws/media/uploads/mapa_1._posicionamiento_gran_caribe.pdf [Consulta: 2/3/2017].

to del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial”⁴.

La localización de las bases militares coincide con las regiones geopolíticas clave, tanto por su posición en el tránsito de mercancías a nivel global –como en el caso del Caribe–, como por su cercanía a las reservas de recursos naturales.

Ciclo progresista: intentos soberanos e injerencia

Lo cierto es que, mientras fuerzas populares, progresistas o alternativas, ganaban elecciones en América Latina durante la última década larga, Estados Unidos reactualizó su repertorio injerencista. Aquí enumeramos solamente algunos de los hechos de mayor impacto, que se suman y dan contexto al ya mencionado golpe de Estado en Honduras:

- En 2002, la oposición a la Revolución Bolivariana en Venezuela logró sacar a Chávez del gobierno durante 48 horas, mediante un golpe de Estado que contó con probados apoyos de Estados Unidos: el embajador Charles Shapiro se apresuró a realizar su “visita de cortesía” al golpista Pedro Carmona mientras este ocupaba brevemente el sillón presidencial; tras los hechos, el repuesto gobierno bolivariano comprobó el aterrizaje de helicópteros militares norteamericanos en el aeropuerto de Maiquetía durante el golpe, al tiempo que buques de guerra penetraron ilegalmente en aguas del Caribe venezolano. Desde entonces hasta nuestros días, los intentos de derrocamiento y las ofensivas diplomáticas desde la Casa Blanca no sólo no cesaron, sino que encontraron algunos puntos de máxima tensión, como la orden ejecutiva que firmó Barack Obama en marzo de 2015 declarando a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria” para los intereses de los Estados Unidos, calificación que suele preceder a los intentos más agresivos de intervención militar.

- Durante la primera quincena de septiembre de 2008, Bolivia soportó un intento desestabilizador. El embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, en medio del conflicto, mantuvo reuniones secretas con uno de los líderes de la intentona: Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz. El diplomático reconoció uno de esos encuentros, pero adujo que solamente tuvo como objetivo entregar a los

4. Vega Cantor, R. (2013). “Las bases militares en América Latina. Colombia en la geopolítica imperialista”. En revista *Herramienta* N° 52.

líderes golpistas ayudas para realizar unas Olimpiadas Especiales y para cooperación tecnológica. El embajador norteamericano terminó expulsado por el gobierno de Bolivia, acusado de “conspirar contra la democracia”.

- Poco más de un año después del golpe en Honduras, el 30 de septiembre de 2010, Ecuador padeció un serio intento desestabilizador bajo la forma de asonada policial. Previo a los hechos, el periodista Juan-Guy Allard difundió un informe del Ministerio de Defensa del Ecuador que alertaba que “diplomáticos norteamericanos se dedican a corromper a la policía”, cuyos miembros “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos”. Lo cierto es que al menos uno de los detenidos tras la revuelta, el coronel Manuel E. Rivadeneira Tello, había sido formado por el Comando Sur en la Escuela de las Américas. Por otra parte, la investigadora Eva Golinger informó que el Departamento de Estado había aumentado notoriamente el presupuesto de la USAID en Ecuador: 38 millones de dólares fueron destinados durante ese año para financiar a sectores anticorreístas.

- En junio de 2012 fue desplazado de su cargo el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. “Mientras se realizaba el juicio político expreso contra el presidente democráticamente elegido, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos para negociar la instalación de una base militar en el Chaco”, denunció la periodista Stella Calloni. Efectivamente, en febrero de 2015 se inauguró en Paraguay un “Centro de Operaciones de Emergencias (COE)” bajo las directivas del Comando Sur. El referente del Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, Abel Irala, sostuvo que se trata de una política de “penetración imperialista con la formación de policías militarizadas y de cuerpos especiales de élite” para enfrentar a grupos insurgentes.

Es harto conocida la influencia e injerencia política en asuntos internos que asumen los diplomáticos de “La Embajada”, así a secas, como suele denominarse a las sedes diplomáticas norteamericanas en nuestros países.

La presencia militar y la presión política se complementan con una serie de iniciativas ideológicas y culturales que abarcan el financiamiento de fuerzas de derecha, especialmente en países donde hay gobiernos soberanos, mediante la promoción de ONG. En lo económico, esos condicionamientos toman la forma de *lobbys* empresariales o directamente de imposición de áreas de li-

bre comercio regionales, así como de Tratados de Libre Comercio bilaterales con los países de la región.

Los países del ALBA fueron durante la última década los que más promovieron la autonomía política respecto a Washington, y los que más padecieron sus intentos intervencionistas. Un caso emblemático es la ya mencionada USAID. Aunque en su nombre se proponga promover el “desarrollo”, es extensa la lista de denuncias a las dependencias de USAID en diversas partes de América por funcionar como entes de financiamiento de grupos opositores y golpistas. Eva Golinger sostiene que “sólo en Venezuela (los Estados Unidos) promovieron la creación de más de 400 nuevas organizaciones y programas. Así comenzaron a ampliar las redes de penetración e infiltración dentro de las comunidades populares, intentando debilitar y neutralizar la Revolución Bolivariana desde adentro”. En Bolivia, la USAID se instaló en una de las zonas más movilizadas y afines al gobierno de Evo Morales, la ciudad de El Alto, para brindar cursos autodenominados de “formación de líderes políticos no radicales”. Entre 2005 y 2006, esa ONG reorientó más del 75 por ciento de sus inversiones a los grupos separatistas que buscaban socavar al gobierno boliviano.

Antiimperialismo hoy

Hablar hoy de imperialismo no debe volverse un lugar común, tan caro al discurso denunciista de la izquierda. Las prácticas de intervención imperial deben ser analizadas a partir de situaciones concretas y en el marco de las luchas de poder que esas situaciones implican. Por caso, es interesante la mirada del economista argentino Claudio Katz, quien plantea que en el último tiempo la injerencia norteamericana perdió intensidad en América Latina, frente a otras prioridades geopolíticas: “Los marines y la IV Flota continuaron operando, pero no consumaron las típicas invasiones de Washington. Esta contención se verificó en el declive de la OEA: ese Ministerio de Colonias perdió peso frente a nuevos organismos (UNASUR, CELAC)”⁵. Sin embargo, el politólogo Atilio Boron, en su investigación *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, debate con quienes sostienen que la región ocupa un lugar de poca relevancia en las preocupaciones actuales de Estados Unidos. Allí afirma: “Esto es una falacia. América Latina es, para los Estados Unidos, la región más importante del planeta por su valor estra-

5. Katz, C. (2016). “Desenlaces del ciclo progresista”. En *Debates Urgentes* N° 5.

tégico, por su impacto regional y por su extraordinaria dotación de recursos naturales”⁶.

En suma: a través de estas líneas podemos concluir que la injerencia norteamericana no sólo persiste sino que, además, cobró nuevos bríos durante el ciclo progresista, sobre todo en aquellos países latinoamericanos que se propusieron fomentar mayores grados de autonomía regional frente a los dictámenes de los países centrales.

Que los intentos soberanos que acompañaron al ciclo progresista no hayan sido apenas una primavera –con la connotación pasajera y estacional que dicha palabra supone–, sino que se consoliden de modo estructural en la región, dependerá de los niveles de organización, conciencia y cooperación que existan entre los pueblos y entre los gobiernos de América Latina, y de la capacidad de librar batallas próximas, de resultados aún inciertos. Ante esa necesidad, como se aprecia en el breve *racconto* aquí expuesto, hay evidencia suficiente como para seguir alertando sobre la intensidad de la injerencia de las grandes potencias y, en consecuencia, sobre la necesidad de librar luchas antiimperialistas como requisito indispensable para cualquier proyecto emancipador.

6. Boron, A. (2012). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.

“El golpe en Honduras fue un plan establecido por Bush y seguido por Obama para debilitar al ALBA”

Entrevista a Manuel Zelaya¹

Teniendo en cuenta que su gobierno no había sido producto de procesos previos de lucha popular como en Bolivia, Ecuador o Venezuela, ni su partido provenía de una tradición de izquierda como el sandinismo, ¿a qué se debió la decisión de que Honduras ingresara al ALBA?

Honduras tiene más de un siglo, toda su historia, de estar bajo la égida del dólar. La pobreza, el crimen, la violencia, el narcotráfico, todo eso ha ido en crecimiento en el país, nunca se ha dado respuesta a la expectativas y demandas del pueblo.

Mi gobierno, que fue un período de prosperidad entre los años 2006 y 2009, tuvo los mejores indicadores sociales de la historia. Y eso fue así porque una de mis principales decisiones fue abrir Honduras a diferentes sociedades y sectores en el concierto de las naciones del mundo. Ubicar a Honduras en el sur tenía un significado profundo, no sólo para el proceso de desarrollo económico sino para el posicionamiento ideológico. Buscamos cumplir con la Constitución, que establece la fundación de una república libre, soberana e independiente. Ubicarnos en el contexto de naciones antiimperialistas también tuvo un significado importante: no aceptar las prácticas imperialistas. Eso nos ubicaba en un contexto de país soberano y democrático, con altísima responsabilidad social.

El ALBA es un proceso social para América Latina, impulsado por Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, y realmente la respuesta que tuvimos de los sectores más conservadores de Estados Unidos, los Halcones de Washington fue la planificación de un cruento golpe de Estado militar para debilitar el ALBA, debilitar el proyecto socialista, democrático

1. **Manuel Zelaya** (Juticalpa, 1952) fue presidente de Honduras entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009, cuando un golpe de Estado lo sacó del cargo. Diputado por el departamento de Olancho (2014-2018). Referente del partido Libertad y Refundación (LIBRE). [Entrevista realizada el 22 de enero de 2017].

y altamente ligado a los procesos históricos de demanda de independencia de los pueblos de América Latina.

Parcial o temporalmente, han conseguido ese objetivo: detener todo indicio de evolución de sus derechos en los pueblos de América Latina, y profundizar el modelo político y económico de explotación neoliberal, neocapitalista, en el proceso de globalización mundial. Esa es la raíz y el fondo del golpe de Estado que se dio en Honduras el 28 de junio de 2009, que derrocó un proceso democrático que aún no hemos podido restablecer.

Usted había propuesto construir un aeropuerto civil en la base militar de Palmerola, histórico centro de operaciones de los norteamericanos en la región. ¿Cree que influyó en el golpe el interés directo de Estados Unidos por mantener esa base estratégica? Teniendo en cuenta, además, que Washington mantiene más de 80 bases militares en América Latina.

Todo ese proceso tiene que ver con un concepto global de colonización y descolonización. Por ejemplo: la colonización, que es una forma de sometimiento, de dominio, de explotación muy conocida, ha sido ligada permanentemente a las potencias dominantes. En este caso, las medidas que mi administración tomó tuvieron que ver con el proceso de descolonización en el siglo **xxi**.

Medidas económicas, por ejemplo: abrir el mercado de los combustibles, quitar el monopolio a las transnacionales norteamericanas y europeas, traer fondos del ALBA, de Petrocaribe, que compitieran con los sistemas financieros de la banca nacional, que son oligopolios ligados a Wall Street. También descolonización militar. Eso es usar bases mixtas, para civiles y militares, que en este momento sólo usan los militares norteamericanos.

Medidas culturales: acercarse al sur es parte de una descolonización cultural y al mismo tiempo política, porque nos asociamos con conceptos de independencia y soberanía en América Latina que no han sido frecuentes en nuestros países.

Todo eso forma parte de un sistema en el cual Latinoamérica empieza, a través del Socialismo del siglo **xxi**, la descolonización que hoy ha tenido una agresión conservadora en todo el continente queriendo parar este proceso.

El Ejército que lo sacó de su casa aquella noche del golpe fue instruido, como muchos en nuestros países, en la Escuela de las Américas. ¿Cree que sigue habiendo en el factor militar una amenaza latente ante nuevos intentos de cambio?

Este ejercicio de restauración de las derechas internacionales para recapturar el poder que han estado perdiendo por los procesos democráticos de los pueblos latinoamericanos, sólo se puede llevar a cabo si tienen los instrumentos de la fuerza, el poder y las instituciones a su favor. En este sentido, las pruebas están claras. Los militares son un último recurso que usan las potencias, en este caso Estados Unidos, cuando han agotado todos los demás medios. Usan a los militares para golpes de Estado; para represiones, usan la fuerza; la intimidación para imponer sus criterios en nuestros países.

Asimismo, también sabemos que este posicionamiento ideológico de los ejércitos de América Latina obedece a su entrenamiento. Un militar sólo obedece a un militar superior, y en ese caso el militar superior es el Comando Sur de los Estados Unidos, y el subsiguiente, el Pentágono. Esto es lo que pasa con los ejércitos latinoamericanos.

Luego del golpe en Honduras se sucedieron la destitución de Fernando Lugo en Paraguay y el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. ¿En esos casos también estuvo la mano de Estados Unidos?

Los problemas de América Latina son ancestrales, no pueden verse aislados, como compartimentos estancos, son parte de todo un proceso histórico. El agotamiento del modelo colonial de explotación produjo efectos de rechazo y demanda de la población latinoamericana, especialmente desde hace muchas décadas pero que explotaron en grandes conflagraciones: la revolución cubana, la revolución chilena con Salvador Allende, el Bogotazo, el Caracazo, la misma revolución mexicana. Cuántos procesos de emancipación de los pueblos hemos tenido aquí en el último siglo. Hoy estamos viviendo lo que nosotros conocemos como la reacción neoconservadora, que se ha establecido para detener las manifestaciones de demanda del proceso del Socialismo del siglo XXI, que fue una respuesta ante el agotamiento del modelo capitalista neoliberal.

Honduras es el ejemplo vivo de esa situación de América Latina. Empezaron por Honduras para destruir el ALBA, Petrocaribe, las alianzas que teníamos con los países antiimperialistas, y siguieron con las bases militares que rodean a Venezuela, en Colombia; con el golpe de Estado contra el presidente paraguayo Fernando Lugo, contra Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, con el intento contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, con el cambio de política estratégica contra Cuba para tratar de invadirla de otra forma.

Todo esto es parte de un plan desde los Estados Unidos que establece el gobierno de George Bush y lo continúa el gobierno

de Barack Obama. No tengo la menor duda de que el objetivo es político, de poder, para hacer conquistas económicas.

Durante la presidencia de Donald Trump, ¿cree que habrá una injerencia norteamericana más agresiva en América Latina?

La restauración conservadora ha venido a agredir el proceso de cambios sociales de los pueblos, incluyendo Venezuela, Ecuador, Honduras. Esa restauración no es pacífica ni democrática, ellos han dado golpes de Estado, han hecho fraudes, han destituido ilegalmente gobiernos democráticos, y esa situación es casi un grito de desesperanza del conservadurismo más duro, que acaba de ganar en Estados Unidos con Donald Trump; lo mismo sucede en lugares de Europa. No deben ser vistos como hechos aislados, es parte de un proceso histórico. Pero el derecho de los pueblos a manifestarse, a demandar, a buscar igualdad, condiciones de libertad, eso es eterno, eso no lo pueden detener. Podrán ponerle obstáculos, pero jamás detenerlo.

Habiendo transcurrido ya varios años del golpe de Estado, ¿cuáles son las principales secuelas que dejó para Honduras y para Latinoamérica?

Yo les diría: si quieren una visión clara del futuro, mírense en el espejo de Honduras. Por aquí empezaron con la restauración conservadora. Aquí Estados Unidos está probando, elaborando un laboratorio de lo que será América Latina en el futuro, bajo su óptica, sus intereses: un territorio dominado por las transnacionales y por ejércitos privados. Han militarizado totalmente la sociedad, han concentrado el poder de una forma extraordinaria y viven dominando los pueblos sometidos por represión, por el fraude y por leyes draconianas que aplican un derecho penal coercitivo y criminal. Esa es la realidad de Honduras. Tiene el más bajo crecimiento económico desde el golpe de Estado, el mayor aumento de la pobreza, de la violencia, masacres todos los días, corrupción.

Honduras está viviendo un abismo desde ese momento. Como dice el derecho penal, hay una premisa que establece que el más beneficiado de un crimen es el más sospechoso. En este caso, el sistema neoliberal, de privatización de servicios públicos y del gobierno transnacional ha sido el más beneficiado por el golpe de Estado. Su objetivo es detener el ALBA con una visión de opresión, marginalidad y exclusión. Ahora, con la era Trump, creo que esto va por mal camino. Va a ser peor la situación porque van a endurecer las medidas contra nuestros pueblos.

Parte II

Los procesos en las “patrias chicas”



Diego González Leal (Claypole, 1982), conocido como *Cabro*, es militante y artista popular. Publica ilustraciones y poemas en el portal *Marcha* de Argentina y en otras publicaciones.

Del mito populista a la restauración de derecha

Martín Obregón¹

Fue de una manera un tanto inesperada, y sobre las ruinas del modelo económico neoliberal y de las formas tradicionales de la representación política, que se sentaron las bases del edificio kirchnerista. Apenas caído el gobierno de Fernando de la Rúa, a fines de 2001, se hizo evidente que el amplio y heterogéneo conjunto de organizaciones populares, que había protagonizado la lucha contra el neoliberalismo y jugado un rol fundamental en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, no estaba en condiciones de ofrecer una alternativa política.

En un escenario caracterizado por la fragmentación, la incertidumbre, la debilidad relativa de la casi totalidad de los actores y una fractura en el interior de las clases dominantes, el poder político volvió a caer, casi por descarte, en las siempre flexibles estructuras del Partido Justicialista (PJ) y, más específicamente, en quien controlaba la más poderosa de ellas. A comienzos de 2002, Eduardo Duhalde, hombre fuerte del peronismo bonaerense y vocero de los grandes grupos empresariales que impulsaban el fin de la convertibilidad, fue designado presidente por la Asamblea Legislativa y dispuso una serie de medidas (entre las que se destaca la mayor devaluación del tipo de cambio de toda la historia argentina) que tuvieron efectos devastadores para los sectores asalariados, a costa de los que se pudo, de manera paulatina, estabilizar la situación económica.

A mediados de ese mismo año, la Masacre de Avellaneda puso fin al proyecto político duhaldista, obligando al entonces presidente a adelantar las elecciones y a buscar, de apuro, algún delfín que garantizara la continuidad de sus políticas. Así fue como Néstor Kirchner, lejos de toda épica, se encontró de buenas a primeras con un esce-

1. **Martín Obregón** (Trelew, 1971). Profesor de Historia. Docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Escritor, ensayista y militante popular. Formó parte del MTD Aníbal Verón y del Frente Popular Darío Santillán.

nario que lo catapultó a la presidencia, a la que accedió luego de ser el segundo candidato más votado (detrás del ex presidente Carlos Menem) y superando apenas el 22 por ciento de los sufragios.

Recomposición económica, desmovilización social y politización “desde arriba”

Tomando nota de su debilidad de origen, el nuevo presidente dio muestras de una enorme iniciativa política, adoptando algunas medidas que despertaron la adhesión de amplios sectores sociales, como la reforma de la Corte Suprema de Justicia y la anulación de las leyes de impunidad que beneficiaban a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Esta última medida posibilitó la reapertura de los juicios a los genocidas, dando lugar a un cambio radical en las políticas oficiales en relación a los derechos humanos y haciendo que importantes referentes populares (como Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) brindaran al gobierno un apoyo decidido.

Algo similar ocurrió en el ámbito de las relaciones exteriores, donde muy tempranamente se advirtieron signos de independencia con respecto a los Estados Unidos, en un contexto latinoamericano caracterizado por el avance de gobiernos populares y antiimperialistas que alcanzaría su punto más alto a fines de 2005, en Mar del Plata, con el rechazo a la propuesta del ALCA impulsada por el entonces presidente norteamericano George W. Bush.

Por otro lado, en el ámbito de una economía que tímidamente daba muestras de recuperación, el nuevo gobierno optó por no innovar, ratificando en líneas generales el rumbo de la gestión anterior y profundizando incluso tanto el sesgo intervencionista como la alianza con los grandes grupos económicos que se favorecieron con la devaluación. Sobre los pilares de una formidable rentabilidad empresarial y un auge exportador sólo comparable al de las primeras décadas del siglo xx, la economía comenzó a crecer a tasas significativamente altas, lo que dio lugar a un proceso de recuperación del empleo que implicó una considerable mejora en los ingresos de las clases populares.

Sobre este trasfondo se adoptó una política muy activa en relación a las organizaciones populares –en especial las de desocupados–, que habían desempeñado un papel protagónico durante los últimos años del neoliberalismo. Si por un lado se evitaba la represión abierta, por el otro se desplegaban un conjunto de mecanismos tendientes a subordinarlas y verticalizarlas. Todas las organizaciones piqueteras, incluso las más combativas, fueron invitadas a sumarse a lo que ya el gobierno denominaba su proyecto político. Los beneficios de acep-

tar el convite eran contantes y sonantes (alimentos, planes sociales y subsidios) pero implicaban subordinarse a las políticas oficiales y renunciar a la lucha reivindicativa. Algunas organizaciones aceptaron la propuesta y se sumaron al oficialismo, en tanto que otras adoptaron un tono marcadamente opositor que se fue acentuando ante la firme negativa del gobierno a satisfacer sus demandas. Las organizaciones piqueteras más combativas mantuvieron las lógicas de los peores años de la crisis y se adecuaron mal al nuevo contexto, caracterizado por la reactivación económica, la recomposición del sistema político y una “demanda de normalidad” que ganaba terreno en amplios sectores. El gobierno, que contaba entre sus filas a muchos dirigentes que conocían al dedillo las lógicas de las organizaciones sociales y sindicales, apostó a su desgaste y aislamiento, hasta acordar con ellas, cooptarlas o derrotarlas políticamente.

El kirchnerismo afianzaba así su proyecto político al tiempo que definía sus límites, ya que lejos de apoyarse en la movilización popular que había desembocado en la insurrección de 2001 hacía todo lo posible por terminar con ella y despojarla de sus nervios más potentes. Al prescindir del protagonismo popular se terminó impulsando un proceso de politización “desde arriba”, que con el tiempo se convertiría en una de las limitaciones estructurales del kirchnerismo.

Otra limitación, no menos importante, tuvo lugar en el campo de la arquitectura política, cuando el gobierno de Néstor Kirchner dejó de lado la idea, vagamente esbozada durante la primera mitad de su gobierno, de impulsar una fuerza política más amplia (sintetizada en el término “transversalidad”) y terminó apoyándose finalmente en los sectores más tradicionales del PJ, a partir de una política de alianzas con gobernadores e intendentes que ejercían el control de sus territorios. Este giro comenzó a insinuarse luego de las elecciones legislativas de 2005 –en las que el gobierno derrotó a los sectores más conservadores del partido– y culminó con la propia designación de Kirchner a la cabeza del PJ en 2008. De esta forma, la recomposición del sistema político, que había sido uno de los objetivos centrales del nuevo gobierno, derivó en una restauración de la clase política tradicional y en un afianzamiento de las viejas lógicas de poder.

La versión kirchnerista del peronismo: el mito populista

Una vez afianzado en el terreno de la economía y habiendo logrado el doble objetivo de contener la protesta social y recomponer las instituciones del sistema, el kirchnerismo echó mano de un vocabulario político que pretendía deslindar cualquier complicidad con

la década neoliberal y tender puentes con la tradición del peronismo clásico, enfatizando la importancia del Estado, de la industria, del mercado interno, del consumo y de la inclusión social. Hasta se habló de una reedición de la alianza populista entre la burguesía nacional y la clase obrera.

Pero los puntos de contacto con el primer peronismo eran mayores en el nivel discursivo que en el de la experiencia histórica concreta. Es verdad que el Estado empezó a intervenir activamente en la economía (incluso se estatizó el servicio de correo y el de agua potable) y que el kirchnerismo logró articular –al menos durante unos cuantos años– una coalición que benefició a los grandes grupos empresariales y también (aunque en una medida mucho menor) a los distintos sectores de las clases subalternas, que lograron recuperar parte de sus ingresos a través del crecimiento del empleo. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido sesenta años atrás, los sectores empresariales que apoyaron al kirchnerismo y se beneficiaron con sus políticas poco tenían que ver con aquella burguesía nacional centrada en la industria y en el mercado interno; más bien representaban a enormes corporaciones con altos niveles de concentración y extranjerización, cuya rentabilidad dependía más de la consolidación de su capacidad exportadora que de la expansión del mercado local. El formidable crecimiento económico de estos años, los recursos que el Estado obtenía a través de las retenciones y las alianzas políticas tejidas con gobernadores estrechamente vinculados a los grandes emporios mineros y sojeros, llevó al gobierno a consolidar el modelo primario exportador, lo que impidió modificar la matriz productiva del país.

Tampoco la clase obrera, mucho menos homogénea y gravitante que a mediados de 1940, podía desempeñar el papel de aquellos años en tanto fuerza social movilizada. El sindicalismo tradicional conservaba un importante poder de veto, con el que necesariamente había que negociar, pero sus altos niveles de burocratización habían socavado su capacidad (y sobre todo su voluntad política) de movilizar a una base social cuya identidad política (el peronismo) también se había licuado de manera considerable. Es por ello que quienes se identificaban con el kirchnerismo desde una perspectiva más claramente ideológica y adherían con más entusiasmo a sus políticas no estaban por dentro sino por fuera de esta mítica alianza populista y se ubicaban, mayoritariamente, en ciertas franjas de la clase media progresista. No habría que descartar, en este sentido, que haya sido precisamente la ausencia de una impronta plebeya en la versión kirchnerista del peronismo lo que facilitó la adhesión de estos sectores

de clase media. No contar con una base social movilizada, encuadrada en organizaciones sindicales y de masas, e ideológicamente comprometida con lo que se dio en llamar “el proyecto nacional y popular”, constituyó el talón de Aquiles del kirchnerismo.

Enfrentamiento con las patronales del campo y “giro a la izquierda”

Varios factores confluyeron para dinamitar el esquema de poder del kirchnerismo durante los meses iniciales del primer gobierno de Cristina Fernández. Entre ellos cabe señalar el aumento de las pujas distributivas en el contexto de una economía que ya había ocupado todo el espacio que había dejado vacante la crisis de 2001 y el impacto de la crisis económica internacional. Las cosas se precipitaron cuando a comienzos de 2008, ante una subida exorbitante en el precio de la soja, el gobierno vio la posibilidad de engrosar sus arcas aumentando los impuestos a las exportaciones. El conflicto con las corporaciones rurales derivó en un enfrentamiento de proporciones inimaginables, que llevó a los sectores más concentrados del poder económico y a los grandes medios de comunicación vinculados a ellos a pasarse, con armas y bagajes, al campo de la oposición política.

La derrota del gobierno no sólo daba cuenta de la fortaleza de los sectores agroexportadores y los grandes medios de comunicación, sino que también venía a mostrar hasta qué punto había madurado, sobre todo en los sectores con mayor capacidad de consumo, una cierta “sensibilidad antikirchnerista” que en ocasiones apuntaba más al estilo político que a las medidas efectivamente adoptadas. A pesar de que el gobierno apeló, de manera excepcional, a la movilización de las estructuras sindicales, de las organizaciones sociales afines y de la clase media progresista, una oposición de derecha carente de referencias políticas claras terminó ganándole la calle y poniéndolo contra las cuerdas.

Cuando todo parecía indicar que el gobierno se doblegaría ante las grandes corporaciones económicas y mediáticas y se hablaba incluso de “poskirchnerismo”, el gobierno de Cristina Fernández sorprendió a propios y extraños con una verdadera fuga hacia adelante, que comenzó con la estatización de las jubilaciones privadas y de la televisión de los partidos de fútbol, continuó con el anuncio de la Asignación Universal por Hijo, la sanción de la Ley de Medios y la Ley de Matrimonio Igualitario –tres medidas que desde tiempo atrás venían siendo reclamadas por las organizaciones populares– y culminó con la reestatización parcial de la petrolera YPF a fines de 2012. Este “giro a la izquierda” le permitió al gobierno recuperarse de la derrota sufrida en las elecciones legislativas de 2009 y alcanzar el punto más alto de aceptación social a fines de 2011, cuando Cristina Fernández fue reelecta

con un impactante 54 por ciento de los votos. En el interín, sobre todo luego de los festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo y de la repentina muerte de Néstor Kirchner, en 2010, se fue consolidando, de la mano de una retórica antiimperialista y antioligárquica, una especie de “épica kirchnerista” que no estuvo exenta de ritualismos y sobreactuaciones, ya que las políticas gubernamentales, incluso las más avanzadas e inclusivas, lejos estuvieron de modificar una matriz productiva que consolidaba el modelo primario exportador y que beneficiaba a los sectores más concentrados del poder económico, entre los que se encontraban grandes firmas agroindustriales, petroleras y mineras.

Los límites del proyecto kirchnerista y la restauración de derecha

Desde fines de 2011, cuando el gobierno rompió con una parte importante del sindicalismo tradicional, su base de sustentación –no así su popularidad– se debilitó de manera sustancial, lo que lo llevó a recostarse cada vez más sobre sectores de la clase media progresista con escasa capacidad de movilización y de incidencia en la dinámica de la lucha de clases. Al mismo tiempo, la oposición al gobierno se fue amalgamando en torno a un burdo sentido común de derecha que lo tildaba de demagógico, corrupto, autoritario y populista.

Ese momento coincide, además, con una fuerte desaceleración del crecimiento económico, con un aumento de la conflictividad sindical impulsada por corrientes combativas y antiburocráticas y con la implementación del llamado “cepo cambiario”, que impactó fuertemente (más en un nivel simbólico que real) en sectores de clase media y alta. A partir de entonces, el gobierno optó por subirle el tono a la disputa verbal con los grandes medios de comunicación, sin advertir un descontento creciente en importantes franjas de las clases populares, ya que a pesar de los innegables avances que tuvieron lugar desde el punto de vista de la inclusión social, las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos continuaron signadas por la precarización, los bajos salarios, la falta de seguridad y múltiples dificultades en materia de vivienda, transporte, salud y educación.

Sin prestar atención a este conjunto de demandas insatisfechas y a la falta de una estrategia clara en relación a la sucesión presidencial, nunca se podría comprender el avance de una oposición de derecha que fue ganando terreno hasta imponerse en las urnas a fines de 2015, cuando la brecha entre una retórica nacional y popular y la realidad cotidiana no hizo más que agrandarse. La candidatura de Daniel Scioli, representante de los sectores más conservadores del PJ, terminó sellando la derrota electoral y poniendo en evidencia los límites del proyecto kirchnerista.

Las dos fases de una década y el desafío de reconducir el proceso

Jorge Viaña¹

Una década es suficiente tiempo para que se decanten tendencias dominantes en un proceso como el que vivimos. Voy a adelantar la hipótesis de que la tendencia que prioriza los logros económicos (equilibrios fiscal y monetario, crecimiento por medio de la expansión de la demanda interna vía consumo, redistribución de la riqueza, etc.) terminó imponiéndose como los casi únicos objetivos fundamentales, no pudiendo ser compatibilizados con una transformación política más profunda. En síntesis: entre 2006 y 2010 vivimos una etapa progresiva y transformadora, y desde 2010 estamos viviendo una etapa regresiva, fundamentalmente porque desde ese año comenzó la etapa de construcción institucional del Estado que revivió y fue generando tendencias conservadoras, lo que empezó a manifestarse primero con el “gasolinazo” de 2010 y luego en el manejo político del conflicto del TIPNIS en 2011.

Es decir que la recuperación del excedente y su redistribución y la necesidad de construir institucionalidad estatal desde 2010 no se pudo compatibilizar con sostener un proceso político de construcción de poder popular desde abajo, de reorganización organizativa, de construcción de capacidades sociales, de reapropiación de las atribuciones del Estado subsumidas y apropiadas en y por la sociedad, como justamente se intentó –y se sigue intentando– en Venezuela después del golpe de 2002, donde fue vital la reorganización a gran escala para lanzar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En Bolivia eso no se hizo, siendo el déficit más grande del proceso.

Los éxitos económicos traen desafíos revolucionarios

Los éxitos económicos que pasamos a describir fueron poco a poco inviabilizando –en una perspectiva pragmático estatalista

1. **Jorge Viaña** (La Paz, 1968) es investigador y economista. Profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz. Miembro del grupo de investigación sobre Estado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Autor del libro *Configuración y horizontes del Estado Plurinacional*.

economicista— como los aspectos políticos de un proyecto como el que veníamos construyendo de creciente proceso de desmonopolización de la política y del poder, y de construcción de mayores trechos de autogobierno y autoorganización. No tiene que ser necesariamente así, que la economía sea contradictoria con la política, pero parecería que se fueron tomando decisiones políticas entre 2010 y 2011 que fueron definiendo la balanza hacia esta perspectiva, la de convertir un modelo económico provisional en permanente y quitarle prioridad a la construcción de poder popular, sólo limitándose a pedir el voto en coyunturas electorales. Puras lógicas liberales y maquinarias electorales.

Veamos más en detalle²: en 2005, el PBI era aproximadamente de 9.500 millones de dólares, y en 2013 pasó a unos 36.000 millones, o sea, un crecimiento de casi cuatro veces. El PBI creció en promedio 5 por ciento entre 2005 y 2013. El superávit, en el mismo periodo, fue de 2 por ciento promedio, un logro enorme frente a cuarenta años de déficit crónico de la economía boliviana. Las reservas internacionales llegaron a ser el 50 por ciento del PBI en 2012, cuando en 2005 representaban sólo un 13 por ciento de un PBI cuatro veces menor.

La renta petrolera pasó de 673 millones de dólares en 2005 a 5.459 millones en 2013, y la inversión pública, de 600 millones de dólares a 2.874 millones. Es indudable la importancia de la construcción de una economía estable y en crecimiento, pero no se pudo articular esa bisagra con los aspectos políticos emancipatorios, de forma que empezaron a convertirse en mutuamente excluyentes. Debemos aplaudir que la pobreza extrema se haya reducido del 38,2 por ciento en 2005 a 21,6 por ciento en 2012, con dos millones de personas saliendo de esa condición. Y que la pobreza moderada haya pasado, en el mismo periodo, del 60,6 al 45 por ciento. Pero estas proezas económicas traen tareas de mayor envergadura política y de mayor precisión estratégica que se fueron dejando de lado. Me refiero a la necesidad de conducir políticamente este proceso de transformaciones. En términos sencillos: trabajo político en las clases populares para seguir construyendo el horizonte estratégico e incorporar contenido desde las bases a la “Democracia Intercultural”, el “Buen Vivir”, el “Socialismo Comunitario” y el “Estado Plurinacional”.

Teníamos el reto de hacer un trabajo político de envergadura para que esos millones de personas que salieron de la pobreza e ingresaron a las clases medias no acabaran creyendo que de lo que se trata es sólo de pagar poco por las tarifas e incrementar su consumo.

2. Todos los datos de este acápite son sacados de Loza: 2014 y Paz: 2014.

Más bien se ha reforzado, con el pragmatismo estatista economicista, la adulación y despolitización de estos sectores en vez de hacer una labor de concientización y conducción política. Entonces, estos innegables logros económicos son los que, paradójicamente, pueden sepultar el proceso por esta falta de trabajo político, como parecería estar pasando en Argentina y Brasil.

Balance significativo e importancia de la autocrítica

Periodo 2006-2009. Lo que le dio fuerza a este proceso estatal fue la agenda que se construyó en décadas de lucha colectiva de masas, en especial en el quinquenio de 2000 a 2005, sintetizada en dos medidas: nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente, que se implementaron en los primeros cuatro meses. Claramente, estas dos medidas fueron las fundamentales del gobierno hasta hoy.

Este es un período en el que el bloque de poder popular en el gobierno tiene ciertas limitaciones, poderes locales y ciudades importantes controladas por la oposición, no tiene mayoría en Congreso, etc. Esto dura hasta 2008-2009, cuando se viabiliza la Constituyente y los sectores conservadores pierden la capacidad de influir en la agenda política con la derrota político militar de septiembre de 2008³. Paradójicamente, ahí se inician también las contradicciones internas en el bloque de poder.

Periodo de rebote dialéctico y continuidad

Los años 2009 y 2010 fueron claves. El balance está basado en coincidencias fundamentales con compañeros como Juan Carlos Pinto, Alfredo Rada y Rafael Puente, todos con altas funciones en el Estado (en el pasado y algunos también en el presente) pero –y más importante– con una larga e intachable trayectoria de décadas de lucha.

El interesante planteamiento del rebote dialéctico ayuda mucho a comprender la vinculación entre los éxitos de 2009 y la incapacidad de administrar esas victorias en una perspectiva emancipatoria. Como plantea Puente, lo fundamental desde ese momento es la sensación de “sentimiento de poder total que resulta embriagador”, pero precisamente por eso es que, dice, “por una parte los conflictos ya no son contra la oposición sino que se dan dentro del campo popular”.

Alfredo Rada, actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, coincide en que hay un momento de “fisuras y

3. Para consultar un análisis más detallado de este periodo ver Viaña: 2012, Viaña: 2014.

reconstitución” en el que se da un reflujo, que comenzó “al cerrarse el proceso constituyente” (fines de 2008).

En palabras de Juan Carlos Pinto, el análisis de lo que vendría en 2010 plantea “un progresivo desgaste del pacto estructural entre las organizaciones sociales y el Estado Plurinacional”. Según muchos de los balances de compañeros críticos pero comprometidos con el proceso, entre el cierre de la etapa constituyente hasta 2011 asistimos a un reflujo, a una atenuación del proceso de cambio, a una etapa de fisuras en el bloque de poder en el gobierno y de progresivo desgaste estructural.

Desde 2010-2011 vivimos en este escenario en el que implosionan las contradicciones internas. Los hitos del “gasolinazo” y el manejo político del conflicto del TIPNIS se manifiestan como síntomas claros del tránsito a lo que Puente llama “la tercera fase dialéctica de los dos mil días”. Si a esto se le suma un factor esencial, como es la aprobación de las cinco leyes fundamentales que iniciaban un tipo de construcción institucional del Estado Plurinacional, parecería que esta etapa fue consolidando de manera mucho más clara la época. La reflexión de Pinto nos alumbra este aspecto central: “La etapa en la que vivimos corresponde a la institucionalidad estatal”, elemento regresivo general que tiende a mover todo el proceso hacia sus aspectos más conservadores.

El punto central del proceso que analizamos es que a la vez que se abren las contradicciones internas se consolidan las tendencias estatistas pragmáticas, y todo en un momento de acumulación de contradicciones políticas. No es posible leer esta coyuntura de forma abstracta como una quinta etapa del proceso de cambio, como el surgimiento abstracto de contradicciones creativas. “La relación entre el Estado Plurinacional y las organizaciones sociales no se estaba definiendo en los términos de ‘tensiones creativas’ sino más bien el Estado estaba subsumiendo a las dirigencias”, reflexiona Pinto. Entre 2009 y 2011 se han decantado tendencias que hoy sólo se profundizan, de una etapa regresiva por no contrarrestar políticamente tanto las tendencias regresivas de la construcción del Estado como por no conducir políticamente los éxitos económicos descritos.

Insistiendo en la relación específica de lo que pasaba en la relación del “instrumento político” con el Estado, en palabras de Pinto “la conclusión parece apuntar a que el Estado no puede ni debe asumir la tentación de absolutizar su poder. El instrumento político exitoso en las urnas, en realidad, se fue vaciando de contenido político revolucionario y se limitó a sostener el ‘evismo’, se convirtió

(el instrumento político) en el mismo freno del desarrollo político de la transformación revolucionaria”.

No es suficiente ganar la pulseada a los sectores conservadores, que se da con costos enormes a fines de 2008. Es necesario mantener un horizonte político estratégico de transformaciones y no caer en el coyunturalismo liberal electoral. Como no se pudo hacer esto, empezó a primar el pragmatismo estatalista economicista y las fuerzas conservadoras “constructoras de estados”.

Los últimos procesos electorales han planteado desafíos enormes. Se ha perdido en la gobernación de La Paz y en las alcaldías de Cochabamba, La Paz y El Alto y, peor aún, se ha perdido el referéndum en febrero de 2016 que buscaba cambiar la Constitución y habilitar una nueva postulación de Evo Morales en 2019. En medio de una ofensiva conservadora en la región, es urgente retomar una reflexión autocrítica que permita abrir un escenario de construcción colectiva de agenda desde la sociedad y reconducir el proceso de cambio.

A manera de conclusión

Más que nunca es necesario plantearse un reagrupamiento de las tendencias auténticamente autoemancipatorias de la forma lo más amplia posible, para ir construyendo una agenda desde la sociedad y comprendiendo la importancia de la interlocución con el germen de Estado Plurinacional que hemos construido con todas sus deficiencias e insuficiencias.

Un reagrupamiento que entienda la importancia de la necesaria autocrítica, corrección y rectificación del proceso que estamos viviendo desde 2010. Es fundamental plantearse un trabajo a gran escala por la construcción de poder popular desde abajo, de reorganización que apunte al socialismo comunitario, de politización de los nuevos sectores medios en vez de adularlos. Retomar viejos debates sobre cómo avanzar hacia el socialismo comunitario con realismo y tal vez lentamente pero con ese norte desde hoy mismo.

Estamos ante el desafío de mantener y sostener un proceso económico que no se descomponga, pero que equilibre con la construcción de lo que Alfredo Rada llama “radicalizar las conquistas democráticas”. Retomar la perspectiva de potenciar las formas de autoorganización social autónoma, construcción de formas de autogobierno social, comunitarización del Estado, etc. Todo esto es imposible si no encaramos un proceso de largo aliento pero urgente de autocrítica sincera que salga de sólo salvar cada vez con mayores déficits las coyunturas y sostener la gobernabilidad del poder.

Debemos ver dónde hemos tomado el Estado y dónde el Estado nos ha tomado a nosotros, y dejar de ver a toda persona que hace autocrítica sincera y constructiva con sospecha. Un proceso como el que estamos viviendo no pudo depender de un individuo por muy meritorio que sea. Debemos construir liderazgos colectivos como reclama Pinto.

Debemos encarar un proceso de neutralización del pragmatismo estatalista economicista, de neutralización de las tendencias conservadoras que inició en 2010 con la construcción de una forma del Estado plurinacional, sin desconocer la importancia de la recuperación del excedente y su redistribución pero siendo conscientes de la urgencia de hacer el trabajo político revolucionario y no electoral. El desafío es la construcción colectiva de esta agenda desde las bases.

La construcción del socialismo empieza hoy mismo, en las prácticas. Debemos hacer un análisis del poder y de los laberintos en los que acabamos atrapados por caer en lo que decimos combatir. En fin, estamos ante un momento en que las presiones económicas y la acumulación de contradicciones no pueden ser resueltas con las lógicas, dinámicas y decisiones políticas que se han ido tomando desde 2010. Corremos el riesgo de que las extraordinarias conquistas económicas, por los desafíos que plantean y los graves errores políticos que cometemos, acaben sepultando el proceso.

Bibliografía citada:

- Loza, Gabriel (2014). *La política económica del gobierno de Evo Morales 2006-2013*. PNUD, CIS. La Paz.
- Paz, Verónica (2014). *Nuevos Caminos de la política social en Bolivia, el rol de las transferencias en efectivo 2006 – 2012*. PNUD, CIS. La Paz.
- Pinto, Juan Carlos (2014). “El proceso de cambio en el segundo periodo de Evo Morales”. En: *Separata Andamios*. PNUD. La Paz.
- Viaña, Jorge (2011). “Construyendo fundamentos en la lucha por un socialismo Comunitario”. En *Debates sobre el Cambio*. La Paz. Vicepresidencia.
- Viaña, Jorge (2012). “Estado Plurinacional y nueva fase del proceso boliviano” En: *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*. CLACSO, ARCIS. Santiago.
- Viaña, Foronda, Pruden (2014) *Configuración y horizontes del Estado Plurinacional*. CIS. La Paz.

Chavismo: apuntes para una genealogía

Reinaldo Iturriza López¹

Las razones de un encono

Comencemos por plantear el problema en los términos correctos: en Venezuela no está en crisis un “gobierno progresista”. Lo que está en crisis terminal es un modelo de sociedad. Su correlato económico, eso que se ha dado en llamar “capitalismo rentístico petrolero”, entró en crisis severa a finales de 1970, y con este entraron en crisis sus correlatos políticos, culturales y sociales. En este contexto histórico, en los tempranos 1980 comienzan a organizarse los militares que se rebelarían en 1992, y es debido a la magnitud de esta crisis que ocurre la rebelión popular conocida como Caracazo de 1989. El chavismo es el proceso de subjetivación política que resulta de estas dos rebeliones.

Tal proceso de subjetivación política, de forja del chavismo, tiene lugar en una década virtuosa en cuanto a política revolucionaria, y mientras avanza el neoliberalismo en Venezuela y en toda Nuestra América, durante lo que conocemos como la década perdida. Es este intenso trabajo de forja, de maceramiento de una nueva cultura política, escasamente estudiado por nosotros, lo que explica el vigoroso empuje inicial del chavismo, su capacidad de resistencia: no sólo enfrenta con eficacia paros patronales, golpe de Estado, sabotaje económico, violencia política, terrorismo, sino que se hace sujeto protagonista de políticas que pronto se traducirán en el disfrute y ejercicio de derechos de todo tipo, en la reducción progresiva de la pobreza, etc.

Tras sucesivos contraataques políticos exitosos, habiendo alcanzado suficiente ventaja estratégica, Hugo Chávez plantea la vía venezolana al socialismo, que en líneas muy gruesas se traduciría así:

1. **Reinaldo Iturriza López** (Puerto Ordaz, 1973) es sociólogo, escritor, analista político y docente universitario. Fue ministro de las Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela (abril de 2013 a septiembre de 2014) y ministro de Cultura (septiembre de 2014 a enero de 2016).

amplias libertades políticas, conflicto político dirimido en el terreno electoral, multiplicación de espacios de participación con la creación de los Consejos Comunales (elegidos mediante el voto popular) y luego creación de las Comunas; control del Estado sobre áreas estratégicas de la economía, disputa con grandes oligopolios por el control de mercados, margen de acción a la iniciativa privada, recuperación de tierras ociosas; esfuerzo por construir la unidad nuestroamericana; creación del PSUV, etc.

Al chavismo le anima, en lo interno, la voluntad de ir más allá de la distribución popular de la renta petrolera y la multiplicación de los espacios de participación y autogobierno popular, y en lo externo, retomar el proyecto truncado de Nación nuestroamericana, que blindaría y haría viable el cambio de época.

De manera muy sumaria: los vaivenes de la política después de Chávez no hacen sino dejar en evidencia, una y otra vez, que la eventual fortaleza o debilidad del chavismo acelera o retrasa, según sea el caso, la resolución de la crisis. De un lado, la fortaleza del chavismo no sólo ha garantizado la continuidad de la democracia venezolana, sino que ha evitado la lucha fratricida, alentada por las líneas de fuerza más conservadoras del antichavismo y del gobierno estadounidense. Del otro, hay debilidades inducidas y otras que tienen su origen en la influencia que ejercen las fuerzas reactivas del propio chavismo, poco o nada comprometidas con la orientación socialista de la Revolución Bolivariana.

Entre las debilidades inducidas, es imposible dejar de mencionar las que resultan del brutal ataque contra la economía venezolana, en particular desde mediados de 2012, y que se expresa en manipulación del tipo de cambio paralelo e ilegal, inflación inducida, desabastecimiento programado y selectivo de bienes de primera necesidad, disminución de la producción por parte de oligopolios y bloqueo financiero internacional.

No tendría que resultar tan difícil entender las razones de este encono contra el chavismo: éste tiene que ver con la premura por acabar un experimento radicalmente democrático que, en ausencia de su líder histórico, calcularon más vulnerable de lo que ha resultado ser. Esta premura no es otra que la de las viudas del modelo de sociedad que se niega a morir.

Apuntes para una genealogía del chavismo

Es lugar común de cierta historiografía afirmar que el siglo xx venezolano comenzó con la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935.

Chávez llegó a afirmar, con razón, que nuestro siglo **xxi** había iniciado con la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Tal rebelión tuvo lugar contra un modelo de sociedad que adoptó su forma “moderna” justamente durante la dictadura de Gómez (1908-1935).

Es por estos años que se instalan las primeras transnacionales con el propósito de explotar el petróleo venezolano. Como ha demostrado Tinker Salas, la industria petrolera “ejerció una amplia influencia sobre la formación de valores políticos y sociales evidentes entre trabajadores, intelectuales y miembros de la clase media”. Cual agente “modernizador”, la industria petrolera puso en marcha un “proyecto cultural hegemónico”, con su respectivo “estilo de vida petrolero”, origen inmediato de nuestros actuales patrones de consumo. La expansión de la industria petrolera fue representada “como una lucha épica entre dos culturas: una primitiva, rústica e indómita, y otra moderna, cosmopolita, universitaria y refinada”. La cultura política de la clase media se cimentó en la lealtad al capital transnacional y de espaldas a la mayoría del país, a la que valoraba como sumida en el atraso. En los campos petroleros tuvo lugar un “proceso de ingeniería social” que alteró significativamente “el panorama rural y urbano de Venezuela, inaugurando nuevos prototipos residenciales, patrones de consumo y formas de organización social, teniendo influencias sobre la moda, la diversión, los deportes y la dieta”. La industria petrolera logró establecer un modelo de sociedad, un modelo a seguir, reservándose siempre el derecho de admisión: “La representación de una próspera economía petrolera transformando a la nación opacó el hecho de que una parte importante de la población venezolana vivía al margen de la economía petrolera”. La Venezuela bárbara.

El modelo de sociedad que resulta de la empresa civilizadora de la industria petrolera es lo que los estudiosos llaman “capitalismo rentístico petrolero”. Para Bernard Mommer, “los quince años que van desde 1943 a 1958 son los años dorados del capitalismo rentístico venezolano, pues en este período el país se beneficiaba de un altísimo nivel de renta”, con unas “contradicciones externas... dentro de límites aceptables”, mientras que “en lo doméstico las contradicciones generadas por la distribución de la renta eran mínimas, con un mercado interno en plena expansión”. En este contexto llega Acción Democrática al poder, en 1945, y con este partido se produce, para decirlo con Luis Ricardo Dávila, “la entrada de las masas a la escena de la historia y de la política”. El “imaginario” *adeco* se articula en torno a tres ejes: “sufragio universal, moralidad administrativa y despersonalización del ejercicio del poder”. Sin restarle importancia a

los dos primeros, este último tiene una importancia capital: la crítica *adeca* al personalismo es la crítica al caudillismo, y por consiguiente la reivindicación de “las potencialidades y capacidades del pueblo”, en contraste con el “pesimismo de los sociólogos positivistas” del siglo *xxi*. En palabras del mismo Betancourt: “Somos un pueblo que puede ser gobernado impersonalmente, no por réculos imperiosos, no por gente despótica”. Lo “popular venezolano”, sigue Betancourt, encuentra cauce y expresión en el partido, y a través de este gobierna y es gobernado. Lo que el líder *adeco* testimonia es un cambio a nivel de tecnologías de poder: desde entonces al pueblo se le reconocerán capacidades y potencialidades, pero tendrá que echar mano de ellas a través del partido. En efecto, el pueblo entra por primera vez en escena, pero en rol pasivo.

Acción Democrática jamás cuestionó el modelo de sociedad de la industria petrolera. Al contrario, fue beneficiario y entusiasta promotor. Si el clientelismo es uno de los correlatos políticos del capitalismo rentístico venezolano, es correcto afirmar que el “partido del pueblo” sentó las bases de las lógicas y prácticas clientelares tal y como las conocemos hoy en día. Afirma Tinker Salas: Acción Democrática “necesitaba el reconocimiento de Estados Unidos para consolidar su poder y mantener a raya a sus oponentes políticos. Más aún, necesitaba las regalías petroleras para expandir el aparato del Estado y desarrollar un sistema de clientelismo que vinculara los intereses de la creciente clase media urbana con la de los trabajadores petroleros”.

El 18 de octubre de 1945 marca el inicio de la primera experiencia de “distribución popular de la renta”, plantean Baptista/Mommer. Pero “esta absorción consuntiva de la renta, sujeta a la finalidad de abrir cauce a una futura absorción productiva, de pronto se vio desbordada por la cuantía del ingreso petrolero. Se establecieron así patrones de consumo y de comportamiento propios de una sociedad rentística”. Patrones de consumo y de comportamiento que, hay que decirlo, no fueron simplemente un accidente que frustró el desarrollo “normal” del capitalismo, superando su etapa rentística: ellos fueron suscitados por la propia industria petrolera, lo que le permitía legitimarse en tanto fuerza civilizadora o modernizadora, para emplear un vocablo más ajustado a la época. Ya en la década de 1960, con Acción Democrática nuevamente en el poder, el modelo de nación continuó “enraizado en la industria petrolera y los ideales de ciudadanía y participación política que generó”, según Tinker Salas.

Cuando, a finales de 1970, se produce el colapso del capitalismo rentístico en Venezuela, este “ni prefigura ni saluda una etapa posterior”, advierte Baptista en 1997. Agrega: “el impulso hacia la disolución” del modelo “no proviene de nuevos arreglos que presionan por ocupar la escena”. En 2006, escribía: “Estos años recientes... han visto cómo se acentúan antiguas prácticas y, lo más interesante de notar, cómo se tratan de abrir nuevas”. En cuanto a las primeras, “se encuentra en marcha una política del Estado propietario publicitada con gran despliegue, a saber, la de intentar llegar más lejos aún con la distribución popular de la renta. Valga decir que las políticas gubernamentales al presente están signadas por una reiterada orientación: asegurar la transferencia de una porción de la renta originaria del Estado hacia los estratos sociales menos favorecidos”. No obstante, “no hay forma razonable de apreciar, todavía, si la presente política distributiva es más popular, más extendida y de mayores consecuencias de lo que fue la misma política que también estuvo presente en las décadas anteriores”. Respecto de las prácticas novedosas, afirmaba que “lo sobresaliente es el intento de redefinición del viejo y sobado lema de ‘sembrar el petróleo’. Al ámbito de significación de la frase, sólo local y económico como ha sido, se lo quiere ahora desbordar para cubrir también lo internacional y lo político”. Cuatro años después, escribía el mismo autor: “El tiempo contemporáneo de Venezuela atestigua la intención política de orientar el desarrollo del país en una dirección de sentido distinto a la que dominó el curso de las largas décadas anteriores. Colapsadas las estructuras del capitalismo rentístico y convertidos en añicos sus principales arreglos, desde la acumulación de capital hasta la distribución del poder político basada en una cierta organización de partidos políticos, por qué no pensar, entonces, en que el proceso histórico podía dirigirse hacia formas de organización social no capitalista”.

Lo que se deriva de la trayectoria del análisis de Baptista es que, si bien es correcto trazar una línea de continuidad entre la distribución popular de la renta que acomete Acción Democrática y la que impulsa el chavismo, es preciso identificar también la ruptura que introduce este último: al chavismo no lo distingue su afán por distribuir popularmente la renta, sino su intención de superar un modelo que colapsó hace casi cuarenta años. Además, se propone superarlo por la vía no capitalista.

La naturaleza antisistémica del chavismo tiene, por supuesto, su correlato político. Entre otras, la novedad que entraña el chavismo, por ejemplo, es su condición de sujeto activo, “participativo y prota-

gónico”, que se vale de la forma-partido para organizarse, pero no exclusivamente. Sin que dejen de estar atravesados por las viejas lógicas clientelares y sectarias, el chavismo promueve la creación de espacios como los consejos comunales y las Comunas, llamados a servir de asiento a una política de los comunes, y que propenden a crear las condiciones que hagan posible el autogobierno popular.

Es necesario recordar, como señala Tinker Salas, que “la industria petrolera y su nuevo orden social nunca reemplazaron completamente la forma de vida tradicional venezolana. Aún en su auge, la moderna industria petrolera sólo empleó una pequeña fracción de la población... La presencia de una población relativamente empobrecida fue un constante recuerdo de que había dos Venezuelas: una que se beneficiaba directamente del petróleo y otra que sobrevivió en gran parte a la sombra de la industria”.

A pesar de todo el esfuerzo que las elites y la mayoría de la clase media hacen por negarla o encubrirla, no es posible concebir una Venezuela sin la otra. La Venezuela excluida y explotada no es una rémora del modo de vida civilizado, sino su consecuencia. El colapso del “estilo de vida petrolero” y del imaginario político *adeco* prepara el terreno para la insurgencia del chavismo, que no es más que la resultante del proceso de subjetivación política de la “otra” Venezuela.

Una década de Revolución Ciudadana: posneoliberalismo y conflictividad

Franklin Ramírez Gallegos¹ y Soledad Stoessel²

El gobierno de la Revolución Ciudadana surgió en 2007 con la gran promesa de superar la “larga y triste noche neoliberal” como gusta decir Rafael Correa. La contradictoria evolución de una constelación de políticas de superación del núcleo duro del Consenso de Washington se colocó entonces, desde un inicio, en el centro del proceso de transformación del Estado y de la conflictividad socio-política activada a lo largo de una década. Este texto se concentra, entonces, en la evolución de dicha agenda de cambio, desde su proceso constituyente hasta la trama conflictiva reconfigurada en los últimos años, cuando salen a flote los límites del neodesarrollismo ecuatoriano y se expresa con nitidez el entrampamiento hegemónico del proyecto de cambio.

Si bien el oficialismo logró finalmente imponerse en el balotaje de abril de 2017 y llevar a la presidencia a Lenín Moreno –en las dos elecciones anteriores (2009 y 2013) Correa había arrasado en primera vuelta–, el repunte del discurso pro-mercado en el sentido común de la época deja poco margen de maniobra para cualquier intento de reactivar agendas radicales. Más allá de los debates abiertos que dejó el proceso electoral y del porvenir del escenario político en el Ecuador, proponemos una mirada retrospectiva sobre el saldo que dejan los primeros diez años de la Revolución Ciudadana.

1. **Franklin Ramírez Gallegos** es sociólogo. Profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador. Coordina el Programa de Maestría en Sociología Política.

2. **Soledad Stoessel** es becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). Candidata a doctora en Ciencias Sociales (UNLP), Mg. Ciencias Políticas (FLACSO-Ecuador) y licenciada en Sociología (UNLP).

La transición post-neoliberal

Alianza PAIS (AP) accedió al poder en medio de una crisis de legitimidad que afectaba simultáneamente a partidos y movimientos sociales. La revuelta de abril de 2005, expresada en la consigna “que se vayan todos” (QSVT), se zanjó con el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez y la pulverización de la confianza popular en el sistema de representación.

Rafael Correa y AP tomaron las banderas del QSVT en la campaña de 2006. Dejar atrás el neoliberalismo y desmontar la “partidocracia” fueron sus grandes ofertas. Luego de enfrentar en el balotaje al empresario bananero Álvaro Noboa, Correa fue electo con el 54 por ciento. Apenas posesionado, convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Nacional Constituyente: 82 por ciento de la población se pronunció a favor. Desde entonces, el voto popular sería el principal soporte para el encumbramiento del liderazgo de un presidente que gobernaba sin bancada parlamentaria³ y en medio de la fragilidad del tejido social. AP se convertía en una coalición en la que coexistían diversos sectores de izquierdas, segmentos de los movimientos sociales y grupos más conservadores.

Mientras el proceso constituyente avanzaba, el gobierno tomó una serie de medidas que, reivindicadas desde hace más de una década por el movimiento popular, daban cuenta de la reconfiguración de la matriz de poder social: el fin del convenio de cooperación militar que permitía a Estados Unidos tener presencia en una base militar; la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la suspensión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; la incautación a los bienes de los banqueros implicados en la quiebra del sistema financiero en el año 2000; la creación de la Comisión de la Verdad para investigar casos de violación a los derechos humanos, entre otras.

La orientación programática de estas decisiones expresaba el paulatino desacoplamiento entre el nuevo bloque de poder y los circuitos transnacionales y clases dominantes que sostuvieron, desde el inicio de la década de 1980, el proceso de liberación de la economía, la captura rentista de las instituciones públicas, el debilitamiento del Estado y la plena subordinación de la política exterior a los intereses de Washington.

3. AP no postuló candidaturas al Congreso para apuntalar su estrategia antisistémica y desgastar aún más la confianza en el parlamento.

La pérdida de influencia política de tales circuitos quedó largamente plasmada en el curso de la dinámica constituyente. En efecto, la Asamblea Constituyente alcanzó a retomar un amplio conjunto de ideas, demandas e intereses que emergieron desde la resistencia popular al neoliberalismo, y desde otras agendas de modernización democrática y transformación del Estado. La Constitución avanzó pues en otorgar plena centralidad a la regulación estatal de los mercados; a prohibir la privatización de los recursos estratégicos; a reconocer la economía social y solidaria; al reforzamiento de regulaciones ambientales para actividades productivas (“derechos a la naturaleza”); a la prefiguración de un nuevo modelo de desarrollo que propende al bienestar colectivo, el buen vivir y la igualdad social; a la ampliación de los derechos sociales y colectivos; al reconocimiento de la pluri-nacionalidad del Estado; al robustecimiento de los mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa, entre otros elementos. El 28 de septiembre de 2008, el 63 por ciento de los ecuatorianos aprobó en consulta popular la nueva Carta Magna.

Aupado en un amplio respaldo popular, el gobierno tomó un conjunto de opciones que ratificaban el resquebrajamiento de la matriz de poder social de las décadas pasadas y robustecían los factores de poder en que se plasmaba la voluntad por redireccionar la acción estatal. Cuatro líneas de decisión tuvieron particular relevancia en tal perspectiva:

1. La reapropiación estatal de recursos con alta capacidad de generación de renta diferencial (fortalecimiento de empresas públicas en sectores claves de la economía –petróleo, minería, servicios públicos, etc.– y renegociación de contratos con diversas transnacionales).
2. El establecimiento de nuevas líneas de regulación de la banca en procura de bajar tasas de interés, repatriar sus reservas depositadas en el exterior, dinamizar el aparato productivo; apuntalar la banca pública y cooperativa; eliminar la autonomía de Banco Central y determinar la centralidad del Ejecutivo en la fijación de la política monetaria.
3. La reducción del peso de la deuda externa en el presupuesto público.
4. El fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado –impedir la histórica “rebeldía tributaria” de las elites– en el marco de una reforma tributaria progresiva que derivó en mayores niveles de presión fiscal y más amplias capacidades redistributivas.

Colocados los cimientos para el “retorno del Estado” y la aceleración de la agenda posneoliberal, Correa fue electo nuevamente en 2009 en primera vuelta, un hecho sin precedentes en la historia democrática del país, aunque sin ostentar mayoría parlamentaria. Esto complejizó el nuevo ciclo político en que los grandes principios constitucionales debían tomar la forma de específicos códigos, leyes orgánicas y políticas públicas. AP requería, esta vez, tejer alianzas con otras fuerzas políticas. Fiel a su estilo, Correa relativizó esta necesidad y aceleró la ruptura de la coalición progresista –AP formó un megabloque con el movimiento indígena, el socialismo, la socialdemocracia, entre otros– forjada en la Constituyente. El terreno de la lucha política se alteró. En medio del enorme anclaje popular del presidente, el movimiento gobernante tendió a subestimar el aporte de las organizaciones sociales mientras estas exigían real participación.

Desde entonces (2010-2011), la Revolución Ciudadana debió hacer frente tanto a los embates de la derecha y de los grupos de poder económico como a la contestación de organizaciones populares y pequeños partidos de izquierda. La hostilidad entre Correa y el movimiento indígena fue particularmente relevante. Semejante fragmentación ralentizó la puesta en marcha de la agenda de cambio y estimuló la reactivación de la lucha social.

Reforma estatal, conflictos corporativos y verticalismo

El gobierno emprendió entonces una ambiciosa reforma de la arquitectura institucional y de la estructura de toma de decisiones del sector público. En la perspectiva de Correa, la posibilidad de responder a los intereses generales ha dependido de la capacidad del poder civil para gobernar el conjunto de la agenda pública y para evitar que los cuerpos intermedios manejen poder en las agencias estatales. Tal posicionamiento chocó con una amplia estructura de intereses sociales –en los que se entremezclan dinámicas empresariales o populares, cívicas o militares, burocráticas o no gubernamentales– que habían conquistado previamente espacios de representación. Emergió entonces una verdadera batalla por la reforma estatal, uno de los grandes campos de conflictividad del ciclo político.

El conflicto con el movimiento indígena en torno a la Ley de Recursos Hídricos, la disputa con los policías por la Ley de Servicio Público⁴, la tensión con los gremios de maestros en torno a distintas

⁴ El conflicto policial de 2010 estuvo asociado a diversas reformas institucionales encaminadas a deshacer mecanismos de protección estamental de la fuerza pública.

medidas tendientes a recortar su poder en la política educativa, la prolongada confrontación con los medios concentrados en torno a la Ley de Comunicación, o la puja con los grandes importadores por su lugar en el consejo de comercio exterior, son algunos ejemplos del litigio abierto en cada tramo de la reforma estatal.

Para algunos sectores (diplomáticos, exportadores, banqueros, policías) se trataba apenas de resguardar específicos beneficios y cuotas de poder. Para otros (indígenas, sectores medios y gremios de maestros) estaba en juego, además, la preservación de espacios estatales de representación conquistados previamente. Unos y otros pujaban por conservar el lugar que habían ganado en el Estado. De este modo se colocaron en las antípodas de la concepción “universalista” de la Revolución Ciudadana y de su tendencia a situar en un mismo plano político al ciudadano abstracto y a los actores organizados.

No obstante, si diversos grupos económicos rechazaban de plano el activismo estatal en la economía, para diversas organizaciones sociales estaba en juego la legitimidad de los intereses gremiales e identidades colectivas en las instituciones. En la disputa por participar en los espacios estatales se jugaba parte de su poder social y su misma autonomía política. Diversas movilizaciones del período tuvieron esa impronta. Correa sólo vio en tales demandas la expresión del estrecho corporativismo de su dirigencia e increpó siempre su déficit de representatividad. En su perspectiva, la construcción del bien común está conectada de modo intrínseco con el sufragio universal: la legítima representación de los intereses generales no puede prescindir de los electos. Dicho enfoque redujo no obstante las opciones para el protagonismo popular en la conducción y el control de las instituciones.

La distancia entre el gobierno y los movimientos sociales fue en incremento y asumió altos niveles de beligerancia. Sin interlocución política, las respuestas de fuerza aumentaron, lo que fue particularmente visible en el modo de procesamiento gubernamental de los conflictos ambientales: la promesa del “buen vivir” y el desarrollo en armonía con la naturaleza quedaron paralizados en medio de la inercia extractivista en el régimen de acumulación. Diversos actores sociales contestaron dicha opción. Correa no veía más alternativas que el petróleo y la minería en su apuesta por combatir la pobreza y alcanzar la igualdad social. Si bien ambos objetivos tuvieron incontestables avances, la gestión vertical del poder subordinó políticamente a “los de abajo” y entrampó sus posibilidades de organización autónoma.

La fuerza del anticorreísmo

En las elecciones de 2013, Correa arrasó con el 57 por ciento y dos tercios del poder legislativo. Desde entonces se incrementó la tendencia del repliegue de Alianza País sobre su propia fuerza, y el entrapamiento de la fuerza gobernante fue largamente aprovechado por sus detractores.

La Revolución Ciudadana fue desafiada y antagonizaba de modo diferenciado con el alegato fiscalista y mercadocéntrico por derecha y la impugnación corporativo-eco-societalista por izquierda. Aunque pudieron confluír en determinadas coyunturas, en particular al contestar la apuesta estatista de Alianza País y sus rasgos autoritarios, la propia estrategia de confrontación de Correa tendió a no distinguir la especificidad de las reivindicaciones de unos y otros.

A lo largo de 2015, no obstante, algunas fronteras se desdibujaron. De la mano de la inédita movilización de las clases medias –en defensa de importaciones sin salvaguardas, en contra de los impuestos “marxistas” a la herencia y a la plusvalía, en desespero por la caída del consumo luego de ocho burbujeantes años– operó una insospechada convergencia anticorreísta con los más clásicos actores de la protesta, indígenas y trabajadores, que rechazaban las decisiones en materia laboral, ambiental, seguridad social, entre otras. Los de muy arriba, mientras tanto, expatriaban sus divisas, desinvertían a granel y profetizaban el colapso económico. Correa debió abandonar el proyecto de tasar las grandes fortunas. Era quizás su primera gran derrota política. El momento transicional había arrancado.

En un entorno de ralentización económica y de impugnación al proyecto de enmendar la Constitución para permitir la reelección de autoridades, la confrontación adquirió un cariz violento. Las “banderas negras”, más visibles que las wiphalas, los trapos rojos o el propio estandarte nacional, arropaban dicho signo de intransigencia aniquiladora. Mientras tanto, esgrimiendo indistintamente la bolivariana tesis del “golpe blando”, el discurso presidencial escamoteaba la legitimidad de reivindicaciones sociales de cualquier signo.

Aquello operó como un incentivo adicional para su acercamiento e insufló, aún más, su ánimo destituyente. El canto general no admitía dudas: “Fuera Correa, fuera”. Los bandos en disputa caminaron desde entonces con el puñal tras la espalda. Latente quizás desde algún tiempo atrás, la partición del espacio político entre correístas y anticorreístas lucía espeluznantemente novedosa en medio de los tambores de guerra que nadie pretendía dejar de tocar. La confraternidad de quienes tienen un mismo adversario –“los enemigos de

mis enemigos...” – tendía a licuar la especificidad de las identidades políticas en extrañísimas (y erráticas) alianzas ensambladas por su impaciente deseo compartido de poner fin al “reinado de Rafael 1”. Nadie se abstuvo entonces de hacer referencia a la unidad de los diversos como antídoto para batir a tan poderoso adversario. Sólo quedaba por resolver quién podría representar, y conferir plena forma político-electoral, a la incansable pléyade anticorreísta.

Florecieron entonces diversos conatos de unificación de inverosímil amplitud –Lasso se sentó en la mesa con socialdemócratas, militares, dirigentes indígenas, antimineros, ex AP, etc.– y similar inconsistencia. Ninguno de ellos prosperó en el sentido calibrado por su alta dirigencia. La carencia de una plataforma electoral única no desfiguró, sin embargo, el relato anticorreísta. El notable avance de sus principales ideas políticas en el sentido común de la época alimentó la votación al banquero Lasso en las elecciones de 2017.

La experiencia de Alianza País y su estrategia de confrontación indiscriminada arroja enseñanzas de las que, más allá de las fronteras del Ecuador, los gobiernos del ciclo progresista deberán tomar nota.

De la épica guerrillera a los gobiernos moderados

Rafael Cuevas Molina¹

Centroamérica es un volcán. Lo ha sido siempre, pero especialmente desde que inició su vida republicana a partir de 1821. Lo es por varias razones: la primera tiene que ver con su herencia colonial, que le dejó una estructura social muy desigual y un sistema político autoritario. La segunda debe asociarse a su posición geográfica, que la hace apetecible para los poderes imperiales. Sobre ese volcán se dieron procesos insurgentes que atrajeron las miradas del mundo y la admiración de la izquierda latinoamericana, como los protagonizados en 1980 por el sandinismo en Nicaragua y el Farabundo Martí en El Salvador. Algunas décadas después, esas fuerzas ganaron los gobiernos de sus países por la vía electoral, en sintonía con el proceso regional. Pero sus políticas y posibilidades ya no fueron las mismas.

La mayor parte de la historia de Centroamérica ha transcurrido bajo la impronta de regímenes dictatoriales, única forma que las clases dominantes encontraron para mantenerse en el poder. La excepción fue Costa Rica, que ha tenido una vida social y política distinta quizás por su lejanía del poder administrativo central en el período colonial.

Esa impronta de dictaduras, mano dura, impunidad y oscurantismo tuvo siempre oposición, pero nunca tan bien organizada, persistente y atrevida como la que logró estructurarse en la década de 1960 del siglo pasado. Desde entonces, los sectores populares respondieron por la única vía que se les había dejado: la lucha armada. Esas experiencias nacieron en el contexto de la Guerra Fría, en un ámbito geográfico con dos puntos claves para los intereses de Estados Unidos: Cuba y el Canal de Panamá. Cuba era, a escasas 90 mi-

1. **Rafael Cuevas Molina** (Ciudad de Guatemala, 1954) es escritor y pintor. Trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica) y columnista semanal de la revista de análisis político latinoamericano *Con Nuestra América*.

llas de sus costas, la avanzada en la región del proyecto de sociedad que se le oponía en el mundo y al que no haría ninguna concesión. Por el Canal de Panamá pasaban dos tercios del comercio marítimo que llegaba a su costa oeste, lo que les garantizaba el dominio de lo que ellos llaman el Hemisferio Occidental.

En estas condiciones, Centroamérica constituía un punto geoestratégico vital. No les importaba en absoluto quiénes estuvieran en el poder con tal de que respondieran a sus intereses. El presidente Franklin D. Roosevelt lo expresó con meridiana claridad al referirse al dictador nicaragüense Anastasio *Tacho* Somoza: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. *Tacho*, el primero de una de una serie familiar de dictadorzuelos que se sucedieron en el país hasta 1979, subió al poder en 1934 como jefe de la recién creada Guardia Nacional. Estados Unidos la instauró al retirarse del país por no poder vencer la resistencia nacionalista de Augusto César Sandino, que se oponía a su presencia intervencionista iniciada en 1912. El primer acto en el poder de este primer Somoza fue invitar a Sandino a su casa y asesinarlo.

La dinastía de los Somoza terminó cuando la Guardia Nacional fue derrotada por las columnas combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, y abrió para el país las posibilidades de construir una “nueva Nicaragua”, como decían los sandinistas respondiendo a aquellos que decían que el país se convertiría en una “nueva Cuba”. Nicaragua, el país más pobre de América Latina después de Haití y Honduras, se dio a la tarea de erradicar el analfabetismo, hacer una reforma agraria, impulsar una política cultural popular, revolucionaria y antiimperialista, y tratar de construir un sector de industria nacional sobre la base de los bienes expropiados a la familia Somoza y sus parientes.

Como era de esperarse, Estados Unidos respondió con furia a semejante atrevimiento. Ronald Reagan –el mismo en cuyo mandato se pergeñó el llamado Consenso de Washington que tiene, aún hoy, estrangulada a buena parte de América Latina por el impulso del modelo neoliberal– organizó a la contrarrevolución a través de los Contras, minó sus principales puertos, bloqueó el comercio e hizo todo lo posible para mantenerla acosada. El resultado fue el agotamiento de la población que, en las elecciones de 1990, eligió a la oposición política del FSLN y lo sacó del poder. Los sandinistas respondieron –en palabras de Daniel Ortega, entonces presidente del país y miembro prominente de la dirección del FSLN– que gobernarían “desde abajo”. Efectivamente, continuaron siendo un

factor decisivo de la vida política del país y lograron, en 2007, volver al poder. Para ello, sin embargo, sufrieron una serie de mutaciones que atemperaron su perfil revolucionario de 1990.

Sandinismo remozado

En primer lugar, el sandinismo restañó las heridas que tenía con la jerarquía eclesiástica, personificada principalmente en el cardenal Miguel Obando y Bravo –antes furibundo opositor al FSLN–, y se redefinió como un proyecto cristiano. Esta aproximación a la jerarquía de la Iglesia redundó en la entrada en vigor de un código penal –aprobado por diputados sandinistas y liberales– en el que se tipifica como delito todo tipo de aborto incluyendo los que se hagan para salvar la vida de la madre. Pero, por otra parte, el sandinismo votó en 2008 la despenalización de la homosexualidad, pese a la oposición de la derecha. En segundo lugar, aseguró a los grupos dominantes que sus bienes y empresas no sufrirían expropiaciones sino que, todo lo contrario, contarían con un ambiente de negocios propicio. Tercero, estableció pactos con otras agrupaciones políticas en pos de la “gobernabilidad” del país.

Este acomodamiento, más algunos hechos acontecidos luego de la derrota electoral de 1990 –especialmente la apropiación de bienes de la antigua burguesía somocista por parte de miembros del FSLN–, llevó a una crisis del sandinismo que ha repercutido no sólo dentro sino también fuera de Nicaragua. Daniel Ortega es visto por algunos sectores de la izquierda como un corrupto que busca perpetuarse en el poder, hacer crecer negocios familiares y perseguir a la oposición.

Independientemente de estos acontecimientos, desde 2007 en Nicaragua se han impulsado una serie de medidas a tono con las que se dieron en otros países latinoamericanos aglutinados bajo la impronta del “socialismo del siglo XXI”. En este contexto, Nicaragua forma parte del ALBA y de Petrocaribe, lo que le ha permitido liberar recursos que sustentan políticas sociales. Algunas de las primeras acciones del gobierno fueron restablecer la gratuidad de la educación y la salud. En educación se prohibió el cobro de matrícula, mensualidades y material escolar en las escuelas públicas. En salud se eliminaron las consultas privadas en los centros públicos y se restableció la gratuidad de los medicamentos y las operaciones quirúrgicas.

En el contexto de una Centroamérica asolada por la violencia de todo tipo, Nicaragua exhibe índices de violencia y criminalidad lejanos a los de Guatemala, El Salvador y Honduras. Posiblemente se deba al tejido social comunitario que se creó durante los diez años

de gobierno del FSLN en la década de 1980 y a su continuidad en las administraciones sandinistas del siglo *xxi*.

Pese al *aggiornamento* del sandinismo, las relaciones con Estados Unidos no han sido fluidas como durante los gobiernos de la oposición. El Departamento de Estado descalifica continuamente al FSLN y sus acciones de gobierno. En 2016, Daniel Ortega fue reelecto con el 66,8 por ciento de los votos, pero el panorama se avecina complicado con el agresivo Donald Trump en la presidencia estadounidense y con Petrocaribe en dificultades por la baja de los precios del petróleo que afecta a Venezuela.

El Salvador, bajo la sombra de los Estados Unidos

En El Salvador también se encuentra en el poder una fuerza política surgida al calor de la lucha armada: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Creado en 1980 como un organismo de coordinación de las cinco organizaciones político-guerrilleras que participaron en la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992, se constituyó en un partido político legal a partir de la firma de los Acuerdos de paz en 1992.

En 2009, la eventual victoria del FMLN era vista con suma suspicacia por Estados Unidos, principal sostén de los gobiernos dictatoriales de extrema derecha que el FMLN había intentado derrocar por la vía armada. El golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, tres meses después de las elecciones salvadoreñas, seguramente haya tenido como una de sus motivaciones enviar un mensaje al FMLN para que atemperara sus posturas.

Respecto a El Salvador, Estados Unidos tiene una carta muy sensible para presionar: los migrantes salvadoreños en el país del norte proporcionan hasta el 17 por ciento de su PBI. Las deportaciones han traído diversos problemas al pequeño “pulgarcito” de América, como el surgimiento de las pandillas juveniles conocidas como “maras” que se han transformado en complejas organizaciones criminales. El FMLN llegó al poder en 2009 y se ha mantenido hasta ahora abarcando dos períodos presidenciales, primero bajo el mando de Mauricio Funes y luego de Salvador Sánchez Cerén. Al igual que en el caso nicaragüense, el FMLN se ha inscrito dentro de la lógica de los gobiernos progresistas que buscan atemperar las contradicciones sociales dando énfasis a la formulación de políticas en favor de los sectores más desfavorecidos, pero renunciando a buscar los cambios estructurales que pregonaban originalmente cuando constituían una organización insurgente.

Tales políticas no han logrado frenar, sin embargo, el éxodo que sufre El Salvador (hasta el 18 por ciento de la población del país) por los miles de migrantes que diariamente parten hacia Estados Unidos tratando de encontrar fuentes de trabajo dignas. Los sectores económicamente dominantes, por su parte, han transformado el envío de remesas de los migrantes en todo un “modelo de desarrollo”, que tiene como principal motor la exportación de fuerza de trabajo.

Entre los logros que los gobiernos del FMLN reivindican están: en educación, más de un millón de niñas y niños beneficiados con la entrega gratuita de zapatos, uniformes, útiles escolares y alimentos. Disminución del analfabetismo de 14 a 12,2 por ciento. En salud, la reforma que permite más servicios de salud gratuitos y de mayor calidad con la creación de los Equipos Comunitarios de Salud, la construcción de cuatro importantes hospitales y la reducción de precios de las medicinas hasta en un 60 por ciento. En el ámbito económico, se otorgaron 37 mil títulos de propiedad a familias campesinas, se entregaron gratuitamente paquetes agrícolas a 375 mil productores y se financió la producción de granos básicos a las pequeñas empresas a través de la Banca Nacional de Desarrollo.

Caminos y dilemas similares

Evidentemente, los programas de gobierno del FSLN y el FMLN, y sus logros de gestión, se encuentran bastante lejos de las ambiciones utópicas de los heroicos años ochenta, cuando se pensaba, tal vez con voluntarismo, que se podría construir una sociedad radicalmente distinta aunque se viviera, como Cuba, en una plaza sitiada. Pero los cambios en el panorama internacional durante la década de 1990, especialmente la disolución de la Unión Soviética, dejaron a las fuerzas revolucionarias no sólo sin apoyo “de retaguardia” sino sin proyecto viable.

Desde entonces hubo desilusiones, discusiones y reestructuraciones que les dieron un baño de realidad. El resultado ha decepcionado a muchos y resignado a otros (especialmente a los intelectuales y a las clases medias, siempre insatisfechas y ambiciosas, puntillosas y oportunistas). Los pobres, que desafortunadamente siguen siendo muchos en estos pequeños y pauperizados países, se conforman con programas que no cambian radicalmente su vida pero que, al menos, les hacen sentir que son objeto de cierta atención por parte del Estado.

Pero entonces, ¿eran necesario, para llegar al poder, hacer tantas concesiones ideológicas y establecer alianzas con viejos

enemigos políticos? Estas preguntas se encuentran –junto a otras que atañen a la probidad ética de algunos altos dirigentes sandinistas– en el centro de las preocupaciones y discusiones de la izquierda centroamericana.

Si la sobrevivencia de los proyectos políticos progresistas y de izquierda en América Latina se encuentra fuertemente condicionada por el apoyo mutuo que puedan brindarse, se complejiza aún más la situación para los pequeños estados centroamericanos, con escasos recursos y en un medio internacional hostil. De ahí que lo que suceda en Ecuador, Bolivia y Venezuela (y a mediano plazo en México, donde Andrés Manuel López Obrador tiene buenas chances de ganar las elecciones) tendrá seguramente una influencia determinante en el futuro mediano en El Salvador y Nicaragua.

El agua tibia y las derivaciones de la experiencia progresista

Sergio Sommaruga¹

El Frente Amplio (FA) lleva más de doce años ininterrumpidos en el manejo del gobierno uruguayo, tiempo más que suficiente para analizar la experiencia histórica de la coalición progresista de forma global y desapasionada, sin las constricciones de las contingencias coyunturales ni los arrebatos de indignación por sus decisiones indignas. Nuestra idea fuerza es que se están prefigurando las condiciones tendientes a un cambio de etapa en el proceso histórico del país. Es decir, se están procesando modificaciones relevantes en la correlación de fuerzas de la lucha de clases.

Una de las tesis centrales (no la única) en la que se basa esta valoración política, y que es el eje de reflexión de este artículo, es que el propio agotamiento del Frente Amplio como síntesis política de la izquierda uruguaya es parte constitutiva de ese cambio de etapa histórica.

2004: objetivo y fin

Desde el punto de vista del proceso social uruguayo, el arribo del FA al gobierno fue un hecho histórico de primer orden. Un antes y un después que convulsionó política, subjetiva y emocionalmente al pueblo uruguayo. Por primera vez en más de 170 años de vida institucional, una fuerza que no era de derecha llegaba al gobierno. Y no lo hacía de modo fortuito o por mera consecuencia de la rotatividad partidaria. Lo hacía por acumulación de fuerzas.

1. **Sergio Sommaruga** (Montevideo, 1977) es secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), profesor de Filosofía en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y educador popular en un centro juvenil en la periferia de Montevideo. Integró los colectivos comunitarios de La Voz FM y Canal 2, primera experiencia de TV comunitaria por aire del Uruguay. Acompaña el proyecto comunicacional www.hemisferioizquierdo.uy.

Esta novedad histórica tiene dentro de sí muchísimos significados por descifrar: ¿qué cosas cambiaron para que el FA llegara al gobierno? ¿Cuáles y cuántos de esos cambios fueron de fondo y cuáles y cuántos fueron episódicos? ¿Qué aspectos positivos trajo aparejado el accionar del gobierno frenteamplista? ¿Qué alcances y límites tienen esos aspectos positivos? ¿Qué cambios se registraron en el FA desde el punto de vista del modelo de práctica política y del proceso de acumulación de fuerzas? ¿Qué escenario ulterior abrió la experiencia política del FA en el gobierno?

Algunas consideraciones históricas

No obstante la abundante experiencia de lucha social del anarcosindicalismo, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y la consiguiente acumulación de fuerzas, las formaciones partidarias de la izquierda uruguaya sucumbieron durante años en una flagrante contradicción entre un discurso de unidad y una práctica de divisionismos.

Hasta la fundación del FA, la izquierda electoral uruguaya se mantenía fragmentada y eventualmente enfrentada. El Partido Comunista y el Partido Socialista, como principales expresiones de esa izquierda, habían formado respectivamente sus frentes políticos –el Fidel y la Unión Popular– en alianza con otros agrupamientos de izquierda más pequeños. El caudal electoral de ambos bloques era apenas visible en bancas parlamentarias. Sin embargo, la concreción de la unidad orgánica continuó bloqueada en los hechos durante casi medio siglo, hasta 1971.

En ese año se materializa la constitución del FA, pero importa remarcar que ese momento fundacional estuvo precedido de un conjunto de episodios y procesos de singular relieve histórico desde el punto de vista de la acumulación popular, como la realización del Congreso del Pueblo, la unidad sindical con la formación de la CNT y, un poco antes en el tiempo, la conquista de la ley orgánica a través del ascendente movimiento de lucha articulado por los gremios estudiantiles y los trabajadores organizados.

Incluso más destacable que ese repertorio de hechos políticos de primera línea era el clima general, reforzado por un particular contexto de época a nivel internacional, por el que discurría la subjetividad popular y el imponente cúmulo de luchas y de combatividad que se desplegaba en el país.

Algunos interrogantes para nada desatinados sobre las circunstancias específicas que rodean la creación del FA: ¿por qué esa con-

creción no fue posible tras medio siglo de haber proclamado y pretendido esa unidad de la izquierda uruguaya? ¿Qué circunstancias políticas y/o coyunturales marcaron la diferencia para que se propiciara la materialización de la unidad? ¿Qué significación histórica trajo aparejado ese proceso desde el punto de vista de la dinamización del cambio de las estructuras sociales?

El modelo de práctica política

La opción electoral desplegada en aquel entonces por la izquierda opositora estaba integrada a estrategias de intervención política más amplias y abarcativas, desarrollándose sobre todo una fuerte inserción en el movimiento obrero pero también en los ámbitos de la cultura y la academia.

Los frentes sociales de las orgánicas de la izquierda electoral, si bien cumplían una función de acumulación proselitista innegable, también inyectaban en las estructuras partidarias preocupaciones, inquietudes e iniciativas que, devenidas de la base social, influían en la formación política de la opinión partidaria.

Aunque con asimetrías en el grado de influencia mutua, la inserción social como modalidad de hacer política configuraba otra dinámica de relación entre lo político específico y lo político social. Esa dinámica, que las más de las veces tenía ribetes viciosos por la forma en que los aparatos partidarios concebían la forma de esa relación, estructuraba, así y todo, un escenario de hacer y pensar la política mucho más cerca de lo social que de lo exclusivamente institucional. A su vez, la ingravidez de la relación de fuerzas parlamentarias imponía que los partidos de izquierda se expresaran desde el movimiento popular organizado e hicieran hechos políticos desde esa esfera.

Un aspecto pernicioso devenido de esa amorfa concepción de la relación entre lo político-específico y lo político-social implicó que la división de las estructuras orgánicas de los partidos de izquierda se reflejara ostensiblemente en las estructuras sindicales, desarrollando cada partido sus propias centrales sindicales. Aspecto regresivo que el propio movimiento obrero se encargó de superar, años después, con la creación de la CNT.

Así y todo, cabe subrayar que el viraje de la izquierda hacia la institucionalización del modelo de hacer política, como principio regulador y hegemónico, fue parte de un proceso pausado y conflictivo, pero inequívocamente ascendente. Ese cambio de paradigma concreto es la concreción de uno de los factores de agotamiento,

no sólo de un modelo práctico y concreto de hacer política, sino de toda una forma de pensar y hacer política, que en última instancia tiene que ver con la identidad de la izquierda.

El debate ideológico y la necesidad de la formación política y de cuadros imbuidos en las lucha de clases pautaba una agenda de acción que superaba el dogma del pragmatismo “tacticista” y la racionalidad instrumental. Aquella izquierda, más allá de coincidencias o desavenencias concretas, era usina de ideas y no mera formadora de opinión a partir de los dictámenes del líder y su séquito de asesores. La decadencia de aquellas prácticas formativas se ha transformado, junto con el cambio de modelo de práctica política, en una de las mayores manifestaciones de la crisis de reproducción ideológica de la izquierda.

Esta crisis de reproducción representa una transformación de signo negativo, tanto en lo que tiene que ver con la generación de las nuevas camadas de dirigentes como, y fundamentalmente, en el imaginario social colectivo respecto a las representaciones subjetivas sobre el qué es ser de izquierda.

Relación inversa y devolución negativa

El agotamiento del FA como síntesis política de la izquierda uruguaya se expresa en la relación inversa que se establece entre nivel de conciencia y organización popular y su crecimiento electoral.

Relación inversa que, paradójicamente, consagró su máxima devolución negativa el 1º de marzo de 2005, con la asunción del gobierno nacional. A partir de este punto de inflexión, la trayectoria de esta relación inversa ha sido creciente.

El FA nació con el influjo de una conciencia de clase en ascendencia, sustanciado en un proceso sostenido de crecimiento de la organización popular. Sin embargo, en su progresión histórica, y sobre todo luego de su llegada al gobierno, aquel influjo se fue transmutando en desacumulación estratégica; abriéndose una nueva serie inédita de contradicciones, motivada fundamentalmente por la forma en que se “laudó” la dicotomía –antes tan discutida y hoy tan olvidada– entre gobierno y poder.

Tras más de doce años al mando del Estado, el proyecto político gubernamental del FA no generó condiciones para propiciar un proceso de transformaciones estructurales con vocación poscapitalista. Entiéndase bien: la crítica no es que no hizo la revolución. La crítica es que borró del mapa de su política de acumulación de fuerzas la transformación estructural de la sociedad.

Con más de una década de gobierno y con mayorías parlamentarias para impulsar con autonomía las decisiones programáticas que se propusiera, no hay ningún indicio de sistematización respecto a políticas orientadas a transformar la quinta esencia de la cuestión social: el modelo de organización del trabajo y el patrón de acumulación de riquezas.

No se transformó significativamente ningún aspecto estructurante de las relaciones sociales de poder del sistema capitalista. No hay procesos modificatorios encaminados a reconfigurar las relaciones sociales en materia de modelo económico, de explotación de los recursos naturales, de medios de comunicación, de sistema financiero, de política comercial exterior, de inserción internacional del país, de política de desarrollo cultural integral, entre otros enclaves donde se define socialmente la construcción de poder.

Cabe decir que, para quien escribe, esta clausura programática no es un asunto moral entre valientes o traidores. Es un problema eminentemente político que evidencia la falta de cohesión estratégica del FA respecto al proyecto de sociedad a impulsar. En la mayoría de los temas clave que hacen a las relaciones de poder, se ha registrado una serie de reajustes con perfil innovador, pero solamente en términos de re-equilibrar las tensiones. En ninguno de ellos se objetivaron procesos de acumulación para posibilitar condiciones de cambio social estructural. Incluso, en casos, como el factor neurálgico de la dependencia y la extranjerización de la economía, las innovaciones han sido para peor.

En ese sentido, el proceso inaugurado por el gobierno del FA se caracterizó por la combinación desigual de la continuidad y el cambio respecto al modelo de dominación clásico. Donde la continuidad representa la vigencia de las estructuras de poder y las contradicciones principales de la formación social uruguaya (dependencia y desigualdad), y el cambio, la reconfiguración de los modos de aplicación de las políticas de amortiguación del conflicto social.

No debe menoscabarse por ello la relevancia de estas adaptaciones, ya que en esos reajustes radica un profundo factor diferenciador con el modelo de dominación clásico impartido por la derecha. Tanto así, que la comprensión de la redefinición parcial del escenario en el que discurre la lucha de clases en Uruguay a partir de la llegada del FA al gobierno, representa una de las bases más importantes para repensar el modelo de acumulación de fuerzas y de práctica política para el relanzamiento de una nueva síntesis de izquierda.

Sin embargo, cabe destacar que el agotamiento del proyecto político del FA como síntesis transformadora no significa que se haya erosionado su hegemonía como opción electoral a nivel de masas. Para el pueblo, la dicotomía principal en el terreno político continúa siendo entre la derecha, representada orgánicamente por los partidos blanco y colorado, y la izquierda, representada orgánicamente por el FA. Esto no deja de ser uno de los riesgos más importantes que está en ciernes para toda la izquierda, ya que se corre el riesgo de que se termine tirando al niño con el agua sucia de la bañera.

Tal vez una pregunta para problematizar este encuadre podría ser si la razón de este proceso político que hemos venido analizando es consecuencia de la necesidad o resultado de la convicción. Si es una cuestión de etapas o un proyecto en sí mismo. Si es instrumental y de transición o, por el contrario, la manifestación concreta de los límites de las posibilidades del FA como proyecto político.

Por la confesión de parte que implica el rumbo adoptado en estos 12 años, es irrefutable que la última de las tendencias consignadas es la que marca la cancha y, por sobre todo, la que abre el principal desafío para nuestra generación de cara a recrear una nueva síntesis política para la izquierda uruguaya.

A modo de cierre, dos conclusiones abiertas: está en curso la configuración de un nuevo escenario político para Uruguay y la forma y contenido que asuma ese nuevo escenario podrá estar tan cargado de entusiasmo revolucionario como de tristezas y lamentos. Lo cierto es que se agotan las posibilidades para el agua tibia. O calienta o enfría.

O se mueven las brasas para que el calor abrace con su fuerza una nueva perspectiva estratégica de los cambios, o la fuerza inercial de la *realpolitik* y la implacable lógica del metabolismo capitalista le terminará haciendo la digestión al ciclo progresista.

Breve historia de una debacle y un golpe

Eric Nepomuceno¹

Poco después de las 10 de la noche del domingo 26 de octubre de 2014 fueron anunciados los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con 54.483.045 de votos válidos (51,65 por ciento del total), Dilma Rousseff, quien cuatro años antes se había transformado en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país de mayor población de América Latina y una de las diez más fuertes economías del mundo, lograba reelegirse. El Partido de los Trabajadores (PT) se aseguraba cuatro años más de gobierno.

El derrotado senador Aécio Neves, del neoliberal Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), obtuvo 50.933.533, o sea un 48,35 por ciento de los votos. De las cuatro victorias consecutivas del PT sobre el PSDB, esa era la más ajustada.

Enseguida surgieron las primeras señales de que Aécio Neves y los caciques de su agrupación no se resignarían a la decisión de los electores brasileños. A dos días del resultado, el cabecilla del intento de reinsertar el neoliberalismo más fundamentalista en Brasil recurrió al Tribunal Superior Electoral denunciando que la lista de Dilma Rousseff-Michel Temer había utilizado en la campaña dinero oriundo de la corrupción (causa que sigue su curso en la justicia electoral).

También quedó claro que las élites no se resignarían. Luego de dominar el país durante siglos, habían sido obligadas a tragar primero la llegada al poder y la reelección de un obrero llamado Lula da Silva y luego la elección y la reelección de una exmilitante contra la dictadura militar que sofocó al país entre 1964 y 1985, una expresa política sometida a toda clase de tormentos y vejaciones. Con un obrero oriundo de los rincones de la miseria y la opresión ya era suficiente. Con una expresa política reelecta ya era demasiado.

1. **Eric Nepomuceno** (San Pablo, 1948) es escritor y periodista. Columnista de los periódicos *Página/12* de Argentina y *La Jornada* de México.

Esa es una de las razones que llevaron a Neves y sus aliados a lanzarse a la misión de impedir que Dilma lograra gobernar y, luego, a destituirla. Mientras la presidenta reelecta conformaba su nuevo gobierno, los derrotados empezaban a armar lo que, poco después, abriría espacio para el golpe institucional, que contaría con el tradicional respaldo unánime e incondicional de la banca, las elites empresariales y, claro, los medios hegemónicos de comunicación.

La conspiración

El primer paso concreto se dio a principios de 2015, primer año del segundo mandato presidencial. El principal aliado del PT en el Congreso, el PMDB, rompió el acuerdo que determinaba que diputados de los dos partidos se turnasen en la presidencia de la Cámara, y presentó la candidatura de Eduardo Cunha.

Figura clave en el proceso golpista, Cunha tenía el perfil exacto para esa misión: pese a un desempeño oscuro durante sus largos años como diputado, controlaba —era sabido por todos— alrededor de 200 de los 513 integrantes de la Cámara Baja. Su especialidad: obtener fondos para ayudar en campañas electorales de candidatos de escasa representatividad, que luego se transformaban en deudores morales de su patrocinador. A la vez, facilitaba esquemas de corrupción que beneficiaban a sus cómplices. Con base en cálculos precipitados de su revuelto núcleo político, Dilma aceptó que el PT presentase un candidato propio. Resultado: Cunha obtuvo una victoria aplastante y asumió el puesto con fuerza evidente. Ese ha sido el segundo factor que determinaría el golpe institucional.

A partir de entonces, lo que se vio fue una Cámara empeñando sus mejores esfuerzos en impedir que Dilma gobernase. Los proyectos aprobados muestran un retroceso brutal en relación no sólo al primer mandato de Dilma sino a todo el período de Lula (2003-2010). Demostrando una insólita y contundente habilidad para manipular las sesiones, Cunha logró, mientras aprobaba iniciativas de la bancada más retrógrada, integrada por pequeños y hasta entonces poco expresivos partidos, sabotear todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, que tenían como objetivo intentar disminuir los efectos maléficos de una profunda crisis económica.

Eran los pasos que abrían camino para que avanzara el golpe y, al mismo tiempo, instituían vía libre para una especie de revancha de la oligarquía más rancia que siempre dominó el país.

Así nació el posterior escenario de pesadilla. De un lado, el gobierno enfrentaba una crisis económica que ya nadie podía ocultar. Del

otro, un Congreso desleal e irresponsable. Y en el medio del camino, el presidente de la Cámara de Diputados que parecía un huracán descontrolado, cuya función era hacer de la vida del gobierno un infierno incesante. Como telón de fondo, Neves y el PSDB creando maniobras cuyo objetivo era accionar, cuando fuera el momento, los mecanismos para fulminar a la mandataria.

Otro factor importante que contribuyó de manera fundamental para el escenario golpista fueron las acciones de un juez de provincias, Sergio Moro, cuyo tribunal de primera instancia tiene a cargo las investigaciones relacionadas con el poderoso esquema de corrupción instaurado en la estatal Petrobras. Imponiendo un festival de arbitrariedades sin límites, en un largo primer momento circunscribió las investigaciones solamente al periodo en que el PT estuvo en el poder.

Moro, con el decisivo respaldo de los medios de comunicación, transmitió al país la imagen de que todo lo que se refiriese a corrupción tenía vínculo directo con Lula y el PT. De manera claramente intencional y facciosa, Moro, el Ministerio Público y toda la estructura judicial llevaron a la opinión pública una intensa campaña de descrédito contra Lula, Dilma y el PT.

Hay que reconocer que hubo casos serios y comprobados de gruesa corrupción, pero no limitados al PT. Al contrario. La mayoría de los casos se relaciona con los partidos aliados, sobre todo el principal de ellos, el mismo PMDB que encabezó el golpe. También llovieron denuncias contra el PSDB, sus principales líderes, José Serra y Aécio Neves, y toda una constelación de personajes involucrados en el golpe. No sin razón, esas denuncias sólo se hicieron públicas después de la destitución de Dilma.

Nada más significativo que observar que luego de comandar una Cámara de Diputados dispuesta a cualquier medida para sabotear al gobierno de la presidenta reelecta, Cunha, principal responsable de la apertura del juicio, fue destituido por el Tribunal Supremo y perdió su mandato gracias a la condena de sus pares. Su nuevo destino fue la cárcel. Pero antes, claro, lo dejaron actuar libremente para consumar el golpe.

Razones del golpe

Dilma cometió errores, empezando por su campaña electoral cuando pintó y expuso al electorado un cuadro que era falso: contrariamente a su discurso, la situación económica estaba en avanzado estado de deterioro. También se equivocó a la hora de armar su segundo

gobierno, tratando de mostrar que sería un mandato independiente, liberado de la sombra poderosa de Lula, y lo que logró fue armar un gabinete que más se parecía a un sindicato de mediocridades.

Pero no ha sido por ninguno de esos equívocos que sufrió el golpe institucional. La verdadera raíz de lo que luego sacudió al país está en el primer día de enero de 2003, cuando Lula llegó a la presidencia.

Dueño de una intuición política sin paralelo en el escenario de las últimas décadas en Brasil, en sus dos mandatos Lula impuso un cambio radical en el escenario nacional. Lanzó programas de inclusión social comparables a los de Getulio Vargas en la década de 1940. De la reducción de la miseria a la inclusión de 43 millones de brasileños en el mercado de consumo, de la implantación de medidas que fortalecieron la industria a la acción de política externa definida como “activa y altiva”, hubo iniciativas que terminaron sirviendo de ejemplo y referencia en todo el mundo.

Además, Lula tuvo sensibilidad y percepción suficientes para saber el momento exacto de imponer cambios de ruta sin perder el rumbo. Preservó algunos principios económicos heredados de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, para mantener el equilibrio posible en las cuentas públicas y asegurar la estabilidad de la economía. Pero, al mismo tiempo, supo impulsar una primera y muy significativa etapa de cambios sociales: en el periodo de Lula se asentaron las bases para que Brasil fuese excluido del mapa mundial del hambre.

Es verdad que hay contundentes y honestas críticas contra el modelo implantado, principalmente por haber asegurado la inclusión social de millones de brasileños por la vía del consumo y no de la defensa de la ciudadanía (educación, salud, transporte, seguridad). Pero hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, una frase que Lula reiteró a lo largo de sus ocho años como presidente: no se puede cambiar del día a la noche una herencia tenebrosa de 500 años.

Aun así, se multiplicaron las plazas en cursos superiores, se impusieron cuotas para minorías (negros, indígenas, por ejemplo), y otros tantos ejemplos de un ascenso social apenas soñado. Hijos de campesinos analfabetos fueron a la universidad, y sobran ejemplos de ese tipo de nueva vida.

¿Ha sido alcanzado un resultado suficiente para que se hable de inclusión social a gran escala? Seguramente no. Al fin y al cabo, además de los tan mencionados 500 años de férrea desigualdad, se trata de un país de poco más de 200 millones de habitantes, cuya inmensa mayoría se acostumbró a ser sometida a una vida sin otro

futuro que el cotidiano. Pero nunca antes se había avanzado tanto.

Al mismo tiempo, Lula tuvo la habilidad de atender a las élites: empresarios nacionales, la industria transnacional y, claro, el capital –la banca, esa meliflua y sacrosanta entidad llamada “mercado financiero”– obtuvieron altos beneficios.

Ese juego de doble vía, doble rostro, sin embargo, jamás ocultó una verdad: las mismas élites ampliamente beneficiadas por Lula siguieron despreciándolo, en uno de los casos más ejemplares del prejuicio social imperante en Brasil. Jamás perdonaron que un hijo de una región de atraso y miseria, que cometía errores gramaticales, que vino de los sótanos de la vida más humilde y humillada, tuviese no sólo semejante poder sino pleno respaldo popular.

Ese es el fondo que generó la olla en la que se cocinó el golpe concretado en agosto de 2016. Mucho más que contra Dilma y sus eventuales equívocos, la verdadera razón fue interrumpir un proceso político iniciado en 2003, imponer una acción de tierra arrasada y devolver el poder a las élites de siempre.

Intereses geopolíticos

No es necesario mencionar el interés de fuerzas externas en liquidar los gobiernos del PT. Mientras estuvieron en el poder, primero Lula y luego Dilma (aunque de manera bastante menos enfática) lograron consolidar un protagonismo específico para Brasil en el gran mapa global.

Los intereses despertados por la política Sur-Sur impulsada por Lula en sus dos mandatos fueron de encuentro a los de los grandes centros de poder político y económico. Fortalecer el Mercosur, la Unasur y los BRICS (espacio que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) seguramente no ha sido de agrado ni de Washington ni de la Unión Europea, y menos de la gran banca internacional. Además, la política de protección a los intereses soberanos de Brasil sobre las extraordinarias reservas de petróleo descubiertas con tecnología propia en los últimos doce o trece años contrarió frontalmente el apetito de las grandes multinacionales del sector.

Muy rápidamente, tan pronto Michel Temer asumió la presidencia, en mayo de 2016, la política externa “activa y altiva” impulsada por Lula abrió paso a su furibunda negación, llevada a cabo por el canciller José Serra, que ni siquiera sabía nombrar los países a los que correspondía la sigla BRICS (tuvo que ser auxiliado por el reportero que lo entrevistaba).

En escasos meses se gestó el desmonte de trece años de gobierno popular: se anuló la legislación del petróleo, se lanzaron las bases para cambiar de manera radical la legislación laboral, el sistema de jubilaciones y pensiones, se impusieron duros recortes a los presupuestos de salud y educación públicas... La lista es larga y tenebrosa.

Las primeras medidas anunciadas por Temer tan pronto se consumó el golpe son elocuentes: eliminar las carteras de Derechos Humanos, de la Mujer y la de Igualdad Racial.

A partir de ahí, nada sorprendió. Si alguna vez algún historiador intenta enumerar los cambios más significativos introducidos por Lula y Dilma en el dramático mapa social brasileño, bastará con chequear lo que Temer, sus aliados y los que comandaron todo ese proceso eliminaron tan pronto se apoderaron del gobierno.

La Revolución Cubana en el siglo xxi

Fernando Martínez Heredia¹

Como todos saben, Cuba es un país realmente singular. Sólo mencionaré los cambios colosales de la vida de las personas, las relaciones sociales y las instituciones generadas por el proceso revolucionario, conquistadas y desarrolladas con la participación decisiva de las mayorías, codificadas por las leyes y convertidas en costumbres. El consenso por parte de las mayorías de que el poder político ha gozado durante más de medio siglo tiene bases muy firmes en el imperio de la justicia social, la redistribución sistemática de la riqueza del país en beneficio de esas mayorías, la identificación general del gobierno como servidor de los altos fines de la sociedad y administrador honesto –y no como una sucesión de grupos corrompidos que medran, engañan y lucran– y la defensa intransigente de la soberanía nacional plena.

La sociedad de justicia, bienestar y oportunidades para todos que se logró como saldo del proceso hasta 1990 ha sufrido deterioros y reducciones de esos rasgos en los últimos 25 años. No me detengo en la profunda crisis que vivió Cuba en la primera mitad de la década de 1990, que originó esa tendencia negativa, solamente añado dos constantes que operan siempre y sistemáticamente en contra: la agresión permanente de Estados Unidos, desde 1959, que incluye el funesto estado de guerra económica del bloqueo; y las profundas y abarcadoras desventajas económicas que sufrimos, como la mayor parte de los pueblos del planeta, causadas por el sistema de financiarización, centralización, robo de recursos y exacciones parasitarias del gran capital.

La crisis pudo ser enfrentada y remontada porque se produjo la conjunción de una gran sagacidad, decisión de resistir, valentía y

1. **Fernando Martínez Heredia** (Yaguajay, 1939) es profesor titular de la Universidad de La Habana y titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Doctor en Derecho, especialista en Ciencias Sociales, ensayista e historiador.

un apego estricto a los principios socialistas, combinados con una enorme flexibilidad táctica y con la abnegación, la combatividad y la pericia de las mayorías, franqueadas por el extraordinario desarrollo que habían experimentado sus capacidades y su conciencia política en las décadas previas. Fue mucho más que el mantenimiento de un gran pacto social. No hubo ninguna rendición, ni apelación al repertorio neoliberal que era usual: la política social ejemplar cubana se mantuvo, aun en los peores momentos. La maestría y la firmeza de Fidel y la sabiduría política del pueblo, unidas, impidieron la caída del socialismo cubano.

Pero los efectos de la profunda contracción de la actividad económica y la calidad de la vida, y los de una parte de las medidas que fue necesario tomar, se hicieron sentir de manera aguda primero y, aunque pronto fueron atenuados, comenzaron a tener consecuencias que se han vuelto en parte crónicas, y que han recibido impactos muy diversos en las dos décadas que siguen hasta hoy.

En la actualidad se puede apreciar la consolidación de desigualdades ante el ingreso que percibe la población, que eran desconocidas antes de la crisis. Hay sectores empobrecidos, y esto es más agudo en grupos sociales que estaban en desventaja por razones históricas y/o territoriales, o a los que la evolución de la situación fue llevando a ese estado. De un nivel ínfimo de pobreza y cero pobreza extrema hace treinta años, hemos pasado a tasas de pobreza que para Cuba son notablemente altas. Las deficiencias más significativas se encuentran en vivienda, remuneración del trabajo, situación de comunidades y acceso a una parte de los consumos necesarios o deseados. De una sociedad en la que las relaciones entre los esfuerzos laborales y los consumos y la calidad de la vida eran muy indirectas, hemos pasado a una situación en la que los ingresos directos que se obtienen desempeñan un papel grande en esos consumos y en la calidad de la vida. El papel del dinero ha crecido muy sensiblemente en un gran número de campos.

Las remesas desde el exterior, importantes para la macroeconomía, pueden erosionar también las ideas socialistas. Es probable que una parte de ellas esté sirviendo para crear empresas pequeñas, pero privilegiadas en cuanto a operar y sostenerse.

Junto a esas realidades han sido impactadas las representaciones, los valores, la conciencia y las ideas, de manera paulatina pero que no puede subestimarse. Entre sus efectos está la existencia de una franja de población que es ajena a la Revolución, privilegia los asuntos personales y las relaciones familiares y de pequeños grupos, y

suele creerse ajena a militancias y contaminaciones políticas. Ese apoliticismo convive en paralelo con las convicciones políticas y las costumbres socialistas arraigadas, como conviven en paralelo en nuestra sociedad un enorme número de relaciones sociales, representaciones y valores socialistas y capitalistas. Se está librando una guerra cultural abierta entre el socialismo y el capitalismo.

Agrego aún otro rasgo negativo que ha crecido: la conservatización de la vida social. Parece ser aún más neutra que la despolitización, y podría verse solamente como una portadora de modas, comportamientos, satisfacciones y normas que tienen su referente en algo que porta el aura de lo intemporal. Como una “vuelta a la normalidad” de la sociedad. Pero en realidad es un enemigo peligroso del socialismo, porque es una forma efectiva de desarmar la actividad política y promover la simpatía por soluciones conservadoras a los problemas de la sociedad.

¿Avanzará el desarme ideológico?

¿Llegaremos a ser un país “normal”?

Frente a esas realidades adversas, Cuba conserva fuerzas profundas y enormes para mantener su revolución socialista de liberación nacional, y un sólido potencial para desarrollarla hacia nuevas metas, ambiciosas pero necesarias. Ante todo, se ha mantenido la mayor parte de una política social que asigna recursos, brinda un enorme número de servicios sobre bases socialistas de gratuidad y universalidad, sostiene sistemas como los de salud, educación, seguridad social y cultura, y protege a los grupos humanos con necesidades especiales.

El acumulado con el que contamos es impresionante a nivel mundial. Un buen ejemplo de ello son los datos sobre las mujeres cubanas brindados por el presidente Raúl Castro, en su discurso ante la Conferencia sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres de la ONU, el 27 de septiembre de 2015. Las enormes capacidades de formación general, técnica y científica, que fueron un factor tan relevante para enfrentar la crisis, siguen siendo una gran ventaja permanente. La pacificación de la existencia personal y familiar garantizó y elevó la calidad de la vida, las posibilidades, los derechos, los nuevos problemas y los proyectos de las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos. En Cuba no existen, desde hace más de 50 años, la violencia en la política, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas ni las torturas a detenidos. Las tasas de homicidios y de consumo de

drogas son bajas. No existe como problema de alguna entidad la seguridad de la población.

Tenemos, desgraciadamente, barrios marginales, pero no tenemos seres humanos marginales que hayan interiorizado su inferioridad y su destino. Nuestros investigadores estudian la pobreza en el país, pero no tenemos clases subalternas. No se ha producido, ni permitiremos que llegue a producirse, esa victoria de la dominación que es la naturalización de las relaciones sociales que producen la desigualdad, la explotación del trabajo, la exclusión, la opresión. Un escamoteo de lo esencial que es básico para la hegemonía del capitalismo.

Frente a los desafíos cruciales de la actualidad y el futuro cercano, es imprescindible conocer lo mejor posible los problemas, los límites y los retrocesos, identificar lo que nos perjudica, además de los enemigos externos y las insuficiencias estructurales, como son el burocratismo y la inercia, males muy graves, la falta de cumplimiento o el mal ejercicio de tareas que son indispensables, los errores, la formación de grupos conservadores o de intereses materiales y de poder social, y los manejos corruptos. Es decir, ganar conciencia de lo que necesitamos cambiar en nuestro propio campo.

Una forma eficaz de oponerse a la expansión de las desventajas y exclusiones, por ejemplo, es discutir y encontrar los modos acertados de combatir la reproducción de las desventajas de determinados grupos y áreas, incluyendo desatar las fuerzas unidas de especialistas y masas de población que poseen cualidades suficientes para hacerlo, y hacer los cambios institucionales que sean necesarios.

Desde 1959 hasta hoy, Estados Unidos ha mantenido su objetivo estratégico de destruir el socialismo cubano y socavar nuestra soberanía nacional. A partir de diciembre de 2014 comenzó una etapa diferente dentro de la misma estrategia, mediante lentas y astutas negociaciones, gestos formales, algunas medidas según sus intereses y una “ofensiva de paz” que erróneamente nos supone ingenuos. Pero mantiene incólume el sistema ilegal y criminal de agresiones sistemáticas contra Cuba, a la espera de recibir concesiones y que nos dividamos, mientras intenta seducir a una suerte de nueva clase media con comercio, inversiones, consumos y “tecnologías”, y esperanzar a sectores menos conscientes de la franja de pobreza existente. Sin prescindir, naturalmente, de todas las formas de subversión que estén a su alcance. Así fue durante la presidencia de Obama. Es una incógnita –al momento de escribir estas líneas– si Donald Trump continuará esa fase o si le introducirá cambios.

Nadie puede ni podrá imponerle a Cuba cambios que no sean los que las cubanas y los cubanos quieran darse con libertad, en el ejercicio de su cultura, sus intereses, sus ideales, sus proyectos y su soberanía.

No podemos separar las respuestas a la política imperialista de las acciones dirigidas a defender y profundizar nuestro socialismo: en realidad, estas últimas serán lo decisivo. La sociedad pasa al centro del combate político, y ella necesita que entre todos hagamos política social, y hagamos política. Un requisito básico será la activación de muchos medios organizados que no están siendo eficaces ni atractivos, y la creación de nuevos espacios y mecanismos para fomentar la actuación y la creatividad populares. Son innumerables los asuntos, los retos, las necesidades, los campos en los que podrían ejercitar su participación quienes sientan que deben hacerlo.

La economía es una dimensión estratégica que no tengo espacio para abordar aquí. Las referencias a ella han tenido un lugar central en los últimos años. Pero las relaciones y los problemas económicos son algo demasiado importante para reducirlos a invocaciones pragmáticas y medidas que involucren a unos pocos: tienen que ser campo de debates y de labores de todos. Por otra parte, necesitamos que la educación escolar se renueve y se desarrolle, pero ese objetivo es completamente factible, por el intenso amor a la educación que caracteriza a nuestra cultura, la multitud de personas muy capacitadas que hay en todas partes del país y la gigantesca cultura institucional que existe en ese campo.

Necesitamos más rescate en términos ideales y materiales de las relaciones y la manera de vivir socialistas; mayor socialización dentro del ámbito y la gestión estatales; un impulso cierto de la municipalización y otras formas de descentralización que beneficien a empeños de colectivos, a las comunidades y al país, y no al individualismo y el afán de lucro; enfoques integrales de los problemas.

Se está produciendo un aumento de la politización en sectores amplios de población, que estimula al nivel inmenso de conciencia política que posee el pueblo cubano. Emergen sectores de jóvenes expresamente anticapitalistas. Ha crecido la expresión pública de críticas y criterios diferentes hechos por cubanos socialistas y dirigidos a fortalecer el socialismo. El pueblo cubano ha ejercido la justicia social, la libertad, la solidaridad y el pensar con su propia cabeza, y se ha acostumbrado a hacerlo. Tenemos conciencia política del momento histórico en que vivimos y lo que se juega en él.

“Yo soy Fidel”

Aquella consigna que salió a enfrentar su muerte fue inventada por la gente, no fue orientada por nadie, y se convirtió en la expresión nacional por excelencia, porque contiene homenaje, orgullo del que la pronuncia y determinación personal de continuar la causa revolucionaria, encarnada en el líder mayor y más amado. Fidel dio muchas lecciones en los nueve días del duelo, y ganó su primera batalla póstuma. El pueblo mostró abiertamente qué es en realidad, y demostró que está dispuesto a defender su legado.

Durante más de treinta años, Cuba se vio prácticamente privada de tener relaciones económicas y estatales con la región. Pero en los últimos veinticinco años esa situación se transformó radicalmente. Existe hoy una masa enorme de vínculos sociales, económicos, políticos y estatales y, por sus posiciones y su alto nivel de actividades internacionales, Cuba goza de gran prestigio en todo el ámbito regional. Al mismo tiempo, casi sesenta años de solidaridad en ambos sentidos entre los pueblos del continente y el nuestro, y el ejemplo permanente constituido por la sociedad de justicia y libertad creada por la Revolución en la isla, su soberanía nacional plena y su antiimperialismo e internacionalismo, configuran un hecho muy relevante entre las realidades latinoamericanas.

Eventos recientes adversos en Venezuela y algunos otros países latinoamericanos nos preocupan a todos y podrían indicar que el tipo de proceso que tuvo muchos logros en una parte de la región y generó tantas esperanzas está chocando con sus límites, y el imperialismo y sectores capitalistas locales han pasado a la ofensiva con el fin de liquidarlo y esparcir el derrotismo. Cuba mantiene su apoyo y acompañamiento a esos procesos, y lo expresa con mucha claridad. Si la tendencia actual avanza y se consolida, sin duda tendremos más dificultades y menos compañía, pero, como siempre, haremos causa común con nuestros pueblos hermanos y el país mantendrá la política de apoyo a las coordinaciones de América Latina y el Caribe, y al horizonte integracionista.

Parte III

Apuntes para el reimpulso



Jafeth Gómez (Patia, 1954) es artista oriundo del departamento del Cauca, Colombia. Coordinador del Colectivo Cultural Wipala de acompañamiento a procesos artísticos comunitarios (www.jafeth.com.co).

Apuntes para el reimpulso

Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz

Nuestra América atraviesa, desde hace al menos dos décadas, un álgido tiempo de cambios. El denominado ciclo progresista definió un momento inédito de logros y oportunidades, tal vez el de mayores avances de conjunto en la región desde las esperanzas abiertas por la Revolución Cubana en 1959 y seguidas por los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo xx. A mediados de 2009, en su momento de mayor despliegue, diversas propuestas políticas con arraigo popular gobernaban en siete de los doce países de América del Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela) y en tres de los siete centroamericanos (El Salvador, Honduras y Nicaragua). Sumando a Cuba, esos gobiernos abarcaban más de 300 millones de personas.

Las experiencias en cada caso fueron disímiles; tuvieron factores en común y diferencias importantes de señalar.

En los últimos años hubo claras derrotas y el ciclo acusa una fatiga determinante, de consecuencias aún poco concluyentes. El destino de América Latina y el Caribe vuelve a ser una incógnita. Pero más allá del retroceso evidente, el ideario y los anhelos de emancipación que se proyectaron durante la última década y media no están derrotados. Eso sí: desde las fuerzas populares y revolucionarias urge reactualizar debates, recalcular y corregir, si se pretende recobrar impulso para volver a avanzar.

Este artículo expresa, ya desde el título, una intención clara: es nuestro deseo (para ello militamos y a ello dedicamos este trabajo) que los pueblos de Nuestra América logren dar un reimpulso decisivo a sus anhelos de transformación social, justicia e igualdad; que las conquistas del período que aquí analizamos sean punto de referencia para ajustar estrategias, corregir errores, incorporar nuevas miradas e

ir por más. En ese sentido, el análisis de “lo que fue” tiene por objetivo alumbrar lo que será.

Para ello nos proponemos una mirada global, ya que comprender los alcances y límites de este ciclo implica indagar en sus factores de origen, su proyección más allá de las fronteras y sus decisiones de desarrollo. Pero, a la vez, una mirada que sepa diferenciar procesos al interior del bloque de gobiernos en cuestión: la generalización como ciclo progresista, si bien válida y necesaria a los fines de referencia sintética que defina al conjunto, suele ser injusta –e incluso contra-productente– a la hora de hacer valoraciones y extraer conclusiones cuando se pretende homogeneizarlo.

Buscaremos desarrollar ideas que ayuden a responder las preguntas: ¿Qué concluye con las crisis y los reveses del último tiempo, qué se proyecta como continuidad y qué es necesario descartar de ese bagaje para, por el contrario, “inventar” hacia adelante con la intención de no volver a “errar”? ¿Cuáles podrían ser los tópicos de un paradigma renovado para la izquierda continental que permita recrear un horizonte emancipatorio?

Ciclo

Coincidimos con el análisis, expresado en algunos de los artículos de este libro, de que una nueva etapa política en América Latina se inauguró a partir de las luchas sociales de resistencia al neoliberalismo antes que con la emergencia de los gobiernos pos-neoliberales¹. La relación entre esas luchas (que en algunos casos tomaron forma de verdaderas insurrecciones populares, más o menos organizadas) y los gobiernos que emergieron en sus nombres, no es sin embargo una relación lineal o mecánica.

En algunos países, unos y otros eventos (luchas sociales / gobiernos pos-neoliberales) siguieron la misma dinámica que marcó el chavismo en Venezuela, que se propuso como alternativa al desgobierno neoliberal diez años después del Caracazo de 1989; lógicas similares se dieron tras los levantamientos en Bolivia, Argentina o Ecuador. Otros gobiernos se sumaron al ciclo de cambios tras procesos más pacientes y menos coyunturales de gestación: sucedió en Uruguay con el Frente Amplio (fundado en 1971), en Brasil con el PT (surgido

1. Referencias a las luchas populares que precedieron a los gobiernos del ciclo progresista pueden encontrarse en artículos de este libro, como el de Hernán Vargas, “Aportes para el balance y perspectivas del movimiento popular en el período actual”, pág. 81; Isabel Rauber, “Latinoamérica: ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político?”, pág. 25; y Sebastián Quiroga, “Los progresismos en América Latina: parte de un ciclo largo de lucha que excede a los gobiernos (y a los países)”, pág. 95.

en 1980) y, a su modo, con el sandinismo en Nicaragua y el FMLN en El Salvador.

Como se ve, aunque son distintas las formas de arribo al gobierno, el factor previo de acumulación de fuerzas a la hora de entender esta nueva etapa es un dato que no se puede soslayar.

Pero las condiciones que favorecieron el desarrollo de las experiencias de gobierno aquí analizadas cambiaron, para peor, en al menos en dos aspectos determinantes:

1. En 2011 comenzó a agotarse el ciclo extraordinario de ingresos por *commodities* que financió en gran medida las políticas distributivas y gestó la base de estabilidad y consensos sobre los que se apoyaron los avances políticos y soberanos.

2. Esa realidad económica, sumada a la fatiga de los gobiernos por los años acumulados al frente del Estado, durante los cuales se subestimaron limitaciones y crisis endógenas, favoreció que las derechas aprovecharan la ocasión y capitalizaran el tiempo fuera del ejercicio de gobierno para reconstituir sus estrategias. Las fuerzas conservadoras desplegaron toda su artillería basada en su poderío económico, mediático y judicial, disfrazaron con nuevo ropaje sus viejas recetas y sacaron máximo provecho de los errores no forzados de los gobiernos alternativos. Se propusieron recuperar, por las buenas o por las malas, la hegemonía perdida, y lograron avances parciales, pero considerables, a nivel regional.

¿Progresista?

Más allá del rótulo, son diversas las caracterizaciones sobre el ciclo histórico que nos ocupa. ¿Posneoliberal? ¿Gobiernos populares y revolucionarios? ¿Socialismo del siglo XXI? ¿Populismos? Antes de adentrarnos en las particularidades de los distintos procesos, destaquemos los elementos comunes:

- Las luchas que precedieron a estos gobiernos se complementaron con un discurso oficial fuertemente antineoliberal y de ruptura con el Consenso de Washington; esos lineamientos se proyectaron en programas de gobierno alternativos, en algunos países más audaces y en otros más tímidos, lo que no impide caracterizar a todo el proceso como “posneoliberal”.

- Estos proyectos relegitimaron la “vía electoral”: en todos los casos llegaron al gobierno por elecciones transparentes y lo ejercieron con considerable apoyo popular, que renovaron en las urnas en sucesivas elecciones durante más de una década.

- Contaron con una coyuntura económica favorable para la región, caracterizada por el auge de los precios internacionales de las materias primas (productos agrícolas, hidrocarburos, minerales). Sobre el beneficio del denominado “superciclo” de los *commodities*, asentaron evidentes mejoras, como una disminución notoria de la pobreza entre 2001 y 2011, o la ampliación de derechos fuertemente reclamados durante la etapa previa. Hubo un repunte general de todos los indicadores económicos y sociales, hecho que reconocen hasta los analistas más críticos.²

- Luego de lo que había sido la impronta privatizadora neoliberal, buscaron reponer al Estado un rol activo. En Venezuela y Bolivia las políticas sociales se complementaron con la nacionalización de resortes básicos de la economía. Eso favoreció la recaudación fiscal (aun en el marco de un sistema tributario regresivo) y fortaleció el aparato estatal, permitiendo recursos para distribuir y alentando una épica de soberanía.

- Estos gobiernos alteraron el tablero geopolítico regional, y su relación con el resto del mundo, al protagonizar lo que tal vez pueda considerarse el proceso de integración continental más importante desde el siglo XIX. El liderazgo de Hugo Chávez –promotor de casi todas las iniciativas integradoras– fue crucial, la inclusión de Cuba en el ALBA y en la Celac resultó un aporte cualitativo determinante y, en general, hubo un desafío a la hegemonía norteamericana que tuvo momentos álgidos como el rechazo al ALCA en 2005.

Hecha esta valoración del ciclo como tal, consideramos imprescindible abordar las diferencias al interior del conjunto.

Un análisis habitual entre los movimientos populares latinoamericanos da cuenta, durante el período que analizamos, de tres bloques de gobiernos. Por un lado, un bloque neoliberal integrado por gobiernos aliados de Estados Unidos y opuestos a cualquier mejora social (centralmente Colombia, México, Perú y Chile). Entre los que se propusieron quebrar esa continuidad se pueden definir dos tipos de proyectos, que el economista Claudio Katz caracteriza como “los centroizquierdistas, que mantienen una relación ambigua con Estados Unidos, arbitran entre el empresariado y toleran las conquistas democráticas (...); y los nacionalistas radicales, que son más esta-

2. Menciones a los indicadores económicos favorables en la región durante el ciclo progresista pueden leerse en análisis críticos que integran este libro, como el de Maristella Svampa, “Crítica a los progresismos realmente existentes”, pág. 61; y Jorge Víaña, “Las dos fases de una década y el desafío de reconducir el proceso”, pág. 155.

tistas, chocan con el imperialismo y la burguesía local, pero oscilan entre el neodesarrollismo y la redistribución del ingreso”. João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil y referente continental de los movimientos sociales del ALBA, en la entrevista que acompaña este trabajo comparte esa delimitación y la ejemplifica mencionando entre los centroizquierdistas o neodesarrollistas a los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil; y entre los nacionalistas radicales (que llama “proyecto ALBA”) a los de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba.³

Esta primera delimitación, aun siendo básica, suele ser esquiva cuando los propios referentes de los procesos en cuestión se refieren al ciclo en su conjunto. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y reconocido intelectual de la izquierda latinoamericana, aunque suele expresar reflexiones críticas⁴, describe el proceso regional de forma indiscriminada, incluso adoptando descalificaciones hacia quienes critican el énfasis extractivista de los gobiernos que más se acomodaron a la matriz neodesarrollista (“izquierdistas de cafetín”, los llama). El propio Chávez solía presentar a sus presidentes amigos, en el caso de Néstor Kirchner, Lula o Cristina Fernández, como mandatarios revolucionarios identificados con el proceso bolivariano. Eso, tal vez justificable en nombre de la diplomacia y de la voluntad unitaria que condicionaría a líderes con responsabilidad de Estado a la hora de esgrimir matices o diferenciaciones que pudieran entenderse como grietas al interior del bloque regional, se convirtió sin embargo en la línea política que hegemonizó el discurso de militancias y medios oficiales. En función de los desafíos que vienen y de los necesarios balances y aprendizajes, creemos fundamental evitar caer en esa falsa homogeneización.

Diez reflexiones para fogonear el reimpulso

Aun sin abonar las hipótesis de fin de ciclo, y entendiendo que la prioridad inmediata pasa por derrotar la ofensiva neoliberal actual, proponemos diez conclusiones en función de lo que entendemos deberá ser un reimpulso de los procesos de cambio en Nuestra América. Superar las debilidades y límites endógenos que manifestaron estos proyectos debe ser un objetivo central si pretendemos hacer los

3. “Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía”. Entrevista a João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil”, en pág. 75.

4. García Linera, Álvaro. “Límites y contradicciones de una década virtuosa continental”, en pág. 55.

necesarios aprendizajes de la experiencia reciente, y reactualizar el trazo de un nuevo proyecto emancipador:

1. Superar la matriz productiva que impuso en Nuestra América el capitalismo dependiente. Resignarse al lugar de proveedores de bienes primarios al que condena a nuestros pueblos la división mundial del trabajo constituye un límite insoslayable para las economías latinoamericanas. La justificación del extractivismo como sostén casi excluyente de los modelos de desarrollo reforzó la centralidad de las multinacionales y sus megaproyectos en las economías de la región, provocando fuertes tensiones con movimientos ambientalistas y pueblos que habitan los territorios en conflicto (caso emblemático, Ecuador). Consideramos que esa ha sido una gran falencia de los gobiernos que, en algunos casos no sin cierto cinismo, enmascararon sus decisiones contrarias a las comunidades con una retórica “pachamámica”. La reelaboración de un paradigma emancipador deberá modificar la relación sociedad-naturaleza en clave ecosocialista; promocionar un modo de producción y reproducción de la vida que desafíe los roles globales de subordinación dependiente y opte decididamente por el respeto a la naturaleza y a los pueblos que habitan y defienden territorios ansiados por la voracidad del gran capital.

2. Mandar obedeciendo, construir poder popular. Un paradigma que sirva de reimpulso a las izquierdas y movimientos populares en Nuestra América debe tener su anclaje esencial en las construcciones de base y adoptar formas de democracia directa que garanticen un verdadero ejercicio del poder por parte del pueblo. En sus discursos, los gobiernos progresistas han abusado de nociones como “empoderamiento” o “gobierno popular”, al punto de vaciarlas de contenido. Concebir al pueblo y sus instancias de participación como meros apoyos a determinada gestión es una limitante que traiciona cualquier intención emancipadora. Retomamos una noción de poder popular como “medio y camino para la liberación, como fin último, deseo y proyecto”⁵. Los gobiernos que desalentaron la defensa de las conquistas en las calles, que neutralizaron la capacidad de lucha, generaron una realidad social y política aquietada, en algunos casos abiertamente desmovilizada, lo que les restó fuerza en sus momentos más delicados. Como contrapunto, quienes incentivaron a los sectores populares a demostrar constantemente su fuerza en el espacio público, han logrado derrotar así varios intentos desestabilizadores. Movilización, autoorganización, dinámicas del mandar

5. Mazzeo, Miguel. *El sueño de una cosa (introducción al poder popular)*, editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2007.

obedeciendo y protagonismo popular en todos los planos, constituyen una clave imprescindible para un proyecto de reimpulso.

3. Enfrentar decididamente al patriarcado. Los movimientos de mujeres en el mundo, y en particular en muchos países de Latinoamérica, están marcando época. Aun en momentos de relativo reflujo para el campo popular, vienen alumbrando el camino con multitudinarias movilizaciones, gran capacidad para generar amplios marcos de unidad y una envidiable eficacia para instalar agendas e interpelar al conjunto de las sociedades. Las luchas contra la violencia de género, pero también contra toda la cultura machista patriarcal, impulsadas por los feminismos populares nuestroamericanos, se van erigiendo en vanguardia para la militancia del continente. Sin embargo, a pesar de ciertas aperturas y avances legislativos, algunos gobiernos progresistas no mostraron su mejor disposición ante estas luchas. En algunos casos, como Ecuador o Nicaragua, fueron abiertamente reticentes a incorporar las demandas de los colectivos feministas, como describe Claudia Korol en las páginas de este libro⁶. La recreación de un paradigma emancipador para Nuestra América no pudo consentir, bajo ningún concepto, políticas retrógradas que confronten con el potente caudal histórico que impone el movimiento de mujeres. El feminismo debe ser elemento constitutivo e indiscutible del reimpulso popular que permita retomar la iniciativa continental.

4. Impulsar una verdadera “revolución cultural”. La disputa ideológica y del sentido común de la época quedó en un segundo plano. En la mayoría de los casos, las y los beneficiados de las políticas sociales fueron concebidos como ciudadanos-clientes, con mayor capacidad de consumo pero sin buscar poner en cuestión el ideario capitalista. En palabras del propio García Linera, hubo una “redistribución de riqueza sin politización social”. Tomar nota de esa limitación implicará proponer fuertes lineamientos de formación política y concientización, desde los estados cuando se llegue a ocupar su gestión y más aún desde las propias organizaciones populares. Habrá que pensar los procesos que se vienen más en la línea de los incentivos morales que supo plantear el Che Guevara que en los parámetros de consumo que, está visto, generan consumidores pero no empoderan sujetos de cambio.

5. Apelar al pueblo, también para librar la batalla comunicacional. Los medios que estuvieron en manos de los gobiernos progresistas

6. Korol, Claudia. “Cuerpos y territorios en el Abya Yala”, en pág. 101.

no se han corrido del lugar de propagandistas del discurso oficial, exagerando los aciertos y ocultando las críticas, aún las provenientes del campo popular. El conformismo triunfalista y, como correlato, el acallamiento de los movimientos sociales que no se mostraron alineados, fue el centro de la estrategia comunicacional oficial. Otra lógica de gestión de la comunicación habrá que implementar si de lo que se trata es de lograr formas eficaces de combatir el terrorismo mediático de las grandes corporaciones que atentan y atentarán contra todo proceso de cambio, y concientizar a los pueblos sobre los desafíos y caminos posibles para superarlos. Allí donde se implementaron leyes para desconcentrar la propiedad de los medios, esos avances en la legislación no tuvieron un correlato real en empoderamiento en el sentido de cambiar el paradigma de la disputa comunicativa “por arriba” en favor de una lógica popular, descentralizada y masiva “por abajo” (idea que profundiza Natalia Vinelli⁷). De la misma forma que la movilización y el protagonismo del pueblo son claves a la hora de medir correlaciones de fuerzas en lo político, lo mismo hay que concebir a la hora de pensar en cómo librar la batalla comunicacional.

6. Cultivar una ética política antagónica a la de la partidocracia tradicional. De la mano de la naturalización de las reglas de juego de las instituciones burguesas, los gobiernos progresistas justificaron o pretendieron disimular notorios hechos de corrupción, que continuaron como un mal endémico de las democracias formateadas en función del gran capital. Es cierto que los medios hegemónicos manipulan, operan, crean campañas y sobreactúan, pero los niveles de corrupción estatal que se mantuvieron han tenido un peso determinante en la pérdida de aceptación popular. El cambio en este plano debe ser radical. Será necesario apostar a una ética política que no tolere la deshonestidad en la gestión pública, que haga pedagogía del combate a la corrupción que abundó en los gobiernos en cuestión.

7. Desbordar los límites de la democracia liberal. En aquellos países donde no se impulsaron reformas al andamiaje institucional vía procesos constituyentes, las gestiones de gobierno terminaron atrapadas en las lógicas del sistema democrático burgués. De la mano de esto, quedó al desnudo el fracaso de la fórmula de “conciliación de clases” (“cogobernar con los adversarios”, señala Isabel Rauber). La política de alianzas con sectores ideológicamente contrarios resultó un salvavidas de plomo. Brasil, y antes Paraguay,

7. Vinelli, Natalia. “La batalla comunicacional: entre las oportunidades perdidas y la construcción de nuevas condiciones”, en pág. 115.

son los ejemplos más claros: Michel Temer pasó de principal aliado del PT a artífice de la conspiración; lo mismo hizo Federico Franco, vicepresidente de Fernando Lugo. En Argentina, el kirchnerismo decidió recostarse centralmente en el aparato del Partido Justicialista (PJ), con su estructura de gobernadores e intendentes conservadores, lo que le quitó sustento al relato de la “nueva política”. Toda proyección a futuro deberá desafiar la esencia representativa formal naturalizada por buena parte de los gobiernos del ciclo progresista. La democracia “participativa y protagónica”, plasmada en la Constitución chavista y materializada en el proceso comunal, da cuenta de que es viable intentarlo. A fuego lento –y no sin tensiones con parte de la propia burocracia oficial–, ahí hay un legado concreto para irradiar al resto del continente.

8. Combinar las diversas formas de lucha. Si bien la vía electoral se legitimó a fuerza de resultados favorables, también encontró sus claros límites. El golpe militar en Honduras y los golpes institucionales en Paraguay y Brasil demuestran que la derecha no tiene empacho en violentar sus propias reglas de juego. En los últimos años se extendió el asesinato de líderes sociales chavistas a manos de sicarios y paramilitares, que replican métodos contrainsurgentes extendidos en México o Colombia donde, por décadas, surgieron guerrillas en las zonas campesinas como autodefensas para repeler la violencia contra las comunidades. Si bien la lucha armada como vía de acceso al poder cedió terreno ante los procesos electorales, a futuro no está tan claro que alcance con la mera disputa institucional (necesaria, en la que se acumuló valiosa experiencia en los últimos años) para que proyectos populares se sostengan o puedan profundizar un programa anticapitalista. La movilización en las calles es imprescindible pero no siempre suficiente ante la violencia abierta o selectiva. Aprender de los reveses recientes implica tomar nota de la necesidad de desarrollar diversas formas de lucha, apelando a la autoorganización y previendo mecanismos de autodefensa.

9. Más debate, más autocrítica. El pensamiento crítico, el libre ejercicio de la autocrítica a la hora de evaluar errores e intentar rectificar, se vuelven prácticas imprescindibles para cualquier proceso de cambios que debe crear y recrear en medio de permanentes escenarios de confrontación. También en eso Chávez predicó con el ejemplo, al proponer críticas sin medias tintas a su propio gobierno, “golpes de timón” y frecuentes replanteos sobre el curso de la Revolución Bolivariana. “De la autocrítica surge siempre la fuerza

para el reimpulso”, expresó alguna vez. García Linera se atrevió, en el último tiempo, a exponer conceptos críticos hacia el ciclo progresista, como los que recoge este libro. Pero esas dos menciones resultan, sin embargo, excepcionales en un panorama en el que predominaron discursos oficiales soberbios, descalificaciones a la menor disidencia y escasos sinceramientos de los pasos en falso. Lo que es pertinente señalar en los líderes de estos procesos, se vuelve imperdonable cuando es la propia militancia popular la que se muestra dispuesta a justificar lo injustificable o mirar para otro lado cuando desde los gobiernos se pacta con sectores conservadores o se confronta a comunidades en resistencia.

10. Potenciar la integración económica continental. Durante el ciclo progresista que analizamos, la novedosa arquitectura del regionalismo latinoamericano no tuvo su correlato en la coordinación de políticas macroeconómicas. Aun en los mejores años, el comercio intrarregional nunca superó el 15 por ciento del total de las exportaciones (en la Unión Europea alcanza el 63 por ciento). El Banco del Sur, que fue anunciado en 2007 y nunca terminó de tomar cuerpo, es la más clara evidencia. La tan mentada “nueva arquitectura financiera” no avanzó mucho más que en los discursos. Creemos que sólo desde una decidida integración económica América Latina podrá tener peso para alterar la relación de sumisión al mercado mundial.

* * *

Más allá de la deriva futura de este ciclo, entendemos como principal conclusión que el reflujo de los progresismos evidencia el fracaso del capitalismo “bien administrado”, “serio” o “con rostro humano”. Esas precisiones se montan sobre otra certeza cada vez más irrefutable: el fracaso del capitalismo en sí, más allá de cualquier apellido o adjetivación. Los proyectos tibios, moderados, que no se animaron a profundizar o al menos esbozar intentos poscapitalistas, terminaron abonando el terreno para el retorno de los dueños de todas las cosas.

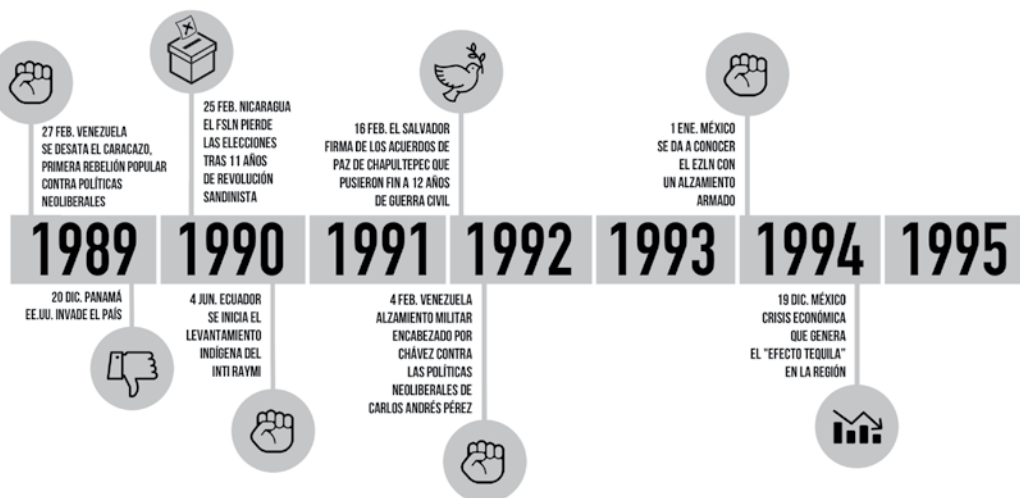
Como contrapartida, la izquierda latinoamericana recuperó, en el marco del ciclo progresista, un paradigma de acumulación de fuerzas y ejercicio del control del Estado que resultó compatible con el empoderamiento popular y las perspectivas de cambio estructural. Ese paradigma, más que en los gobiernos pos-neoliberales de conjunto, se hizo carne en la experiencia más avanzada en la región, la transición venezolana a lo que Chávez definió como Socialismo del siglo XXI: una combinación de disputa de las instituciones del Estado, desafío a los

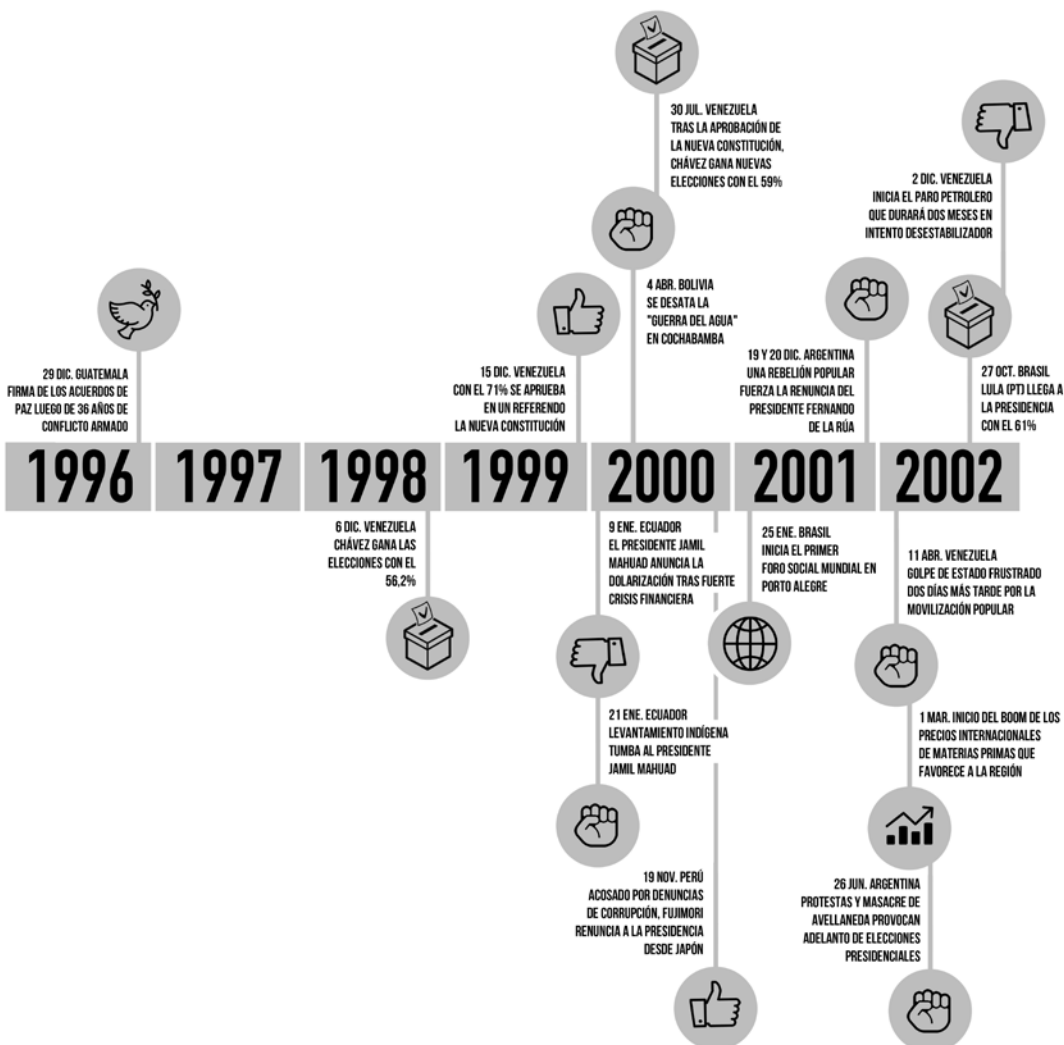
intereses de los sectores concentrados de la economía, proyección continental, impulso a la organización popular e intento de puesta en práctica de dinámicas sociales y económicas no capitalistas, como es la construcción del Estado Comunal y sus espacios de autogobierno. Más allá de la pervivencia de una matriz productiva que sigue siendo capitalista, de las fortísimas dificultades que atraviesa la Revolución Bolivariana desde hace varios años y del peligro latente de que se impongan en el tiempo las corrientes del chavismo más conservadoras, ese paradigma fue el vector más claro de incidencia en la disputa de proyectos continentales y que la memoria larga de la lucha de clases en Nuestra América deberá preservar. “Comuna o nada” fue el último legado de Chávez. Convertirlo en dogma, pretendiendo que los reveses recientes son meras circunstancias a remontar, sería tan grave como desconocer que, aún necesitado de retroalimentación, balances e imprescindibles complementos que lo enriquezcan, ese paradigma de prefigurar una nueva institucionalidad es una referencia simbólica irreversible y resulta válido por lo que es, pero además como piso de construcción futura.

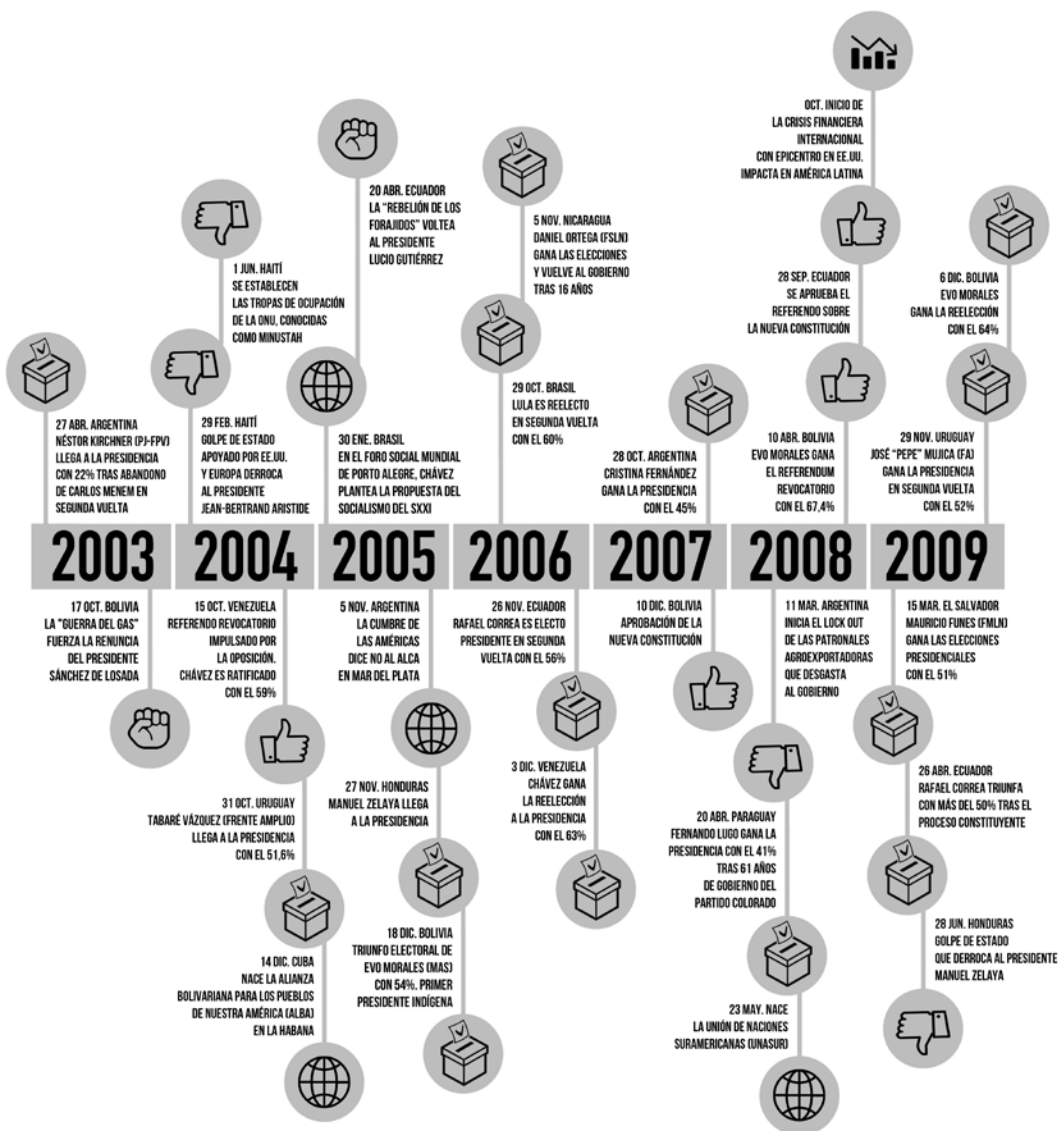
El juego sigue abierto. El futuro de la Patria Grande se percibe incierto pero necesariamente combativo. La clave, el factor neurálgico, será siempre partir desde abajo y a la izquierda, anclar los procesos en el protagonismo popular, en el empoderamiento real y colectivo como esencia de cualquier búsqueda transformadora. Nuevos insumos deberán crearse o recrearse a la hora de reelaborar paradigmas que, en la medida en que las experiencias concretas de lucha de los pueblos los alienten y sostengan, se podrán proyectar para reajustar el rumbo hacia un horizonte emancipador, libertario y socialista para Nuestra América.

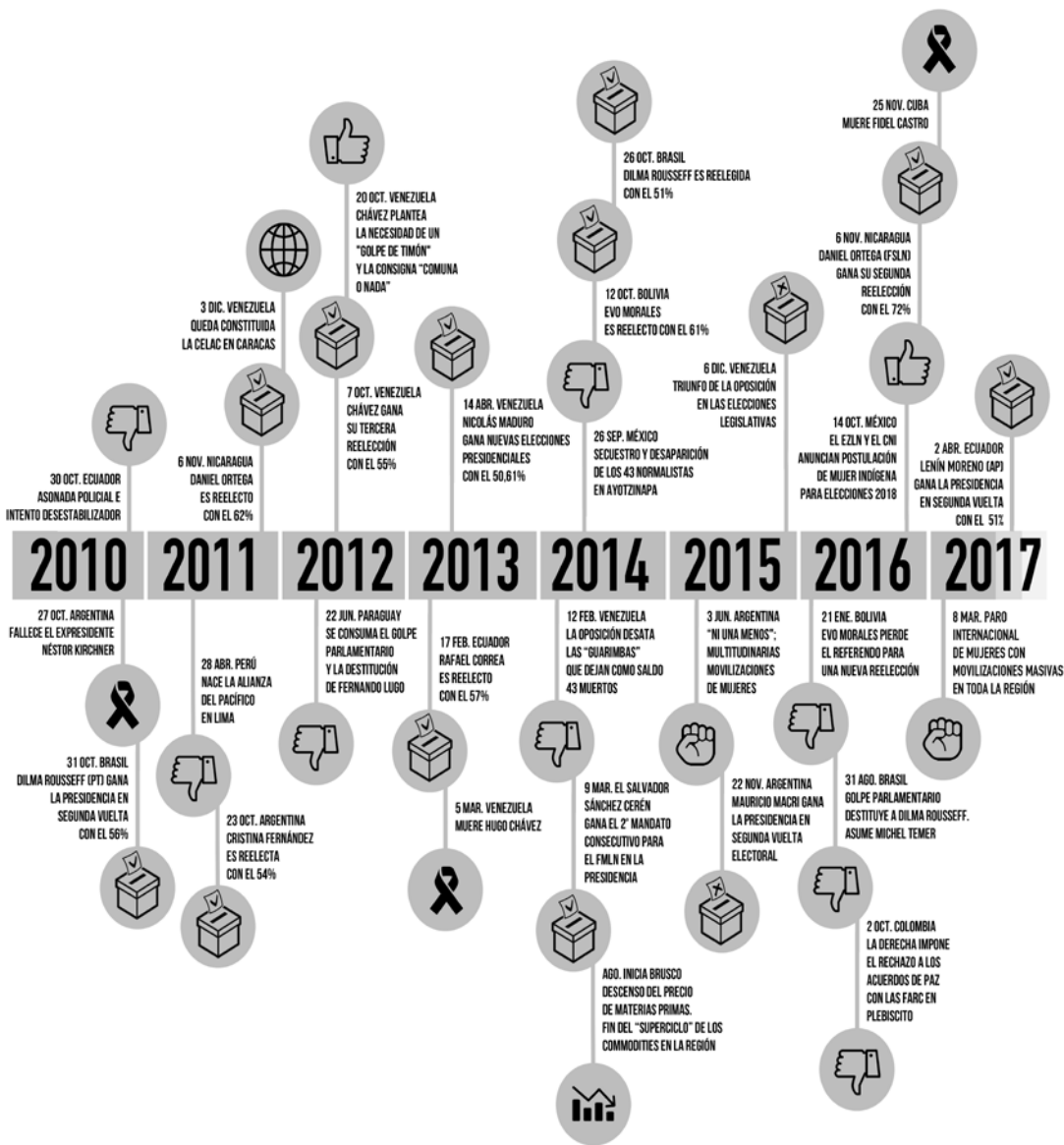
Luchas antineoliberales en América Latina.

Hitos de la historia reciente









Presentación a la edición en Colombia	
<i>Escuela Nacional Orlando Fals Borda</i>	7

Presentación a la edición en Colombia	
<i>Escuela Nacional Orlando Fals Borda</i>	9

Prólogo. <i>Pedro Brieger</i>	11
--	----

INTRODUCCIÓN

Explorar los rastros de la época, edificar un nuevo paradigma continental. <i>Gerardo Szalkowicz</i>	15
---	----

PARTE I. MIRADAS REGIONALES

• AVANCES Y LÍMITES

Una reflexión sobre el progresismo latinoamericano. <i>Atilio A. Boron</i> ..	21
--	----

Latinoamérica: ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político? <i>Isabel Rauber</i>	27
---	----

“Una mayor integración regional hubiera preservado más a los procesos progresistas”. Entrevista a Dilma Rousseff	35
---	----

América Latina bajo amenaza de retroceso. <i>Frei Betto</i>	41
--	----

“Debemos dejar de ser meros países productores de materias primas”. Entrevista a Guillaume Long	45
--	----

Los progresismos latinoamericanos y la Hidra capitalista <i>Raúl Zibechi</i>	51
--	----

Límites y contradicciones de una década virtuosa continental <i>Alvaro García Linera</i>	57
--	----

• MODELOS ECONÓMICOS

Crítica a los progresismos realmente existentes. <i>Maristella Svampa</i>	63
--	----

Balance y desafíos de la política económica en los gobiernos progresistas. <i>Gustavo Coudas</i>	71
---	----

• MOVIMIENTOS POPULARES

“Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía” <i>Entrevista a João Pedro Stedile</i>	77
--	----

Aportes para el balance y perspectivas del movimiento popular en el periodo actual. <i>Hernán Vargas</i>	83
---	----

Lo que no cabe en las urnas: algunas reflexiones en torno a la iniciativa del EZLN y el CNI. <i>Lucía Linsalata</i>	91
--	----

“Progresismos” en América Latina: parte de un ciclo largo de luchas que excede a los gobiernos (y a los países). <i>Sebastián Quiroga</i>	97
--	----

• LUCHAS FEMINISTAS

Cuerpos y territorios en el Abya Yala. <i>Claudia Korol</i>	103
--	-----

• COMUNICACIÓN Y BATALLA CULTURAL

Sujetos, tensiones y contradicciones de la nueva cultura política en América Latina. <i>Giordana García Sojo</i>	109
---	-----

La batalla comunicacional: entre las oportunidades perdidas y la construcción de nuevas condiciones. <i>Natalia Vinelli</i>	117
--	-----

• INTEGRACIÓN REGIONAL

La integración regional en el centro de la confrontación: sueños, realidades y pesadillas de Nuestra América. <i>José Seoane</i>	125
---	-----

“La integración es una cuestión de vida o muerte dentro del esquema global”. Entrevista a Ernesto Samper	131
---	-----

• ESTADOS UNIDOS, INJERENCIA Y DESESTABILIZACIÓN

Primavera en el patio trasero: intentos soberanos e injerencia estadounidense durante el ciclo progresista. <i>Francisco Longa y Pablo Solana</i> ..	137
---	-----

“El golpe en Honduras fue un plan establecido por Bush y seguido por Obama para desestabilizar el ALBA”. Entrevista a Manuel Zelaya	145
---	-----

PARTE II. LOS PROCESOS EN LAS “PATRIAS CHICAS”

ARGENTINA. Del mito populista a la restauración de derecha <i>Martín Obregón</i>	151
--	-----

BOLIVIA. Las dos fases de una década y el desafío de reconducir el proceso. <i>Jorge Viaña</i>	157
---	-----

VENEZUELA. Chavismo: apuntes para una genealogía. <i>Reinaldo Iturriza López</i>	163
--	-----

ECUADOR. Una década de Revolución Ciudadana: posneoliberalismo y conflictividad. <i>Franklin Ramírez Gallegos y Soledad Stoessel</i>	169
---	-----

NICARAGUA Y EL SALVADOR. De la épica guerrillera a los gobiernos moderados. <i>Rafael Cuevas Molina</i>	177
--	-----

URUGUAY. El agua tibia y las derivaciones de la experiencia progresista. <i>Sergio Sommaruga</i>	183
---	-----

BRASIL. Breve historia de una debacle y un golpe. <i>Eric Nepomuceno</i>	189
---	-----

CUBA. La Revolución Cubana en el siglo XXI. <i>Fernando Martínez Heredia</i>	195
---	-----

PARTE III. APUNTES PARA EL REIMPULSO

Apuntes para el reimpulso. <i>Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz</i>	203
--	-----

Luchas antineoliberales en América Latina. Hitos de la historia reciente	214
---	-----

EDICIÓN DIGITAL
febrero de 2018
Caracas - Venezuela

"América Latina conoció, a comienzos del siglo XXI, un despertar político contestatario como pocas veces en su historia. Pero desafiar a los más poderosos, aunque sea tímidamente, tuvo sus costos. En este libro uno puede encontrar opiniones muy diversas e incluso contrapuestas como parte de un intento por realizar un balance de un proceso que se cerró en algunos países pero que todavía está en curso a nivel regional"

Pedro Brieger, en el prólogo

La razón de ser de este libro apunta a entrarle a fondo y sin anestesia al análisis sobre las debilidades evidenciadas, los errores cometidos, las contradicciones atravesadas y los límites alcanzados por las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en esta década larga latinoamericana. Más allá de la dimensión del agotamiento o reflujo del periodo transcurrido en lo que va de este siglo, creemos prioritario impulsar balances colectivos de largo aliento, que vayan más allá de coyunturas o discusiones puntuales, y que permitan abonar el terreno para un necesario reimpulso.

Entrevistas

Dilma Rousseff / Manuel Zelaya / João Pedro Stedile / Ernesto Samper / Guillaume Long

Artículos

Atilio Boron / Isabel Rauber / Frei Betto / Raúl Zibechi / Álvaro García Linera / Maristella Svampa / Gustavo Codas / Hernán Vargas / Lucía Linsalata / Sebastián Quiroga / Claudia Korol / Giordana García Sojo / Natalia Vinelli / José Seoane / Francisco Longa / Martín Obregón / Jorge Viaña / Reinaldo Iturriza López / Franklin Ramírez Gallegos / Soledad Stoessel / Rafael Cuevas Molina / Sergio Sommaruga / Eric Nepomuceno / Fernando Martínez Heredia

Ilustraciones

Deisa Tremarias Grimaú / Latuff / Diego Abu Arab / Alejandra Andreone Cabro / Jafeth Gómez



9 789801 441267



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Cultura